

SEGUNDA CONFERENCIA NACIONAL DE ABOGADOS

CORDOBA
OCTUBRE 26-29 DE 1926

PROGRAMA,
ANTECEDENTES, VERSIÓN TAQUIGRÁFICA Y ANEXOS

SEGUNDA CONFERENCIA NACIONAL DE ABOGADOS

CORDOBA
OCTUBRE 26-29 DE 1926

BIBLIOTECA DE LA CORTE SUPREMA	
No. DE ORDEN	32.410
UBICACIÓN	599

PROGRAMA,
ANTECEDENTES, VERSIÓN TAQUIGRÁFICA Y ANEXOS

BUENOS AIRES

5292 - Imprenta y Encuadernación de la Cámara de Diputados

1927





PARTE I



PROGRAMA,
REGLAMENTO Y NÓMINA DE DELEGADOS

1

2

3

4

5

6

SEGUNDA CONFERENCIA NACIONAL DE ABOGADOS

ORGANIZADA POR LA

FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA REPÚBLICA

CÓRDOBA, 26 - 29 DE OCTUBRE DE 1926

Programa

- 1.—Creación de la Comisión Permanente de Estudios Legislativos.
- 2.—Correlación de los derechos civil y comercial en materia de obligaciones.
- 3.—Vacíos de la legislación comercial en vigor: cláusulas CIF y FOB.; sociedades de responsabilidad limitada: crédito documentario; transportes marítimos y fluviales; transportes ferroviarios, de ganados, cereales, etcétera.

Reglamento

Artículo 1º — La Segunda Conferencia Nacional de Abogados se realizará en la ciudad de Córdoba, en la última semana del mes de Octubre de 1926.

Art. 2º — Tiene por objeto el estudio de las materias indicadas en el programa.

Art. 3º — Son miembros de la Conferencia:

- a) Los delegados del Gobierno nacional y de los Gobiernos provinciales;
- b) Los delegados de los Tribunales Superiores de Justicia;
- c) Los miembros de la Junta de Gobierno de la Federación de Colegios de Abogados de la República;

d) Los delegados de los Colegios de Abogados incorporados a la Federación y los miembros de los directorios o comisiones directivas de los mismos;

e) Los miembros de las comisiones de sección encargadas del estudio de los temas de la Conferencia;

f) Los decanos y delegados de las facultades de Derecho y Ciencias Sociales;

g) Los miembros de las comisiones de Legislación y Códigos del Honorable Senado de la Nación y de Legislación General de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación;

h) Los profesores y ex profesores de derecho civil y comercial de las diversas facultades nacionales;

i) Los tratadistas y autores nacionales en materia civil y comercial;

j) Los delegados de las asociaciones o corporaciones a las cuales la Comisión Organizadora hubiere estimado conveniente invitar;

k) Los magistrados y abogados que presenten trabajos a la Conferencia.

Art. 4º — Se limita a dos delegados con voto, la representación de las entidades a que se refiere el artículo 3º.

Art. 5º — Cada miembro de la Conferencia tiene un voto.

Art. 6º — La Conferencia designará presidente y secretario provisorios y una comisión de poderes.

Art. 7º — Para constituir la Mesa Directiva se elegirá en sesión preparatoria un Presidente, tres Vicepresidentes, un Secretario General y tres Secretarios.

Art. 8º — La comisiones de sección informarán sobre los temas y trabajos presentados a la Conferencia.

Art. 9º — Los trabajos deben ser presentados en la Capital Federal a la Comisión Organizadora.

Art. 10. — El despacho de las comisiones debe ser breve. Cada orador entregará a Secretaría un resumen de su exposición.

Comisión de Honor

Doctores: Marcelo T. de Alvear, Presidente de la República; Antonio Sagarna, Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación; Ramón J. Cárcano, Gobernador de la Provincia de Córdoba, Pedro S. Rovelli, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba; León S. Morra, Rector de la Universidad Nacional de Córdoba; Guillermo Rothe, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma Universidad; Manuel B. Gonnet, Primer Presidente de la Federación de Colegios de Abogados de la República y Presidente de la Primera Conferencia Nacional de Abogados.

Junta de Gobierno de la Federación de Colegios de Abogados de la República

Presidente: doctor J. Honorio Silgueira (Capital Federal); Vicepresidente: doctor J. M. González Sabathié (Rosario de Santa Fe); Secretario-Tesorero: doctor Carlos A. Berghmans Doneel (San Juan); Vocales: Doctores José María Ahumada (Catamarca); Aurelio Bassi (Bahía Blanca); Guillermo G. Cano (Mendoza); Ramón S. Castillo (Catamarca); Francisco A. Cervini (Bahía Blanca); José A. Contte (Corrientes); Bautista Contreras Ortiz (La

Rioja); Abraham de la Vega (Tucumán); Carlos Del Forno (San Nicolás); Juan B. Depetris (Santa Fe); Domingo A. Derisi (San Nicolás); Manuel F. Escobar (La Plata); Enrique V. Galli (La Plata); Alejandro García Quiroga (San Luis); Miguel A. Garmendia (Santiago del Estero); Pedro I. Garro (San Luis); Manuel B. Gonnet (Capital Federal); Héctor González Iramain (La Rioja); Elías F. Guastavino (Santa Fe); Pedro Llanos (Santiago del Estero); Martín Llan de Rosos (Dolores); Carlos M. Maidana (Río Cuarto); Raymundo R. Meabe (Corrientes); Lisardo Novillo Saravia (Córdoba); J. Florencio Ortiz (Mercedes, Buenos Aires); Saúl Perkins (Rosario de Santa Fe); Rolando A. Pinto (Córdoba); Pedro R. Quiroga (San Juan); Juan F. Remedi (Río Cuarto); Francisco M. Saralegui (Mercedes, Buenos Aires); Pedro Veronelli (Tucumán); Juan Vilgré La Madrid (Dolores), y Oscar Zaefrer Silva (Mendoza).

Comisión Organizadora de la Conferencia

Doctores: J. Honorio Silgueira, Manuel B. Gonnet, J. M. González Sabathié, Carlos A. Berghmans Doneel, Henoch D. Aguiar y Victor N. Romero del Prado.

Comisiones de Sección

PRIMER PUNTO DEL PROGRAMA

Doctores: Enrique Gil y Victor Daniel Goytia.

SEGUNDO PUNTO DEL PROGRAMA

Doctores: Enrique Martínez Paz, Santiago F. Díaz, José María Valdés y Sofanor Novillo Corvalán (Córdoba).

TERCER PUNTO DEL PROGRAMA

Doctores: Horacio Valdés, Blas D. Ordóñez, Rogelio Mazzi (Córdoba); Leopoldo Melo, Eduardo Crespo, Edmundo C. Chedufau, Agustín N. Matienzo, Mario A. Rivarola, Dimas González Gowland, Ingeniero Carlos M. Ramallo, doctores Rodolfo Bullrich, Gaspar E. Ferrer, Luis Lagos García, Benito A. Nazar Anchorena, Manuel F. Caste-

llo, Juan C. Carlomagno, Cornelio J. Viera, Juan P. Biscayart Blanco, Romualdo Goyeneche, Carlos M. Mayer y Roberto N. Lobos.

Delegados

GOBIERNO DE LA NACION

Por decreto de 25 de Agosto de 1926: doctores Vicente Rodríguez Ribas y Raúl A. Orgaz.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Por decreto de 20 de Septiembre de 1926: doctores Lucas A. de Olmos y Raúl V. Martínez.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

Por decreto de 2 de Septiembre de 1926: doctores José V. Figueroa y Juan F. de la Barrera.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Por decreto de 6 de Septiembre de 1926: doctores Salvador Moyano Escalera y Lisardo Novillo Saravia.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

Por decreto de 10 de Agosto de 1926: doctores Carlos Astrada Ponce y José M. Avalos.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Por decreto de 1º de Julio de 1926: doctores Leopoldo Melo y Pedro E. Martínez.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

Por decreto de 17 de Septiembre de 1926: doctores Benjamín Otero Capdevila y Oscar Rodríguez Saráchaga.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA

Por decreto de 4 de Septiembre de 1926: doctores Luis Eduardo Molina y Camilo F. Stanchina.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

Por decreto de 16 de Septiembre de 1926: doctores Carlos Washington Lencinas, Francisco J. Trianes, Julián Barraquero y Atilio Moretti.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA

Por decretos de Septiembre 3 y 22 de 1926: doctores Carlos Serrey y Enrique Torino.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

Por decreto de 14 de Octubre de 1926: doctores Pastor Achával y Salvador Fornielles.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS

Por decreto de 31 de Agosto de 1926: doctores Feliciano Barbosa y Tomás Jofré.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

Por decreto de 3 de Septiembre de 1926: doctores Sofanor Novillo Corvalán y Arturo de León y Basualdo.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN

Por decretos de 26 de Julio y 18 de Septiembre de 1926: doctores Carlos D. Courel y Rafael García Zavala.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Por resolución de 26 de Septiembre de 1926: doctor Juan de la Campa.

CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

Por resolución de 15 de Septiembre de 1926: doctores Alejandro Correa y Luis Eduardo Molina.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Por resolución de 27 de Agosto de 1926: doctores Juan B. González y Belisario Martínez.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
PROVINCIA DE CORRIENTES

Por resolución de 2 de Julio de 1926:
doctores Miguel G. Méndez y Ramón J.
Alsina.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Por resolución de 1º de Octubre de
1926: doctores Amadeo Pons y Juvenal
F. de la Fuente.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
PROVINCIA DE JUJUY

Por resolución de 21 de Septiembre
de 1926: doctores Alberto H. Graci y
Luis Reynal O'Connor.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
PROVINCIA DE LA RIOJA

Por resolución de 5 de Octubre de
1926: doctores Camilo F. Stanchina y
Humberto Viñas Ibarra.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

Por resolución de 25 de Septiembre
de 1926: doctores Julio M. Escobar
Sáenz y Demetrio Petra.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
PROVINCIA DE SALTA

Por resolución de 16 de Septiembre
de 1926: doctores Oscar Rodríguez Sa-
ráchaga y Enrique Torino.

CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
DE SAN JUAN

Por resolución de 10 de Agosto de
1926: doctor Benjamín Palacio.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
PROVINCIA DE SAN LUIS

Por resolución de 7 de Octubre de
1926: doctores Feliciano Barbosa y To-
más Jofré.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE

Por resolución de 15 de Octubre de
1926: doctores José E. Codoni y Pedro
A. Echagüe.

CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
DE SANTIAGO DEL ESTERO

Por resolución de 15 de Septiembre
de 1926: doctores Bernardo Canal Fei-
jóo y Alejandrino Infante.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
PROVINCIA DE TUCUMAN

Por resolución de 9 de Septiembre
de 1926: doctores Manuel Páez de la To-
rre y Adolfo S. Carranza.

COLEGIO DE ABOGADOS DE BAHIA BLANCA

Por resolución de 8 de Octubre de
1926: doctores Aurelio Bassi y Francis-
co Cervini.

COLEGIO DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES

Por resolución de 14 de Octubre de
1926: doctores Mariano Molla Villanue-
va y Emilio Reviriego.

COLEGIO DE ABOGADOS DE CATAMARCA

Por resolución de 7 de Octubre de
1926: doctores Guillermo Correa, Ar-
mando Correa, Enrique Martínez Paz
y Juan F. de la Barrera.

COLEGIO DE ABOGADOS DE CORDOBA

Por resolución de 22 de Septiembre
de 1926: doctores Enrique A. Ferreira
y Víctor N. Romero del Prado.

COLEGIO DE ABOGADOS DE CORRIENTES

Por resolución de 15 de Septiembre
de 1926: doctores Raymundo R. Meabe
y José A. Contte.

COLEGIO DE ABOGADOS DE DOLORES
(Bs. As.)

Por resolución de 25 de Septiembre
de 1926: doctores Adriano Rauschert y
Ernesto Llan de Rosas.

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PLATA

Por resolución de 21 de Septiembre
de 1926: doctores Luis Reyna Alman-
dos y Héctor R. Baudón.

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA RIOJA

Por resolución de 2 de Octubre de 1926: doctores Wenceslao Frías y Horacio Vera Ocampo.

COLEGIO DE ABOGADOS DE MENDOZA

Por resolución de 25 de Septiembre de 1926: doctores Rodolfo Corominas Segura y Cruz Vera.

COLEGIO DE ABOGADOS DE MERCEDES
(Bis. As.)

Por resolución de 10 de Septiembre de 1926: doctores José F. Campi y Estanislao de Urraza.

COLEGIO DE ABOGADOS DE RIO CUARTO

Por resolución de 22 de Septiembre de 1926: doctores Angel H. Cabral y Benjamín Castellano.

COLEGIO DE ABOGADOS DE ROSARIO

Por resolución de 14 de Septiembre de 1926: doctores Nicanor de Elía y Enrique Thedy.

COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN JUAN

Por resolución de 14 de Septiembre de 1926: doctores Sebastián E. Alvo y Salvador A. Doneel.

COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN LUIS

Por resolución de 8 de Septiembre de 1926: doctores Gilberto Sosa Loyola y Alfredo Zavala Ortíz.

COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN NICOLAS

Por resolución de 25 de Septiembre de 1926: doctores Manuel V. Alegre y Celestino D. Sierra.

COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA FE

Por resolución de 24 de Septiembre de 1926: doctores Miguel Casañas y Ramón López Domínguez.

COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTIAGO
DEL ESTERO

Por resolución de 25 de Septiembre de 1926: doctores Antonio Castiglione y Santiago Dardo Herrera.

COLEGIO DE ABOGADOS DE TUCUMAN

Por resolución de 10 de Octubre de 1926: doctores Donato Latella Frías y Pedro S. Rovelli.

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS
ECONÓMICAS

Por resolución de 19 de Octubre de 1926: doctor Edmundo C. Chedufau.

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES.

Por resolución de 19 de Agosto de 1926: doctores Juan C. Cruz y Héctor Lafaille.

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA.

Por resolución de 10 de Agosto de 1926: doctores Félix T. Garzón y Horacio Valdés.

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA.

Por resolución de 21 de Agosto de 1926: doctor Rodolfo Bullrich.

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL.

Por resolución de 26 de Agosto de 1926: doctores Alejandro Greca y Amílcar Razori.

BOLSA DE CEREALES DE BUENOS AIRES

Por resolución de 23 de Septiembre de 1926: doctor Romualdo Goyeneche y señor A. Jerónimo Morixe.

CAMARA SINDICAL DE ASEGURADORES
MARITIMOS

Por resolución de 5 de Julio de 1926: doctor Juan C. Carlonagno, señor Armando Roneaglia y señor F. Russell Baker.

CENTRO DE CABOTAJE ARGENTINO

Por resolución de 12 de Agosto de 1926: doctores Carlos M. Mayer y Roberto N. Lobos.

FEDERACION AGRARIA ARGENTINA

Por resolución de 29 de Septiembre de 1926: doctores Carlos D. Courel y Juan Luis Ferrarotti.

**JUNTA DE REPRESENTANTES Y GERENTES
DE LOS FERROCARRILES**

Por resolución de 25 de Agosto de 1926: doctores Rodolfo Bullrich, Gaspar E. Ferrer y Luis Lagos García.

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA

Por resolución de 7 de Junio de 1926: doctores Cornelio J. Viera y Juan P. Biscayart Blanco.

UNION INDUSTRIAL ARGENTINA

Por resolución de 29 de Septiembre de 1926: doctores Javier Padilla y Roberto Domenech.

**COMISION DE CODIGOS DEL HONORABLE
SENADO DE LA NACION**

Presidente: doctor Mario Bravo; Vocales: doctores Pedro Llanos y Fernando Saguier.

**COMISION DE LEGISLACION DEL HONORABLE
SENADO DE LA NACION**

Presidente: doctor Carlos Serrey; Vocales: doctor Mario Bravo y Leopoldo Melo.

**COMISION DE LEGISLACION GENERAL DE LA
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE
LA NACION.**

Presidente: doctor Mariano G. Calvento; Secretario: doctor José Heriberto Martínez; Vocales: doctores Ernesto Claros, Enrique Dickmann, Guillermo R. Fonrouge, Eduardo F. Giuffra y Gaspar Taboada.

Miembros de la Conferencia

Doctores: Avellaneda Nicolás A., Auriol José V., Barcia López A., Beltrán Santiago, Bioy Adolfo, Britos Juan J., Cabral Texo J., Calatayud Pablo, Carranza Molina E., Carranza González Estanislao, Casares Angel M., Castellanos Telasco, Castillo Ramón S., Cermeñoni Fernando, Colmo Alfredo, Cortés Funes Jorge, Corvalán César D., de Tezanos Pinto David, de Tezanos Pinto César, Díaz Cisneros C., Faré S. S., Frías Leopoldo, González Calderón J. A., Guinazú Alberto, Godoy Raúl, Godoy José A., Gonnet Gastón, Goytía Roberto D., Ibarguren Carlos, Jantus Mignel J., Labougle Alfredo, Leal José E., Legón Faustino J., López de Gálvez Antonio, Lugones Mariano V., Martínez Villada Luis G., Montes de Oca Manuel A., Núñez Jorge A., Olaechea y Aleorta Pedro, Oribe Francisco I., Ozán Urbano N., Padilla Ernesto E., Palomeque Alberto, Pera Julián V., Pessagno Atilio, Piñero Norberto, Posse Luis J., Ramírez Amadeo, Ravignani Emilio, Rébora Juan C., Reyna Rafael, Rodríguez Alberto J., Ríos Eduardo C., Ruiz Guinazú Enrique, Sáenz Mario, Salvat Raymundo M., Seeber Ricardo, Sojo José Tomás, Silveti Luis F., Tissone Ernesto, Villegas Basavilbaso B., Villegas Basavilbaso Florencio, Walker Federico y Williams Eduardo.

Directorios de los Colegios de Abogados incorporados a la Federación

Buenos Aires. — Doctores: Mario A. Rivarola, Miguel G. Méndez, Custodio Maturana, Enrique Gil, Oscar Rodríguez Saráchaga, Mario Bravo, Ricardo Marcó del Pont, Mariano Molla Villanueva, Mauricio C. Neyra y Virgilio Reffino Pereyra.

Catamarca. — Doctores: Guillermo Correa, Armando Correa, Alfredo Acuña, Mauricio Herrera, R. Arturo Ahumada, Leovino M. Córdoba, Julio C. Rodríguez y Julio Olmos Herrera.

Córdoba. — Doctores: Henoch D. Aguiar, Carlos E. Deheza, Santiago Beltrán Gavier, Carlos E. Pinto, Aurelio E. Crespo, Emilio Soteras, Lisardo Novillo Saravia, Blas D. Ordóñez, Carlos G. Posse, Claudio Bustamante, Carlos Astrada Ponce y Rolando A. Pinto.

Corrientes. — Doctores: Eugenio E. Bréard, J. Bernardino Acosta, Oscar R. Sachero, Adolfo Mohando, Antonio M. Ruiz, Leopoldo Sosa, Ramón Díaz de Vivar, Benjamín de la Vega, Diómeles C. Rojas y Martín Goytía.

Dolores. — Doctores: Martín Llan de Rosos, Ensebio L. Salazar, Atilio Roncoroni, Américo Uzal y Manuel F. Fernández de Arias.

La Plata. — Doctores: José Tulio Baigalup Vértiz, Vicente Montoro, Hipólito C. Zapata, Héctor P. Lanfranco, Joaquín C. Serra, Arturo T. Gomila, Walter Elena, Gregorio Lascano, Leopoldo Vallejo y Alfredo Vampa.

Mendoza. — Doctores: Guillermo G. Cano, Jorge Vera Vallejo, Salvador Luis Reta, Gabriel Labanca, Adolfo Vichi, Melitón Arroyo, Alberto A. Day, Ramón Morey, Arturo Cubillos e Ismael Román.

Mercedes. (Bs. As.). — Doctores: Francisco M. Saralegui, Santiago L. Balado, Juan B. Parodi, Guillermo Hernández, Roberto Tamagno, Julio O. Ojca, Juvenal Peltzer, Carlos Jofré, Ismael Díaz y Humberto J. Brioso.

Río Cuarto. — Doctores: Domingo Grandi, Carlos M. Maidana, Clodomiro E. Carranza, Aníbal Carballo, Benja-

min Castellano, José M. Dendarys y Gustavo Carranza.

Rosario. — Doctores: Ricardo A. Ortiz, Juan M. González Sabathié, Juvenal Machado Doncel, Francisco J. Garro, Nicolás Mancera, Atilio de Sanetis, Mario Antelo, José V. de la Vega y Otto Söhle.

San Juan. — Doctores: Juan de Dios Flores, Arturo Storni, Salvador A. Doncel, Alberto Vita, Carlos Conforti, Enrique S. Stolbizer, Sebastián E. Alvo, Eduardo Mallea Gil, Manuel Novoa y Diógenes Varela Díaz.

San Luis. — Doctores: Alberto Quiroga, Alfredo Arancibia Rodríguez, Héctor Aguirre Céliz, Mauricio Lucero y Alejandro García.

San Nicolás. — Doctores: Crisanto M. Servini, Manuel V. Alegre, Juan B. Podestá, Raúl P. Luzuriaga, Alberto González, Miguel A. Inchausti, Vicente S. Lima, Diego Vila, Ricardo Riobóo, Carlos del Forno, Domingo A. Derisi, Antonio Peyrou y Alberto Peralta Bello.

Santa Fe. — Doctores: Gregorio Parera, Severo A. Gómez, Emiro A. Seghizzi, César A. Gauchat, Manuel Francioni, Alejandro Greca, José P. Milesi, Joaquín F. Rodríguez y Humberto C. Gambino.

Tucumán. — Doctores: Julio M. Terrán, Felipe S. Pérez, Mario R. Posse, Marcos S. Victoria, Adolfo Piossek, Juan Heller, Roque R. Aragón, Clodomiro García Araújo, José Bulacio y Pedro Cossio.

PARTE II

ANTECEDENTES

Y

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

ANTECEDENTES

Sede de la Segunda Conferencia

Extracto de la versión taquígráfica de las sesiones de la Primera Conferencia Nacional de Abogados, celebrada en Buenos Aires los días 17 a 22 de Noviembre de 1924.

SR. GARCÍA TORRES. — Pido la palabra. Como esta es la última sesión, creo que sería conveniente para la Conferencia conocer cómo va a estar constituida la comisión.

SR. PRESIDENTE (GONNET). — Creo que antes debemos fijar la sede de la Segunda Conferencia. Las deliberaciones y resultados de esta Conferencia revelan que no es posible que termine aquí.

SR. SOLÁ. — Propongo que sea el Rosario.

SR. RIVAROLA (M. A.). — Voy a apoyar en dos palabras esa moción. Pido, ante todo, que se haga una recomendación a la Conferencia, de que en todo trabajo se consulte y dé intervención a los Colegios de Abogados que ya están organizados en la República.

En cuanto a la sede de la Segunda Conferencia, apoyo la indicación del doctor Solá, o sea Rosario, que tiene la gran ventaja de poseer un Colegio de Abogados, cuyos miembros son el 90 % de los abogados matriculados, y por ser la segunda ciudad de la República. Todas estas ventajas le dan derecho suficiente para que ella sea la sede de la Segunda Conferencia.

SR. GARCÍA TORRES. — Voy a hacer moción para que la sede de la Segunda Conferencia sea Córdoba.

SR. PERKINS. — En Córdoba no existe Colegio de Abogados y va a resultar muy difícil su organización.

SR. CASTIGLIONE. — Voy a complementar la moción del doctor Solá, proponiendo que la Conferencia se reúna en Rosario, en Noviembre del año que viene. Creo que en esta forma, damos tiempo a las comisiones para que den término a sus trabajos.

SR. PRESIDENTE (GONNET). — Vamos a votar por partes. Se va a votar la moción del doctor Castiglione, de que la Conferencia se reúna en Noviembre de 1925.

—Se vota: afirmativa.

SR. PRESIDENTE (GONNET). — Ahora corresponde votar la sede de la Conferencia.

SR. ARÁOZ. — Creo que tanto Rosario como Córdoba son muy dignas sedes de la Conferencia. Por lo tanto, creo que debemos votar y no discutir.

SR. MELO. (C. F.). — Debemos tratar de acordar voluntades. Si votamos, tenemos que hacerlo en este momento, optando por una ciudad argentina públicamente. Mis sentimientos de juventud me arrastrarían hacia Rosario, pero debo inclinarme a votar por Córdoba por ser el centro de la República.

SR. ARÁOZ. — Por la conveniencia de todos los delegados, sería mejor volvernos a reunir en la ciudad de Buenos Aires, que es la que más se presta.

SR. PRESIDENTE (GONNET). — Se va a votar la sede de la Segunda Conferencia.

—Se efectúa la votación y dice el:

SR. PRESIDENTE (GONNET). — Hay mayoría por la ciudad de Córdoba. Queda designada la ciudad de Córdoba como sede de la Segunda Conferencia, a reunirse en Noviembre de 1925.

SR. CASTIGLIONE. — En caso de que por cualquier circunstancia no se pudiera realizar en Córdoba, pido que se designe Rosario para sede de la Conferencia.

—Asentimiento.

SR. PERKINS. — Desearía una pequeña aclaración. He visto que el voto del señor delegado por el Poder Ejecutivo de Santa Fé se ha computado por Córdoba. Quizás haya un error.

SR. DE IRIONDO. — He votado a Córdoba por cortesía hacia los delegados por dicha Provincia..., esperando reciprocidad.

SR. PERKINS. — Perfectamente; deseo que quede constancia del voto del señor delegado.

SR. PRESIDENTE (GONNET). — Entiendo que los abogados de Córdoba podrán organizarla perfectamente, y será un honor para ellos que lo hagan en la forma en que crean conveniente, ya organizándose en colegio o nombrando una comisión a tal efecto. No creo que sea este un inconveniente.

Debo hacer otra observación con respecto a las tareas de la futura Conferencia. Esta Conferencia ha trabajado de acuerdo con un programa determinado, establecido por la Federación. Desearía, pues, que la asamblea se pronunciara sobre los puntos que deberán tratarse en la Segunda Conferencia.

SR. CERVINI. — Aparte de cualquier otra indicación, hago moción de que se indique en primer término el Código de Comercio y la ley de quiebras.

SR. CASTIGLIONE. — Esto debe dejarse a la Comisión Organizadora.

SR. PERKINS. — Hago moción para que la mesa directiva de la Federación que ha preparado el plan de trabajos de esta Conferencia, prepare también el de la que se va reunir el año que viene.

—Asentimiento.

Fecha de la próxima Conferencia

SR. ETCHEGARAY. — Me permito someter a la consideración de la asamblea la idea de que la Segunda Conferencia se reúna el año 1926, en razón de que la obra de redacción de los códigos demandará mucho tiempo.

SR. PRESIDENTE (GONNET). — La idea del señor delegado Etchegaray me parece muy viable, pues convocando la Segunda Conferencia para de aquí a dos años, habrá tiempo suficiente para terminar los trabajos que están pendientes.

SR. RIVAROLA (M. A.). — Creo que estas ideas se pueden conciliar. Va a quedar funcionando una comisión permanente, y se le puede confiar a la mesa directiva de la Federación fijar la fecha de la convocatoria, ya sea para Noviembre de 1925 o para Julio de 1926.

SR. ETCHEGARAY. — Delegando en la junta organizadora la facultad de diferirla, si los trabajos no estuvieran terminados.

—Asentimiento.

SR. PRESIDENTE (GONNET). — La comisión comunicará a la mesa directiva la fecha de terminación de sus trabajos.

SR. CASTIGLIONE. — Podría fijarse el mes de Enero, que es feria de tribunales en toda la República.

Temas para la Segunda Conferencia Nacional de Abogados

Extracto del acta de las sesiones de la Junta de Gobierno de la Federación de Colegios de Abogados. — Marzo de 1925.

En seguida se pasa a tratar el segundo punto de la orden del día que se refiere a los temas a considerarse por la Segunda Conferencia.

La Presidencia informa que en cumplimiento de la resolución de la Primera Conferencia, encomendando a la

mesa directiva de la Federación la determinación de los temas y del plan de trabajos de la Segunda, dicha mesa ha resuelto solicitar por nota de 23 de Diciembre próximo pasado de los colegios de abogados adheridos, su opinión respecto a las cuestiones que, a su juicio, merecen y requieren ser considerados por dicha Conferencia y al mismo tiempo poner en su conocimiento los siguientes temas que han sido propuestos por los miembros de la mesa:

1. — DERECHO CIVIL

- a) Reforma al régimen de propiedad de acuerdo con el principio de que la tierra debe pertenecer a los que la trabajan;
- b) Reforma al régimen de familia;
- c) Derechos civiles de la mujer.

2. — LEGISLACION OBRERA

Conveniencias de dictar un código del trabajo, en vista de la existencia de un número siempre creciente de leyes obreras con jurisdicciones distintas.

3. — DERECHO COMERCIAL

- a) Conveniencia de legislar sobre cláusulas CIF. y FOB.;
- b) Reglamentación de la navegación fluvial;
- c) Reglamentación del transporte terrestre.

4. — DERECHO CONSTITUCIONAL

Ciudadanía y naturalización.

5. — DERECHO ADMINISTRATIVO

Relaciones entre las autoridades y empresas que explotan servicios públicos.

Agrega que en contestación a esta nota, el Directorio del Colegio de Abogados de Buenos Aires, ha propuesto los siguientes temas:

- 1º Situación jurídica de la mujer. Reforma de la legislación argentina;
- 2º Corte Suprema de la Nación;

- a) Organización: Designación de sus miembros. Periodicidad de sus funciones.

- b) Decisiones: Alcance de las decisiones sobre inconstitucionalidad de leyes y decretos. Posibilidad de insistencia del Congreso.

- 3º Legislación sobre personas ideales en general y personas jurídicas;
- 4º Legislación sobre limitación de la responsabilidad en el comercio bajo la garantía de la publicidad de los actos y balances;
- 5º Legislación sobre intereses y anatocismo;
- 6º Situación legal de los hijos nacidos de matrimonios celebrados en el extranjero por personas que no se encontrarían habilitadas para contraerlo en la República Argentina.

Durante un cambio de ideas que se produjo con motivo de este asunto, el doctor Manuel B. Gonnet, propuso como temas para la Segunda Conferencia, la creación de la Comisión de Estudios Legislativos y reforma del régimen de propiedad, de acuerdo con el destino que se da a la misma y estableciendo en materia de propiedad rural, el principio de que la tierra debe pertenecer al que la trabaja; el doctor J. Honorio Silgueira propuso como temas los derechos civiles de la mujer y cláusulas CIF. y FOB.; el doctor Carlos A. Berghmans Doneel, la legislación sobre la familia en general; el doctor Juan M. González Sabathic, coordinación de los derechos civil y comercial en materia de obligaciones; el doctor Oscar Zaefferer Silva, el crédito documentario.

Finalmente se aprueban los siguientes temas para la Segunda Conferencia Nacional de Abogados:

- 1º — Creación de la Comisión Permanente de Estudios Legislativos.

- 2º — Correlación de los derechos civil y comercial en materia de obligaciones.

- 3º — Vacíos de la legislación comercial en vigor: cláusulas CIF. y FOB.; sociedades de responsabilidad limitada; crédito documentario, etcétera.

- 4º — Régimen de la sociedad conyugal y la condición jurídica de la mujer.

**Organización de la Segunda Conferencia
Nacional de Abogados**

Extracto del acta de las sesiones de la Junta de Gobierno de la Federación de Colegios de Abogados. — Septiembre 29 de 1925.

Acto continuo se resuelve alterar la orden del día pasando a la consideración del punto 4º de la misma que se refiere a la organización de la Segunda Conferencia Nacional de Abogados.

Se resuelve que hallándose ya formado el Colegio de Abogados de Córdoba, para cuya constitución definitiva falta solamente el cumplimiento de algunas formalidades, la Conferencia deberá celebrarse en aquella ciudad, de acuerdo con la correspondiente decisión de la Primera Conferencia y siempre que posteriormente no hubiere dificultades para ello, en cuyo caso deberá tener lugar en Rosario.

A indicación del doctor González Sabathic se establece especialmente que la dirección general de los trabajos preparatorios de la Conferencia pertenecerá a la Federación de Colegios, correspondiendo al colegio local las funciones que la misma delegue en él.

Siendo las veinte horas se pasa a cuarto intermedio hasta el día siguiente.

El 30 de septiembre a las dieciocho horas la Junta de Gobierno reanuda su sesión bajo la presidencia del doctor J. Honorio Silgueira y con asistencia del doctor Ilenech D. Aguiar, delegado del Colegio de Abogados de Córdoba.

Antes de continuar con la consideración de los asuntos a la orden del día, se da entrada a la nota del Colegio de Abogados de Buenos Aires confirmando a los doctores Manuel B. Gonnet y J. Honorio Silgueira en su carácter de delegados de dicha institución ante la junta.

Hace uso de la palabra el doctor Aguiar manifestando que dado el entusiasmo con que se ha realizado en el foro de Córdoba la idea de formar un colegio en que ya está representada la parte

más calificada y numerosa de dicho foro, piensa que contará con todas las facilidades para la organización de la Conferencia en aquella ciudad.

Acto seguido manifiesta la Presidencia haberse impuesto por las publicaciones de los diarios, de que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, organiza para el mismo año un Congreso de Derecho Civil y sugiere la conveniencia de ponerse en comunicación con las autoridades de la mencionada Facultad a fin de evitar que las dos asambleas discutan temas análogos. Se aprueba el temperamento propuesto autorizándose a la mesa para introducir en la nómina de temas aprobada por la junta, las modificaciones que fueren necesarias a tal objeto y fijar la fecha definitiva de la Conferencia.

Extracto del acta de las sesiones de la Junta de Gobierno de la Federación de Colegios de Abogados. — Marzo 26 de 1926.

La Junta pasa al tercer punto de la orden del día referente a la celebración de la Segunda Conferencia Nacional de Abogados. A este respecto manifiesta la Presidencia, que si bien no existe obligación de dar cuenta a la Segunda Conferencia de los trabajos realizados, en virtud de las resoluciones aprobadas por la Primera, considera conveniente que dichos trabajos estén terminados, aunque sea en parte para la fecha de la celebración de aquella.

Con tal motivo, da cuenta de la labor de las distintas subcomisiones de la Comisión Permanente de Legislación Procesal Uniforme, agregando que el proyecto de Código único de Procedimiento Civil será terminado a mediados del año en curso.

Los señores delegados doctores González Sabathic y Aguiar expresan la conveniencia de que la Conferencia se celebre dentro de lo posible en el curso de este año. El segundo de los nombrados agrega que el Colegio de Abogados de Córdoba hará todo lo posible

por su parte para el éxito de la misma. Refiriéndose a la circunstancia de que tanto en el programa de la Conferencia como en el del Congreso Civil figura el tema de coordinación de los derechos civil y comercial en materia de obligaciones, expresa la convicción de que a ese respecto será fácil llegar a un acuerdo entre las respectivas comisiones organizadoras.

A moción del doctor Quiroga se resuelve fijar la segunda quincena del mes de Octubre del corriente año, para la celebración de la Conferencia con el agregado propuesto por el delegado doctor Saralegui, facultando a la Comisión Organizadora para modificar dicha fecha.

En cuanto a los temas a tratarse, a moción del doctor Gonnet se resuelve eliminar el referente al régimen de la sociedad conyugal y condición jurídica de la mujer, por hallarse ya a consideración del Congreso con sanción de una de las ramas del mismo el proyecto respectivo. Asimismo se ratifica la facultad de la Comisión Organizadora para modificar los temas si así lo creyere necesario.

Finalmente se encomienda a la mesa directiva la redacción del Reglamento de la Conferencia, resolviéndose continuar la sesión el día siguiente a las quince horas.

Siendo las veinte horas se pasa a cuarto intermedio.

Programa y Reglamento de la Segunda Conferencia Nacional de Abogados

Extracto del acta de las sesiones de la Junta de Gobierno de la Federación de Colegios de Abogados. — Marzo 27 de 1926.

Se pasa a tratar el proyecto de programa y Reglamento de la Segunda Conferencia Nacional de Abogados, el que después de un breve cambio de opiniones quedó aprobado en la siguiente forma:

Programa

- 1.—Creación de la Comisión Permanente de Estudios de Legislación Común.
- 2.—Coordinación de los derechos civil y comercial en materia de obligaciones.
- 3.—Vacíos de la legislación comercial en vigor: cláusulas CIF. y FOB.; sociedades de responsabilidad limitada; crédito documentario, etcétera.

Reglamento

Artículo 1º — La Segunda Conferencia Nacional de Abogados se realizará en la ciudad de Córdoba, en la segunda quincena del mes de Octubre de 1926.

Art. 2º — Tiene por objeto el estudio de las materias indicadas en el programa.

Art. 3º — Son miembros de la Conferencia:

- a) Los delegados del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales;
- b) Los miembros de la Junta de Gobierno de la Federación de Colegios de Abogados;
- c) Los delegados de los Colegios de Abogados de la República;
- d) Los delegados de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales de las universidades nacionales;
- e) Los profesores y ex profesores de derecho civil y comercial de las diversas Facultades nacionales del país;
- f) Los tratadistas y autores nacionales en materia civil y comercial;
- g) Los miembros de las comisiones de Legislación y Códigos del Honorable Senado de la Nación y de Legislación General de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación;
- h) Los delegados de los tribunales superiores de justicia y los *abogados y magistrados que presenten trabajos a la Conferencia.*

Art. 4º — La Comisión Organizadora invitará a las instituciones o corporaciones que estime conveniente a que envíen por escrito trabajos e indicaciones relativas a los temas que comprende el programa de la Conferencia.

Art. 5º — Se limita a dos delegados la representación de las entidades a que se refiere el artículo 3º

Art. 6º — Cada miembro de la Conferencia tiene un voto. A cada delegación corresponde además un voto suplementario, cuando sus componentes voten en el mismo sentido.

Art. 7º — La Conferencia designará presidente y secretario provisorios y una Comisión de Poderes.

Art. 8º — Para constituir la mesa directiva se elegirá en sesión preparatoria un presidente, tres vicepresidentes, un secretario general y tres secretarios; los presidentes y secretarios de sección integrarán como vocales la Comisión General de la Conferencia.

Art. 9º — Las comisiones de sección informarán sobre los temas y trabajos presentados a la conferencia.

Art. 10. — *Los trabajos deben ser presentados en la Capital Federal, a la Comisión Organizadora, antes del día 30 de Septiembre próximo.*

Art. 11. — El despacho de las comisiones debe ser breve. Cada orador entregará a secretaría un resumen de su exposición.

Art. 12. — La Comisión Organizadora sesionará en la Capital Federal y estará compuesta por la mesa directiva de la Junta de Gobierno de la Federación y un delegado del Colegio de Abogados de Córdoba. Podrá asimismo sesionar en la ciudad de Córdoba, en cuyo caso formará también parte de la misma el presidente del Colegio de Abogados de dicha ciudad.

Art. 13. — La Comisión Organizadora queda ampliamente facultada para disponer todo lo necesario para la celebración de la Conferencia, incluso la de modificar el presente reglamento.

Acto seguido se resuelve autorizar a la Comisión Organizadora para formular en su oportunidad la lista de la Comisión de Honor, como asimismo para organizar comisiones de sección en la Capital, Córdoba y Rosario.

Organización de la Segunda Conferencia Nacional de Abogados

Extracto del acta de las sesiones de la Junta de Gobierno de la Federación de Colegios de Abogados. — Septiembre 16 de 1926.

El señor presidente da cuenta detallada de los trabajos realizados y resultado obtenido por la Comisión Organizadora de la Conferencia, todo lo cual consta en las actas respectivas; alude a las modificaciones introducidas en el reglamento de la misma, acordando el carácter de miembros de la Conferencia a los delegados de instituciones interesadas en el estudio del tercer punto del programa así como a todos los componentes de los directores de colegios federados.

El doctor González Sabathic propone que se haga saber a dichas instituciones la conveniencia de que sus delegados de preferencia sean abogados, mereciendo dicha proposición el asentimiento de la junta.

En seguida se resuelve que será miembro de la Conferencia todo abogado que presente a la misma algún trabajo o ponencia relacionado con el programa y que la admisión de trabajos o ponencias extraños a éste será resuelta por la Conferencia.

Con motivo de la publicación aparecida en la fecha en «La Prensa» de la Capital, relativa al proyecto de ley presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación acordando un subsidio para sufragar los gastos de la Conferencia, el doctor Berghmans Doncel hace notar los errores de hecho que aquella contiene y la conveniencia de recabar una rectificación. Propone que la junta dirija nota al señor director de dicho diario en los términos que tiene proyectado y que lee, debiendo encomendarse al señor presidente y miembros de la junta que éste designe, la misión de entregar esa nota y ampliar su contenido con las explicaciones del caso.

La moción es apoyada por los doctores de la Vega y Ahumada, oponiéndose el doctor Castillo, quien considera

que no corresponde tomar resolución alguna al respecto. Votada la moción es aprobada por doce votos contra seis.

Ampliando su informe, el señor presidente expresa que el proyecto de Código de Procedimientos Civil y Comercial presentado por la comisión que se nombró en cumplimiento de lo resuelto por la Primera Conferencia Nacional de Abogados, será publicado tan pronto como se termine la última sesión que se practica actualmente.

Sesiones de la Comisión Organizadora

Actas

Sesión del 9 de Abril de 1926. — Presentes: doctores J. Honorio Silgueira y Carlos A. Berghmans Doneel.

Asuntos entrados. — Nota del doctor J. M. González Sabathic, sobre la impresión de un volante con los temas y reglamento de la Segunda Conferencia. Se resuelve imprimir 5.000 volantes del texto que queda aprobado en la misma sesión. Se determina asimismo, la forma de su distribución y se autoriza efectuar los gastos de franqueo, etcétera que demande el cumplimiento de esta resolución.

Delegados por Córdoba. — La Presidencia da cuenta de haber solicitado telegráficamente la designación del delegado por Córdoba.

Sesión del 16 de Abril. — Presentes: Doctores J. Honorio Silgueira y Carlos A. Berghmans Doneel. Se incorpora el señor delegado del Colegio de Córdoba, doctor Manuel B. Gonnet.

Fecha de la Conferencia. — Habiendo aparecido en los diarios de la Capital noticias de acuerdo con las cuales la comisión organizadora del Congreso de Derecho Civil, a celebrarse en Córdoba, ha resuelto fijar para ello, la fecha 15 de Septiembre próximo, circunstancia que perjudicaría el éxito de la Conferencia de Abogados; se resuelve facultar a la presidencia pa-

ra que conjuntamente con las autoridades del Colegio de Abogados de Córdoba, gestione la postergación del Congreso hasta el año que viene. Con tal motivo se resuelve no distribuir el volante hasta tanto se determine definitivamente la fecha de la Conferencia.

Estudio de los temas de la Conferencia. — En seguida se resuelve invitar para que preparen trabajos o proyectos sobre los temas de la Conferencia al doctor Victor D. Goytia, sobre la Comisión Permanente, a los doctores D. González Gowland y E. C. Chedufau sobre las cláusulas C.F. y F.O.B.; al doctor R. Araya, transporte internacional por ferrocarril; al doctor O. Zaefferer Silva, crédito documentario; al doctor M. A. Rivarola, sociedades de responsabilidad limitada y solicitar del doctor E. Laurencena su anteproyecto de ley sobre la misma materia.

Sesión del 23 de Abril. — Presentes: Doctores J. Honorio Silgueira, M. B. Gonnet y C. A. Berghmans Doneel. La presidencia comunica que las gestiones que ha realizado por encargo de la comisión organizadora, en Córdoba, tuvieron resultado favorable, habiéndose postergado el Congreso de Derecho Civil para el año próximo.

Distribución del programa y reglamento. — Se resuelve proceder a la distribución del volante conteniendo el programa y reglamento de la Segunda Conferencia a los colegios, facultades de derecho, instituciones culturales, adherentes a la Conferencia, estudiosos, etcétera.

Designación de delegados. — Se resuelve solicitar la designación de delegados al gobierno nacional, a los de provincias y a las facultades y pedir audiencia al señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública.

Comisiones de sección. — Se resuelve que la comisión de sección encargada de los trabajos sobre creación de la Comisión Permanente de Estudios Legislativos funcione en la Capital Federal; la de coordinación de los derechos civil y comercial en materia de

obligaciones, en Córdoba; y la de estudios de vacíos de la legislación comercial en vigor: cláusulas CIF. y FOB., sociedades de responsabilidad limitada, crédito documentario, etcétera, en Rosario, todo ello sin perjuicio de organizar comisiones similares en la Capital Federal.

Sesión del 30 de Abril. — Presentes: Doctores J. Honorio Silgueira, M. B. Gonnet. Invitado por la comisión organizadora, el doctor E. C. Chedufau.

Asuntos entrados. — Nota del presidente del Colegio de Abogados de Córdoba dando cuenta de la propaganda que se realiza respecto a la Conferencia e indicando la conveniencia de solicitar al Rector de la Universidad de dicha ciudad, el salón de actos públicos para las sesiones. Se resuelve iniciar por nota la gestión aludida.

El señor presidente, doctor Silgueira, comunica que el doctor González Gowland no puede formar parte de las comisiones de sección, pero que está dispuesto a suministrar elementos de estudio sobre letra documentada, por ser dicho punto materia de investigaciones del seminario que tiene a su cargo en la Facultad de Derecho. Asimismo manifiesta haberse entrevistado con el doctor Araya, quien ha prometido suministrar material de estudio sobre transporte ferroviario y asegurar la colaboración del doctor Videla, abogado del Ferrocarril Pacífico, pero sin formar parte de la comisión respectiva. El doctor Chedufau expone los antecedentes que existen sobre transporte marítimo y fluvial, citando entre otros los trabajos y proyectos de los doctores Leopoldo Melo y Eduardo Crespo. Se resuelve encomendar a la presidencia solicite al doctor Melo su participación en los trabajos de la comisión a nombrarse a tal efecto. Igual misión ante el doctor Crespo se encomienda al doctor Chedufau.

Habiendo indicado el doctor Chedufau que la Cámara Sindical de Aseguradores Marítimos está en condiciones de suministrar informaciones sobre transporte marítimo, se resuelve encargar

al mismo haga las gestiones necesarias para que dicha institución designe delegados que al mismo tiempo constituirían la comisión de estudio de la mencionada materia.

Sesión del 7 de Mayo. — Presentes: Doctores J. Honorio Silgueira y Manuel B. Gonnet y miembros de las comisiones de sección, ingeniero Ramallo y doctor Chedufau.

Asuntos entrados. — Nota del señor gobernador de Córdoba, acusando recibo de la de la presidencia sobre organización de la Conferencia. A sus antecedentes.

Estudio de los temas de la Conferencia. — El señor Presidente informa haberse entrevistado con el doctor Leopoldo Melo, quien expresó su consentimiento de prestar su colaboración para el estudio de temas, poniéndose para ello de acuerdo con el doctor Crespo.

En cuanto a la comisión de estudio de trabajos sobre sociedades de responsabilidad limitada, el doctor Matienzo, con quien asimismo se entrevistó el doctor Silgueira, le ha manifestado no poder aceptar el cargo de miembro de la comisión respectiva o el de relator de la misma, prometiendo en cambio preparar los antecedentes sobre dicho tema.

El doctor Mario A. Rivarola aceptó el cargo de miembro de dicha comisión. En lo referente al primer tema del programa, se resuelve que el mismo quedará a estudio de los doctores E. Gil y V. D. Goytía, quienes aceptaron su designación de miembros de la comisión correspondiente.

El ingeniero señor Carlos M. Ramallo, especialmente invitado por la comisión para colaborar en los trabajos preparatorios sobre transporte ferroviario, tema establecido en el programa, expone su punto de vista sobre las disposiciones legales que rigen en la materia y que deben ser modificadas, de acuerdo con el grado de progreso alcanzado por el país. Se resuelve encomendar al ingeniero Ramallo la preparación de un memorial sobre esta cuestión y solicitar la colaboración para

el mismo fin de los doctores Ferrer y Bullrich.

Subsidio. — Se resuelve gestionar de la Universidad Nacional de Córdoba un subsidio para los gastos que demande la celebración de la Conferencia, e invitar a los gobiernos nacional y de las provincias a que nombren delegados.

Sesión del 14 de Mayo. — Presentes: doctores J. Honorio Silgueira, Manuel B. Gonnet y Carlos A. Berghmans Doneel.

Asuntos entrados. — Nota del doctor J. M. González Sabathí, comunicando que la Comisión para estudio del tema 3º del programa de la Conferencia, con sede en la ciudad de Rosario, quedará constituida por los doctores Nicanor de Elía, Enrique Thedy, Carlos Ameglio Arzeno y él mismo. Aclarando la noticia aparecida en los diarios, comunica que dicha comisión no se propone estudiar la ley de quiebras, que, por otra parte, no corresponde al programa.

Nota del secretario del Colegio de Abogados de Córdoba, solicitando se le comunique el número de miembros que deben componer cada comisión de sección con sede en Córdoba. Se resuelve dejar librada la determinación del número de sus miembros, al criterio de las mismas comisiones.

Sesión del día 21 de Mayo. — Presentes: Doctores J. Honorio Silgueira, Manuel B. Gonnet y Carlos A. Berghmans Doneel.

Asuntos entrados. — Notas de los gobiernos de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes y Tucumán, comunicando que en su oportunidad designarán delegados a la Segunda Conferencia.

Resoluciones. — Se modifica el artículo 3º del reglamento de la Conferencia, en el sentido de que son miembros de la misma, además de los delegados de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales, los decanos de las mismas.

Se extiende a todos los miembros de

las comisiones directivas o directorios respectivos la representación de los colegios incorporados a la Federación, sin perjuicio de los delegados que prevé el inciso d) del artículo 3º.

Se resuelve invitar a la Sociedad Rural Argentina para que nombre delegados a la Conferencia, los que al mismo tiempo deberán integrar la comisión de estudio del punto 3º del programa, en lo referente al transporte de ganado.

De acuerdo con una resolución anterior se resuelve solicitar por nota a la Universidad Nacional de Córdoba un subsidio para atender los gastos relacionados con la organización de la Segunda Conferencia.

Sesión del 28 de Mayo. — Presentes: Doctores J. Honorio Silgueira y Manuel B. Gonnet.

Asuntos entrados. — Nota del presidente del Colegio de Abogados de Mendoza, consultando sobre la conveniencia de solicitar el envío de trabajos por los letrados y magistrados a quienes se les remite el programa y reglamento de la Segunda Conferencia y la posibilidad de que en dichos trabajos se traten materias no previstas por el programa de la misma. En cuanto al primer asunto se resuelve contestar que la Comisión Organizadora vería con agrado toda iniciativa del colegio de Mendoza tendiente a la presentación de trabajos o ponencias. En cuanto a la presentación de trabajos no previstos por el programa, se resuelve comunicar que la Comisión Organizadora entiende que en principio no deben ser admitidos para asegurar el normal desenvolvimiento de las deliberaciones de la Conferencia.

Nota de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata acusando recibo de la invitación a designar delegados, la que será puesta en conocimiento del Consejo Académico.

Nota del doctor Eduardo Crespo acompañando copia de un trabajo sobre sociedades colectivas de responsabilidad limitada. Se destina a la comisión respectiva.

Nota del gobierno de Entre Ríos designando a sus delegados a la Conferencia.

Resoluciones. — Se resuelve: facultar al ingeniero Ramallo para que designe a los demás miembros de la Comisión de Transporte Ferroviario.

Invitar a los delegados de la Sociedad Rural para la sesión del 5 de Junio, si para tal fecha ya fueran designados.

El doctor Armando Roneaglia expone que concurre a las sesiones en carácter particular, pues la Cámara Sindical de Aseguradores Marítimos que preside, aun no ha designado a los delegados. Ofrece desde ya la colaboración de esa institución para el estudio del transporte marítimo.

Finalmente el ingeniero Ramallo da lectura del memorial sobre las posibles reformas al Código de Comercio en lo referente al transporte ferroviario.

Sesión del 5 de Junio. — Presentes: Doctores J. Honorio Silgueira, Manuel B. Gonnet, Carlos A. Berghmans Doneel. Invitados especialmente: el presidente de la Cámara Sindical de Aseguradores Marítimos, señor Armando Roneaglia, y el ingeniero C. M. Ramallo.

Asuntos entrados. — Nota del presidente del Colegio de Abogados de Córdoba comunicando que la comisión de sección de estudio del 2º punto del programa, queda integrada por los siguientes profesores de la Facultad de Córdoba: doctores Enrique Martínez Paz, Santiago F. Díaz, Santiago Beltrán, Luis J. Posse, Henoeh D. Aguiar e Hipólito Montagné y la comisión de estudio del punto 3º por los doctores Santiago F. Díaz, Santiago Beltrán, Blas D. Ordóñez y Rogelio Mazzi.

Nota del Colegio de Abogados de Mercedes, comunicando que se ha efectuado la distribución del programa de la Federación y que se ha notificado a los directores la ampliación de la representación.

La presidencia informa que la Sociedad Rural Argentina ya ha designado sus delegados y que remitirá oportunamente la comunicación correspondiente. Informa asimismo que el profesor Pablo Calatayud presentará un proyecto sobre venta de cosa ajena.

A indicación del ingeniero Ramallo se resuelve dirigir una nota a la Junta de Representantes y Gerentes de Ferrocarriles solicitando la designación de delegados.

Se resuelve reintegrar a los gobiernos nacional y provinciales la designación de delegados.

Sesión del 19 de Junio. — Presentes: doctores J. Honorio Silgueira, Manuel B. Gonnet y Carlos A. Berghmans Doneel.

Asuntos entrados. — Nota de la Sociedad Rural Argentina, designando sus delegados a la Conferencia.

Resoluciones. — Se resuelve invitar a la Corte Suprema de la Nación y Superiores Tribunales de Justicia a que designen delegados.

La presidencia informa que la mesa directiva de la Federación, activa las gestiones para la creación de colegios de abogados en varios foros, a fin de que estos últimos tengan su debida representación en la Conferencia.

Sesión del 28 de Junio. — Presentes: doctores J. Honorio Silgueira, Manuel B. Gonnet e invitado especialmente el doctor Juan P. Biscayart Blanco, delegado de la Sociedad Rural Argentina.

Asuntos entrados. — Nota del Colegio de Abogados de Mendoza, solicitando se le remitan 100 ejemplares más del programa de la Conferencia, a fin de ser distribuidos entre los miembros del foro de esa ciudad e indicando la conveniencia de invitar al Superior Tribunal de esa provincia. Nota del Colegio de Abogados de Córdoba, acusando recibo de la comisión respecto a la ampliación de la representación de los colegios. Nota del señor rector de la Universidad Nacional de Córdoba, cediendo el salón de actos de la

misma para las sesiones de la Conferencia. Nota de los doctores V. D. Goytia y E. Gil aceptando y agradeciendo la designación para formar parte de la comisión de estudio del primer tema de la Conferencia.

La presidencia expone al señor delegado de la Sociedad Rural los propósitos de la comisión al incluir la cuestión del transporte de ganados y frutos del país en general en el programa de la Conferencia y que concuerdan en principio con algunas conclusiones a que se ha llegado en el Congreso de Ganadería del Río de La Plata recientemente celebrado. Se encomienda al doctor Biscayart Blanco, la preparación del respectivo proyecto.

Resoluciones. — Se resuelve dirigir notas a las dos comisiones de sección de Córdoba, significándoles la urgencia de iniciar el estudio de los temas que les han sido encomendados.

Sesión del 21 de Julio. — Presentes: doctores M. B. Gonnet, C. A. Berghmans Doneel y los señores delegados de la Cámara de Aseguradores Marítimos, doctor Juan C. Carlomagno y señor F. Russel Baker.

Asuntos entrados. — Nota del doctor Hipólito Montagné declinando el cargo de miembro de la comisión de sección a causa de las múltiples tareas que se hallan a su cargo. Nota de la Cámara Sindical de Aseguradores Marítimos designando un delegado a la Conferencia.

Después de una exposición de los fines de la Conferencia hecha por el doctor Gonnet, se resuelve que la delegación de la Cámara Sindical de Aseguradores Marítimos prepare un anteproyecto sobre contrato de fletamento, la cuestión de la jurisdicción, etcétera. Asimismo se resuelve dirigir nota a los doctores J. M. González Sabathié, de Rosario, y Santiago Beltrán, de Córdoba, comunicándoles el estado de los trabajos preparatorios en la Capital y solicitando informaciones respecto al funcionamiento de las comisiones en dichas ciudades.

Sesión del 9 de Agosto. — Presentes: Doctores J. H. Silgueira, M. B. Gonnet y C. A. Berghmans Doneel.

Asuntos entrados. — Nota del señor rector de la Universidad de Córdoba comunicando la resolución del Consejo Superior de la misma por la cual se acuerdan \$ 1.500 m.n. como contribución a los gastos de la Conferencia. Se resuelve aceptar y agradecer.

Nota del doctor A. Castiglione comunicando que varios abogados del foro de Santiago del Estero, junto con él, preparan trabajos para la Conferencia, y que el colegio de la misma ciudad oportunamente nombrará delegados. Nota del Colegio de Abogados de Córdoba comunicando los cambios habidos en la composición de las comisiones de sección y la designación del doctor Víctor N. Romero del Prado para el cargo de secretario encargado de ambas comisiones y de lo relativo a la preparación de la Conferencia en aquella ciudad. Nota del doctor Santiago Beltrán Gavier, comunicando que el Colegio de Abogados de Córdoba tomará las medidas necesarias para la regularización del funcionamiento de las comisiones.

Nota del doctor J. M. González Sabathié, contestando la de la comisión y comunicando que hará las gestiones necesarias a fin de que los miembros de la comisión de sección que funciona en la ciudad de Rosario presenten su despacho a la brevedad posible.

La presidencia informa haberse entrevistado con el presidente del Centro de Cabotaje Argentino, quien le anunció la designación de delegados de dicha institución en las personas de los doctores Carlos M. Mayer y Roberto N. Lobos, y con el presidente del Centro de Navegación Transatlántica, señor Maclean, quien le informó que la invitación de la Comisión Organizadora ha pasado a estudio del doctor Ricardo Aldao.

Sesión del 12 de Agosto. — Presentes: Doctores J. Honorio Silgueira, M. B. Gonnet y C. A. Berghmans Doneel.

Asuntos entrados. — Notas del Gobernador de la provincia de Corrientes, de la Corte de Justicia de San Juan, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y del Centro de Cabotaje Argentino, designando delegados. Nota del Colegio de Abogados de Mendoza, acusando recibo de la que le fué dirigida por la Comisión Organizadora, referente a la ampliación de la representación de los colegios incorporados. Nota del doctor V. N. Romero del Prado, comunicando que la comisión de estudio del tema 3º, que funciona en Córdoba, se reunió distribuyendo el trabajo entre sus componentes.

Resoluciones. — A indicación del doctor Berghmans Doneel se resuelve invitar al vocal de la Excm. Cámara Federal de Apelaciones de la Capital, doctor Tomás Arias, para participar en los trabajos de la Comisión de Transportes Marítimos, encomendándose al autor de la indicación que se entreviste con el mismo.

Se resuelve solicitar del doctor Chedufau la presentación de su trabajo sobre contrato CIF.

Se resuelve: invitar a las academias nacionales de Derecho y Ciencias Sociales, y de Ciencias Económicas para que designen delegados a la Conferencia. Pasar notas a los miembros de la Comisión de Códigos y de Legislación del Honorable Senado de la Nación y de Legislación General de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, haciéndoles saber que de acuerdo con el artículo 3º del reglamento, son miembros de la Conferencia y solicitando su asistencia a las sesiones de la misma.

La presidencia informa haberse entrevistado con los doctores Goytía, Gil, Melo, Crespo, Viera y Biscayart Blanco, interesándolos en el pronto despacho de los asuntos que se hallan a su estudio.

Sesión del 31 de Agosto. — Presentes: Doctores J. H. Silgueira, M. B. Gonnet y C. A. Berghmans Doneel.

Asuntos entrados. — Notas del gobierno de la Nación, del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del Litoral y de la Junta de Representantes y Gerentes de Ferrocarriles, designando delegados a la Conferencia. Notas del señor senador Carlos Serrey y señores diputados doctores Mariano G. Calvento, y José Heriberto Martínez, comunicando que concurrirán a la Conferencia en su carácter de miembros de las comisiones legislativas, si así se lo permiten las tareas que tienen a su cargo.

La presidencia informa del estado de los trabajos de las diversas comisiones.

Sesión del 3 de Septiembre. — Presentes: doctores J. H. Silgueira, M. B. Gonnet y C. A. Berghmans Doneel; especialmente invitados, los doctores L. Lagos García, ingeniero C. M. Ramallo, pasando estos últimos, después de un cambio de opiniones con la Comisión Organizadora, a estudiar en subcomisión el proyecto del ingeniero Ramallo.

Asuntos entrados. — Nota del señor Senador Mario Bravo comunicando que pondrá en conocimiento de sus colegas de comisión la invitación de concurrir a la Conferencia. — Nota de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales agradeciendo la invitación de designar delegados, pero lamentando no poder aceptarla por la índole de sus trabajos. — Nota del doctor V. N. Romero del Prado haciendo saber el plan de trabajo adoptado por la comisión de estudio del tema 2º del programa de la Conferencia, como asimismo del estado de los trabajos preparatorios de la misma.

Resoluciones. — Se resuelve intensificar la publicidad por medio de la prensa y agregar a la lista de adherentes los nombres de los doctores A. Colmo, F. Cernesoni, E. Williams, J. J. Britos y otros.

Se resuelve invitar a la Unión Industrial Argentina, Federación Agraria Argentina, Bolsas de Comercio de la Capital y Rosario, y Bolsa de Cereales de la Capital, a que designen delegados.

Sesión del 14 de Septiembre. — Presentes: doctores J. H. Silgueira y M. B. Gonnet.

Asuntos entrados. — Nota de los gobiernos de las provincias de Catamarca, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, La Rioja y Salta, de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, del Colegio de Abogados de Mercedes, comunicando la designación de delegados a la Conferencia. Nota de la tesorería general de la Universidad Nacional de Córdoba, acompañando un giro por \$ 1.500 m/n. importe del subsidio acordado por dicha universidad. Se resuelve abrir la cuenta correspondiente en la sucursal del Banco de Córdoba en la Capital. Nota del doctor R. M. Salvat adheriéndose a la Conferencia.

La presidencia da cuenta de sus gestiones en Córdoba. Comunica haber gestionado y obtenido rebajas en el precio de pasaje de las distintas compañías de ferrocarriles, como asimismo en el precio global del tren de excursión de los Ferrocarriles del Estado. Manifiesta también haber dejado arreglada la cuestión de alojamiento para los delegados en varios hoteles de Córdoba, con reducción de las tarifas. Da cuenta asimismo de haber obtenido del señor rector de la Universidad del Litoral, doctor Pedro E. Martínez, el cambio de fecha del congreso universitario, a fin de que no coincida con la de la Conferencia.

Concurre el doctor Romualdo Goyeneche, quien solicita en nombre de la Bolsa de Comercio antecedentes sobre la Conferencia, a la que ha sido invitada dicha institución. Informado por la presidencia al respecto, pone en conocimiento de la comisión que la Bolsa designará sus delegados oportunamente, presentando la delegación de la misma un trabajo sobre transmisión de industrias y comercios.

Sesión del 20 de Septiembre. — Presentes: doctores J. H. Silgueira, M. B. Gonnet y C. A. Berghmans Doncel.

Asuntos entrados. — Nota de los gobiernos de las provincias de Jujuy y Mendoza, de las Cortes de Justicia de las provincias de Catamarca y Santiago del Estero, de los colegios de abogados de Corrientes, Rosario y San Juan, designando delegados.

La presidencia informa haber dirigido nota al presidente de la Comisión de Justicia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, refutando y aclarando errores de concepto en que ha incurrido un diario de la Capital Federal al comentar el proyecto de ley acordando fondos para gastos de la Conferencia, y que se halla a estudio de dicha comisión.

Sesión del 28 de Septiembre. — Presentes: doctores J. H. Silgueira, M. B. Gonnet y C. A. Berghmans Doncel.

Asuntos entrados. — Nota del gobierno de la provincia de Salta comunicando que por renuncia del delegado anteriormente designado, doctor Ovejero, se nombra para reemplazarlo al doctor E. Torino. Notas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la Suprema Corte de la misma provincia, del Superior Tribunal de Jujuy, de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza, del Superior Tribunal de Salta, de los colegios de abogados de Córdoba, Dolores, La Plata, Mendoza, Río Cuarto, San Nicolás, Santa Fe, Santiago del Estero y de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, designando delegados.

Notas del doctor Amadeo Ramírez adhiriéndose a la Conferencia en su carácter de profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Litoral; del doctor Enrique V. Galli, en su carácter de profesor de la Facultad de Derecho de La Plata; del presidente del Colegio de Abogados de Mendoza, solicitando informaciones respecto a la posibilidad de designar delegados suplentes; del doctor Romero del Prado, comunicando los cambios en la composición de la Comisión de Sección en Córdoba.

Se resuelve invitar al Museo Social Argentino y a la Cooperativa por Mayor a que designen delegados a la Conferencia. Se resuelve, asimismo, invitar a los doctores Benito Nazar Anchorena y Manuel A. Castello, profesores de legislación ferroviaria, a que participen en los trabajos de la Comisión de Sección encargada del estudio de Transportes Ferroviarios.

Trabajo del doctor Roberto D. Goytia sobre el Contrato C.I.F. Se destina simultáneamente a estudio de la comisión que funciona en Córdoba y del doctor Chedufau. Proyecto del doctor Antonio Castiglione sobre creación de un Instituto de Derecho Argentino. Se destina a la comisión de estudio del tema 1°.

La Presidencia informa haberse entrevistado con el señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública, quien aceptó la invitación que le ha formulado de concurrir a la conferencia y hacer uso de la palabra en la misma. Pone, asimismo, en conocimiento de la comisión, que el presidente del Museo Social le manifestó que esta institución nombrará sus delegados. Agrega que ya ha tomado las medidas necesarias relacionadas con el cumplimiento de la resolución de la mesa directiva de la Federación sobre colocación de placas en homenaje a la memoria del obispo Trejo y Sanabria y los doctores Vólez Sarsfield, Jerónimo Cortés y Rafael García.

Resoluciones. — Se resuelve fijar la fecha del 26 de Octubre en lugar del 25 para la inauguración de la Conferencia.

Con respecto a varios proyectos de resolución presentados por el doctor O. Rodríguez Sarachaga sobre temas no previstos por el programa, se resuelve pasarlos directamente a la Conferencia. Se fija la fecha 8 de Octubre para la celebración de la primera reunión de las comisiones en pleno.

Se resuelve destinar a estudio del doctor González Gowland el trabajo sobre crédito documentario presentado por el doctor Teodoro Becú.

Silgueira, Manuel B. Gonnet, Carlos A. Berghmans Doneel, Juan P. Biscayart Blanco, Florencio Villegas Basavilbaso, Juan C. Carlomagno, Romualdo Goyeneche, ingeniero Carlos M. Ramallo, doctores Enrique Gil y Víctor D. Goytia.

Asuntos entrados. — Notas del Superior Tribunal de La Rioja, del Colegio de Abogados de la misma provincia, de la Federación Agraria Argentina y de la Unión Industrial Argentina, nombrando delegados.

Nota de la Cámara Sindical de Aseguradores Marítimos, acompañando un proyecto de reformas al Libro III del Código de Comercio. Nota del doctor Emilio Reviriego, acompañando un trabajo sobre sociedades de responsabilidad limitada. Nota de la delegación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, acompañando un proyecto sobre transmisión de industrias y comercios. Dictamen de la comisión sobre el tema 1° y proyectos de resolución de la misma comisión sobre los trabajos presentados por el doctor Castiglione y el doctor Villegas Basavilbaso respectivamente. Nota del doctor J. M. González Sabathic, acompañando un trabajo sobre arbitraje en materia comercial. Nota de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires comunicando su resolución de no enviar delegados de acuerdo con la práctica seguida por esta institución en casos análogos y sin perjuicio de aceptar después las conclusiones a que llegue la Conferencia.

Resoluciones.—Se resuelve destinar los trabajos de la Cámara Sindical y del doctor Reviriego a las respectivas comisiones de sección; el proyecto de la delegación de la Bolsa de Cereales a una comisión especial formada por los doctores Chedufau y Carlomagno; el trabajo del doctor González Sabathic a una comisión especial formada por los doctores Goyeneche, Carlomagno y Chedufau. Se resuelve solicitar al doctor Chedufau la preparación de un proyecto sobre contrato C.I.F., anunciado por el mismo en las primeras sesiones de la Comisión Organizadora. Se designa al ingeniero Ramallo y a los doctores Castello, Biscayart Blanco y Bullrich, para presentar el dictamen sobre el proyecto de transporte ferroviario.

Sesión del 8 de Octubre. Sesión plenaria. — Presentes: doctores J. Honorio

Acto seguido se da lectura a los despachos de la comisión de estudio del tema 1º, estableciéndose con respecto al proyecto presentado por el doctor Villegas Basavilbaso sobre Instituto Técnico de Compilación, Clasificación y Ordenación del Derecho Argentino, que es independiente del relativo a la creación de la Comisión de Estudios Legislativos. Se resuelve distribuir entre los señores miembros de las distintas comisiones los proyectos de referencia.

Se resuelve invitar a los señores miembros de la Comisión Reformadora del Código Civil y de la Comisión Reformadora de los códigos de procedimiento de la provincia de Buenos Aires a que participen en las deliberaciones de la Conferencia, y reiterar telegráficamente el pedido a las entidades que aun no hubiesen designado sus delegados a que así lo hagan.

Sesión de 11 de Octubre. — Presentes: doctores J. H. Silgueira, M. B. Gonnet y C. A. Berghmans Doneel.

Asuntos entrados. — Notas del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, de Catamarca y de Tucumán nombrando delegados. Nota de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Tucumán, comunicando haber designado delegado de la misma al doctor Adolfo S. Carranza, en reemplazo del doctor Joaquín de Zavalia. Nota del presidente del Colegio de Abogados de Mendoza, remitiendo listas de delegados, miembros del directorio y letrados del foro de dicha ciudad que concurrirán a la Conferencia y solicitando el envío de credenciales correspondientes.

Resoluciones. — Se resuelve modificar el artículo 4º del Reglamento de la Conferencia, estableciendo que la representación de las entidades a que se refiere el artículo 3º se limitará a dos delegados con voto, y el artículo 6º suprimiendo el voto suplementario a las delegaciones, cuando sus componentes voten en el mismo sentido.

La Presidencia da cuenta de las medidas de carácter urgente que ha adoptado a fin de asegurar la mayor concurrencia de delegados.

Sesión del 15 de Octubre. — Sesión plenaria. — Presentes: doctores J. Honorio Silgueira, Manuel B. Gonnet, Carlos A. Berghmans Doneel, Luis Lagos García, Mario A. Rivarola, Manuel P. Castello, Víctor D. Goytía, Enrique Gil, Vicente Rodríguez Ribas, Edmundo C. Chedufau y Juan P. Biscayart Blanco.

Asuntos entrados. — Nota del Gobernador de la provincia de San Juan, del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Fe y del Colegio de Abogados de Buenos Aires, designando delegados.

El doctor Mario A. Rivarola informa sobre el estado de los trabajos de la comisión de estudio del proyecto sobre sociedad de responsabilidad limitada, la que, entre otros, tomó en consideración los trabajos de los doctores Doneel, Britos y Reviriego que le habían sido entregados por Secretaría. Queda integrada dicha comisión por el doctor Vicente Rodríguez Ribas.

Acto seguido inician sus trabajos dicha comisión y la de Transporte Ferroviario.

Se considera el dictamen de la comisión de estudio del punto 1º, encomendándose a sus autores la tarea de darle la redacción definitiva, de acuerdo con las observaciones formuladas en la sesión y aceptadas por los mismos.

La Comisión Organizadora resuelve pasar nota a las distintas Cámaras Federales de Apelación, solicitando la designación de delegados a la Conferencia e invitar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia de Córdoba y al señor intendente de la Capital de la misma, a que asistan al acto de la inauguración. Asimismo se resuelve solicitar del gobierno de la provincia un subsidio para sufragar los gastos que demande la celebración de la Conferencia.

Sesión del 22 de Octubre. — Sesión plenaria. — Presentes: doctores Manuel B. Gonnet, Romualdo Goyeneche, Juan P. Biscayart Blanco, Vicente Rodríguez Ribas, Enrique Gil, Víctor D. Goytía y Roberto N. Lobos.

Asuntos entrados. — Nota de la Bolsa de Comercio de Rosario comunicando que, de acuerdo con resoluciones anteriores, no designará delegados a la Conferencia. Nota de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, designando al doctor Edmundo C. Chedurfau delegado de la misma a la Conferencia. Nota de la Corte de Justicia de la provincia de San Juan, comunicando la designación del doctor Sebastián E. Alvo como delegado de la misma, en reemplazo del doctor Salvador A. Doneel, quien había renunciado. Nota del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, confirmando el nombramiento de los delegados en las personas de los doctores Juvenal de la Puente y Amadeo Pons. Nota de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario comunicando que considerará en acuerdo la invitación de designar delegados, formulada por la comisión. Nota del Colegio de Abogados de San

Luis, confirmando la designación de delegados.

Se da entrada al despacho de la comisión especial recaído en el proyecto de la delegación de la Bolsa de Cereales, y se informa que los despachos de la Comisión de estudio del punto 1º, en su redacción definitiva, como asimismo el despacho sobre sociedades de responsabilidad limitada, formulado por los doctores Rivarola y Matienzo, fueron remitidos junto con el trabajo del doctor Oscar Zaefferer Silva, sobre crédito documentario, a la comisión que funciona en Córdoba.

Los doctores Biscayart Blanco y Goyeneche anuncian la presentación para el día siguiente de los dictámenes sobre transportes ferroviarios y arbitraje en materia comercial, respectivamente.

El doctor Lobos manifiesta que la delegación del Centro de Cabotaje Argentino presentará su proyecto directamente a la Conferencia.

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

OCTUBRE 26 DE 1926

(MAÑANA)

SESION PREPARATORIA

PRESENCIA DEL DOCTOR J. HONORIO SILGUEIRA

DELEGADOS Y MIEMBROS DE LA CONFERENCIA PRESENTES: Dres. Alegre Manuel, Alsina Ramón M., Alvarez Julio, Alvo Sebastián E., Astrada Ponce Carlos, Avalos Antonio, Avalos José M., Barbosa Feliciano, Barraquero Julián, Barrera Juan P. de la, Bassi Aurelio, Baudon Héctor R., Berghmans Doncel Carlos A., Biscayart Blanco Juan P., Bullrich Rodolfo, Cabral Angel H., Campa Juan de la, Canal Feijóo Bernardo, Cano Guillermo G., Carlomagno Juan C., Carranza Adolfo, Casañas Miguel, Castellanos Benjamín, Castiglione Antonio, Castillo Ramón S., Castro Jorge S., Cervini Francisco, Chedufau Edmundo C., Codoni José E., Coromins Segura Rodolfo, Correa Alejandro, Corvalán César S., Courel Carlos D., Day Alberto A., Doncel Salvador A., Echagüe Pedro A., Escobar Sáenz Julio M., Ferreira Enrique A., Frías Leopoldo, Frías Wenceslao, García Zavalla Rafael, Gil Enrique, Gonnet Manuel B., González Sabathié Juan M., Goyencche Romualdo, Goytía Roberto D., Goytía Victor D., Guinazá Alberto, Herrera Santiago D., Jofré Tomás, Labanca Gabriel, Lafaille Héctor, Lagos García Luis, León y Basualdo Arturo D., Lobos Roberto N., López Domínguez Ramón, Llan de Rosos Ernesto, Latella Frías Donato, Martínez Paz Enrique, Mazzi Rogelio, Méndez Miguel G., Molina Luis E., Morey Ramón, Morixe Jerónimo A., Moyano Escalera Salvador, Novillo Saravia Lisardo, Olmos Lucus A. de., Orgaz Raúl A., Ortiz Florencio J., Otero Capdevila Benjamín, Palacios Benjamín, Páez de la Torre Manuel, Petra Demetrio, Reviriego Emilio, Ríos Eduardo, Rodríguez Ribas Vicente, Rodríguez Sarachaga Oscar, Romero del Prado Victor N., Rothe Guillermo, Sierra Celestino D., Silgueira J. Honorio, Stanchina Camilo F., Urraza Estanislao de, Vera Cruz, Vera Vallego Ricardo, Viechi Rodolfo, Vilgré La Madrid Juan, Villegas Basavilbaso Florencio, Viñas Ibarra Umberto, Zavala Ortiz Alfredo, Zaefferer Silva Oscar.

SUMARIO

1

Designación de autoridades provisionales

- 1.—Designación de autoridades provisionales.
- 2.—Verificación y aprobación de poderes.
- 3.—Designación de autoridades de la Conferencia.
- 4.—Aprobación del reglamento de sesiones.
- 5.—Horario de sesiones.
- 6.—Agasajos. Varias comunicaciones.
- 7.—Designación de comisiones.
- 8.—Continuación del número 6.
- 9.—Voto de aplauso a la Comisión Organizadora.
- 10.—Designación de autoridades.—Palabras de los designados.

En la ciudad de Córdoba, a veintiseis días del mes de Octubre de 1926, reunidos en el Salón de Actos de la Universidad los delegados arriba indicados, y siendo las 9 y 25 horas, ocupando el sitio de la presidencia, dice el:

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL).—Señores miembros de la Segunda Conferencia Nacional de Abogados: de acuerdo con el artículo 6º del reglamento que forma parte de la convocatoria, corresponde que la asamblea designe un presidente y un secretario provisorios y una comisión de poderes.

SR. BAUDÓN. — Pido la palabra.

Dada la naturaleza de esta asamblea podemos separarnos de los procedimientos regulares electorales, sobre todo con la seguridad que se va a llegar al mismo fin poniendo, sólo, un poco más de afectuosidad y una mayor demostración de simpatía en la forma; y como un homenaje a la decisión y a la energía que ha dado por resultado esta obra, que es casi una obra propia, yo me permito proponer que se preste de la elección de presidente y se proclame, directamente, por unanimidad, al doctor J. Honorio Silgueira. (*¡Muy bien! Aplausos.*)

— Ocupa la presidencia el doctor J. Honorio Silgueira. (*Aplausos.*)

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Corresponde elegir ahora el secretario provisional.

SR. ALVO. — Pido la palabra.

Por las mismas razones por que ha sido proclamado presidente el doctor Silgueira, yo pediría a la Conferencia el mismo voto para el doctor Berghmans Doncel como secretario. (*Aplausos.*)

2

Verificación y aprobación de poderes

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Hay que designar ahora la comisión de poderes, salvo que la asamblea resuelva otra cosa.

VARIOS SEÑORES DELEGADOS. -- Que la designe la presidencia.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — En la primera Conferencia quedó a cargo de la Secretaría informar sobre las representaciones; la Secretaría ha expedido credenciales de acuerdo con los correspondientes mandatos, de suerte que si los señores delegados quisieran revisarlos, ello significaría rehacer todo un trabajo ya practicado.

SR. BAUDÓN. — Que se dé por aceptada la labor de Secretaría a este respecto.

SR. CERVINI. — Pido que por Secretaría se dé lectura de la nómina de los delegados.

SR. GARCÍA ZAVALÍA. — Pido la palabra.

A los fines de brevedad, desearía indicar que se dé lectura por Secretaría de la nómina oficial de los delegados y a medida que se los designe, los señores delegados digan «presente».

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — Es un procedimiento que además tendría la ventaja de que cada uno de los señores delegados conociera a los demás miembros de la Conferencia.

— Asentimiento general.

— Se lee por Secretaría la nómina de los señores delegados.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — La presidencia hace presente que tiene conocimiento que entre esta tarde y mañana llegará un grupo numeroso de delegados a esta Conferencia, especialmente de las provincias del Norte.

3

Designación de autoridades

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Corresponde ahora designar la mesa directiva, pues las autoridades nombradas hace un momento han sido con carácter provisional.

SR. BAUDÓN. — Se puede dar a esas autoridades el carácter de definitivas. Ese ha sido el pensamiento de mi propuesta.

— Asentimiento general.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — Faltaría entonces designar tres vicepresidentes y los secretarios.

SR. GONNET. — Pido la palabra.
Como un tributo a la ciudad de Córdoba que nos alberga en estos momentos y que nos ofrece este espléndido, histórico y tradicional salón para nuestras deliberaciones, y como un tributo personal al presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, doctor Henech D. Aguiar, que no obstante su precaria salud nos ha prestado grandes e importantes servicios para la realización de esta Conferencia, propongo que se le designe vicepresidente 1º. (*Grandes y prolongados aplausos.*)

— Asentimiento general.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). -- Que-
da designado vicepresidente 1º el doctor
Henoeh D. Aguiar.

SR. CHEDUFAU. -- Como vicepresiden-
te 2º propongo al doctor Gonnet...

SR. GONNET. -- Yo tenía el uso de la
palabra y hubiera deseado proponer
también al 2º vicepresidente.

La magistratura se ha asociado por
primera vez a estas conferencias y, por
tanto propongo que se designe al presi-
dente de la Corte Suprema de Justicia
de Tucumán, doctor Manuel Páez de la
Torre, que es el juez más antiguo, como
vicepresidente 2º.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DON-
CEL). -- Hago notar a los señores dele-
gados que el doctor Gonnet es miembro
honorario de la Conferencia.

SR. GONNET. -- Yo insisto ante la
Conferencia para que votemos el nom-
bre que he propuesto, el del doctor Páez
de la Torre.

--Asentimiento general. (*Aplausos*).

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). -- Que-
da designado vicepresidente 2º el doctor
Páez de la Torre.

Habrá a hacer una indicación al doctor
Chedufau, la misma que acaba de hacer
el doctor Berghmans Doncel. El señor
delegado doctor Gonnet está en la lista
de honor de la Conferencia y es al mis-
mo tiempo miembro de la Comisión Or-
ganizadora, circunstancias que sin res-
tarle los altos méritos que tiene, le po-
nen en el caso de tener que declinar la
vicepresidencia. Hago esa indicación al
doctor Chedufau por si quiere retirar
su moción.

SR. CHEDUFAU. -- Tengo entendido,
señor presidente, que la proposición que
yo he hecho no desplaza en absoluto la
designación honorífica que ha dado la
Conferencia al doctor Gonnet, por lo
cual creo que no hay ningún inconveniente
que los que han aplaudido mi
proposición admitan que yo la retire en
homenaje a lo dicho por el señor presi-
dente.

SR. GONNET. -- El Colegio de Aboga-
dos de Mendoza se ha asociado también
a esta Conferencia con una nutrida e
ilustrada delegación de abogados de di-
cha provincia: yo propongo como ter-

cer vicepresidente al presidente del Co-
legio de Abogados de Mendoza, doctor
Guillermo G. Cano.

--Asentimiento general. (*Aplausos*).

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). -- Que-
da designado vicepresidente 3º el doctor
Guillermo G. Cano.

SR. GONNET. -- En cuanto a los se-
cretarios, consideraría que debe conti-
nuar en el cargo de secretario general
el doctor Carlos A. Berghmans Doncel.
Y como secretarios, propongo a los doc-
tores: Bernardo Canal Feijóo, Víctor N.
Romero del Prado, Alfredo Zavala Or-
tiz y Florencio Villegas Basavilbaso.

--Asentimiento general. (*Aplausos*).

4

Reglamento de sesiones

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). -- Se
va a dar lectura del proyecto de regla-
mento para las sesiones de la Conferen-
cia.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DON-
CEL). -- (*Leyendo*):

REGLAMENTO DE SESIONES

1º El orden de los asuntos para cada se-
sión será como sigue:

a) Lectura del acta de la sesión an-
terior, salvo asentimiento en con-
trario de la Conferencia;

b) Comunicaciones cuya considera-
ción recomiende la Mesa Direc-
tiva;

c) Consideración de los despachos de
las comisiones de sección.

2º Ningún miembro hablará más de una
vez sobre el mismo tema, salvo que sea
para formular brevemente aclaración
o explicación;

3º Los trabajos impresos no se leerán in-
tegramente, pudiendo los autores ha-
blar sobre ellos. Los autores de traba-
jos no impresos podrán leer o hablar;

4º En ningún caso podrá exceder de diez
minutos la lectura o el discurso, salvo
autorización expresa de la Conferen-
cia, que sólo podrá otorgarla por cin-
co minutos más;

5º Toda modificación o agregado a los despachos de las comisiones se presentará y discutirá en la Conferencia, a no ser que ésta resolviera pasarlos a comisión;

6º Será supletorio del presente, el reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — En consideración en general.

SR. CHEDUFAU. — Pido la palabra, con el objeto de recomendar la aprobación en general del reglamento propuesto y aprovechar la circunstancia para solicitar de la presidencia una explicación pertinente al apartado 3º. Comienzo diciendo que los trabajos impresos no se leerán íntegramente. Estoy calurosamente en favor de este primer párrafo del artículo 3º, pero solicito que la presidencia me aclare si esta lectura se refiere al articulado que acompaña a manera de resumen a algunos de los trabajos impresos que han llegado para estudio de las comisiones especiales. Solicitaría que la presidencia me dijese si interpreta como yo en el sentido de que la lectura se limite al resumen articulado que algunos mocionantes hagan en cuanto a los trabajos escritos.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Yo entiendo que el resumen a que se refiere este inciso, comprende todo el trabajo, tanto el articulado como los fundamentos, porque la sola enunciación del articulado puede ser insuficiente en ciertos casos si el autor del proyecto no dice breves palabras fundamentándolo.

SR. CHEDUFAU. — Me refiero a la lectura por Secretaría. Quisiera yo que se interpretara este artículo 3º, como que el secretario actuante se comidiese a leerlos el articulado de los proyectos, quedando entonces la expresión de sus fundamentos para el autor de los trabajos, en caso de estar presente, o para el miembro informante de la comisión en caso de ausencia del autor del trabajo sobre el cual se informa.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — Si me permite, para aclarar. Si el señor delegado observa, verá que este artículo contempla dos casos; uno de ellos es: el trabajo impreso que se presume que lee cada persona, por la

sencilla razón de que tiene a su disposición uno de los ejemplares de ese trabajo y entonces parece innecesario que la lectura se haga en la Conferencia íntegramente, sin perjuicio de que los señores miembros de la Conferencia pidan o exijan, con todo derecho, la lectura de aquella parte que les parezca necesario o conveniente que se lea por Secretaría.

SR. JOFRÉ. — Sería conveniente que se lea, para que puedan enterarse los que no lo han leído, así como el público, la barra misma. (Aplausos). Haría indicación para que se apruebe, entendiéndose de que se ha de leer todo el articulado.

SR. CHEDUFAU. — Pero eso sería una modificación al artículo 3º.

SR. ESCOBAR SÁENZ. — Para proceder con método y criterio práctico, yo creo que lo más conveniente sería que por Secretaría se proceda a leer artículo por artículo y el que no se observe se dé por aprobado, porque hemos pasado al artículo 3º y todavía no está aprobado el reglamento ni en general, ni los artículos 1º y 2º en particular.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — La Presidencia había dicho que estaba en consideración en general.

Si no hay observaciones, se dará por aprobado.

—Asentimiento general.

—Se aprueban los artículos 1º y 2º.

—Se lee el artículo 3º.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — Si dijera este artículo, «los trabajos impresos no se leerán íntegramente, en la parte que se refiere a sus fundamentos», quedaría claro; además, ese es el espíritu de la disposición.

SR. JOFRÉ. — Podría decirse que se leerá el articulado de cada proyecto.

SR. CHEDUFAU. — Lo importante es que quede a salvo el derecho de escuchar íntegramente la lectura del articulado de los proyectos.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — Me parece que habría otra observación que hacer: antes que los autores, de cada proyecto pudieran hablar o leer, deberíamos escuchar el

informe de la comisión respectiva, cosa que no se prevé en el reglamento, y después a los autores de los trabajos y demás miembros de la Conferencia que desearan hacer uso de la palabra.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Eso queda sobreentendido.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — Eso es de práctica.

—Asentimiento general.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — queda aprobado el artículo 3º con las aclaraciones que se han hecho.

—Se lee el artículo 4º.

SR. JOFRÉ. — Pido la palabra.

Pediría que se modificase este artículo a fin de poder acordar un mayor tiempo para el informe de los trabajos. Hay muchas cuestiones que no se pueden tratar en 10 minutos. En la anterior Conferencia se dió mayor amplitud de tiempo a los oradores que deseaban informar más extensamente las iniciativas presentadas. Desaparecida esta restricción, quedó librado a la asamblea el tiempo que podía disponer cada uno para producir su informe. No se abusó de esta facultad; y la práctica es la mejor enseñanza que podemos tener.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — Perdone el señor delegado: en la anterior Conferencia se sancionó esta disposición tal como aparece en este artículo.

SR. JOFRÉ. — Pero no se cumplió, y esto no trajo ningún inconveniente.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — El propósito de esta disposición es evitar largas discusiones que nos impidan tratar, si no todos, la mayor parte de los asuntos sometidos a la consideración de esta asamblea.

Igual propósito se tuvo en la anterior Conferencia en que se estableció la misma disposición restrictiva, para informar, sin perjuicio de que la Conferencia concediera en cada caso una prórroga de 5 minutos más. Es cierto que no se abusó mucho, como decía el señor delegado doctor Jofré, pero convendría que estableciéramos una restricción res-

pecto de las discusiones, porque en los tres días miércoles, jueves y viernes, debemos tratar todos los asuntos que están a la consideración de la Conferencia, sesionando dos veces por día.

UN SEÑOR DELEGADO. — Que quede el artículo tal como está.

SR. JOFRÉ. — No tengo inconveniente.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — queda aprobado el artículo 4º, en la forma que se ha leído.

—Se aprueban los demás artículos del reglamento.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — queda sancionado el reglamento de la Conferencia.

5

Horario de sesiones

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Corresponde ahora que la Conferencia fije las horas y días de sesión.

Quiero hacer presente a la Conferencia que la sesión de esta tarde es puramente inaugural y que recién entraríamos a trabajar mañana por la mañana. El desecho de la comisión organizadora de esta Conferencia es terminar todo nuestro cometido en seis sesiones ordinarias a celebrarse en los días miércoles, jueves y viernes.

UN SEÑOR DELEGADO. — Propongo que las sesiones sean de 9 a 12 y de 15 a 18.

SR. REVIRIEGO. — Podría modificarse la hora de sesión de la tarde, fijándose las 16 en vez de las 15.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — No te tema al calor de Córdoba, señor delegado: estamos disfrutando de unos días agradables y bonancibles. Por otra parte, después de las 18 tendremos agasajos y recepciones.

SR. REVIRIEGO. — Muy bien, señor presidente.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Haría que fijar el quórum con que ha de sesionar la Conferencia.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — En la anterior Conferencia se acordó media hora de tolerancia con relación a la fijada, pudiéndose sesionar con los presentes.

—Asentimiento general.

6

Agasajos. -- Varias comunicaciones

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a leer una nota enviada por el señor presidente del Club Social de Córdoba.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — (*Leyendo*):

Córdoba, Octubre 25 de 1926.

Señor doctor J. Honorio Silgueira,

Presente.

En nombre de la comisión directiva del Club Social de Córdoba me es grato comunicarle que se ha resuelto considerar como socios transcúntes de esta institución a todos los señores componentes de las diversas delegaciones a la Conferencia de Abogados que se reunirá en esta ciudad.

Servirá de carnet el mismo que cada señor delegado posee de la Federación Argentina de Abogados.

Saludo al señor presidente de la Conferencia de Abogados con mi mayor consideración.

(Hay una firma.)
Secretario.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). -- Debo añadir que el señor presidente del Crisol Club nos ha pasado igual comunicación. Todos los señores delegados podrán asistir a la fiesta que se dará el día 28; les bastará exhibir simplemente su carnet.

UN SEÑOR DELEGADO. — Corresponde agradecer a ambas instituciones esta deferencia.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — Contando con la aprobación de la asamblea, ya se ha llenado ese requisito.

7

Designación de comisiones

SR. CANO. -- Pido la palabra.

Entiendo que se han presentado algunas ponencias o trabajos, sobre temas ajenos al programa oficial. Desearía saber si se ha autorizado a la presidencia para designar las comisiones especiales que han de estudiar y dictaminar en esos asuntos.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). -- La presidencia entiende que no.

SR. CANO. -- Entonces hago moción en el sentido de que se le autorice a nombrar las comisiones especiales necesarias, a fin de que se expidan sobre esos distintos trabajos para ser considerados después de los temas oficiales.

—Asentimiento general.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). -- Se va a leer por Secretaría la designación de todas las comisiones.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — (*Leyendo*):

Punto primero: Doctores Manuel B. Gonnet, Enrique Gil, Víctor D. Goytía, Florencio Villegas Basavilbaso y Antonio Castiglione.

Punto segundo: Doctores Henoch D. Aguiar, Enrique Martínez Paz, Santiago F. Díaz, José María Valdéz, Sofanor Novillo Corvalán, Héctor Lafaille y Carlos Serrey.

Punto tercero: Sociedades de responsabilidad limitada: Doctores Ramón S. Castillo, Salvador A. Doncel, Emilio Reviriego y Vicente Rodríguez Ribas.

Punto tercero: Crédito documentario: Doctores Juan Carlos Cruz, Horacio Valdéz, Oscar Zaefferer Silva y Blas D. Ordóñez.

Punto tercero: Transporte marítimo: Doctores Rogelio Mazzi, Eduardo Crespo, Edmundo C. Chedufau y Juan C. Carlomagno.

Punto tercero: Transporte terrestre: Ingeniero Carlos M. Ramallo; doctores Rodolfo Bullrich, Luis Lagos García, Romualdo E. Goyeneche, Juan Luis Ferrarotti y Juan P. Biscayart Blanco.

Punto tercero: Contrato CIP: Doctores Edmundo C. Chedufau, Roberto D. Goytía y Jorge S. Castro.

Arbitraje en materia comercial: Doctores Miguel G. Méndez, Juan M. González Sabathic, Romualdo E. Goyeneche y Salvador Moyano Escalera.

Proyectos no previstos por el Programa de la Conferencia: Doctores Julián Barraquero, Oscar Rodríguez Sarácha, Carlos D. Courel, Tomás Jofré, Guillermo G. Cano, Aurelio Bassi, Ramón Morey, Pedro R. Quiroga y Wenceslao Frías.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — La presidencia quiere hacer presente cuál es el criterio que le ha guiado en esta designación de comisiones. Se ha preocupado de constituir éstas con los especialistas o estudiosos de las materias que comprenden los tres puntos del programa y con el mismo criterio ha procedido para el nombramiento de la comisión que debe estudiar los trabajos fuera del programa, eligiendo los propios autores de estos trabajos y a otras personas estudiosas, o que puedan conocer los mismos.

8

Agasajos

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — La Conferencia terminará sus sesiones el viernes a la tarde. La Comisión Organizadora ha preparado un agasajo a los señores delegados, que consistirá en una excursión a las sierras, desde Alta Córdoba a Capilla del Monte, para ir y regresar en el día, bajar en Capilla, hacer una ligera excursión en automóvil, volver a tomar el tren en La Cumbre y llegar a Córdoba a las ocho y media de la noche del sábado; el tren saldrá de Alta Córdoba a las 9 de la mañana. Los señores delegados tienen que inscribirse con anticipación para poder organizar la excursión, advirtiéndoles que pueden llevar a las señoras o personas que les han acompañado a Córdoba.

El miércoles a la tarde, después de la sesión, el Colegio de Abogados de Córdoba nos recibirá en su local; el jueves a la tarde el Crisol Club realizará un *garden-party* y el viernes a la tarde posiblemente la Universidad nos recibirá también.

Otra comunicación de la presidencia: Como los señores delegados están alojados en distintos hoteles y casas de la ciudad y no tendremos la oportunidad de vernos sino aquí, no todos, en las sesiones en que se discutan tales o cuáles puntos del programa, la presidencia ha lanzado la idea de celebrar mañana miércoles un almuerzo de camaradería, entre la sesión de la mañana y la de la tarde, al estilo de los que se hacen

en Buenos Aires. De modo que quedan invitados todos los señores delegados, todos los abogados de la ciudad de Córdoba, magistrados, profesores, etcétera. Los invitados de honor en este almuerzo de camaradería, serán los tres abogados más antiguos del foro de Córdoba y los dos magistrados más antiguos de los tribunales de esta ciudad. Este almuerzo se realizará en el Hotel Bristol.

Ahora hay que designar las comisiones de recepción para esta tarde, que recibirán a los miembros del Poder Ejecutivo, a los presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados, al señor Rector de la Universidad, al Intendente Municipal y a las familias de los doctores Rafael García y Jerónimo Cortés, que han sido invitados para el homenaje que se va a tributar a estas personalidades.

SR. GARCÍA ZAVALÍA. — Que las designe el presidente.

—Asentimiento.

9

Voto de aplauso a la Comisión Organizadora

SR. ZAEFFERER SILVA. — No debemos dar por levantada esta sesión sin formular antes un voto de aplauso entusiasta en homenaje a la comisión organizadora a cuya dedicación e inteligencia, se deberá el éxito de esta Conferencia que desde ya puede descontarse. (*Aplausos*).

10

Designación de autoridades. — Palabras de los designados

SR. CANO. — Si tuviese algún motivo para creer que la honorosísima designación de que acabo de ser objeto, lo ha sido en consideración a la persona del modesto abogado que habla, la habría rehusado indeclinablemente, conveñiendo de que carezco de todo título para ella. Pero siendo, como es, una especial distinción al Colegio de Abogados de Mendoza, que me honro en presidir y a la provincia donde desenvuelve sus actividades, considero que es un honor que

no debo declinar, porque no me pertenece y en ese concepto lo acepto gustoso y lo agradezco profundamente, en nombre del colegio y del mío propio, asegurando a la Conferencia que ha de ser un compromiso y un estímulo más para que el colegio perseverar en la obra que se ha impuesto desde su fundación en la provincia, hace nueve años, y que si le ha deparado muchos sinsabores, le ha ganado también, a lo que parece, algunos prestigios, y para que continúe colaborando en la gran obra de la Federación, de la cual uno de sus mejores frutos es esta magna asamblea, a la que saludo con mi mayor respeto. (*Aplausos*).

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Yo debo agradecer en nombre de la Federación de Colegios de Abogados, la designación que se ha hecho en mi persona, de presidente de esta Conferencia, la que viene a ser un estímulo más para llevar adelante la tarea en que estamos empeñados y que paulatinamente va extendiendo su esfera de acción, como ustedes saben, por toda la República. Señores delegados: Muchas gracias. (*Aplausos*).

Invito a la asamblea a levantar la sesión.

—Son las 11 y 20 horas.

SESION INAUGURAL

PRESIDENCIA DEL DOCTOR J. HONORIO SILGUEIRA

SUMARIO

- 1.—Discurso de Su Excelencia el señor Ministro de Gobierno, doctor Hipólito Montagné.
- 2.—Discurso del señor Presidente de la Conferencia, doctor J. Honorio Silgueira.
- 3.—Exposición de los antecedentes de la Conferencia por el Secretario General, doctor Carlos A. Berghmans Doncel.
- 4.—Lectura de las comunicaciones recibidas.

En la ciudad de Córdoba, a veintiséis días del mes de Octubre de 1926, siendo las 16 horas y cuarenta minutos, reunidos en el salón de actos de la Universidad y con la asistencia, de Su Excelencia el Señor Gobernador de la Provincia, doctor Ramón J. Cárdenas; Su Excelencia el señor Ministro de Gobierno, doctor Hipólito Montagné; Su Excelencia el señor Ministro de Hacienda, señor Manuel J. Astrada; Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, doctor Pedro S. Ravelli; Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor León S. Morra; Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, doctor Guillermo Rolhe; Intendente Municipal, ingeniero Emilio Olmos, numerosos miembros de la Conferencia, el Presidente, doctor J. Honorio Silgueira declara abierta la sesión.

1

—Pide la palabra el señor Ministro de Gobierno y pronuncia el siguiente:

Discurso de Su Excelencia el señor Ministro de Gobierno, doctor Hipólito Montagné

La concepción deportiva del proceso y de la profesión de abogado, no ha desaparecido totalmente en la apreciación pública. Los códigos de procedimiento y los manuales forenses, inclu-

yen a éste entre los auxiliares de la Justicia; pero el valor de tal concepto y la importancia social de la abogacía, no son prendas del común consenso.

Desde que el abogado interviene en el pleito por un particular, suele pensarse que su actividad por ilustrada y ecuaníme que sea, únicamente provee a la solicitud individual de las personas, y en consecuencia sólo beneficia o daña a los intereses privados.

No se aperciben los que mantienen esta creencia, que auxiliar a la Justicia, facilitando la misión del juez en la interpretación fundada del derecho disputado, previniendo su serenidad contra la mala fe o las pasiones exaltadas, y abriendo paso a la majestad reguladora de sus dictados, es colaborar en la función más eminente, precisamente en la que impone y sustenta al Estado como órgano de la libertad y del derecho, en las colectividades organizadas. Tampoco advierten que la Justicia, por lo mismo que es equilibrio y compensación, no se mueve generalmente sino en presencia del choque producido por el interés privado; pero que al concurrir el abogado a la recta aplicación de la ley en el caso, contribuye a la constante efectividad de la potestad social de donde aquélla emana como expresión de la voluntad común y sostén del interés colectivo, al que presta así sus servicios; destacándose la abogacía, aún en la materia civil, como una alta función pública, con la característica a su favor de que no gravita sobre el erario público.

La necesidad de la abogacía en este sentido, está vinculada por la enseñanza de graves e insostenibles experien-

cias. Ejemplo de ello nos presentan el conocido episodio de la revolución francesa y en nuestros días, lo ocurrido en la Rusia de los Soviets, donde a pesar del esfuerzo abolicionista y de haberse concedido por decreto del año 18, el derecho de presentarse como defensor en los tribunales a cualquier ciudadano que hubiese cumplido determinada edad, ha sido necesario crear los colegios de defensores, retribuidos por el Estado, lo que en resumen no significa sino — aunque sin el libre ejercicio que la vivifica — una afirmación de la utilidad social de la profesión de abogado. Y el movimiento notado en Rusia desde 1921, permite pensar que ha de volverse al restablecimiento completo, como ya ocurrió hace más de un siglo en Prusia, con los *assistentenrat* después de parecidas vicisitudes.

Exigencias acrecentadas por notorias circunstancias del actual momento humano, señalan al abogado otra función de particular excelencia.

Transformaciones lentamente elaboradas, que para dejarse sentir han necesitado de una honda conmoción, nuevas formas de vida nueva; anhelos ya incontenibles, agitan un ideal vibrante de cultura, que busca nuevos derroteros para bien de los destinos humanos y de la más intensa armonía de la vida. Y no escapa por cierto a ese profundo movimiento de renovación, el derecho clásico, cuyos códigos van abriendo sus páginas que parecían inmutables para salvar vacíos y ampliar fórmulas insuficientes.

Si las leyes han de servir la vida y propulsar el mejoramiento social, no basta para renovarlas el afán iconoclasta frente a los viejos moldes; ni las brillantes concepciones de la teoría; ni siquiera el sello imperativo de quienes, en el estado constitucional, tienen potestad para dictarlas. Requiere el concurso de la experiencia, la penetración del manejo constante, el sentido claro de la necesidad, la convicción que se arraiga en el diario debate por su leal y eficiente aplicación. Por eso, en la preparación del nuevo derecho, tienen un rol prominente el magistrado y el abogado.

Todo ello define y justifica la impor-

tancia de los colegios de abogados, cuyo cometido, más allá de los intereses puramente de gremio o de cuerpo, se prestigia por el ejercicio del contralor, que mantiene y depura la ética profesional y cuida la competencia, y por la acción enaminada a la mejora progresiva de las leyes en su contenido substancial y en sus derivaciones de aplicación.

Pero la eficacia de ese contralor, que engendra responsabilidades, exige atribuciones revestidas de sanción. Que continúe abierto el lugar para todos en el foro, según la máxima con que Francia proclamara y sostiene brillantemente el principio de la abogacía libre; pero que el colegio tenga el gobierno de la matrícula y, en su medida, el ejercicio de la potestad disciplinaria.

Hace falta, pues, la organización legal de los colegios, pensamiento que expresara el señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, doctor Antonio Sagarna, al inaugurarse la Primera Conferencia, en la cual fué aprobada una declaración afirmativa al respecto, y que si he enunciado, es para manifestar que por su realización, en lo que a nosotros toca, será grato al Poder Ejecutivo en cuyo nombre hablo, iniciar o secundar la gestión correspondiente.

Tales conceptos destacan asimismo, la trascendencia y valor de la acertada iniciativa de la Federación de Colegios de Abogados de la República, iniciativa que tendrá una nueva provechosa consagración en esta conferencia, a la cual, los asuntos que concretan su plan de trabajo, de los que está descaído el interés profesional, y las altas representaciones que la forman, le anticipan relieves prestigiosos.

La Comisión Permanente de Estudios Legislativos, cuyas bases debe establecer, constituirá un organismo nuevo, de amplia información y de valioso y espontáneo aporte a la labor oficial, en algunos aspectos imposterables. Y con la discusión de los temas centrales, contribuirá al estudio y sistematización de una cuestión fundamental como «la correlación de los derechos civil y comercial en materia de obligaciones», que atrae hoy la preocupación de eminentes juristas, y ofrecerá útiles antecedentes

para salvar vacíos notorios de la legislación comercial vigente, que afectan vitales intereses de nuestra economía pública.

Por eso ella se reúne bajo los auspicios de la opinión del país y la acompaña la simpatía que traducen la adhesión del Gobierno de la Nación, de las Provincias, de las instituciones superiores de la justicia y de las cuatro facultades de Derecho; simpatía que por el gobierno de Córdoba, me complazco en ratificar sin reservas.

Señores:

Córdoba, que el año anterior fuera sede del Tercer Congreso Universitario Anual, cuyas sesiones se abrieron en este propio clásico recinto, acoge con gratitud esta asamblea ilustre del foro argentino y con el mismo fervor espiritual, abre nuevamente las puertas de la sala magna de su intelectualidad, para sus deliberaciones que las augura serenas e ilustradas e intensamente constructivas.

Serenas e ilustradas deliberaciones, por el rango mental de los miembros de la conferencia, por su programa, por el espíritu que la anima, por el ideal patriótico que persigue. Intensamente constructivas, porque estos debates que acrecen en benéfico intercambio a los hombres de experiencia y estudio; que atraen todas las ideas, las confrontan y las discuten, afirman una vocación de trabajo, abren horizontes nuevos a la meditación creadora, y cualesquiera sea la proyección práctica de sus conclusiones y el apoyo que obtengan de los que están habilitados para darles formas permanentes, representan desde luego, un servicio positivo.

Señor Presidente de la Conferencia, señores delegados:

Por el afán que os trae, sois nuestros huéspedes dilectos. Yo os presento el saludo cordial del gobierno de la provincia y me es muy satisfactorio expresaros su agradecimiento por la elección de nuestra capital para celebrar esta conferencia de carácter y alcances nacionales, y por la sentida ofrenda que vais a tributar a Córdoba y a su cara tradición de cultura, en el homenaje al

fundador de esta casa, que es aquella misma; al codificador profundo y consagrado por su obra genial y a dos más de sus hijos ilustres, cuyos nombres enorgullecen la ciencia jurídica argentina y son timbre preclaro de nuestro blason intelectual.

Señores:

Tengo el honor de declarar inauguradas las sesiones de la Segunda Conferencia Nacional de Abogados. (*Grandes y prolongadas aplausos*).

2

Discurso del señor presidente de la Conferencia, doctor J. Honorio Silgueira

Señor Gobernador de la Provincia;

Señor Rector de la Universidad;

Señores:

Lo acabáis de oír. El Gobierno de la Provincia por intermedio de uno de sus más destacados representantes, acaba de dar particular realce a esta Conferencia, inaugurándola, confirmando, atestigüando así, la excelencia de los fines que persigue, la orientación nacionalista que la inspira, las proyecciones que vislumbra y el aporte que incorpora, que va a incorporar, sin duda alguna, en el desarrollo de la ciencia jurídica argentina.

La segunda en su género, trae en su organización y ha de aprovechar en sus deliberaciones y resultados, el caudal de experiencia de la primera, así como el acierto y significación de los puntos de su actual programa: concreto, científico y orgánico.

La Federación de Colegios de Abogados de la República ejercita gradualmente su acción propulsora, entre otros medios, por el de estas asambleas calificadas, que aúnan y señalan en el estudio y discusión de aspiraciones comunes, la preparación, voluntad y concurso moral de los obreros del pensamiento colectivo, que trabajan en su esfera y en su ciclo, abnegada, silenciosa pero tesoneramente por el acrecentamiento espiritual del país, la estabilidad de sus destinos, el prestigio de sus institucio-

nes y la elaboración del derecho, que es norma immanente para la vida, expresión reguladora de belleza y cultura superior en el rodar incesante del progreso humano.

Habría recompensado las aspiraciones de los organizadores de esta conferencia, justificando su celebración, el hecho solo — de por sí significativo y beneficioso — de aproximar en grata camaradería a los abogados y foros de toda la República, en su triple función de magistrados, profesores y profesionales, vinculándolos, estrechándolos en el sentir común y amplio de la vida, abierto el espíritu, alta la mirada, nutriéndonos los mismos parecidos ideales científicos, sociales o patrióticos, contorneando el sueño feliz, por la presencia de ciertas fuerzas vivas de la economía nacional, que traerían para el éxito de nuestras decisiones, los dictados de una rica y constante experimentación, en el juego y control de los valiosos intereses confiados a su cargo.

La Federación persigue principalmente, en estos momentos, dos objetivos fundamentales: uno de orden científico, doctrinario y práctico a la vez, de fondo y forma, nacional y regional, o sea el de impulsar la marcha de la legislación en sus diversas ramas, contribuyendo a crear, modificar, adaptar el derecho, robusteciendo, cimentando así nuestra conciencia jurídica; otro de orden moral, de alta finalidad, que respondiendo a normas o principios básicos de una ética superior, levante el nivel y afirme la dignidad profesional, gravitando saludablemente sobre el foro, la justicia y la sociedad.

Para ello y por ello, se siente ya en muchas partes y se ha de pulsar cada vez más, con relieves acentuados, el empeño de su tarea militante. Ahí están sino la constitución y funcionamiento de dieciocho colegios de abogados que integran este nuevo organismo forense; que se propone como lo sabéis: empujar el adelanto de las ciencias jurídicas y sociales, contribuir al mejoramiento de la administración de justicia y fundar un instituto de derecho, una comisión permanente de estudios legislativos, compuesta de juristas de reconocida capacidad; que como cuerpo consultivo

pueda abocarse el conocimiento, examen o investigación de cuestiones de interés general, y pueda asesorar al mismo tiempo a los poderes públicos y corporaciones privadas que les soliciten, diluyendo aquellas, redactando, preparando memoriales, conclusiones o anteproyectos de ley para las provincias y para la Nación.

La Federación, señores, ha sobrepuesto ya los propósitos doctrinarios de su existencia originaria, para ir sembrando hechos en la medida de sus fuerzas espontáneas y consagradas. Es así, que tiene en vías de realidades próximas el repertorio de legislación provincial y municipal; la asistencia gratuita a los pobres; e intercambio jurídico con instituciones similares del extranjero, especialmente con las del Brasil; el registro nacional de abogados; la organización legal de los colegios; las regtas o códigos de ética profesional; el fomento de bibliotecas de especialización jurídica; la estadística judicial; etc.

Instituto eminentemente cultural, la Federación cree en el esfuerzo privado que desenvuelve, el que por su carácter ha resultado, siempre, en todos los ordenes de la actividad; tiene fe en la eficacia de su voluntad persistente; en la colaboración pública y particular que se le brinda; en la versación jurídica de los hombres que la sirven; en el futuro del país, cuyo bagaje científico se vigoriza de día en día, por la dedicación de sus especializados, las modalidades de su organismo jurídico, los nuevos aspectos de su vida contemporánea, los que al plasmarse o encausarse, son un estímulo y disciplina para las actuales generaciones, una resultante de su robusta intelectualidad, un halago, esperanza y recompensa para las mismas.

Hacemos obra de gobierno, señores, plausible obra gubernativa, con nuestra coparticipación apreciable en la gestión de la cosa pública, teniendo solamente en cuenta los valores colectivos, las puras y fecundas energías de nuestro pueblo y la luminosa visión del porvenir. El gobierno no es exclusivamente función pública, ya lo sabemos, sino también la expresión o fruto de una concomitancia armónica y sucesiva de gobernantes y gobernados, que ponen en mo-

vimiento, en contacto, las primicias de su inteligencia y de su preparación, con las enseñanzas de la vida, el austero sentimiento del deber, la conciencia de su responsabilidad, el tributo sencillo pero sentido del amor a lo suyo, a lo bueno, al engrandecimiento nacional y a la mayor felicidad humana.

Catorce Gobiernos, otros tantos Tribunales Superiores de Justicia, cuatro Facultades de Derecho, siete asociaciones privadas, dieciocho Colegios y numerosas adhesiones de personalidades y juristas, nos traen y proporcionan el contingente de su autoridad, ilustración, experiencia, y dan personería e imprimen contornos definidos a esta asamblea representativa de la opinión nacional, en una de sus fases más trascendentales: la jurídica, judicial, forense, institucional.

Es conveniente, auspicioso, entonces, que el país enteró lo escuche y lo sepa, como incentivo y prueba de nuestra labor constructiva, de nuestra evolución histórico-jurídica, recogiendo la palabra que se pronuncia, desde esta tribuna, secular y excelsa, en este ambiente tradicional y culto de la atrayente ciudad mediterránea, cuna del saber universitario, madre espiritual de una pléyade ilustre de hombres útiles en la ciencia del derecho, en el gobierno, en la enseñanza, en el libro, educadora siempre — por esto mismo — en los afanes de la vida argentina, ciudad docta y benemérita en la que se guarda perennemente encendida, la luz de una latente fuerza civilizadora, que es timbre de honor para la República. (*Repetidos y prolongados aplausos*).

3

Antecedentes de la Conferencia

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — En la Primera Conferencia, como último punto de la orden del día de la sesión inaugural, se dió lectura de los antecedentes que la informaban. La

Comisión Organizadora ha resuelto suspender esa lectura en esta ocasión, haciendo presente que tales antecedentes se publicarán en el libro que contenga la versión taquigráfica de esta Conferencia.

4

Comunicaciones recibidas

El señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública, ha enviado el siguiente telegrama (*leyendo*):

Señor Presidente de la Conferencia de Abogados.

Córdoba.

Por exigencias ineludibles, pues hoy mismo se inicia la discusión del presupuesto de este Ministerio en la comisión respectiva, no he podido asistir a la Conferencia.

Saludo a todos y les auguro éxito en sus deliberaciones.

Antonio Sagarna,
Ministro de Justicia e I. Pública.

Se ha recibido, en este momento, otro firmado por el señor Presidente de la Federación Agraria Argentina, que dice así (*leyendo*):

«Al inaugurar el Congreso de Abogados sus sesiones, para deliberar sobre asuntos de gran interés nacional, augúrole el mayor acierto en sus conclusiones.»

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Invito a los señores delegados a concurrir al homenaje a tributarse al fundador de la Universidad de Córdoba, Obispo Trejo y Sanabria, y luego a los doctores Jerónimo Cortés, Rafael García y Dalmacio Vélez Sársfield.

Queda levantada la sesión.

—Son las 17 y 30.

PRIMERA SESION ORDINARIA

PRESIDENCIA DEL DOCTOR J. HONORIO SILGUEIRA

DELEGADOS Y MIEMBROS DE LA CONFERENCIA PRESENTES: Dres. Alegre Manuel V., Alaina Ramón M., Alvarez Julio, Alvo Sebastián E., Astrada Ponce Carlos, Avalos Antonio, Avalos José M., Barbosa Feliciano, Barraquero Julián, Barrera Juan F. de la, Bassi Aurelio, Baudon Héctor R., Berghmans Doncel Carlos A., Biscayart Blanco Juan P., Bullrich Rodolfo, Cabral Angel H., Campa Juan de la, Canal Pejóo Bernardo, Cano Guillermo G., Carlomagno Juan C., Carranza Adolfo, Casañas Miguel, Castellanos Benjamín, Castiglione Antonio, Castillo Ramón S., Castro Jorge S., Cervini Francisco, Chedufau Edmundo C., Codoni José E., Corominas Segura Rodolfo, Correa Alejandro, Corvalán César S., Courel Carlos D., Dardo Herrera Santiago, Day Alberto A., Doncel Salvador A., Echagüe Pedro A., Escobar Sáenz Julio M., Ferreira Enrique A., Frías Leopoldo, Frías Wenceslao, García Zavalla Rafael, Gil Enrique, Gonnet Manuel B., González Sabathie Juan M., Goyeneche Romualdo, Goytia Roberto D., Goytia Víctor D., Guñazú Alberto, Jofré Tomás, Labanca Gabriel, Lafaille Héctor, Lagos García Luis, León y Basualdo Arturo de, Lobos Roberto N., López Domínguez Ramón, Llan de Rosas Ernesto, Latella Frías Donato, Martínez Paz Enrique, Mazzi Rogelio, Méndez Miguel G., Molina Luis E., Morey Ramón, Morise Jerónimo A., Moyano Escalera Salvador, Novillo Saravia Lisardo, Olmos Lucas A. de, Orgaz Raúl A., Ortiz Florencio J., Otero Capdevila Benjamín, Palacios Benjamín, Pérez de la Torre Manuel, Petra Demetrio, Reviriego Emilio, Ríos Eduardo, Rodríguez Ribas Vicente, Rodríguez Saráchaga Oscar, Romero del Prado Víctor N., Ronco Bartolomé J., Rothe Guillermo, Sierra Celestino D., Silgueira J. Honorio, Sosa Loyola Gilberto, Stanchina Camilo F., Trianes Francisco J., Urraza Estanislao de, Vera Cruz, Vera Vallecjo Ricardo, Viechi Rodolfo, Vilgré La Madrid Juan, Villegas Basavilbaso Florencio, Viñas Ibarra Umberto, Zavala Ortiz Alfredo, Zaefferer Silva Oscar.

SUMARIO

- 1.—Comunicación de la Presidencia respecto de la designación de Secretarios.
- 2.—Aprobación del acta de la sesión anterior.
- 3.—Comisión Permanente de Estudios Legislativos. — Consideración y aprobación del dictamen.

1

Designación de secretarios de la Conferencia
(Comunicación de la Presidencia)

En Córdoba, a 27 días del mes de Octubre de 1926, reunidos en el salón de actos de la Universidad los señores delegados y miembros de la Conferencia arriba indicados, y siendo las 9.30 horas, dice el:

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Queda abierta la sesión.

La Presidencia debe informar que por un error u omisión de copia, ayer no se mencionó en la nómina de secretarios al doctor Sebastián E. Alvo, delegado del Superior Tribunal de la provincia de San Juan y del Colegio de Abogados de la misma ciudad, quien ha quedado incorporado a la Mesa Directiva.

La Presidencia pide a los señores delegados que respondan a la lista que se va a pasar a objeto de saber quiénes son los presentes, aunque tal vez sería más fácil que dieran sus nombres.

SR. CASTIGLIONE. — ¿No es mejor, señor presidente, que cada uno denuncie su apellido?

SR. CANAL PEJÓO. — Lo mejor es que los señores delegados digan: presente, al leerse sus nombres.

Sr. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — La lectura va a resultar muy larga.

Sr. VILLEGAS BASALVILBASO. — Yo haría una indicación práctica: que por Secretaría se diera un número de orden a cada delegado y se comunicara; así, en las sesiones que vienen, cada delegado podría comunicar su número para anotar su asistencia.

Sr. CANAL FEIJÓO. — La Conferencia necesita saber en qué forma queda constituida en definitiva a los efectos de la inscripción marginal, porque algunos han llegado ayer un poco tarde.

Sr. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Es más práctico que un empleado tome nota de los presentes a cada reunión, porque con las lecturas y listas vamos a perder mucho tiempo. Así podríamos entrar a tratar directamente la orden del día.

—Asentimiento.

2

Acta

Sr. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a leer el acta de la sesión preparatoria.

Sr. ZAVALA ORTIZ. — Hago moción de que se autorice a la Presidencia para aprobar ésta como todas las demás actas de la Conferencia.

—Asentimiento.

3

Comisión Permanente de Estudios Legislativos

Sr. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a dar cuenta del despacho de la comisión que ha estudiado el primer punto del programa.

Sr. SECRETARIO (CANAL FEIJÓO). — (*Leyendo*):

COMISION PERMANENTE DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

ARTÍCULO PRELIMINAR TRANSITORIO

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

Autorizar al Presidente para que designe una comisión especial compuesta por miembros

de esta Conferencia, e integrada por el Presidente mismo, la que procederá a constituir la *Comisión Permanente de Estudios Legislativos*, y a gestionar ante el Congreso Nacional y demás poderes públicos, la sanción de un subsidio que asegure la subsistencia de dicha comisión, que funcionará de acuerdo a las bases que a continuación se indican.

Esta comisión organizadora será designada antes de la clausura de la Segunda Conferencia, y desaparecerá tan pronto entre a funcionar la *Comisión Permanente de Estudios Legislativos*.

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA «COMISIÓN PERMANENTE DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS»

Artículo 1º — Créase una *Comisión Permanente de Estudios Legislativos*, con el objeto de prestar su apoyo técnico a los poderes públicos nacionales, provinciales o municipales, y también a las instituciones culturales o asociaciones privadas, en los casos que se contemplen cuestiones jurídicas de interés general o público, con el propósito de mejorar la legislación, promoviendo las reformas necesarias tendientes a obtener mayor unidad y claridad en la adopción y sanción de nuevas leyes, o reforma de las existentes.

Con este propósito, la *Comisión Permanente* estudiará y aconsejará las modificaciones o el rechazo de cualquier proyecto de ley sobre derecho público o privado, que se presente a la misma comisión — o que ésta inicie — o al Congreso de la Nación, o a las legislaturas provinciales.

Art. 2º — La comisión se compondrá de las siguientes personas:

- a) Dos miembros nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional;
- b) Un representante designado de su seno por cada colegio de abogados reconocido por la Federación de Colegios de Abogados;
- c) Un representante designado de su seno, por la Federación de Colegios de Abogados;
- d) Dos representantes designados de su seno, por cada Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de Universidad Nacional.

Art. 3º — Todos los componentes de la comisión tendrán iguales atribuciones y todos desempeñarán esos cargos *ad-honorem*, siendo

el señor Ministro de Justicia e I. Pública de la Nación, miembro «ex-officio» de la misma.

Art. 4.º — La *Comisión Permanente de Estudios Legislativos* nombrará redactores remunerados de fuera de su seno, que como máximo durante un año, estudien los temas que la comisión les encargue, y al cabo del tiempo prudencial que ésta les hubiere asignado, presentarán sus dictámenes a la *Comisión Permanente*.

Art. 5.º — Una vez expedidos los dictámenes de los redactores, la *Comisión Permanente de Estudios Legislativos* los aprobará, modificará o rechazará y de acuerdo a esta resolución, recomendará a los poderes públicos que correspondan, la adopción de tales proyectos.

Art. 6.º — Las resoluciones que de acuerdo al artículo 5.º se adopten, será el «Dictamen» que en el criterio de la *Comisión Permanente*, debe inspirar la reforma legislativa propuesta.

Estos dictámenes no obligarán bajo ningún concepto, ni a las Instituciones mencionadas en el artículo 2.º ni a sus representantes.

Art. 7.º — A cada redactor únicamente podrá encomendársele formular y proyectar trabajos sobre una sola materia; siendo incompatibles las funciones de miembro de la *Comisión Permanente* con las de redactor remunerado. Además, los redactores no podrán reunirse para tratar los temas en conjunto, sino que deberán hacerlo individualmente, y se expedirán en la misma forma.

Art. 8.º — La comisión se dará su reglamento, siendo electivos de entre los miembros, los cargos de presidente y vicepresidente.

Igualmente la comisión nombrará de fuera de su seno, un abogado con el carácter de secretario permanente remunerado, que hará efectivas las medidas de la comisión y representará a la misma durante el periodo de receso.

Art. 9.º — Los gastos que demande el sostenimiento de esta *Comisión Permanente*, serán costeados por una asignación que fije el gobierno de la Nación y por los demás recursos que la *Comisión Permanente* pueda procurarse, fondos que sólo podrán destinarse a los redactores por sus trabajos, al secretario y a publicaciones.

Art. 10. — La Comisión celebrará, por lo menos, una sesión anual durante el mes de Agosto, en que se tratarán los asuntos entrados, y los redactores darán cuenta de la labor que se les ha encomendado. Fuera de este periodo de sesiones ordinarias, la comisión puede ser convocada por iniciativa de su presidente efec-

tivo, o a pedido de tres miembros de la comisión, para tratar cualquier asunto que por su naturaleza, no permita postergación.

Art. 11. — La comisión tendrá su sede en la ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de que por decisión de la misma, las reuniones puedan celebrarse en cualquier otro punto de la República.

Para todas las reuniones, el quórum de la *Comisión Permanente* será de 7 miembros presentes en la sesión.

Los miembros ausentes podrán enviar por escrito sus opiniones, sin que se puedan computar como un voto.

Art. 12. — Los cargos son permanentes mientras dure la vinculación del representante con el cuerpo que lo haya designado.

Las vacantes que se produzcan en la comisión, se llenarán solicitando la misma comisión al Poder Ejecutivo y a los cuerpos ya indicados, el nombramiento de un nuevo representante.

Enrique Gil. — Víctor Daniel Goytia.
Manuel B. Gonnat. — Florencio
Villegas Basavilbaso. — Antonio
Castiglione.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — En discusión.

SR. GOYTÍA. — Pido la palabra.

Señor presidente: La Segunda Conferencia Nacional de Abogados, tiene a consideración como primera parte del programa, el establecimiento de una Comisión Permanente de Estudios Legislativos, cuerpo del que en la actualidad carece el país.

Para determinar la importancia del tema que entra a discusión de los señores delegados, y precisar la necesidad de crear un organismo especializado de juriconsultos y maestros del derecho, que pueda asesorar y colaborar desde el punto de vista científico con el Congreso de la Nación y con las legislaturas provinciales, bastará enunciar con franqueza, que nuestras leyes, al igual que las de otros países, distan mucho de ser perfectas.

Bastará decir que la obra de los parlamentos, si magnífica como expresión del sentir y las necesidades colectivas, no es, ni podrá ser nunca la obra esmerada y pulida, que dé la norma jurídica, clara y sencilla, que deslinde

los derechos del individuo y cumpla el fin que se propuso y tuvieron en vista sus iniciadores. La gestación de la ley en el seno de las asambleas legislativas, constituidas por hombres de actividades diversas hasta el momento que fueron llamados a legislar, hombres que brillan un instante en el firmamento político, exponiendo sus ideas de reforma de la legislación y a quienes el término limitado de su mandato fuerza amenudo a un alto obligado, antes que hayan completado sus iniciativas o dado un paso práctico para su realización, *condenan fatalmente a la norma jurídica a nacer con vicios y defectos pronto revelados, que a poco de andar, darán perplejos a los jueces.*

Los ejemplos son múltiples en todos los parlamentos y entre nosotros, para no mencionar sino leyes nacionales recientes, destinadas a reglamentar tópicos por demás sencillos, como la procuración, los alquileres, las jubilaciones y pensiones de gremios particulares, recordemos que han traído confusión e incertidumbre y provocado interpretaciones las más contradictorias y diversas, debido a dos causas: o falta de estudio previo de la ley, o imperfección en su forma.

En efecto, mal se aviene la premura y el tumulto en la tarea legislativa, con la exposición del conocimiento científico y el estudio meditado que debe mediar para la sanción de una ley.

En la conferencia de 1924, tuve oportunidad de decir sobre este mismo tema, que es curioso observar que cuando un particular requiere un cuadro, una escultura, o un objeto de secundaria importancia, solicita los servicios de un pintor, escultor, o un técnico en la modelación del objeto deseado. Y en cambio, cuando la Nación requiere una nueva ley, o la modificación de una antigua, llama por el voto popular, a los representantes del pueblo, sin exigirles previamente los conocimientos especiales que en el caso del cuadro, o la escultura se exige al artista.

La aberración es más resaltante, si consideramos que mientras el cuadro y la escultura, hechas por especialistas, interesan a un corto grupo de personas, en el ejemplo de la ley afecta a todo

el país y es obligatoria para todos sus habitantes.

Los parlamentos podrán dar la sanción, la fuerza del consenso popular a la ley, pero su redacción, su forma jurídica y la previsión de los problemas económicos o sociales que suscitará la vigencia de la misma, debe quedar reservada y confiarse a juristas especializados, que tengan esa misión técnica de estudio.

Con todos estos graves defectos — que como digo, no son únicamente nuestros — el Congreso Nacional y las legislaturas de las provincias sancionan anualmente, alrededor de 750 leyes nuevas, sin contar las infinitas reglamentaciones por decretos de los poderes ejecutivos provinciales y nacional y sin incluir las ordenanzas municipales. Vale decir, que al lanzar todos los años leyes numerosas cuyas consecuencias han sido mal previstas, o cuyo articulado se ajusta mal, estamos a conciencia haciendo oscura y abstrusa nuestra propia legislación, y poniendo trabas cada vez mayores al ejercicio de los derechos del individuo.

Esto solo sería suficiente para hacer meditar acerea de la necesidad de una Comisión Permanente de Estudios Legislativos.

Pero si consideramos desde otro aspecto el problema, ¿podemos decir con verdad, que en las reformas legislativas que se emprenden, se sigue un orden, y vamos desarrollando sistemáticamente nuestras leyes y nuestros códigos? ¿Acaso tomamos hoy un capítulo, o una materia íntegra y mañana otra, y la sustituimos en el todo, cuidando de guardar la armonía y la ilación necesarias entre sus disposiciones; o acaso es frecuente que emprendamos reformas de conjunto que aclaran, como por fortuna se hizo con el Código Penal?

Digamos que en este sentido, el albedrío del legislador no reconoce límites y tan pronto se despedaza el Código Civil en el capítulo de la locación, como se altera el régimen de los bienes en el matrimonio, o se modifican los requisitos para el establecimiento de sociedades comerciales extranjeras.

Mientras esta labor se lleva a cabo así, al azar, modificando aquí, refor-

mando allá, dejando sin efecto parcialmente leyes anteriores; fraccionando o enmendando otras, los malos comerciantes siguen alzándose con los créditos de sus acreedores en las convocatórias; el régimen de la propiedad de semovientes en un país ganadero como el nuestro, carece de seguridad por falta de un estudio adecuado y desconocemos la venta a plazos de cosas, muebles valiosos, por ausencia de una ley de prenda razonable—excepto la ganadera — que permita la posesión del objeto prendado al deudor.

Debemos confesar, que por falta de una Comisión Permanente de Estudios Legislativos, que aconseje y proyecte con serenidad, no seguimos un desarrollo sistemático de nuestra legislación, estudiando a fondo toda una rama y cambiándola íntegra, sino que nos limitamos a modificaciones de detalle, o a aprobar leyes sueltas, de necesidad dudosa, que más es el perjuicio que causan, por la incertidumbre que determinan, que el beneficio que reportan.

Frete a esto que podríamos llamar el «momento jurídico» del país, la jurisprudencia múltiple y contradictoria entre las 16 jurisdicciones, y aún dentro de una misma jurisdicción, debido en la mayor parte de los casos, a tener que interpretar leyes oscuras e imperfectas, teje inconcientemente con paciencia de araña, la tela que en el futuro aprisionará el derecho de los litigantes de buena fé.

Sin embargo, el mal no es sólo nuestro, sino común a otras naciones, que se ocupan de poner remedio a este caos en la ley, que los parlamentos y la justicia están sembrando.

En Francia, la Asociación de Legislación, aunque organismo privado, ha conquistado autoridad consular sobre la opinión pública, agrupando en su torno 30 ó 40 de los más destacados juriconsultos, que son los asesores y guías del pensamiento jurídico de Francia.

En Estados Unidos, donde como en la República Argentina, el mal es agravado por el sistema federal, en cinco años se han sancionado 62.000 leyes nuevas y dictado más de 65.000 sentencias de última instancia — que bajo el

régimen del *common law* también forman parte de la ley — provocando así en el orden jurídico la confusión inmensa de una nueva Babel.

Entonces es cuando en los últimos tres años se han oído las voces tonantes de los hombres más destacados de los Estados Unidos, como Elihu Root, Davis y William Taft, presidente de la Suprema Corte, llamando a la realidad al Congreso y a las legislaturas de los Estados, sobre el serio perjuicio que se infiere a los ciudadanos con esta falta de ordenamiento y sistematización del derecho.

Bien pronto el mismo Congreso y las legislaturas de los Estados han comenzado a reaccionar saludablemente, abandonando la práctica de redactar por sí mismos las leyes y en cambio empleando para su estudio y para darles forma concretas, especialistas en la tarea que llevan el nombre de *draftmen*.

El movimiento iniciado para corregir la legislación defectuosa e incongruente ha sido lanzado en la Unión con tal empuje, que en 1923 por iniciativa propia de los colegios de abogados, con apoyo de la Administración de Justicia encabezada por la Suprema Corte y secundada por las universidades, se constituyó el Instituto Americano de Derecho, la institución más admirable de su género, que en 20 años se propone cumplir la empresa científica extraordinaria de revisar y depurar de sus defectos la legislación y la jurisprudencia de los Estados Unidos.

La Comisión de Sección de esta Conferencia, en cuyo nombre hablo en calidad de miembro informante y que ha tenido a su cargo proyectar para la República Argentina, el establecimiento de un cuerpo permanente de esta naturaleza, consagrado a los estudios legislativos, ha tratado de seguir lo más de cerca posible, en su proyecto creador de esta comisión, el plan y el método que ha inspirado al Instituto Americano de Derecho.

A este efecto, los señores delegados pueden ver en el artículo 2º del proyecto, que la Comisión Permanente de Estudios Legislativos estará formada por representantes de todos los colegios

de abogados de la República, de las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas, de esta Federación de Colegios de Abogados y de dos personas designadas por el Poder Ejecutivo nacional.

La comisión así constituida, *no estudiará por sí una reforma a cierta parte de la legislación, sino que seleccionará redactores, los más preparados del país, según el tema, para que ellos individualmente*, que es la base del plan, se hagan cargo de un tema y agoten la materia sobre la cual se les encargue su estudio, presentando luego sus dictámenes a la comisión en pleno, que los aprobará o desechará, según el caso.

Por consiguiente, el trabajo colectivo de la comisión queda prácticamente suprimido y la misión de ésta se limitará a decidir y distribuir los temas a los redactores y conocer sus dictámenes, *que la comisión en sus sesiones anuales de acuerdo al artículo 6° adoptará como sus conclusiones propias.*

Estas conclusiones serán las ideas de reforma, que la Comisión Permanente de Estudios Legislativos recomiendo a los poderes públicos, como las más adecuadas y razonables de acuerdo al criterio científico.

Al suprimir la labor colectiva, o al designar varios redactores para un solo tema, que repito, es el fundamento de esta organización, el proyecto busca no renovar los defectos que vician la discusión de las leyes en los parlamentos.

Las demás disposiciones del proyecto se explican por sí mismas y sólo cabe hacer resaltar que la «permanencia» de esta comisión se asegurará, contando con un secretario estable, del mismo modo que se puede afirmar que por la forma de constituirse, la comisión estará libre de influencias políticas o extrañas y será el cuerpo sereno e imparcial buscado, cuya palabra autorizada en materia jurídica, escucharán por fuerza los poderes públicos que quieran hacer obra constructiva en beneficio del país.

El momento de confusión jurídica mencionado antes, que se nota en Francia, en la Unión, en la República Argentina y otros países, y la necesidad

de crear organismos como el Instituto Americano de Derecho, y la Sociedad de Legislación en el Viejo Continente, ha hecho pensar, a los más grandes hombres y entre ellos Mr. Taft, que la facultad de la humanidad de gobernarse a sí misma y dotarse de justicia, no se desarrolla en relación al progreso universal creciente de la vida moderna.

Sin embargo, este fenómeno de confusión e incertidumbre en el derecho público y privado, es la ley natural, por que parecen pasar las naciones, igual cuando en Roma bajo Justiniano, fué menester sintetizar el derecho en el Corpus Juris, que en España bajo Alfonso el Sabio con las Siete Partidas, en Francia con el Código de Napoleón, o en Estados Unidos con la obra depurativa empezada por el Instituto Americano de Derecho.

Si la Conferencia Nacional aquí reunida consigue adelantarse y evitar la creciente confusión del derecho argentino, dotando al país de una Comisión Permanente de Estudios Legislativos, como la propuesta, hará un servicio público inestimable y demostrará que el Estado es una máquina a la cual es cierto que los hombres en el gobierno imprimen un ritmo, pero el espíritu de cooperación individual, la iniciativa y la acción privada como la de esta Conferencia, es el alma verdadera que está detrás del mecanismo rígido del Estado.

Hé dicho. (*Aplausos*).

SR. PRESIDENTE (SILQUEIRA). — Se va a votar en general el proyecto de la comisión.

—Se vota y es aprobado.

—Se lee el artículo preliminar.

SR. VILGRÉ LA MADRID. — Pido la palabra.

Yo desearía saber cuáles son las razones que ha tenido la comisión para aconsejar la creación de este instituto, como una iniciativa de esta Conferencia y en cierto modo dependiente de la Federación de Colegios de Abogados, si no ha de tener independencia económica, si ha de subsistir con los fondos

que le aporten los poderes públicos. A mí me sería más grato que este instituto fuera sostenido, en la medida de lo posible, por la misma Federación de Colegios de Abogados. Hubiera deseado que hiciéramos abstracción de la ayuda oficial, con lo que daríamos a este organismo nuevo una mejor concordancia con su finalidad, cuya independencia y desinterés haría más respetables sus resoluciones. De lo contrario crearemos una oficina burocrática más, que se agregaría a las muchas que ya existen para asesorar a los gobiernos.

SR. ZAVALA ORTIZ. — Pido la palabra. Voy a adherir a las manifestaciones que acaba de hacer el señor delegado, porque indudablemente pienso que las funciones de esta Comisión Permanente de Estudios Legislativos deben ser de cooperación con los poderes públicos, pero lo más independientemente posible de ellos. Y creo que no sería difícil costear el funcionamiento de esa comisión si seguimos, por ejemplo, la práctica de las asociaciones norteamericanas para el estudio de las legislaciones extranjeras, en las que se ha establecido una contribución anual a cada uno de los miembros que la constituyen. Creo que podría establecerse por esta Conferencia o por la Federación de Colegios de Abogados una cuota a cada uno de los abogados del país que sea miembro de la Federación y en esa forma costear, aunque sea con recursos limitados, los gastos que esa comisión demande en el cumplimiento de su cometido.

SR. BAUDÓN. — Pido la palabra.

Voy a adherirme, también, aunque no es necesario por la amplitud de concepto que la inspira, a la proposición de modificaciones que acaba de formularse. Es indudable que si lo que se persigue, a buen seguro con grandes finalidades, es que la Sociedad, representada por una autoridad investida de imperio intelectual puramente, colabore con los gobiernos, los dirija, en cierto modo, controle su acción, es conveniente que ambos organismos — el oficial, que ya representa por razones de soberanía a la corporación general, y el otro, la comisión permanente, que es meramente intelectual o de estudio — se desarrollen en órbitas completa-

mente distintas con entera independencia. Basta esta reflexión para fundamentar la observación formulada. La forma de costear ese organismo ya se ha insinuado, y, además, se me ocurre esto otro más concreto, quizás, que comprende lo mismo y que pudiera ser más conveniente: en esta Conferencia están representados casi todos los colegios de abogados del país (en casi todas las provincias hay colegios de abogados). Es una misión inherente a esta Conferencia o a los colegios de abogados que más preponderan — admitamos que sea el de la Capital Federal — tratar que se organicen estas corporaciones. Entonces nada más conveniente que todos los colegios de abogados que prestan una colaboración eficiente se obliguen a sostener esta comisión que se ha de dedicar al estudio y control de las leyes nacionales y de todo lo que hace a la legislación del país.

Es fácil la confusión en la interpretación de las leyes, no tanto de las nacionales, sino del sinnúmero de leyes provinciales que en determinado momento crean el conflicto en la solución de una causa jurídica. De modo que esta corporación, al constituirse, debe tener de todo punto de vista, su vida propia, independiente, su autonomía absoluta, y en la vida práctica lo que más asegura la autonomía real y espiritual, es la autonomía económica.

De manera que por todas estas consideraciones que podrían ser muy ampliadas, también adhiero a esta pequeña, pero fundamental modificación.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Para ordenar el debate, escuchemos primero a todos los que vayan a hacer objeciones.

SR. VILGRÉ LA MADRID. — Yo creo que eso no sería el procedimiento más lógico. Creo que deberían seguirse los procedimientos parlamentarios, uno ataca y otro defiende.

SR. CASTIGLIONE. — Yo pediría a los señores delegados que han observado el artículo preliminar, que reservaran esta observación para cuando se trate el artículo 9º. Como el primer artículo es transitorio, va a morir inmediatamente que se constituya la Comisión Per-

manente. Desearía que se leyera el artículo 9º que ha quedado modificado, pues ahí está la explicación de por qué se requieren esos fondos. Los fondos que va a necesitar esta comisión, no son para su autonomía jurídica, sino únicamente para pagar al redactor oficial, que va a ser el *alma mater* de esta Comisión Permanente y a un personal que se consagra a casos especiales de determinadas materias; y en esto se está siguiendo la práctica del Instituto Americano de Derecho, que ha tenido la suerte de recibir una donación estu-
penda, — que es lo que lo ha mantenido — creo que de Carnegie, de 1.700.000 dólares. Es lo que estamos buscando, darle vida económica segura para que pueda mantenerse esta comisión.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA).—¿Quiere leer el señor Secretario el artículo 9º del proyecto?

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — (Leyendo): «Artículo 9º. — Los gastos que demande el mantenimiento de esta Comisión Permanente serán costeados por una asignación que fije el gobierno de la Nación y por los demás recursos que la Comisión Permanente pueda conseguir, fondos que sólo podrán destinarse a los redactores por sus trabajos, al Secretario y a publicaciones».

SR. BAUDÓN. — Si este artículo se aprueba tal como está, va a aparecer en la redacción general del proyecto aprobado, una contradicción evidente, en lo que éste estatuye y en lo que dice el artículo 9º, de acuerdo a la observación que ha hecho el señor delegado; y hay que buscar la unidad y la claridad en la legislación.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Quiero aclarar una duda, señor presidente; aunque reconozco la autoridad de los señores delegados que han hecho uso de la palabra, voy a hacer presente que creo que el dictamen de la comisión es el que corresponde. Estoy de acuerdo en que, en teoría, sería muy bueno asegurar una independencia económica completa a la comisión, pero en cuanto a lo que sé por mí, afirmo, y el señor

presidente podrá ratificar mi afirmación que la Federación de Colegios de Abogados, no puede costear ese instituto. Y si no la puede costear la Federación, que a su vez se mantiene de las asignaciones anuales que le pasan los colegios de la República, no sé de dónde vamos a arbitrar los recursos para mantenerla. Por otra parte, creo que lo que interesa hoy por hoy, es la creación de esa comisión sin fijarnos demasiado de qué podamos echar mano para hacerlo. El día que la comisión se robustezca y vigorice — y ese vigor le va a venir precisamente del prestigio que le dé la importancia de su labor — es posible que algún Carnegie funde dotación que permita mantenerla económicamente independiente, o deseñamos algún medio que al mismo tiempo que permita sostenerla la haga independiente de las personas o institutos que le suministren los medios de subsistencia.

De modo que me voy a permitir apoyar decididamente el dictamen de la comisión y desearía que la presidencia o secretaría ratificara la información que doy a la Asamblea, de que la Federación no estaría nunca en condiciones de costear, no digo todos los gastos de la comisión, sino ni siquiera parte de ellos, porque los recursos del organismo apenas le alcanzan para bastarse a sí mismo.

SR. CERVINI. — Considero que lo que interesa aquí, no es solamente la creación de esta institución, sino también asegurar su existencia; y me parece que si dejáramos supeditada la existencia de esta comisión a la contribución de los colegios de abogados y de la Federación, posiblemente no podrá funcionar con regularidad. Yo hablo por el conocimiento que tengo del colegio que represento. Muchas veces la vida de los colegios es precaria; viven exclusivamente del esfuerzo de pocas personas, y malamente. Si además se exige, no ya a la Federación, porque se ve que no tiene medios ni recursos propios, sino a los colegios, un subsidio suficiente para mantener esta comisión permanente, podríamos descartar que la comisión vivirá de muy pocos sub-

sidios, o no podrá vivir por falta de recursos. Quizás muy pocos colegios del país contribuirán en forma suficiente como para mantenerla en todo su vigor. Por otro lado, no veo que haya inconveniente en que los poderes públicos y aun las instituciones privadas de cualquier naturaleza, den una contribución, desde que la obra que va a realizar esta comisión es de utilidad general, para el Estado y para los particulares. Su prestigio no dependerá así exclusivamente de la independencia económica que tenga, sino que surgirá en su caso como consecuencia de su propia obra. Si los miembros de esta comisión llegan a prestigiar su acción por medio de un trabajo verdadero y útil, no preocupará su independencia económica; los recursos asomarán de inmediato a través del interés general. Por esa razón, no veo que pueda haber inconveniente en que el Estado y los particulares contribuyan a mantener este organismo que será de primer orden, y que hoy es indispensable. Ya se han dado, por los miembros que han fundado el proyecto, las razones que demuestran la necesidad de su constitución y no debemos ser suspicaces, diré así, hasta el punto de no querer esa donación o contribución de los poderes públicos, por el supuesto peligro de que no tenga independencia; en su acción la comisión conservará siempre esa independencia, aun cuando tenga que vivir de las asignaciones oficiales. Su mérito será, como dije, realizar la obra que le ha sido encomendada, y su prestigio va a depender de esa labor. Creo que los recursos son una cuestión secundaria en cuanto al prestigio que pueda conquistar, pero indispensables en cuanto a su propia vida.

Sr. GU. — Sintetizando las observaciones que se han hecho al proyecto diré que estas son dos: falta de independencia, en razón del subsidio propuesto, y sustitución del subsidio por un sistema de cuotas con que deberían contribuir todos los colegios de abogados. La primera observación, o sea la de falta de independencia, a nuestro modo de ver, no corresponde, puesto que los mismos colegios de abogados disfrutan ac-

tualmente de subsidios del Estado, y no conozco que jamás se haya hecho cargo alguno a estos colegios, de que les falta independencia. En cuanto a substituir el subsidio por cuotas, significa establecer la organización de una administración, es decir, gastos. Por estas razones y por las ya expuestas por los señores delegados González Sabathic y Cervini, entendemos que el proyecto tal como está presentado debe ser aprobado por la Conferencia.

Sr. LLAN DE ROSOS. — Yo no creo que sean los colegios de abogados los llamados a mantener la Comisión Permanente de Estudios Legislativos. Me parece que debería ser la cuota personal de los abogados de la República, única forma de que aquélla mantenga una completa independencia con respecto a los poderes nacionales y provinciales, en todo sentido.

Sr. VILGRÉ LA MADRID. — Me parece que ha sido un poco mal interpretado mi pensamiento, y quiero sintetizarlo así: en la forma que está despachado este proyecto, crearemos una oficina burocrática más, y entiendo que si no tenemos una fuerza económica suficiente para crear una institución de esta clase, no debemos hacerlo, dejando que el Estado, que es dueño de los caudales públicos, supla esta falta.

Sr. RODRÍGUEZ RIBAS. — Para el caso de que no prosperara la parte de los subsidios a que se refiere el proyecto en discusión, propongo que los miembros que se designen para la Comisión Permanente de Estudios Legislativos desempeñen sus funciones *ad-honorem*.

Sr. VERA VALLEJO. — Desearé pedir una aclaración sobre un concepto que no lo encuentro suficientemente explícito, para el caso de que se aprobara el artículo preliminar.

Se habla aquí de un «subsidio» que deberá gestionarse del gobierno nacional o de los poderes públicos. Si fuera del gobierno nacional debería limitarse al Poder Ejecutivo que es el otro poder colegislador; ahora si se entiende que el subsidio no ha de ser uno, sino que ha de gestionarse del Congreso y de las provincias, sería conveniente que quede bien establecido, porque entonces no se-

ría un subsidio, sino «subsidios» nacional y provinciales. Desearía que quede bien aclarado este concepto, por si se aprueba el artículo que se discute.

SR. GOYTÍA. — Yo haría indicación de que el artículo se vote por partes; primero la cuestión de los subsidios, es decir, si se vota con subsidio o sin subsidio, y después la objeción de forma que hace el señor delegado. En cuanto a la primera parte voy a aclarar brevemente las explicaciones dadas por el señor delegado, doctor Gil. No se crea que por la circunstancia de que el gobierno o Poder Ejecutivo nacional le dé un subsidio a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, ésta perderá su independencia. Recuérdese que los cargos van a ser completamente *ad-honorem*, que las únicas personas que van a ser remuneradas, serán los redactores o sea aquellas a quienes no se les puede exigir que trabajen gratuitamente. No se trata de una institución burocrática, se pagará el trabajo verdadero y esto no tiene nada que ver con la independencia de la comisión. Para poder llevar a cabo este pensamiento — que ya ha sido debatido en la Primera Conferencia de Abogados realizada hace dos años — es necesario proporcionarle recursos que pueda hacer frente a las erogaciones que se ocasionen.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo preliminar.

SR. CERVINI. — Pido que se vote por partes este artículo.

SR. CARLOMAGNO. — Pido la palabra.

El artículo preliminar debe ser votado tal cual está redactado; no se puede dividir. Se podría subsanar esto, agregándole un artículo final, para lo cual una vez que se vote el proyecto, formularé la indicación respectiva.

VARIOS SEÑORES DELEGADOS. — No hay objeto en dividir este artículo.

—Se lee íntegramente el artículo preliminar.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se vota y es aprobado.

SR. VERA VALLEJO. — Pido la palabra, para proponer una modificación al artículo que se acaba de sancionar.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Ya está aprobado ese artículo, señor delegado.

SR. VERA VALLEJO. — Cuando yo quise hablar para pedir una aclaración sobre el artículo sancionado, se me contestó que no se discutiría todavía la cuestión de fondo del artículo. Pero ahora veo que se ha sancionado el artículo mismo; no se trata de una cuestión de forma, sino de fondo.

SR. BAUDÓN. — Me parece haber oído al señor delegado Herrera que va a pedir una rectificación de la votación del artículo.

SR. VERA VALLEJO. — Yo por lo menos desearía que la comisión me aclare el concepto del artículo.

SR. DARDO HERRERA. — Pido que se rectifique la votación, señor presidente, porque me parece que ha habido equivocación.

SR. SECRETARIO (CANAL FEIJÓO). — No ha habido equivocación alguna, señor delegado.

SR. GOYTÍA. — El artículo en realidad ya ha sido aprobado, pero la comisión no tiene inconveniente en modificar la palabra «subsidio», en singular, por la de «subsidios», en plural.

—Asentimiento.

SR. CARRANZA. — Me parece que sería más conveniente establecer en el artículo 2º—que habla de los gastos—que los recursos se formarán con subsidios.

—Se aprueba sin observación el artículo 1º.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — En discusión el artículo 2º.

SR. STANCHINA. — Creo necesario significar a la Conferencia una observación que me ha sugerido el análisis del artículo 2º, referente, según advierto, a la forma como ha de constituirse la Comisión Permanente de Estudios Legislativos.

El artículo preliminar de las bases para la constitución de la aludida enti-

dad jurídica, suscitó una cuestión previa por no haberse precisado si los poderes públicos a que hace referencia el proyecto — a los efectos de que se gestionen en ellos la sanción de un subsidio que asegure la subsistencia de dicha comisión—son los poderes públicos nacionales y provinciales o aquellos solamente.

La interpretación extensiva que se dió al vocablo cuestionado, unido a lo que resulta del artículo primero del proyecto, que menciona a las legislaturas provinciales, entre las que podrán obtener el concurso de la comisión, me inducen a observar la omisión en que se incurrió al no hacerse figurar entre los componentes de la misma a los representantes de los poderes públicos provinciales, no obstante ser éste un instituto que tendrá a su cargo todo lo concerniente a la reforma legislativa del país.

Nótese que si todos los colegios de abogados de la República tendrán cabida en esa comisión, lo mismo que el gobierno nacional y las universidades, no se explica el motivo o la razón legal que se ha tenido para excluir de aquélla a los gobiernos provinciales, máxime si se advierte que se faculta a la comisión para gestionar de los mismos, subsidios para la seguridad de su subsistencia.

En mi opinión, no es lógico ni jurídico que se les asigne representación a los colegios de abogados, cuya significación e importancia es tan relativa en algunas provincias y se les niegue a aquéllos, cuando al igual que otras instituciones fueron invitados a esta Conferencia para contribuir a su mayor éxito.

Por ello, estimo que no es posible prescindir de esa representación, tanto más si se observa el alcance sociológico-jurídico del instituto y las consecuencias que sus decisiones pueden tener en el desenvolvimiento institucional de las provincias, lo que me decide a sostener que se formule ese agregado a fin de que los gobiernos provinciales tengan sus representantes en la referida comisión.

En consecuencia, pido a la Conferencia considere los fundamentos expuestos a los efectos del agregado que propongo.

SR. CARLOMAGNO. — Considero que en la forma en que está redactado el artículo, quizá no esté de acuerdo con el propósito del proyecto. Por lo pronto, voy a dar mi conformidad para los dos miembros nombrados por el Poder Ejecutivo nacional, en vista del subsidio que se pedirá al gobierno, pero no creo que sea del caso aceptar representantes de gobiernos provinciales, porque ya tenemos bastante con los representantes del gobierno nacional. La representación debe ser de abogados y debe, a mi juicio, ser designada en su mayoría, por la Federación de Colegios de Abogados. Esta comisión tendrá que designar diversas comisiones especializadas en distintas materias de la legislación y nadie mejor que nosotros para designarlas, que somos los que estamos manejando todas estas cosas y que concurrimos a estas reuniones, cuyo objeto no es desconocido para nadie.

Luego voy a proponer la siguiente modificación: La comisión se compondrá de las siguientes personas: 2 miembros nombrados por el Poder Ejecutivo nacional (pido que se tome nota para el caso de que no tuviera aprobación tal como está el proyecto). 24 miembros nombrados por la Federación de Colegios de Abogados, que se designarán ahora en el artículo transitorio y se nombrarán después en las conferencias generales.

SR. CERVINI. — Pido la palabra.

Apoyaré la primera moción que se ha formulado, señor presidente. Creo que se debe agregar aquí a los miembros nombrados por el Poder Ejecutivo nacional y uno por lo menos por cada gobierno de provincias. Entiendo que en la formación de las leyes hay que tener muy en cuenta el territorio. Me parece que una ley dictada con un criterio exclusivamente metropolitano, como sería una ley dictada para la Capital Federal, podría ser perfectamente mal aplicada en Jujuy o en el Sur de la República. Entonces darle representación a las distintas provincias, es contemplar las distintas situaciones del país dentro de una ley; y de esta manera se tendrá en cuenta no solamente la situación especial de la Capital Federal,

que es donde harán los redactores sus despachos, sino también la situación de las provincias, armonizando con sus necesidades. Por eso me inclino a apoyar la primera moción propuesta a fin de que, a las provincias, que son las que componen el territorio del país, se les dé una intervención en la confección de las leyes, autorizándoseles para que designen uno de los miembros por lo menos de la comisión; y prefiero que sea esto y no que la misma Federación los designe porque podrían resultar malas designaciones o quizás menos convenientes que darle la representación directamente a las provincias. Por otra parte, se llegaría a esta otra conclusión: de que las provincias que designen delegados tendrán hasta cierto punto el compromiso de aceptar lo que con ellos se haya actuado. Por todas estas razones creo que debe hacerse el agregado que he propuesto, aunque me parece que hasta podría ponerse dos delegados por cada provincia, para que estén en igual representación que el gobierno nacional.

SR. GORTÍA. -- Aquí se está haciendo la objeción fundamental según el criterio de los autores del proyecto, de que debe haber un representante de cada provincia. Yo creo que esos representantes no faltan en el proyecto tal como está ahora, puesto que se asigna un representante a cada uno de los colegios de abogados de la República, y creo que son 18 colegios, de suerte que están representadas con exceso las provincias. Por otra parte la comisión proyectó eso, pero en las discusiones que se hicieron luego, se trató siempre de limitar en lo posible el número de miembros de la Comisión de Estudios Legislativos, porque no hay que confundir: no se trata de un congreso; tenemos suficiente con los que celebramos nosotros; se trata de estudios científicos y cuanto más limitado sea el número de miembros que tengan a su cargo esta tarea, más armonía habrá en la labor que realicen.

Si aumentamos el número de miembros, vamos a matar a la comisión, evitando que se haga una obra práctica; tal como está constituida esta Comisión

de Estudios Legislativos — ya tiene 32 miembros — me parece que puede tener en su seno representadas todas las opiniones jurídicas del país. Por otra parte, la proposición que se ha hecho de que sea la Federación de Colegios de Abogados o la Conferencia, como dijo el señor delegado Carlomagno, quien nombre miembros o representantes ante esa comisión, nos induciría al mismo error en que se incurrió hace dos años cuando se discutía esta cuestión y se hizo depender a la Comisión de Estudios Legislativos de la Conferencia Nacional de Abogados.

No se trata de eso, señor Presidente. Se trata de crear una comisión de legislación, una comisión de estudios científicos desde el punto de vista jurídico, completamente aparte, independiente de la Conferencia Nacional de Abogados y de toda otra jurisdicción. Hace un momento, cuando se consideraba el artículo anterior, algunos miembros de esta Conferencia trataban, con razón, de asignar la mayor independencia posible a la comisión respectiva; ¿y cómo vamos ahora a hacer que esta Comisión Permanente de Estudios Legislativos dependa de la Conferencia de Abogados y se someta al criterio de la misma?

La comisión ha proyectado este artículo en esta forma, a fin de que la obra que resulte de ese cuerpo sea práctica y no ocurra lo que hace dos años, cuando se trató de llevar a cabo el mismo pensamiento y fue desnaturalizado por completo, al hacer depender la comisión de la Conferencia de Abogados. Creo que, en la forma en que está el artículo, que ya ha sido discutido dos o tres veces y modificado para darle intervención a la Facultad de Ciencias Económicas, concilia todos los intereses.

Además hago notar que en esta materia es muy difícil improvisar y puedo afirmar a los señores delegados que este proyecto, artículo por artículo e inciso por inciso, ha sido convenientemente estudiado y discutido; se han hecho infinidad de objeciones y se ha llegado a la conclusión que el mismo señala. La comisión que despachó este proyecto, estuvo constituida no sólo por el que habla, sino por los doctores Gonnet, Castiglione, Gil, Villegas Basavilbaso y por

el mismo señor Presidente, y se ha preocupado de su estudio durante varias sesiones. Sólo después de tanta meditación se ha llegado a imprimir este proyecto. Por estas razones, pido a los señores delegados, en cuanto sea posible, que sólo propongan modificaciones de forma, pero no fundamentales.

SR. ZAVALA ORTIZ. — Salvando los respetos debidos a la comisión y a todos los señores delegados que han estudiado detenidamente este proyecto, como acaba de manifestar el señor miembro informante de la misma, tratando de conciliar las opiniones emitidas respecto de la manera de constituir esta Comisión Permanente de Estudios Legislativos y siguiendo también los mismos principios que informan este artículo, voy a proponer la modificación del mismo. Debo confesar que este proyecto recién nos ha sido entregado y en consecuencia, recién lo conocemos.

SR. PRESIDENTE (SILVEIRA). — No ha podido ser repartido antes a los señores delegados, por razones de imprenta y de modificaciones sucesivas de sus artículos. Hago esta manifestación en descargo de la Comisión Organizadora de esta Conferencia.

UN SEÑOR DELEGADO. — Señor Presidente:

Indudablemente, se trata aquí de constituir un cuerpo de legislación permanente, que debe tener absoluta independencia para avocarse el conocimiento de la legislación del país según se determina en el artículo 1º del proyecto. Considero que debe tener absoluta independencia como cuerpo de esta naturaleza y propongo, en consecuencia, que del artículo 2º se suprima el inciso a) que dice: «los miembros nombrados por el Poder Ejecutivo nacional», al hablar de la composición de la comisión. Ya tenemos suficiente, señor Presidente, con el Congreso de la Nación; yo no veo la razón por qué han de formar parte integrante de esta comisión representantes designados por el Ejecutivo Nacional. Eso en cuanto a ese punto. En cuanto a la conveniencia manifestada por algunos señores delegados de incorporar a esta comisión representantes de los gobiernos de provincia, por aquello

de que se va a recabar de los poderes públicos provinciales subsidios para engrosar los fondos de la comisión, también me parece que debiera suprimirse; creo que no deben incorporarse a esta comisión representantes de los gobiernos de provincia por la misma razón que he expresado al proponer la supresión del inciso a).

Por lo demás, propongo también que se modifiquen los incisos b) y c), en la siguiente forma: dice el inciso b): «un representante designado de su seno por cada colegio de abogados reconocido por la Federación de Colegios de Abogados»; y dice el inciso c): «un representante designado de su seno por la Federación de Colegios de Abogados.»

La Federación de Colegios de Abogados, ya sabemos, está constituida por representantes de los colegios de abogados de toda la República que se han federalizado, de manera que bastaría con que la Federación de Colegios de Abogados designara el número de representantes que creyera conveniente para que esté representada en la comisión y que yo propondría que se limitara a doce, quienes formarían parte integrante de esta comisión.

Agregaré también una razón más para sostener la falta de necesidad y conveniencia de que las provincias designen sus representantes en esta comisión, por cuanto, como lo ha manifestado el señor miembro informante, la Federación de Colegios de Abogados, que se compone de representantes de los colegios de la República, traerían a su seno los anhelos, las aspiraciones y necesidades de cada provincia; de manera que la representación oficial de los gobiernos de provincia estaría de más. Entonces, con estas modificaciones propuestas a grandes rasgos, creo que llegaríamos al ideal que se propone la comisión, de crear un cuerpo pequeño y no caer en el vicio de los cuerpos colegiados numerosos que obstaculizan y dificultan el estudio y la deliberación de los asuntos, mucho más en esta materia que requiere la mayor independencia y todas las condiciones necesarias para el mejor desempeño de su cometido.

Por estas razones yo propongo que se modifique el artículo en la forma que

he indicado, para lo cual podría tomar nota el señor Secretario.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — Suprimir el inciso a)...

UN SEÑOR DELEGADO. — Suprimir el inciso b) también y modificar el inciso c) diciendo: «doce representantes por la Federación de Colegios de Abogados», y mantener el inciso d).

SR. CASTIGLIONE. — Pido la palabra. Para sostener brevemente el despacho de la comisión, y me voy a permitir en homenaje a nuestro futuro hijo predilecto, la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, denunciar dos pequeños males de esta Conferencia: primero, un exceso de lirismo y segundo, parlamentarismo. Somos demasiado líricos, señor Presidente; creemos que los gobiernos de provincia nos van a apoyar con las designaciones de delegados, pero estamos muy equivocados. Los gobiernos de provincia creerán que es un acto de cortesía de la Federación de Colegios de Abogados y en segundo lugar, estamos con el mal del parlamentarismo; un proyecto bien meditado, bien estudiado, lo estamos descuartizando; está pasando lo que decía Voltaire: «dadme un padre nuestro y os demostraré que cada palabra es una herejía». En eso de descuartizar estamos llegando a una herejía política, a una barbaridad práctica. Voy a pedir a la Conferencia que termine cuanto antes esta discusión para que podamos entrar al estudio de problemas más complejos, que no nos maten nuestro futuro hijo, que le den todo el vigor que se han propuesto sus autores. Los que simpatizamos con esta Conferencia, vemos con dolor que llegamos a soluciones transaccionales, como hemos llegado hace dos años a fuerza de transacciones, a fuerza de imprevisiones, a constituir una Comisión de Derecho Procesal; y ¿qué hicimos, señor Presidente? Llenamos el cuadro con figuras decorativas y la comisión ha nacido muerta, no ha dado señales de vida a los dos años.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — ¿Me permite el señor delegado?

El Código de Procedimiento Civil y Comercial, fruto de la Primera Conferencia, está sobre la mesa del señor de-

cano de la Facultad de Derecho de Córdoba. (*Aplausos*).

SR. CASTIGLIONE. — Ese es el fruto de la labor de un solo hombre.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — No, señor delegado; rectifico, es la labor de una comisión de ocho miembros a la que he tenido el honor de pertenecer; celebró 40 y tantas sesiones y el código está listo para entrar en prensa a mediados de Noviembre próximo. (*Aplausos*).

SR. CASTIGLIONE. — Pido la palabra.

Se ha buscado en esto el menor número de hombres con el mayor número de conocimientos, con el mayor número de aptitudes. Buenos Aires domina, es la sede de las reuniones; hay que buscar hombres que sean de Buenos Aires, porque hombres desparramados ¿qué pueden hacer en una comisión? Absolutamente nada. Yo había presentado un proyecto de creación de un instituto de derecho argentino, análogo al Instituto Americano. Mis distinguidos colegas me han convencido que hoy por hoy eso es inútil y he abdicado de esa idea que he meditado mucho. Por eso ruego, como decía anteriormente un colega, que pregunten qué podrá resultar, pero que no modifiquen porque va a quedar completamente desarticulado el proyecto: va a pasar lo que en el parlamento: leyes, fruto de la improvisación, mueren. Nada más, señor presidente.

SR. BAUDÓN. — Iba a pedir la palabra para hacer moción de cerrar el debate, señor presidente; pero después de haber escuchado las palabras del señor delegado, debo hacer algunas brevísimas consideraciones. La lectura del artículo 2º relacionado con el artículo 1º y éste con la declaración de orden general, me inducen a aceptarlos tal como están redactados con un pequeño agregado en mi concepto también muy útil que se ha insinuado primeramente, o sea el de dar una representación a cada uno de los gobiernos de provincia. Esto es condecorar con las declaraciones de orden general del proyecto, o sea de que se va a recaer subsidios a los gobiernos de provincias; y no sólo por eso, como se ha recalado hace un rato, sino

que hay otra razón más fundamental la que escuché de un señor delegado, y es la de la diferencia de organización económica de todo el país. Cada región del país representa intereses, legislaciones sociales, situaciones de orden y de administración totalmente diversas, absolutamente antagónicas a veces; principios de orden económico representados por legislaciones perfectamente aplicables en el litoral, no lo son en las provincias de Cuyo. Luego, es indispensable que esas provincias estén representadas en la Comisión Permanente de Estudios Legislativos. Pero no hay sólo esta razón, respecto de la cual ya se ha dicho, equivocadamente, que las provincias estarían representadas por los colegios de abogados de la República; está la razón de que los gobiernos de provincias, no obstante lo que se ha sostenido, han prestado a esta Conferencia, y creo que también a la anterior, el auspicio y el calor no solamente de su colaboración sino también de su entusiasmo. Entiendo que en esta asamblea están representadas las provincias de Buenos Aires, Córdoba, la justicia de la provincia de Buenos Aires y probablemente de alguna otra que escapa a mi conocimiento.

SR. SECRETARIO (CANAL FELJÓ). — Están representadas trece provincias, señor delegado.

SR. BAUDÓN. — Perfectamente, más a mi favor. Ese dato ratifica la razón de que esta Conferencia debe responder a ese auspicio, a esa colaboración de lo que en nuestro país representa el mayor prestigio o sea el gobierno representativo de las ideas prevalecientes en el momento actual. Por eso pienso que si se da un puesto en la comisión a un gobierno, debe darse a todos los gobiernos de provincia; de lo contrario debería suprimirse también el cargo que se asigna al gobierno nacional. Yo me inclino por la proposición que soluciona el problema dando a todas las provincias del país participación por medio de representantes en la Comisión de Estudios Legislativos, no sólo porque así se traerá un mayor aporte de conocimientos, de datos y de situaciones de vida real de las localidades, sino también, porque se obligará con esa repre-

sentación a que los gobiernos presten la contribución efectiva de sus hombres, de sus medios y de su dinero. Fuera de ello hay otra razón más: se insiste en que no conviene un gran número de componentes de esa comisión, y que precisamente ese es el mal de los congresos porque matan la actividad y la resolución de los problemas. Yo creo que ese supuesto vicio se corregiría, en una forma fácil, por el anhelo de cumplir prácticamente con la finalidad del cargo. Luego existe la necesidad de correlacionar las opiniones nacionales para llegar a soluciones satisfactorias y, en definitiva, el contenido del artículo 11 prevé prácticamente el caso estableciendo el quórum en 7 miembros presentes. Así se resolvería la cuestión y se habría llenado una formalidad amplia, consolidando esta comisión, porque todo el país estaría reflejado en ella. De acuerdo con el postulado general de este proyecto y con la redacción del artículo 1º que dice: «con el objeto de prestar su apoyo técnico a los poderes públicos nacionales, provinciales o municipales» encuentro que hay una facultad que se arroga por propio imperio; más razón entonces para que a esos poderes públicos provinciales se les dé una representación en la comisión, siquiera sea considerando esa cooperación espontánea que ha de prestarse.

Estas razones me inducen a observar el proyecto; creo, al menos, cumplir con una concepción y una finalidad de justicia.

SR. PRESIDENTE (SILVEIRA). — Rogaría a los señores delegados que en obsequio a la brevedad y a la práctica de nuestras reuniones y decisiones, se acorten los debates en lo posible, porque hay urgencia de que esta mañana se apruebe este proyecto para que tenga entrada el proyecto de legislación sobre transporte ferroviario que debe ser tratado impostergablemente hoy, por ser un asunto de fundamental importancia.

Hago presente, pues, a los señores delegados, que deben ser breves en sus manifestaciones.

SR. DAY. — Pido la palabra.

Voy a adherir con mi voto al despacho de la comisión. El señor delegado

que lo informó ha expresado con toda elocuencia los inconvenientes que tiene la improvisación cuando se trata de modificar un despacho que viene con todos los prestigios del estudio y de la meditación que se merece. El agregado propuesto por uno de los señores miembros de esta Conferencia respecto a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos vendría a producir un grave inconveniente: va a arrastrar a la Conferencia al más peligroso de los terrenos: al terreno de la política. Esa comisión debe mantener una absoluta independencia y la base de ésta es substraerla a toda influencia política. Tal como la ha proyectado la comisión, a mi juicio, se va a componer de un número suficiente de miembros, que van a tener todos los prestigios intelectuales y técnicos que se necesita. Esta comisión va a ser de colaboración técnica antes que de colaboración legislativa, porque para esto está el Congreso, que oír la palabra de los señores diputados representantes de las provincias.

Los que venimos del interior nos damos cuenta de que es necesario dar participación en esta comisión a representantes de las provincias, porque hay muchas materias, como por ejemplo en Mendoza, el problema de la irrigación, la cuestión de los vinos, la legislación obrera y tantas otras, que no son casi objeto de estudio en otras provincias. Yo sería el primero en adherir a la modificación en ese sentido, pero estoy seguro que ella va a traer grandes inconvenientes, como el de que en un momento determinado la comisión no sea sino el reflejo del estado político del país porque en su seno predomine la representación oficial de las provincias: es decir, que se tratarían los asuntos según el criterio de esa mayoría, en la cual domine tal o cual partido político; y muchas veces los representantes ante la comisión, tendrán que combatir iniciativas legislativas de su provincia, que seguramente van a ser sostenidas por los representantes políticos ante el Congreso.

Además, señor presidente, si queremos escuchar la voz de las provincias, ahí están los representantes de todos los

colegios de abogados, y si no hay colegios de abogados en todas, que se constituyan; y así vamos a levantar el prestigio de esta Conferencia con un cuerpo único de carácter técnico. Por eso voy a votar por el despacho de la comisión.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DOXCEL). — Voy a distraer poco tiempo la atención de la Conferencia.

Quiero hacer notar que esta labor no es improvisada; tiene su nacimiento en la Primera Conferencia a la que también se presentaron varios proyectos con el mismo objeto. El tema no es nuevo para la Conferencia. Resulta así que se está discutiendo con excesiva amplitud un artículo que se refiere a la constitución de un cuerpo ejecutivo, nada más que ejecutivo, aunque con funciones muy vastas por cierto. No temamos el aparente olvido de la representación provincial, puesto que si se tiene la precaución de leer la última parte del artículo 12, que es completamente claro, advertiremos una inspiración bien distinta por cierto; establece que «en la designación que el Poder Ejecutivo hará de los dos miembros de la comisión, se pedirá que cuiden cuanto sea posible, además de la capacidad y competencia de las personas que se nombren, *que éstas representen puntos distintos del país*». No se puede negar que la indicación expresa de este artículo especial, da el verdadero criterio con que se ha proyectado.

Por lo demás, estando representados los colegios de abogados de toda la República, lo están los intereses de todas las provincias y quedan salvadas las dificultades al respecto.

Invito, pues, a poner término a la discusión del artículo 2º cuya trascendencia no justifica la extensión con que se le ha tratado.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Hago moción de que se cierre el debate.

SR. STANCHINA. — Quiero hacer una aclaración.

Con el mismo criterio podría afirmarse que esta Conferencia tiene carácter político por estar representados casi todos los gobiernos de provincia, y, sin embargo, a nadie se le ha ocurrido asignarle tal carácter, por lo que no en-

cuentro atendible la observación formulada, que importa una sospecha sin fundamento alguno, la que no puede admitirse, pues, a fin de negarse dicha representación, máxime si se advierte la naturaleza del indicado organismo que, según se declaró, es de acción limitada.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Advierto al señor delegado que hay una moción de orden de cerrar el debate.

—Asentimiento general.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar el artículo 2º.

SR. REVIRIBERO. — Pido que se vote por partes.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar por partes.

—Se votan y aprueban los incisos a), b), c) y d).

SR. BAUDÓN. — Hay que votar el agregado que se ha propuesto.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — El agregado del doctor Stan-china es el siguiente: «dos miembros del Poder Ejecutivo nacional y uno por cada gobierno de provincia».

SR. GONZÁLEZ SABATINÉ. — Ese agregado debe votarse como inciso nuevo, eliminándose la primera parte que ya ha sido aprobada en el inciso a).

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — El agregado quedaría como inciso nuevo en la siguiente forma: «un representante por el Poder Ejecutivo de cada provincia.»

Se va a votar en esta forma.

—Se vota y es rechazado.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Corresponde votar el artículo 3º.

Si no se hacen observaciones, se dará por aprobado.

—Aprobado.

—Se lee el artículo 4º.

SR. CERVINI. — Pido la palabra.

Por este artículo 4º se dispone que la Comisión de Estudios Legislativos nombrará redactores remunerados de

fuera de su seno. Parecería que por este artículo la comisión está obligada a nombrar redactores a personas que no sean miembros de la comisión. Yo desearía saber por qué la comisión no puede designar redactores a algunos de sus propios miembros antes de tener que recurrir a otras personas.

SR. CASTIGLIONE. — Simplemente, señor delegado, por razones de moral, porque estos redactores que se han de nombrar, serán remunerados.

SR. CERVINI. — Muy bien, señor delegado. Estoy satisfecho.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — No habiendo observaciones, queda aprobado el artículo 4º.

—Se aprueba sin modificación el artículo 5º.

—Se lee el artículo 6º.

SR. VERA VALLEJO. — Entiendo que el artículo 6º está de más, toda vez que el artículo 5º dispone que: «una vez expedidos los dictámenes de los redactores, la Comisión de Estudios Legislativos los aprobará o rechazará, y de acuerdo a esta resolución, recomendará a los poderes públicos que corresponda la adopción de tales proyectos». Propongo, pues, que el artículo 6º que se ha leído, sea suprimido, por no tener razón de ser.

SR. CASTIGLIONE. — Pido la palabra. Debo manifestar a la Conferencia que yo soy de la misma opinión que el señor delegado Vera Vallejo, pero por no producir disidencias en el seno de la comisión, había callado. Ahora, que el doctor Vera Vallejo propone la supresión del artículo 6º, yo lo apoyo.

SR. GORTÍA. — Este artículo parecería superfluo, pero con él queremos dejar establecido, que no hay incompatibilidad entre el hecho de que una de las facultades de derecho tenga opinión expresada sobre un punto jurídico y el envío de un representante al seno de la comisión; pues podría ocurrir el caso que habiendo una de las facultades de derecho — que tienen representación en la comisión — emitido su opinión sobre un punto jurídico cualquiera, por esa circunstancia, omitir de

enviar su representante presentando esa causa como excusa para no enviar su delegado a la comisión permanente. Es este el motivo que ha inspirado a la comisión para dejarlo expresamente establecido. Se sobreentiende, es cierto, pero es mejor que quede bien aclarado.

Sr. VERA VALLEJO. — Debemos ser concisos y evitar una redundancia.

Sr. GOYTÍA. — Si los señores delegados opinan que se suprima la comisión cedería, pero recomendando que se dejara constancia que no hay ninguna obligación en sostener los dictámenes de sus delegados para cada uno de los cuerpos representados.

Sr. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — ¿La comisión retira el artículo 6º o quiere que se vote?

Sr. GOYTÍA. — Preferiría que se votara si se va a dejar el artículo o si es imprescindible suprimirlo.

Sr. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar si se suprime el artículo 6º de la comisión.

—Votado, resulta suprimido.

—Se aprueba sin modificación el artículo 7º.

Sr. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — En consideración el artículo 8º.

Sr. REVIRIEGO. — Pido que el señor miembro informante explique la segunda parte del artículo 7º.

Sr. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Ya se ha votado el artículo, señor delegado.

Sr. REVIRIEGO. — No hubo tiempo de informarse. La segunda parte del artículo 7º, ¿qué razón de ser tiene?

Sr. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — Voy a leer esa segunda parte. *(Leyendo):* «Además los redactores no podrán reunirse para tratar los temas en conjunto, sino que deberán hacerlo individualmente, y se expedirán en la misma forma.»

Sr. GOYTÍA. — La razón que ha tenido la comisión para expresar en este artículo el concepto de que el trabajo no sea colectivo sino que se deje librado al estudio de una persona competente que la comisión, naturalmente, designa-

rá con todo cuidado y elegirá con gran cautela, es evitar de que en un cuerpo numeroso, que va a ser hasta de veintitantos miembros, se produzcan despachos numerosos que dan incongruencia a la labor y hacen ineficaz el trabajo. Esta disposición del artículo 7º se ha inspirado en el ejemplo que ha seguido la comisión encargada de reformar el Código Civil, que estaba compuesta de numerosas personas competísimas y de la mayor capacidad y que sin embargo no tuvieron inconveniente en dejar al doctor Bibiloni, es decir, a un solo redactor, la tarea de presentar las reformas generales al Código Civil. Ninguno de ellos tuvo inconveniente en ceder la redacción del proyecto a una sola persona. Siguiendo ese ejemplo, se ha inspirado nuestra comisión, para que el trabajo de la Comisión Permanente de Estudios Legislativos siga las mismas normas, a fin de que se haga en la mejor forma. Probablemente si nuestro código no hubiera sido hecho por Vélez Sársfield solo y no se hubiera aprobado a libro cerrado, a estas horas no tendríamos una obra completa, como es esa.

Sr. REVIRIEGO. — Las razones expuestas no me convencen, porque una cosa es el encargo de redactar las bases y otra la redacción del proyecto. Debe reservarse a la Comisión Permanente la forma de realizar ese trabajo; podrá encargarse a dos o tres personas en cada caso, pero no le limitemos nosotros la facultad, con estos detalles reglamentarios que no convienen aquí. La comisión se dará un reglamento y hará lo que crea conveniente.

Sr. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se ha escuchado al doctor Reviriego porque el señor delegado no había oído lo que se votaba, como un acto de consideración especial, pues el artículo ya está votado.

—Se lee el artículo 8º.

Sr. GOYTÍA. — Se nos ha hecho la observación de que en este artículo hemos puesto en carácter un tanto imperativo de que el señor secretario representará a la comisión durante el tiempo de su receso. Si bien es cierto que la forma de darle «permanencia» a la comisión es

la de tener un secretario en esas condiciones, esto no se opone a que sea el presidente de la comisión quien la represente en todos los actos. De manera que propongo que se deje constancia de esta aclaración, en el sentido de que la representación del secretario no quita, como es lógico, la representación necesaria que tiene el presidente. Es una cuestión de forma sin mayor importancia, pero que conviene aclarar.

SR. BAUDÓN. — Sería mejor que se modificara el artículo, para mayor claridad.

SR. SECRETARIO (CANAL FELJÓO). — Sería suficiente dejar constancia en las actas.

SR. CASTIGLIONE. — Claro, porque el espíritu del artículo es por si el presidente tiene domicilio fuera de la Capital Federal.

SR. BERGHMANS DONCEL. — Podría establecerse que durante el período de receso representará a la comisión el señor presidente...

SR. BAUDÓN. — O en su defecto, el secretario.

SR. GIL. — Esa es la moción.

SR. BERGHMANS DONCEL. — Muy bien.

SR. GOYENECHÉ. — Al artículo tal como está, se le podría agregar «sin perjuicio de la representación que corresponde al presidente».

—Asentimiento general.

—Se vota y es aprobado.

—Se lee el artículo 9°.

SR. VERA VALLEJO. — Descamos que se aclare bien este artículo, porque hasta ahora no se ha definido si va a haber solamente el subsidio del gobierno de la Nación, o también habrá subsidios de los gobiernos de provincia. Según veo aquí, parecería que solamente habrá el subsidio del gobierno de la Nación, pero según el artículo 1° que se ha aprobado...

SR. CASTIGLIONE. — Advierto al señor delegado que en este artículo 9° se dice: «y demás recursos que la Comisión Permanente pueda conseguir...»

Claro está que de donde pueda conseguirlos, los conseguirá; la fuente importa poco.

SR. ZAVALA ORTIZ. — Debería agregarse: «fondos que sólo se destinarán al pago del personal inferior». Porque los empleados que ocupará la comisión permanente, como ser, auxiliares, taquígrafos, etcétera, no trabajarán gratuitamente.

SR. GIL. — Se ha querido evitar que ésta sea una organización burocrática y que dándole la organización a que se refiere el señor delegado se abra el camino para que se efectúen gastos innecesarios, que transformarían a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos en lo que precisamente se ha criticado desde un principio. Creo que en la forma que está redactado el artículo tiene suficiente elasticidad.

SR. ZAVALA ORTIZ. — Es que aquí no se habla de los otros empleados que se van a necesitar, como tampoco de los gastos de publicación, etcétera, que van a tener que efectuarse.

SR. ZAEFFERER SILVA. — Nos olvidamos que estamos disutiendo la ley orgánica de esta comisión permanente, y no su reglamento; disutimos si el papel que se va a emplear para redactar los proyectos se debe pagar o no con tal o cual recurso. Eso será materia de la reglamentación, que proveerá a todas esas minucias. Por eso creo que el artículo está bien tal como está redactado.

SR. BAUDÓN. — El artículo 9° establece en forma taxativa que esos fondos sólo podrán destinarse a los redactores en razón de su trabajo. Entiendo que así se le cierra el camino a la comisión para disponer de lo que fatalmente le será indispensable; entonces, sería humano prever lo que ha de suceder y darle a este artículo la elasticidad que necesita para su buena aplicación.

SR. GOYTÍA. — Para conciliar con el temperamento propuesto por el señor delegado, doctor Baudon, propongo que se agreguen a este artículo las palabras «en cuanto sea posible»; así no será taxativo.

SR. CABRAL. — Entiendo que se solucionaría el caso suprimiendo, como se

ha dicho, la última parte del artículo, toda vez que en los gastos que demande el sostenimiento de esta comisión permanente, van comprendidos los redactores, empleados, etcétera. De suerte que quedaría perfectamente completo el artículo con la supresión de esa parte.

SR. BAUDÓN. — Descaba hacer una aclaración para conciliar lo que insinúa el señor miembro de la comisión y el temperamento propuesto por mí, a consecuencia de otras proposiciones anteriores. Se podría aclarar en esta forma: «los fondos sólo podrán destinarse con preferencia a los redactores por sus trabajos, al secretario, publicaciones y demás gastos indispensables».

SR. CASTIGLIONE. — Agregar después de fondos: «que se invertirán de acuerdo con el reglamento interno».

SR. GOYTÍA. — Yo creo, salvo la mejor opinión del doctor Gonnet, que no habrá inconveniente en lo que propone el doctor Baudon. El hecho es no dejar taxativamente prohibido como está: conviene dejar también constancia en las bases que los fondos no son para empleados ni para una institución burocrática, sino que son «para pagar la tarea de los redactores». Así que no hay inconveniente por parte de la comisión en agregar esas palabras.

SR. STANCHINA. — Yo propongo que se haga el agregado: «y demás empleados inferiores».

SR. BAUDÓN. — «Fondos que podrán destinarse con preferencia a los redactores por sus trabajos, al secretario y a publicaciones».

SR. CERVINI. — Una moción de orden: creo que todo el agregado es inútil y entonces voy a proponer que se cierre el debate en estos términos: suprimir esa última parte, cómo se van a destinar los fondos, y que se vote hasta allí el artículo, con esa supresión.

SR. GIL. — La comisión acepta nuevamente la indicación del señor delegado Baudon, en el sentido de que se agregue la palabra «preferentemente» nada más.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar el artículo de la comisión con el

agregado de la palabra «preferentemente» que la comisión acepta.

Se votará por partes.

SR. LEÓN Y BASCALDO. — Para el caso de que no fuera aceptado en la forma insinuada por la comisión y por pensar que la redacción es más lógica y que se acomoda al propósito que anima el artículo, voy a dictar a Secretaría el siguiente: «Los recursos o fondos con que contará la Comisión Permanente se formarán con la asignación que fije el gobierno nacional y con los demás recursos que la comisión permanente pueda conseguir, con los que se atenderán los gastos de redactores, secretario y los demás que se autoricen por el reglamento que se dicte».

En este artículo se involucran los dos pensamientos: no autorizar gastos sin antes tener fondos, y recién después, una vez fijado la fuente de donde se van a conseguir, autorizar el gasto correspondiente.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar por partes.

—Se lee:

«Artículo 9º — (Primera parte). — Los gastos que demande el sostenimiento de esta Comisión Permanente, serán costeados por una asignación que fije el gobierno de la Nación y por los demás recursos que la Comisión Permanente pueda conseguir.»

—Se vota y es aprobado.

—Se lee:

«Artículo 9º — (Segunda parte). — Fondos que sólo podrán destinarse a los redactores por sus trabajos, la secretaría y a publicaciones.»

SR. GOYTÍA. — Que se diga «preferentemente».

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — «Fondos que se destinarán preferentemente a la remuneración de los redactores por sus trabajos, a la secretaría y a publicaciones.»

—Se vota y resulta negativa.

SR. GOYTÍA. — Pido que se aclare cómo ha quedado el artículo.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — La presidencia entiende que la segunda parte del artículo ha sido rechazada.

SR. LEÓN Y BASUALDO. — Que conste mi voto en contra.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Está en discusión el artículo 10.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Propongo una modificación a este artículo en el sentido de que se suprima la indicación del mes en que debe celebrarse sus sesiones la comisión.

SR. GOYTÍA. — La comisión acepta.

—Se aprueba el artículo 10 con la supresión propuesta.

—Se aprueba el artículo 11.

—En discusión el artículo 12.

SR. CERVINI. — El segundo párrafo de este artículo lo encuentro un poco confuso. Dice: «las vacantes que se produzcan en la Comisión, se llenarán solicitando la misma Comisión al Poder Ejecutivo y a los cuerpos ya indicados el nombramiento de un nuevo representante». Aquí entiendo yo que la comisión quiere decir que la vacante será llenada por el cuerpo al que corresponde el puesto vacante...

SR. GOYTÍA. — Está claro.

SR. CERVINI. — Sin embargo, pareciera que es el Poder Ejecutivo el que va a designar el reemplazante. Pero hecha esta aclaración en el acta, retiro mi observación.

—Se aprueba el artículo 12.

SR. GOYTÍA. — A riesgo de ser insistente, los miembros de la comisión piden a los señores delegados la reconsideración de la última parte del artículo 9º, o sea la parte que se refiere al pago de los redactores y de las publicaciones.

La Conferencia podía reconsiderar todo lo resuelto con respecto al destino que se da a los fondos, porque lo único que ha querido con este artículo es refutar el argumento que se ha hecho de que se va a organizar una oficina burocrática; por eso se limitó a establecer en cuanto le fué posible, no en

forma taxativa, que los fondos que se obtengan, se destinen exclusivamente al pago de las personas que presten servicios, es decir, remuneración de empleados, que por otra parte sería mejor no tenerlos, porque no hacen falta, desde que el trabajo va a ser hecho por los redactores, y la comisión cuando se reúna a considerar esos dictámenes será la que decida si se aprobarán o se rechazarán. Entonces, fuera de los secretarios permanentes de la comisión, no sé qué empleados se han de tener para remunerar. Por eso la asamblea podría reconsiderar el artículo 9º, estableciendo que se remunerará a los redactores y secretarios, sin incluir empleados ni porteros, etcétera.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de reconsideración que se ha formulado.

—Se vota y resulta negativa.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Pido la palabra, para solicitar una aclaración respecto a una duda que me plantea, diré así, la personalidad de la comisión que dejamos creada por este proyecto.

Se habla aquí de autonomía de la comisión. El concepto de autonomía implica en cierto modo una independencia absoluta, pero la comisión dependerá de las conferencias de abogados que se realicen bianualmente. Deseo que se aclare este punto para saber definitivamente a quién o quiénes va a quedar supeditada la comisión. Para que este reglamento sea un verdadero estatuto es necesario que su reforma no dependa de la propia comisión.

SR. CASTIGLIONE. — Por mi parte, pienso que eso es lógico. Porque ¿quién reforma las leyes? El Congreso. Nosotros creamos esta comisión, y las nuevas conferencias de abogados podrán modificarla; las conferencias de abogados vienen a ser en este caso lo que el Congreso. Por eso a la comisión solamente le damos facultad para que dicte su reglamento interno, dentro de un marco que se le determina.

Me parece que este es el espíritu del proyecto que se discute.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Casualmente, la explicación que ha dado el señor delegado pone en evidencia la oportunidad de modificar el artículo a que me he referido al principio. Aunque esta Conferencia se repita biennialmente (y es de desear que se repita muchas veces dentro del propósito que todos abrigamos) no tiene ni tendrá la continuidad necesaria para ejercer la expresada superintendencia de que se habla, sobre la Comisión de Estudios Legislativos. Por eso yo voy a proponer que esa comisión dependa de la Junta de Gobierno de la Federación de Colegios de Abogados.

SR. GOYTÍA. — Creo que cuando se trató el preámbulo de la constitución de la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, se tuvo en vista la creación de un organismo completamente separado de la Conferencia de Abogados. No incurramos ahora de nuevo en el error en que hemos caído hace dos años: si queremos asegurar la «permanencia» y eficacia de la labor de la comisión, debemos crearla separada, independiente de todo otro organismo, para que no sea una mera ejecutora de las resoluciones de la Conferencia.

Por ahora, la carta orgánica, las bases que la Conferencia da, son suficientemente amplias como para que viva la Comisión Permanente diez o veinte años. No nos anticipemos y dejemos a las futuras Conferencias Nacionales de Abogados el dictar las reformas que hagan falta. Yo no veo hasta qué punto sería conveniente o necesario establecer un artículo para decir: corresponde a la Federación Nacional de Abogados el reformar las bases estas o dar nuevas bases. Yo creo — puesto que la misma Conferencia de Abogados es la que crea la Comisión — que ese derecho es implícito.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Yo me pregunto: ¿qué objeto ha tenido este debate, en el cual proyectamos fijar límites a la comisión, si esa misma comisión va a poder reformar al día siguiente todo lo que se ha hecho? Y por otra parte me pregunto: ¿cómo podemos nosotros, que estamos contemplando a diario la evolución permanente del dere-

cho, pretender que lo que hacemos es perfecto, que no debe reformarse nunca?

SR. GOYTÍA. — La misma Conferencia podrá reformarlo.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Yo propongo que las presentes bases puedan ser reformadas únicamente por la Junta de Gobierno de la Federación de Colegios de Abogados.

SR. GONNET. — Lamento tener que disentir con la opinión del doctor González Sabathié. A lo menos en mi espíritu ha estado que esta comisión sea completamente autónoma, que no dependa ni de la Federación. Estamos pensando que la Comisión Permanente que deseamos sea formada de personalidades verdaderamente excepcionales en el conocimiento del derecho, pueda desaparecer. Pero también la Federación puede desaparecer, las conferencias cesar, de manera que no podemos hacer depender un cuerpo que creamos en esa forma, que queremos que sea autónomo, con grandes facultades, hacerlo depender de otro organismo que, repito, también puede desaparecer.

Yo indicaría, más bien, que se agregara un artículo al proyecto que acabamos de sancionar, en el sentido de que toda modificación que pudiera hacerse a este cuerpo orgánico de la creación de la Comisión Permanente, se hiciera por ella misma, pero con el voto de los dos tercios y con asistencia de un número determinado de miembros. Con esto salvaríamos todos los inconvenientes y le daríamos la verdadera autoridad y autonomía que necesita.

SR. BAUDÓN. — ¿Y por qué no se mantiene la autoridad de esta Conferencia?

SR. GONNET. — Es que pueden no subsistir estas conferencias.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Voy a retirar mi moción en cuanto se refiere a la dependencia de la comisión de un instituto determinado. Mi propósito esencial es el de que quede previsto el modo en que se realizará la reforma del estatuto. Acepto, pues, la moción del doctor Gonnet.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL.). — Quedaría en esta forma: «To-

da modificación que pudiera hacerse a las bases de este cuerpo orgánico, se hará por la misma comisión con los votos de los dos tercios de todos sus miembros, o de sus miembros presentes.»

SR. REVIRIEGO. — ¿No podría modificarse este agregado diciendo: que una Conferencia de Abogados también podrá introducir modificaciones si, como es de esperarse, se reúne la próxima dentro de dos años?

Insinúo esta indicación, para que la comisión, si la cree factible, la acepte.

SR. CASTIGLIONE. — Quiere decir, de acuerdo con la moción del doctor Gonnet, que una ulterior Conferencia de Abogados no puede tocar ya esto.

Yo voy a llamar la atención sobre el hecho de que el doctor González Sabathíe ha suscitado un problema complejo, y me refiero a las convenciones constituyentes de provincia cuando ponen un artículo como este: no puede reformarse la constitución hasta dentro de diez o veinte años. La Conferencia ya ha nombrado una comisión para que reforme el derecho procesal y ¿qué efecto produciría si hubiéramos agregado que esa reforma es inmutable y que no puede tocarse más? La vida cambia, la lucha por el derecho es intensa, las formas jurídicas se van modificando. Sigamos el cambio; dejemos para las otras conferencias, si encuentran mejores remedios, que hagan las reformas.

Por eso me voy a oponer a las mociones que se han formulado. Dejemos no más el artículo tal como está. Si una ulterior Conferencia cree que debe cambiarse, que se cambie.

SR. CERVINI. — Me adhiero a lo expresado por el doctor Gonnet. Hasta el mismo preámbulo de estas bases establece que lo que hacemos es crear un cuerpo para que luego ese cuerpo viva por sí, y entonces encuentre perfectamente armónico que todo lo que ulteriormente se refiera a este cuerpo lo resuelva él mismo y un quórum de dos tercios es suficiente para garantizar que la reforma será buena. Por eso apoyo la moción del doctor Gonnet.

SR. CABRAL. — Al crear la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, esta Segunda Conferencia, entiendo que

obra como una convención y de la misma manera que las convenciones crean y organizan los poderes públicos y son las únicas que pueden variarlos o modificarlos, también la Segunda Conferencia al crear este instituto de derecho es la única que en el futuro lo podrá modificar. No puede modificarse por sí, como no podría modificarse por sí en el Congreso la proporción en que pudiera elegirse los diputados, por ejemplo, sino por medio de una convención constituyente. El Congreso no puede decir: en el futuro la proporción de las representaciones será tal, sino, repito, una convención constituyente. De la misma manera puede haber necesidad de modificar algunas bases y entonces no lo podrá hacer la comisión, sino la Conferencia que es la convención en este caso.

Entonces habría que proponer que las reformas a estas bases sólo podrán dictarse por la Conferencia nacional, con dos tercios de votos. Pido que sea una atribución o facultad de la Conferencia nacional y no de la comisión.

SR. PRESIDENTE (SILAGUEIRA). — La presidencia no tiene inconveniente en conceder el uso de la palabra, pero no dos o tres veces al mismo delegado; la discusión debe hacerse con toda la opinión representativa de la asamblea. Me perdonarán que, con el propósito de encauzar el debate, dé estas explicaciones a la asamblea, pero si cada delegado va a hacer uso de la palabra varias veces, la discusión estará haciéndose al margen del reglamento.

SR. COROMINAS SEGURA. — Yo pediría que la reforma de esas bases fuera una facultad de las futuras conferencias de abogados y voy a hacer una breve observación al respecto. Si la Conferencia no tuviera ya el poder de introducir reformas en el futuro a las bases y ellas fueran, sin embargo, necesarias, ocurriría que habiendo perdido esa facultad, debería crear otra institución para responder a las nuevas exigencias que se presenten.

SR. DONCEL. — Las observaciones hechas me parece que inducen a considerar en primer término la conveniencia de aceptar la moción del doctor González Sabathíe.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — La ha retirado ya.

SR. DONCEL. — El doctor González Sabathic ha sido el iniciador de esta cuestión. Las diversas opiniones que se han dado, evidencian la necesidad de dejar establecido a quién correspondería la revisión de estas normas, que seguramente será necesario afrontar con el andar del tiempo.

Yo lamento que el doctor González Sabathic haya retirado su indicación, porque me parece que la junta de gobierno, como institución estable, está constituida fundamentalmente por las representaciones de todas las provincias, como lo está la Conferencia misma, y teniendo presente que la Conferencia trata principalmente problemas de legislación de carácter general, me parece que habiendo la misma representación en la junta de gobierno, sería muy acertado autorizar a esa junta para introducir las reformas del caso.

Ahora bien; para conciliar las dos opiniones y buscando la permanencia de las bases que se han sancionado, se podría indicar que las reformas necesarias sólo podrán hacerse por la junta de gobierno a propuesta de la comisión misma.

SR. BAUDÓN. — Entiendo que lo que se ha sostenido con abundancia en cuanto a la facultad de esta Conferencia en su carácter de poder primario o convención, es indiscutible. No cabe cuestionar que de esta Conferencia nace la Comisión Permanente y que, por tanto, de ella depende su existencia o modificación futura. Esto, aplicando un principio puro de derecho o una práctica de legislación común; pero el propósito de la creación, que es lo que también debe tenerse en cuenta, es asegurar la permanencia y el funcionamiento de esta comisión.

Entonces, considero que es perfectamente viable y práctico el temperamento de que las modificaciones a su reglamentación, que es sencillamente su carta orgánica, sean introducidas por la misma comisión, con la garantía que de por sí importan los dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros; esto sin implicar, en manera alguna, la ab-

dicación de la Conferencia de sus facultades superiores de modificar y legislar sobre la existencia de esa comisión permanente. Quiere decir que no obstante la facultad que tendrá la comisión para modificar su reglamento, la Conferencia próxima podrá, a su vez, modificar los destinos de esa comisión, variarlos, reemplazarlos por otros, etcétera. Creo que en esa forma, sin necesidad de esta declaración, puede establecerse y votarse con mayores garantías para la permanencia de esta comisión, la proposición de que su reglamento podrá ser modificado por ella misma, con los dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros.

SR. GONNET. — Pido la palabra para hacer simplemente una breve aclaración del propósito de la organización de esta Comisión Permanente. Tengo entendido que como la primera Conferencia, la presente, se propone, al crear la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, fundar un organismo con mucho prestigio. Es claro que a las primeras autoridades en las materias civil, comercial y penal que han de formar parte de esta Comisión Permanente, no les ha de gustar hallarse sometidas, en cuanto a las modificaciones de sus bases, a instituciones u organismos que a su vez necesitan de prestigio para que puedan vivir y desenvolverse. Esta Conferencia, que va a dar resultados, indudablemente, muy buenos, para el futuro de la legislación en la Argentina, tiene ya su prestigio, pero mañana puede perderlo. Esto no implica que la nueva Conferencia, si ve que la Comisión Permanente de Estudios Legislativos no desempeña sus funciones, cree otra comisión. Y seguramente que morirá la que no trabaje, y vivirá la que trabajará. De manera que dándole autoridad a esa misma comisión para que pueda modificar su propio estatuto con dos tercios de votos en la forma propuesta, me parece que aseguramos un mayor prestigio y una mayor permanencia y una vida tal vez más provechosa para la legislación del país. Ese es el propósito que he tenido al proponer el agregado y creo haber satisfecho en parte las observaciones que se han hecho a propósito de esta modificación.

SR. BASSI. — Me parece inconveniente facultar a la misma comisión para reformar sus bases; es un extremo peligroso, como será peligroso también — estoy de acuerdo con eso — reservarse exclusivamente la Conferencia el derecho de hacerlo, porque podría correrse el riesgo de que no hubiera más conferencias. Creo también que la observación formulada por el señor delegado doctor Gonnet, de que si esta comisión no trabaja se nombrará otra, importa una complicación. Pienso que entre crear una nueva comisión, porque la designada no sirve, o rectificar el proceder de la nombrada, la elección no puede ser dudosa. Podría conciliarse el propósito de unos y otros, agregando al proyecto unas palabras que dijeran que estas bases podrán ser modificadas solamente por una Conferencia futura, o en caso necesario por la misma comisión con los dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros.

SR. HERRERA. — Pido la palabra.

Voy a apoyar la moción formulada por el señor delegado doctor Gonnet. Creo que se está confundiendo la Comisión Permanente de Estudios Legislativos con una comisión interna de la Segunda Conferencia de Abogados. Esta Segunda Conferencia de Abogados ha creado este cuerpo permanente de legislación, le ha dado vida. Así como el Congreso declara provincia a los territorios nacionales, y les fija sus reglas, sus bases, etcétera, para que ellos legislen y modifiquen su legislación de acuerdo a esas mismas reglas, así la Conferencia Nacional de Abogados debe darle a esa comisión la facultad de modificar su reglamento, tanto más cuanto que al fijarle las bases, la forma así con los mismos elementos de las instituciones de que está constituida esta Conferencia.

Por estas razones voy a apoyar la moción del doctor Gonnet.

SR. RODRÍGUEZ SARÁCHAGA. — Voy a hacer una moción que creo concilia las dos tendencias. Creo que debe acordarse, como lo propone el doctor Gonnet, la facultad de reformar las bases, pero esta reforma deberá ser sometida ad referendum a la Conferencia.

SR. REVIRIEGO. — ¿Aceptaría el doctor Gonnet que en lugar de decir «se hará» dijera «podrá hacerse»?

SR. GONNET. — Mi moción es: la reforma a estas bases deberán hacerse por la misma comisión y por el voto de los dos tercios de los miembros que la componen.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar la moción del doctor Gonnet.

—Se vota y es afirmativa.

VARIOS SEÑORES DELEGADOS. — Que se rectifique la votación.

—Se rectifica la votación y resulta nuevamente afirmativa.

SR. VILLEGAS BASAVILBASO. — Desearía saber si la Comisión Permanente va a tener personería jurídica, porque tendrá que manejar fondos y necesitará de esa personería para hacerlo; de modo que habría que añadir un artículo a las bases.

SR. BAUDÓN. — Que se considere esto facultativo de la comisión.

SR. GONNET. — Esa facultad es implícita.

—Asentimiento.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Acaba de llegar a la mesa de Secretaría el trabajo del doctor Colmo, distinguido magistrado y jurista que todos los señores delegados conocen, sobre el punto primero de la Conferencia; vale decir, que ha llegado tarde. Viene el articulado con los fundamentos y una amable tarjeta del doctor Colmo, correspondiendo a la invitación que yo le hiciera de prestar su colaboración a esta Conferencia y tomar parte en sus debates, diciendo que sólo pudo hacer lo primero y no lo último, lamentándolo y enviándole sus saludos.

Debe ser un trabajo de importancia.

SR. GONNET. — Yo no lo conozco, porque recién ha llegado, pero haría indicación para que se publicara con la versión taquigráfica de las sesiones de la Conferencia, manifestando que ha llegado después de tratado el punto. Si

hay reformas, la misma comisión que se va a constituir, las tomará en cuenta.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — ¿No podría la Conferencia recomendar a la Comisión de Estudios Legislativos, que oportunamente tome en cuenta este trabajo?

SR. GONNET. — Para recomendarlo tenemos que conocerlo. Que se publique junto con los trabajos de la Conferencia, manifestando que ha venido después de sancionado el proyecto.

SR. BAUDÓN. — Hago moción en el sentido de que además de publicarse, la presidencia se dirija al doctor Colmo, como una resolución de la Conferencia, manifestando las circunstancias en que ha llegado.

SR. REVIRIEGO. — Sin perjuicio de la sanción del proyecto, como todavía no se ha clausurado la Conferencia, y como el trabajo puede aportar ideas muy útiles a este primer organismo que se va a crear, yo propondría que pasara a la comisión para que estudie este asunto, y si ella encuentra atinadas algunas de sus observaciones, las someta nuevamente a la Conferencia antes de terminar sus sesiones, en lugar de referirnos a la futura comisión.

SR. BAUDÓN. — Yo pediría que se votara con la ampliación propuesta.

SR. ZAVALA ORTIZ. — Yo descartaría que este proyecto se agregara a las publicaciones de la Conferencia.

No es necesario que pase a comisión, porque aun cuando el proyecto sea, como muy positivamente será, muy interesante, el último artículo que se acaba de sancionar, faculta a la comisión creada para que introduzca todas las modificaciones que crea convenientes. Por consiguiente, esa comisión, al estudiar el proyecto del doctor Colmo, y sus fundamentos, podrá o no introducir modificaciones.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar la moción del doctor Gonnet.

—Se lee:

«Que se autorice a la presidencia a publicar el estudio del doctor Colmo con los trabajos de la Conferencia, por haber llegado tarde.»

SR. GONNET. — Con el agregado del señor delegado Baudón, de que la presidencia se dirija al doctor Colmo haciéndole saber las circunstancias en que ha llegado su trabajo.

—Se vota y resulta afirmativa.

(Véase Parte III, Anexos).

VARIOS SEÑORES DELEGADOS. — ¿Qué se ha votado?

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a repetir la lectura de la moción.

SR. REVIRIEGO. — La mía también, porque no se ha leído. Yo propongo que vaya al seno de la comisión porque todavía no se ha disuelto la Conferencia.

SR. SECRETARIO (BERGHIMANS DONCEL). — (*Leyendo*): «Que se autorice a la presidencia para publicar el estudio del doctor Colmo con la versión taquigráfica de la Conferencia, por haber llegado tarde y para que se dirija al doctor Colmo haciéndole saber las circunstancias en que ha llegado su trabajo.»

SR. DONCEL. — Hay una moción substitutoria del doctor Reviriego; podría leerse también.

SR. REVIRIEGO. — Que pase a la comisión respectiva el proyecto remitido por el doctor Colmo a fin de que dicte en el caso de que encontrara pertinentes algunas modificaciones a las bases sancionadas.

SR. GIL. — Creo que no corresponde que se vote sino que quede constancia de las manifestaciones de los señores delegados, porque ha sido ya aprobada la moción del doctor Gonnet.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Tiene razón el doctor Gil. Esta moción significa substituir y dejar sin efecto la moción, aprobada, del doctor Gonnet.

SR. VERA VALLEJO. — Podría rectificarse la votación.

SR. COROMINAS SEGURA. — Pido que se reconsidere la moción propuesta por el doctor Gonnet y sancionada por la Conferencia. Entiendo que obramos con un excesivo parlamentarismo, nos sentimos un poder público, y en lugar de

realizar obra práctica nos negamos a tomar conocimiento de colaboraciones que por el prestigio de quien las envía debemos suponer que pueden ser sumamente útiles.

Antes de que la Conferencia concluya sus tareas, estamos en término de considerar el proyecto del doctor Colmo; de manera que parecería elemental que se escuche el dictamen de la comisión respectiva antes de disolverse, y ella nos dirá si cree o no pertinente introducir modificaciones al despacho sancionado en el día.

SR. CASTIGLIONE. — La moción implica una reconsideración. Necesita dos tercios de votos.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar la moción de reconsideración.

—Se vota y resulta negativa.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Vamos a continuar en la sesión de la tarde con el punto número 3, relativo a la legislación ferroviaria.

Queda levantada la sesión.

—Son las 12 y 15 horas.

SEGUNDA SESION ORDINARIA

PRESIDENCIA DEL DOCTOR HENOCCH D. AGUIAR

DELEGADOS Y MIEMBROS DE LA CONFERENCIA PRESENTES: doctores Aguiar Henoch D., Alegre Manuel V., Alsina Ramón M., Alvarez Julio, Alvo Sebastián E., Astrada Ponce Carlos, Avalos Antonio, Avalos José M., Baijosa Feliciano, Barraquero Julián, Barrera Juan F. de la, Bassi Aurelio S., Baudón Héctor R., Berghmans Doncel Carlos A., Biscenart Blanco Juan P., Bullrich Rodolfo, Cabral Angel H., Campa Juan de la, Canal Feijóo Bernardo, Cano Guillermo G., Carlomagno Juan C., Carranza Adolfo, Casañas Miguel, Castellanos Benjamin, Castiglione Antonio, Castillo Ramón S., Castro Jorge S., Cervini Francisco, Chedufau Edmundo C., Codoni José E., Corominas Segura Rodolfo, Correa Alejandro, Corvalán César S., Courel Carlos D., Day Alberto A., Doncel Salvador A., Echagüe Pedro A., Escobar Sáenz Julio M., Ferreira Enrique A., Frias Leopoldo, Frias Wenceslao, García Zavala Rafael, Gil Enrique, Gonnert Manuel B., González Sabathic Juan M., Goyeneche Romualdo, Goytia Roberto D., Goytia Victor D., Guñazú Alberto, Herrera Santiago D., Jofré Tomás, Labanca Gabriel, Lafaille Héctor, Lagos García Luis, León y Basualdo Arturo de, Lobos Roberto N., López Domínguez Ramón, Llan de Rosos Ernesto, Latella Frias Donato, Martínez Paz Enrique, Mazzi Rogelio, Méndez Miguel G., Molina Luis E., Morey Ramón, Morixe Jerónimo A., Moyano Escalera Salvador, Novillo Saravia Lisardo, Olmos Lucas A. de, Orgaz Raúl A., Ortiz Florencio J., Otero Capdevila Benjamin, Palacios Benjamin, Páez de la Torre Manuel, Petra Demetrio, Quiroga Pedro R., Ramallo Carlos M., Reviriego Emilio, Ríos Eduardo, Rodríguez Ribas Vicente, Rodríguez Sarachaga Oscar, Romero del Prado Victor N., Rothe Guillermo, Serrey Carlos, Sierra Celestino D., Silgueira J. Honorio, Stanchina Camilo F., Torino Enrique, Trianes Francisco A., Urraza Estanislao de, Vera Cruz, Vera Vallejo Ricardo, Vicchi Rodolfo, Vilgré La Madrid Juan, Villegas Basavilbaso Florencio, Viñas Ibarra Humberto, Zaefferer Silva Oscar y Zavala Ortiz Alfredo.

SUMARIO

— — —

—Asuntos entrados.

—Transportes terrestres. (Consideración y aprobación del dictamen de la Comisión Especial).

—Sociedades de responsabilidad limitada. (Consideración y aprobación del dictamen de la Comisión Especial).

—Registro Público de Comercio. (Consideración y aprobación del despacho de la Comisión Especial).

—Destino de las resoluciones aprobadas por la Conferencia.

6.—Contrato CIF. (Consideración y aprobación del dictamen de la Comisión Especial).

7.—Agasajos.

1

Asuntos entrados

En la ciudad de Córdoba, a veintiseis días del mes de Octubre de 1926, reunidos en el salón de actos de la Universidad, los delegados arriba indicados y siendo las quince horas y media, dice el:

SR. PRESIDENTE (AGUIAR). — Está abierta la sesión.

Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — La comisión encargada de estudiar lo concerniente a transportes ferroviarios ha presentado su despacho. También lo ha hecho así la comisión encargada de expedirse sobre sociedades de responsabilidad limitada. Y la comisión especial para considerar asuntos fuera del programa oficial de la Conferencia, ha despachado el concerniente a reformas a la Constitución, dando cuenta asimismo de la forma en que quedaron distribuidos los cargos de dicha comisión. Por su orden, corresponde tratar en primer término el asunto sobre transportes ferroviarios.

2

Transportes terrestres

—Se lee el despacho de la comisión sobre transportes ferroviarios.

A la Segunda Conferencia Nacional de Abogados.

Vuestra Comisión de Transportes Terrestres, después de estudiar detenidamente el proyecto del miembro de esta comisión, ingeniero Carlos M. Ramallo, y el meditado estudio que lo fundamenta, teniendo en cuenta que conviene armonizar principios de la legislación común y de leyes federadas, os aconseja se designe una comisión especial para que estudie el mencionado proyecto y presente su dictamen en la próxima Conferencia.

Juan P. Biscayart Blanco. — Rodolfo Bullrich. — Romualdo Goyenche. — Luis Lagos García.

SR. PRESIDENTE (AGUIAR). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

SR. BISCAYART BLANCO. — Indiscutiblemente es necesario explicar a la Conferencia las causales que ha tenido la comisión para llegar a este dictamen. El trabajo del señor delegado, ingeniero Ramallo, es sumamente interesante, lleno de datos, especialmente datos actuales y de legislación comparada. Pero como él mismo lo manifiesta en su trabajo, es, ante todo, ingeniero y no abogado; por consiguiente ha incurrido en peque-

ñas invasiones, diré, al querer legislar el contrato de transporte en disposiciones de derecho federal, como el que se refiere a la ley de ferrocarriles y disposiciones reglamentarias. Ante la necesidad de hacer un plan orgánico que contemplara todas las situaciones y especialmente las necesidades del momento en materia de legislación ferroviaria, todos los representantes de las empresas ferroviarias y los de otras instituciones, se han obligado a hacer un dictamen, si se quiere un poco deficiente porque no llega a ninguna conclusión, pero con el único fin de aclarar y metodizar el trabajo, y que consiste en recomendar a esta Conferencia que se designe una comisión especial para que produzca un informe detallado o en conjunto, para presentarlo en la próxima Conferencia de Abogados a reunirse dentro de dos años.

Estas son, brevemente expuestas, las razones que han obligado a la comisión a dictaminar en este sentido. Por lo demás, la comisión está dispuesta a aceptar una ampliación sobre cualquier detalle que los señores delegados consideren necesario para mayor claridad de este asunto; pero yo deseaba poner de manifiesto las razones que la han obligado a llegar a estas conclusiones.

SR. PRESIDENTE (AGUIAR). — En discusión el despacho de la comisión.

SR. BARRAQUERO. — ¿Cuál es la parte dispositiva? ¿Que se trate en la próxima Conferencia?

SR. BASSI. — Me parece que debemos adherir a esta opinión, en razón de que los que no hemos estudiado este proyecto, y que recién nos enteramos de sus bases por la lectura de la hoja en que está impreso el despacho de la comisión, nos encontramos inhabilitados para emitir una opinión acertada. Por esta razón, creo que el proyecto debe pasar a la comisión especial encargada de estudiarlo.

En consecuencia, pido que se acepte el temperamento aconsejado por la comisión.

SR. SILGUERA. — Pido la palabra.

Creo — no sé si he entendido mal — que la primera comisión especial encargada de dictaminar sobre este asunto, se ha puesto de acuerdo sobre uno o dos

puntos proyectados por el ingeniero Ramallo; si no me equivoco, uno de ellos es el relativo a prescripción.

Desearía saber si tales puntos pueden tratarse por separado o, si a pesar de haberse puesto de acuerdo la comisión respecto de ellos, está inhabilitada para producir un dictamen en general.

Pido simplemente que se me aclare esta duda.

SR. BISCAYART BLANCO. — Pido la palabra.

Debo manifestar que respecto a la prescripción se ha presentado una duda.

Indiscutiblemente la comisión pensó que era menester modificar el término de la prescripción, porque no pone en duda que la prescripción de diez años, sea debida a una omisión legislativa; pero, nos encontramos con esta circunstancia que me fué grato sugerirle al doctor Bullrich, de que la ley de Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias, en su artículo 9º, inciso 6º, establece una prescripción especial de un año respecto a lo «pagado de más». Le decía al doctor Bullrich, que debíamos armonizar estas disposiciones, puesto que ese rubro, que podríamos decir, que forma el fondo de las cajas, importa alrededor de unos treinta millones de pesos anuales que deben ser reintegrados por las empresas ferroviarias a dichas cajas, y si estableciéramos la prescripción anual con respecto al cargador, la caja perdería esos fondos, ya que en esta forma, con respecto a lo pagado de más, la caja viene a ocupar el lugar del cargador durante el plazo que transcurre entre uno y diez años.

Debido a esta serie de circunstancias presentadas a último momento no nos ha parecido discreto formular un despacho llevándonos por delante esa ley especial relativa a la prescripción.

No sé si he explicado con suficiente claridad cuáles han sido los motivos de último momento que nos han obligado a llegar a esta conclusión definitiva.

SR. RAMALLO. — Respecto a los términos de la prescripción, pienso que sería preferible dejar libre el terreno para que se trataran las nuevas situaciones que puedan crearse con el estudio de los términos de prescripción en

los transportes marítimos para armonizarlos con los ferroviarios y con los que ya han sido contemplados en proyectos de ley. De manera que si se ha sugerido que no se hiciera un caso especial de la prescripción, sino que pasara a estudio de una comisión especial, por mi parte solamente debo recalcar que yo no he tratado sino de formular algunas sugerencias, en el sentido de hacer notar que en la práctica del transporte ferroviario se presentaban situaciones de hecho en las que la ley no armonizaba suficientemente con sus necesidades; y entonces me ha parecido muy oportuno, diré, plantear estos problemas para que los abogados los contemplen y los estudien. De manera que por mi parte, me he adherido en toda forma a la resolución de la comisión.

SR. PRESIDENTE (AGUIAR.). — Si no se hace observación, se da por aprobado el proyecto.

—Aprobado.

SR. STANCHINA. — Quisiera saber, señor Presidente, en qué forma se constituirá esa comisión y quién la designará; si la Conferencia o la Junta de Gobierno de la Federación. A tal fin quiero significar que la comisión que se nombrará para estudiar el proyecto del ingeniero Ramallo, debe estar integrada, no sólo por los representantes de las empresas particulares e instituciones afines, sino también por algún miembro de la Conferencia que se haya especializado en el estudio de esta materia, además de los profesores de las universidades nacionales y de dos o tres delegados que, en este caso, representarían al comercio en general, del que no debemos olvidarnos por referirse dicho proyecto a un contrato que incide directamente sobre las transacciones en que intervienen y de cuya importancia informan los numerosos litigios que se ventilan en los tribunales de la Capital Federal y de las provincias. En consecuencia, y previa la aclaración solicitada, propongo que dicha comisión se integre en la forma indicada.

SR. PRESIDENTE (AGUIAR.). — ¿Es un agregado a la parte ya aprobada del despacho?

SR. STANCHINA. — Sí, señor Presidente; que la comisión se integre con los representantes de las empresas ferroviarias e instituciones afines, con profesores de las universidades nacionales y tres delegados de esta Conferencia.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — El señor delegado Stanchina ha formulado una proposición que implica un agregado al despacho ya sancionado. La Conferencia debe resolver si ese agregado se discute ya o se pasa a estudio de la comisión respectiva.

SR. VILLEGAS BASAVILBASO. — Hago moción en el sentido de que se entre a considerar de inmediato la proposición del señor delegado.

—Asentimiento general.

SR. PRESIDENTE (AGUIAR). — Está en discusión la proposición del señor delegado doctor Stanchina.

SR. BISCAYART BLANCO. — Pido la palabra.

Entiendo que dada la importancia de todo lo que se refiere a ferrocarriles en nuestro país, el número de los que van a formar la comisión respectiva es lo de menos; lo interesante es que esa comisión haga una encuesta entre todas las instituciones y personas que tengan relación con los ferrocarriles y los contratos de transporte, y de acuerdo al resultado de esa encuesta (para lo cual se establece un término prudencial de dos años, hasta que se vuelva a reunir la Conferencia), los datos que arrojen las estadísticas y las opiniones de los profesores de las universidades, profesores de los centros mercantiles, etcétera, llegue a conclusiones definitivas y prácticas. Lo demás no interesa, señor Presidente.

SR. RAMALLO. — Pido la palabra.

A mi modo de ver podría completarse la sanción ya dada, agregando que una comisión de tres o cuatro miembros aconseje el temperamento a adoptarse, previa consulta a las instituciones a que se ha referido el señor delegado que me ha precedido en el uso de la palabra. Como no se trata de discusiones doctrinarias, de principios de de-

recho, sino de sanciones de hecho, una comisión de tres o cuatro miembros, como digo, que se establecería en los centros más vinculados con la materia de que se trata, sería lo más equitativo. Concretaría mi indicación en esta forma: las proposiciones definitivas de la comisión que tomará a su cargo el estudio de estas cuestiones ferroviarias, se harán previa consulta a las instituciones públicas y privadas del país que tuvieran atinencia con los transportes ferroviarios, documentando sus estadísticas, comunicaciones, observaciones, etcétera. En una palabra, que las conclusiones a que llegue la comisión, sean el resultado de la encuesta que realizará entre las instituciones y centros de producción del comercio e industrias del país.

SR. STANCHINA. — La modificación propuesta por el señor delegado ingeniero Ramallo se refiere únicamente al método de trabajo que va a desarrollar la comisión, — cosa que es materia de la misma, — pero que no tiene atinencia con la forma en que ella estará constituida. Es necesario, pues, conocer cómo va a quedar integrada esa comisión, por lo que pido que se establezca su constitución, pues de otro modo no se habría logrado el propósito que manifiesta el despacho aprobado, de que se declare que es una comisión la que deberá presentar este proyecto a estudio de la Tercera Conferencia de Abogados que se realizará dentro de dos años.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — Las manifestaciones del señor delegado no corresponden a esta parte de la discusión, y si serían oportunas cuando se resolviese la designación de los miembros de la comisión especial que ha de estudiar este tema.

Yo por mi parte, desearía conocer el criterio de la comisión sobre quien ha de designar los miembros que van a integrar esa comisión especial.

SR. BISCAYART BLANCO. — Para evitar entrar en el terreno de declaraciones abstractas, debo manifestar que en mi concepto podría ser el Presidente de esta Conferencia, o la Federación de Colegios de Abogados, quien designe

las personas que han de constituir esa comisión.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — Podría ser la Federación de Colegios de Abogados.

SR. DONCEL. — La comisión encargada de estudiar el tema de sociedades de responsabilidad limitada, produjo un dictamen, en el que se aconsejaban únicamente bases.

Se ha pensado que había muchos puntos del Código de Comercio que necesitan reforma; y no podrá pretenderse que la comisión hiciera un proyecto que no guardase coordinación con los otros. Como en la Primera Conferencia realizada, las bases dictadas sobre reformas a los Códigos de Procedimiento Civil y Penal y las distintas conclusiones a que se llegaron en el estudio de los diversos trabajos que consideró dicha Conferencia, pasaron a una comisión para que ésta los estudiase, coordinase y presentase al Congreso nacional, se ha pensado que debería hacerse lo mismo con el proyecto de reformas al Código de Comercio.

Pienso, pues, que el despacho que acaba de leerse, puede ser remitido a esa comisión encargada de proyectar la reforma al Código de Comercio, a la que también deberían ir todas las conclusiones a que llegasen las distintas comisiones.

Formulo moción en ese sentido.

SR. SECRETARIO (ALVO). — La moción del señor delegado, ¿es en el sentido de que las distintas conclusiones a que lleguen las comisiones que estudian los puntos comprendidos en el tercer tema, sean confiadas a una comisión encargada de proyectar la reforma del Código de Comercio, como ha ocurrido vez pasada con los proyectos de reformas a los Códigos de Procedimiento Civil, Comercial y Penal?

SR. DONCEL. — Sí, señor.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — Desearía saber, si esta resolución no impediría nombrar comisiones especiales.

SR. DONCEL. — Así lo estimo yo.

SR. PRESIDENTE (AGUIAR). — Primero debe votarse la moción del señor delegado Stanchina.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — ¿El doctor Stanchina aceptaría un agregado a la última parte de su moción en estos términos: la comisión quedará integrada con profesores de las universidades nacionales, representantes de las empresas ferroviarias, instituciones afines y de tres delegados de esta Conferencia; los miembros de dicha comisión serán designados por la Federación de Colegios de Abogados?

SR. STANCHINA. — No tengo ningún inconveniente.

SR. PRESIDENTE (AGUIAR). — Se va a votar la moción formulada por el doctor Stanchina.

—Se vota y es afirmativa.

3

Sociedades de responsabilidad limitada

SR. PRESIDENTE (AGUIAR). — Se va a leer por Secretaría el despacho de comisión sobre sociedades de responsabilidad limitada.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — (*Leyendo*):

Vuestra comisión ha considerado los antecedentes y trabajos presentados sobre institución de las sociedades de responsabilidad limitada y por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente proyecto:

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados,

DECLARA:

Que la incorporación a nuestro Código de Comercio de las sociedades de responsabilidad limitada es una necesidad exigida premiosamente por el desenvolvimiento del comercio y de la industria media. Consecuente con estos principios, este nuevo tipo de sociedad debe ser legislado reconociéndoles su independencia y autonomía, sin perjuicio de referirlo a las disposiciones de carácter general contenidas en los Códigos Civil y de Comercio, que ar-

moníen con su naturaleza jurídica y sobre las siguientes bases:

- 1º Pueden ser objeto de esta sociedad los actos civiles o comerciales, con exclusión de los que se refieren a empresas bancarias, de seguros, de capitalización y de ahorro;
- 2º El capital no debe formarse acudiendo a subscripciones públicas, ni representarse por títulos negociables;
- 3º La cesión de la cuota debe reglamentarse en forma de asegurar los derechos del socio a transferirla, sin perjudicar a la sociedad, permitiendo el ingreso de elementos indeseables, y
- 4º Debe asegurarse la estabilidad del capital social ofreciendo periódicamente a los terceros la posibilidad de informarse de esta circunstancia y de la identidad de los socios por medios sencillos y económicos.

Ramón S. Castillo. — Vicente Rodríguez Ribas. — Emilio Reviriego. — Salvador A. Doneel.

SR. CASTILLO. — Pido la palabra.

La comisión que ha estudiado el proyecto en discusión, me ha encomendado el informe respectivo, sólo en consideración a ser el menos joven de los componentes de aquélla (para no pronunciar una palabra que no deja de ser molesta a cierta altura de la vida). (*Risas*).

La comisión ha estudiado los proyectos presentados sobre sociedades de responsabilidad limitada y aunque ha considerado que todos son dignos de la mayor atención, porque contribuyen eficazmente al estudio de esta materia, en particular el presentado por el doctor Doneel, ha preferido apartarse de ellos para formular un proyecto distinto, que fija sólo las bases fundamentales que a su juicio, deben establecerse, para legislar sobre este tipo de sociedades.

Entiendo la comisión que no es práctico pronunciarse en una Conferencia de esta naturaleza sobre un proyecto, en todo su articulado, porque esta operación es para técnicos o especialistas en la materia, más aún tratándose de una

institución nueva, como la del proyecto, íntimamente vinculada a las ya existentes, pues se corre el riesgo de incurrir en errores, contradicciones u omisiones por la imposibilidad de hacer una compulsa seria de los antecedentes necesarios.

La primera cuestión que nos hemos propuesto es la de saber si la reglamentación de este nuevo tipo de sociedad, debe hacerse como una modalidad de la sociedad colectiva o como una variedad de la sociedad anónima o como una sociedad independiente de los tipos tradicionales, teniendo en cuenta que cada uno de esos procedimientos tiene sus defensores en la doctrina y su aplicación práctica en la legislación de otros países.

Como se verá por el proyecto de que se ha dado lectura, nos hemos decidido por el último temperamento, porque debiendo aplicarse estas sociedades a la industria y al comercio medio, a diferencia de la colectiva, que se presta para el pequeño comercio y la anónima, a la gran empresa, lógicamente debe acordársele una autonomía e independencia, dentro de la esfera de acción de las necesidades que la determinan.

Esta solución que tiene importancia, desde el punto de vista jurídico, es de fácil realización entre nosotros, porque como es sabido, la sociedad colectiva, como la sociedad anónima y demás sociedades que se asemejan a una u otra de aquéllas, se hallan legisladas especialmente y todas ellas han sido referidas a principios generales que les son comunes. Más aún, el Código Civil es complementario del Código de Comercio en muchas situaciones no previstas por éste y no obstante la diversidad de situaciones previstas por aquéllas, han funcionado y funcionan sin inconvenientes. La incorporación al código, del nuevo tipo de sociedad, sobre esas mismas bases, ofrecería la ventaja de la información de nuestra doctrina y jurisprudencia, que es ya abundante en la materia.

La sociedad se aplicaría tanto a la materia civil, como a la comercial, lo que vendría a llenar un vacío en nuestra legislación, al facilitar la asocia-

ción de los agrientores o pequeños industriales, ofreciéndoles la ventaja de limitar el riesgo, que por lo general impide desarrollar el espíritu de empresa.

Las sociedades de familia, encuentran un campo propicio para desarrollarse. Diariamente puede observarse que por la muerte del jefe de un establecimiento, éste o se liquida con grave perjuicio para la economía general y para los propios interesados o se forma una sociedad anónima, con los inconvenientes que ella ofrece para los herederos.

La quiebra misma, puede ser solucionada por medio de sociedades de esta naturaleza, sin que los acreedores corran otros riesgos que los de los capitales ya comprometidos.

No voy a enumerar las demás ventajas que ofrece este tipo de sociedad, para referirme a otras de las bases fundamentales, sin excederme del tiempo reglamentario.

Entre ellas debo mencionar la prohibición de formar el capital por suscripción pública, que viene desde el origen de estas sociedades y ha sido consagrada por la legislación de todos los países que la reglamentan. La razón finca en que no es posible ofrecer al público las seguridades de una fiscalización eficaz, dado su carácter privado.

Como sociedades de familia o de amigos, que es su característica, la mente del proyecto tiende a facilitar la permanencia del socio, el mayor tiempo posible, sin vincularlo por eso, fatalmente, por toda la duración del contrato, aunque su descontento o disidencia lo hubiera convertido en un elemento innócuo o nocivo para la sociedad. El proyecto facilita el retiro del socio, autorizándolo a enajenar a terceros su cuota social, pero acuerda a la sociedad el derecho de veto, para evitar el ingreso a ella de personas que pudieran ser perniciosas para la buena marcha de los negocios sociales.

La última previsión, responde a asegurar la estabilidad del capital y la identidad de los socios, ofreciendo a los acreedores, medios fáciles para verificar esas circunstancias por un me-

canismo simple, que reemplazaría al complicado, costoso e ineficaz que se aplica a la sociedad anónima.

Tales son los motivos fundamentales, que ha tenido presentes la comisión, al formular el proyecto presentado.

SR. PRESIDENTE (AGUIAR). — Se va a votar.

—Sin observación, se aprueban en general, y en particular las bases 1^a, 2^a y 3^a.

—En consideración la base 4^a.

SR. ZAEFFERER SILVA. — Pido la palabra.

Yo solicitaría una aclaración del señor miembro informante y es la siguiente: si dentro del concepto de las bases que se acaban de leer se ha considerado el principio de la limitación de la responsabilidad en todos sus aspectos; si la limitación del proyecto se refiere exclusivamente al aporte social o si, como existe en otras legislaciones, esa limitación puede referirse a sumas determinadas que pueden no coincidir con el capital o a un múltiplo, al décuplo, al doble, al triple, por ejemplo: del aporte o cantidades que determinen los socios al ingresar en la sociedad.

Finalmente, hay otra cuestión muy interesante y es ésta: la limitación de la responsabilidad frente a los acreedores y la limitación frente a los socios. No recuerdo en cuál de las legislaciones que tratan este interesante tema se establece esta excepción, de que los socios pueden determinar una cuota por la cual son responsables exclusivamente ante sus consocios, cuota que deberán integrar por resolución de la mayoría, pero esa cuota no responde a la acción de los terceros acreedores. Yo desearía saber si se han considerado esas circunstancias al concretarse las bases.

SR. CASTILLO. — La comisión no ha considerado el punto porque se refiere a la reglamentación. Involucra en realidad, una cuestión grave. En Alemania se ha prestigiado mucho la cuota suplementaria. Su complicación al establecer una responsabilidad de orden interno y una garantía para los casos de

liquidación, justifica que será recibida con muchas reservas.

La cuota supletoria en el orden interno, limitada; y la cuota de garantía para el caso de liquidación. Pero todas estas cuestiones, son motivo de reglamentación, y me parece que si formulamos declaraciones de esta naturaleza tendremos que informar también sobre otras cuestiones de detalle, y nosotros hemos querido solamente fijar esos cuatro puntos fundamentales que dominan toda la cuestión.

SR. ZAEFFERER SILVA. — Yo desearía establecer el principio de que la limitación de la responsabilidad debe ser admitida en todo sentido, o sea en sus múltiples aspectos.

SR. CASTILLO. — Es amplio; los aportes pueden ser en efectivo o en bienes que no sean dinero. En algunos sistemas se exige el pago íntegro. En otros sólo el 10, el 20 ó el 30 % y la responsabilidad solidaria por la cuota, en dinero, pagada íntegramente. Lo mismo se establece por el valor asignado a los aportes en otros bienes, pero todo esto se refiere a la reglamentación en que no ha querido entrar la comisión, como ya lo había expresado.

SR. ZAVALA ORTIZ. — Yo también deseaba esa aclaración, porque creo que en obras del propio doctor Castillo se atribuye suma importancia a la cuota social que debe aportarse íntegramente.

SR. CASTILLO. — Debo manifestar al señor delegado, que he modificado mi opinión al respecto, al considerar las peculiaridades de nuestro comercio y por eso acepto ahora que puede constituirse la sociedad, aunque no se haya pagado íntegramente la cuota. Esta exigencia impediría el desarrollo de las sociedades de responsabilidad limitada, porque se trabaja más con el crédito que con capitales efectivos.

SR. PRESIDENTE (AGUIAR). — ¿El doctor Zaefferer Silva propone algún agravado?

SR. ZAEFFERER SILVA. — No, señor Presidente.

SR. SILVEIRA. — Pido la palabra.

Desearía saber si este proyecto importa una simple declaración, o si estas

bases serán enviadas a la comisión que redacta el anteproyecto que debe ser remitido al señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública o al Congreso Nacional.

SR. CASTILLO. — La comisión entiende que habiéndose nombrado una comisión denominada de Estudios Legislativos, a ésta corresponde la redacción del proyecto bajo las bases que establece la Conferencia.

SR. SILVEIRA. — ¿Qué comisión, señor delegado?

SR. CASTILLO. — La de Estudios Legislativos ya creada.

VARIOS SEÑORES DELEGADOS. — La que se ha creado.

SR. CASTILLO. — Este proyecto irá a esa comisión que ya ha sido designada y que tiene varios asuntos a su estudio, y como será más fácil el trabajo cuanto más reducido sea el número de temas a su estudio, podría designar una subcomisión, resolución que a mi juicio sería la más acertada.

SR. CERVINI. — Entonces pido que se deje constancia de que pasará a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos.

SR. CASTILLO. — El proyecto ya dice que pasará a esa comisión permanente.

4

Registro Público de Comercio

SR. PRESIDENTE (AGUIAR). — Se va a leer por Secretaría el despacho de comisión, relativo a reformas al Código de Comercio.

SR. SECRETARIO (BERGHIMANS DONCEL). — (*leyendo*):

Vuestra comisión ha considerado también el proyecto de reformas a las disposiciones del Código de Comercio sobre Registro Público, presentado por el doctor Salvador A. Doncel, y por las razones que dará el miembro informante, aconseja la sanción del siguiente proyecto:

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados,

DECLARA:

Que conviene reglamentar el funcionamiento del Registro Público de Comercio en forma de

asegurar la inscripción de los actos sociales y representaciones en general que la requieran y la centralización en cada circunscripción de la publicidad de estos actos en un boletín oficial.

Conviene, también, reglamentar la inscripción del nombre, para asegurar la identidad del comercio y facilitar su transferencia, asegurando los derechos de terceros.

Ramón S. Castillo. — Salvador A. Doncel. — Emilio Revirigo. — Vicente Rodríguez Ribas.

SR. PRESIDENTE (AGUIAR). — En discusión el proyecto que se ha leído.

Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

SR. DONCEL. — Al estudiar las bases de la organización de las sociedades de responsabilidad limitada, la comisión ha encontrado, que es necesario se dicten disposiciones que afecten no solamente a esta clase de sociedades, sino a las demás también.

En la actualidad, las sociedades anónimas no tienen cómo comprobar las faltas de sus representantes, gerentes, administradores, directores, etcétera, sino mediante los libros que llevan y que no siempre pueden confrontarse en la forma deseada y necesaria, lo que afecta fundamentalmente su desenvolvimiento.

Se pide también que la Conferencia recomiende la reforma de los artículos 34 y 35 del Código de Comercio a fin de llenar un vacío de la legislación que actualmente no obliga a la publicidad de las inscripciones. Las inscripciones que se hacen en el Registro de Comercio son públicas porque cualquier interesado puede conocerlas, pero no en cuanto a su publicación se refiere.

La comisión encontró afinado este agregado a mi trabajo y creyó de su deber producir dictamen sobre él, confiándole el honor de su informe. Agregó además otro punto presentado por el doctor Castillo, en el que se hace notar la falta de reglamentación en el Código de Comercio sobre inscripción del nombre de las sociedades, y con preferencia de las casas de comercio.

Consecuente con el criterio que informo el anterior despacho y con el deseo de hacer un proyecto armónico de re-

formas al Código de Comercio, hemos propuesto la resolución que acaba de leerse y que por su sola lectura se informa; a pesar de las pocas palabras dichas, podría agregar los antecedentes que los señores delegados estimaran necesarios.

SR. CASTILLO. — Como el señor delegado que ha hecho uso de la palabra, se ha referido a mí, desco hacer breves consideraciones sobre la segunda parte del proyecto.

Como se lleva el estado civil de una persona, debería llevarse el registro de las casas de comercio, desde su iniciación, para identificar al comerciante y al comercio que éste ejerce; y su capacidad y economía deberían aparecer en el registro. Sus cambios, modificaciones, el cese del comercio necesariamente deben figurar en el mismo. Una publicidad adecuada completaría esa previsión.

La falta de una legislación al respecto impide la reglamentación de la transferencia de las casas de comercio en forma conveniente o del nombre que en muchos casos representa un valor considerable. Cumplidas esas exigencias, sería posible contemplar la cuestión relativa a la individualidad jurídica del comercio que tiene mucha importancia práctica y ardientes partidarios.

SR. PRESIDENTE (AGUIAR). — Se va a votar en general.

—Se vota y aprueba.

—Se aprueban sin modificación los artículos 1º y 2º.

5

Destino de las resoluciones aprobadas por la Conferencia

SR. SILGUEIRA. — Me voy a permitir formular esta pregunta. ¿Quién va a convertir en anteproyecto de ley esta declaración que hace la Conferencia, respondiendo al pensamiento de la Comisión Organizadora y al objeto de la Federación de Colegios de Abogados, es decir, que todo lo que se trajese a la Conferencia, ya consista en conclusiones concretas o en anteproyectos de ley articulados, sean enviados a los poderes públicos? ¿Es la Comisión Permanente

de Estudios Legislativos la que va a hacerlo?

SR. QUIROGA. — Eso podría establecerse, señor Presidente.

SR. CASTILLO. — Entiendo que, organizada como lo ha sido la Comisión de Estudios Legislativos, es a ella a quien deben pasarse las bases sancionadas por la Conferencia.

SR. DONCEL. — La comisión ha formulado el despacho con anterioridad a la formación de la comisión permanente, pero habiéndose resuelto ya su formación, lógicamente debe ser ella la que articule el proyecto sobre las bases que la comisión ha determinado.

SR. QUIROGA. — Tal vez convendría establecer un criterio de carácter general en el sentido de que el articulado de todos los proyectos que se presenten a la Conferencia, corresponda a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, que ya ha sido creada y que lo único que le falta es la designación de sus miembros, y así no cabría ya ninguna duda con respecto al procedimiento que debe seguirse en casos semejantes. Propongo pues que se establezca como regla general: que «el articulado de todos los proyectos que se discutan en la Conferencia, pase a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos».

SR. BERGHMANS DONCEL. — Desearía saber del señor delegado mocionante si su moción, que es de carácter general, tiene alcance con respecto al primer punto del despacho ya sancionado con el agregado aceptado por el doctor Stanchina, para que se nombrara una comisión especial por la Federación de Colegios de Abogados.

SR. QUIROGA. — Me he referido únicamente a la comisión permanente.

SR. BERGHMANS DONCEL. — Ya está resuelto que el proyecto de transporte ferroviario se pase a una comisión especial que se encargará de formular el anteproyecto respectivo, comisión que será designada por la Junta de Gobierno de la Federación. Ahora bien; la moción del señor delegado, que es de carácter general ¿modifica en esa parte dicha resolución?

SR. QUIROGA. — Yo entiendo que no, señor delegado.

SR. BERGHMANS DONCEL. — ¿De manera que solamente para el caso del proyecto de transporte ferroviario se nombrará una comisión especial?

SR. QUIROGA. — Eso es, y para todos los demás, una comisión de Estudios Legislativos que se debe encargar de todos los proyectos que se presenten, salvo disposición en contrario. La mente de mi moción es ésta: que se pasen los proyectos que se presenten a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, sin perjuicio de que se creen comisiones especiales cuando la Conferencia determinadamente así lo resuelva. Creo que así estamos dentro de una de las excepciones del reglamento general. Luego, cuando la Conferencia no manifiesta que para tal caso se designa una comisión especial, queda entendido que el asunto debe pasar a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos.

SR. VILLEGAS BASAVILBASO. — Eso implica modificar el reglamento.

SR. SECRETARIO (ALVO). — La moción del señor delegado doctor Quiroga consiste en lo siguiente: (*Leyendo*):

«Que se pasen los proyectos que se presenten, a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, sin perjuicio de que se creen comisiones especiales, cuando la Conferencia así lo resuelva».

SR. DONCEL. — En esto, señor Presidente, hay dos puntos de importancia.

Primero, la coordinación que se conseguiría sometiendo a un mismo organismo, cualquiera que fuese la comisión, el estudio de los distintos temas que vamos a proponer en esta Conferencia, y segundo, que la comisión designada presente su despacho a la Tercera Conferencia que se reunirá dentro de dos años; nadie mejor que esta comisión permanente (que podrá reunirse por seis, ocho meses o menos tiempo) para organizar estos proyectos.

Estos motivos me hacen pensar que conviene que todos los proyectos aceptados por esta Conferencia sean sometidos a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, que tiene facultades para estudiar estas declaraciones y convertirlas en proyectos.

A objeto de conseguir se incluyera también esta ley de cuestiones ferroviarias que tiene puntos de suma importancia y urgencia, formulo moción de reconsideración.

SR. PRESIDENTE (AGUIAR). — Si me permite el señor delegado, le voy a hacer una aclaración.

El proyecto sobre transportes no ha sido sancionado por la Conferencia; no se ha fijado ninguna base sobre ello; lo que se ha hecho, es postergar su consideración hasta la próxima Conferencia.

SR. DONCEL. — Pero se ha resuelto nombrar una comisión y someterlo a su estudio.

SR. PRESIDENTE (AGUIAR). — No se han formulado declaraciones sobre el proyecto.

SR. DONCEL. — Deseo que se modifique la resolución en el sentido de que se lo someta a estudio de la Comisión Permanente de Estudios Legislativos.

SR. QUIROGA. — Las razones aducidas por el doctor Doncel, coinciden en absoluto con las que me indujeron a proponer la creación de una comisión con carácter general, que se encargase de todas las bases que sancionase la Conferencia, de tal suerte, que existiendo esta coincidencia de ideas, no tengo inconveniente alguno en retirar la segunda parte de mi moción que se refiere al nombramiento de comisiones especiales.

SR. STANCHINA. — Creo que no es de aplicación al caso de los transportes ferroviarios la indicación formulada por el doctor Doncel, en virtud de que no hay despacho sobre él, y porque, además, no se han formulado bases, para que pueda considerarlo la Conferencia. En mi opinión, recién después de aprobado el despacho debe pasar a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos.

Por ello solicito que se rechace la moción de reconsideración formulada.

SR. PRESIDENTE (AGUIAR). — Se va a dar lectura de la moción del señor Quiroga tal como queda con la supresión que se ha propuesto respecto a la segunda parte.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — La moción quedaría redactada de esta manera: (*Leyendo*):

«Que todos los proyectos que se presenten, pasen a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos».

SR. VILGRÉ LA MADRID. — Yo voy a votar en contra, señor Presidente, porque esa moción importa dejar sin efecto una resolución que hemos tomado consistentemente después de una amplia y proliza discusión; no sería serio que cada pocos momentos cambiemos de opinión y estemos revocando las resoluciones adoptadas por esta Conferencia.

Para el estudio del asunto ferroviario, hemos nombrado, a conciencia, una comisión y no es posible que ahora declaremos que esa comisión ha cesado en sus funciones.

Por estos motivos voy a votar en contra de la moción presentada por mi estimado colega y amigo el doctor Quiroga.

SR. CARLOMAGNO. — Pido la palabra.

Lamento, señor Presidente, no haber podido hablar esta mañana, cuando se trató el artículo 2º, referente a la Comisión de Estudios Legislativos porque creí, y sigo sosteniendo que esta Conferencia debe designar los miembros que integren esa comisión, para que tomen en cuenta los proyectos que se están tratando y en un tiempo más o menos breve puedan producir un despacho efectivo; por lo menos creo que así deberá hacerse con el proyecto de modificaciones al Código de Comercio.

Todos sabemos, señor Presidente, que está en la carpeta de la Comisión de Legislación de la II. Cámara de Diputados un proyecto de modificaciones al Código de Comercio y que hace dos años se ha remitido un cuestionario a todas las personas que se dedican a esta clase de estudios, para que manifiesten sus opiniones, y ninguna oportunidad hubiera sido mejor que la de que de esta Conferencia salieran las bases de modificación al Código de Comercio. Todos los proyectos que se han presentado y han sido sometidos al estudio de la comisión especial, pueden ir como un conjunto de bases a una comisión de legislación uniforme que no estará constituida en el

año que viene, ni en el siguiente, porque según veo recién se va a nombrar una comisión para que organice otra con personas que van a venir con un mandato expreso de un colegio determinado y según creo son 18 los colegios de abogados en la República. Indudablemente, ese no es un buen criterio para formar la Comisión de Estudios Legislativos, porque esa comisión debe formarse con especialistas.

El doctor Castillo decía que se va a poder nombrar especialistas, pero no es así. Únicamente se nombrarán redactores y los redactores van a ser los verdaderos autores de los proyectos. Por eso sigo manteniendo mi opinión y entonces voy a pedir (en vista de que no se puede modificar un proyecto aprobado en la sesión de esta mañana), se resuelva que todas las cuestiones referentes a modificaciones del Código de Comercio pasen a una comisión especial que nombrará esta Conferencia, compuesta por diez miembros y que serán elegidos de acuerdo con sus aptitudes, para aconsejar a la II. Cámara de Diputados las reformas que necesita el Código de Comercio.

SR. SECRETARIO (ALVO). — ¿Quiere concretar su moción, señor delegado?

SR. CARLOMAGNO. — Que hasta tanto no quede constituida la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, todas las cuestiones, bases y proyectos que sean aprobados por esta Conferencia pasen a estudio de una comisión especial, que la misma Conferencia designará, para que articule los diversos proyectos y los remita como proposiciones de la Conferencia Nacional de Abogados a las comisiones de Legislación y de Negocios Constitucionales de la II. Cámara de Diputados de la Nación.

—Apoyado.

SR. MOYANO ESCALERA. — Me voy a oponer a la moción del doctor Quiroga.

Creo que hay iniciativas y proyectos que son susceptibles de adquirir su cabal importancia mediante una fórmula de declaración general, como mediante anuncio de una mera posibilidad, pero hay otros proyectos e iniciativas que por su propia naturaleza no son susceptibles

de adquirir sentido si no se los articula en un proyecto de ley. Luego una declaración general como la que propone el doctor Quiroga me parece inadecuada, tanto más que las comisiones seccionales de esta Conferencia están en plena libertad para articular los proyectos.

Las comisiones seccionales de la Conferencia acaban de sancionar despachos articulando proyectos, de modo que sería malograr toda la labor que esta Conferencia está realizando, si se admitiera como lo insinúa el doctor Quiroga, que esos proyectos han de adquirir la forma de simples bases para ser concretados después en proyectos de ley, especulando en el trabajo de la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, que se reunirá no sabemos cuándo. Yo creo más aceptable la moción del señor Carlomagno, siempre que con esa moción no se afectaran los despachos que ya existen, producidos por las comisiones seccionales de referencia.

SR. QUIROGA. — Pido la palabra.

SR. PRESIDENTE (AGUIAR). — Ya ha hablado dos veces el señor delegado.

SR. CERVINI. — Pido la palabra.

Tenemos dos mociones que resolver sobre una misma cuestión, señor Presidente. El doctor Quiroga propone que todas las cuestiones resueltas por las comisiones, incluso las abordadas por esta Conferencia pasen a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos. El doctor Carlomagno acaba de proponer que al contrario cada una de las cuestiones sea resuelta por una comisión que se designe al efecto, y luego una comisión general estudie todos los asuntos. Como las dos mociones están concretadas y considero suficientemente debatido el punto, podría cerrarse el debate.

SR. CHEDUFAU. — Pido la palabra.

Según he entendido, se propone remitir los despachos de comisión, algunos concretos, articulados, que precisamente determinan el pensamiento de los miembros de la subcomisión, a otra comisión; ya a la remota Comisión Permanente de Estudios Legislativos, ya a una nueva comisión ad hoc. Y yo pregunto a los señores delegados cuál es el propósito de someter a una segunda

deliberación las cuestiones resueltas cabalmente y mediante un articulado, como algunos despachos que hemos tenido ocasión de ver. Tengo entendido que no será con el propósito de revestir de una mayor autoridad a esos despachos de las subcomisiones sometidos a esta asamblea, porque ellos han sido el resultado de una serena y amplia discusión y del voto consciente de los delegados, y se decía hace un momento, y están por lo tanto estudiados de una manera suficiente y acabada, y listos para ser comunicados ya al Poder Ejecutivo, ya a las comisiones parlamentarias que hayan de resolver los problemas de acuerdo a estas cuestiones que nosotros como especialistas hayamos discutido previamente. Por esta circunstancia y para que no se malgore el trabajo de esta Conferencia y de las comisiones que vienen realizando una tarea con una eficiencia tal vez no sospechada por algunos señores delegados, pido que se considere que algunos despachos de comisión que tienen articulados precisos no pueden correr el albur de seguir un trámite como el que marca la moción de carácter general que se ha hecho. Si la Conferencia aceptara este temperamento, podría reservarse la proposición de esa moción para los casos concretos que se presentaran. Debo manifestar que los miembros de la comisión de que formo parte, al aceptar el nombramiento hemos creído interpretar fielmente el propósito que se tuvo para ello, y no creemos de ninguna manera que la Conferencia, como una prueba, deba remitir sus despachos a otra comisión para una nueva revisión, o acaso para un enterratorio definitivo.

El doctor Silgueira ha manifestado a la asamblea que la comisión encargada de formular el proyecto de reformas al Código de Comercio ha producido un despacho que en mi impresión es lo más completo que se haya efectuado en el país, sobre todo por una institución de la naturaleza de la nuestra, y por esa misma circunstancia creo que los miembros de esa comisión tampoco pueden aceptar que ese despacho pase a otra comisión o a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos para una nueva revisión.

Sr. QUIROGA. — Pido la palabra.

No es para usar de ella, señor presidente, sino para hacer una pregunta sobre el asunto en discusión, dado que he escuchado la exposición que ha hecho el señor delegado, con una vehemencia y convicción que realmente le honran.

— Ocupa la Presidencia el doctor J. Honorio Silgueira.

Sr. CHEDUFAT. — Muchas gracias, señor delegado.

Sr. QUIROGA. — Los delegados aquí reunidos nos encontramos cohibidos, por las disposiciones reglamentarias, que no nos permiten ordenar y exponer las ideas con la claridad suficiente por la limitación del tiempo, ni colocarnos en la situación planteada por el señor delegado doctor Chedufat.

Desearía hacer una pregunta, porque realmente me preocupa, que las palabras pronunciadas con tanta vehemencia por el señor delegado, pudieran inclinarse en definitiva las opiniones de la Conferencia, aunque me doy perfecta cuenta, de que todos los señores delegados que aquí se hallan, son lo suficientemente ilustrados como para tener un convencimiento formado sobre el asunto que está en discusión.

Sr. CERVINI. — Como la situación planteada por el señor delegado Chedufat, coloca la situación en otro terreno...

Sr. QUIROGA. — Completamente distinto.

Sr. CERVINI. — ...retiro mi moción.

Sr. CARLOMAGNO. — Voy a modificar mi moción; en una palabra, quedaré de acuerdo con el doctor Chedufat.

Sr. CHEDUFAT. — Nosotros hemos tenido la intención de que el trabajo que realizara la Conferencia resultara eminentemente práctico, y me parece que sucederá todo lo contrario si aceptamos la moción del doctor Quiroga, pues se manda este proyecto a un enterratorio.

Sr. QUIROGA. — ¡Protesto, señor presidente, no se puede designar como enterratorio a una comisión compuesta por delegados de esta Conferencia!

Sr. CARLOMAGNO. — Modifico mi moción en el sentido de que los proyectos, declaraciones, bases o resoluciones adop-

tadas por la Conferencia pasen directamente al Poder Ejecutivo o a una comisión que proyecte los artículos correspondientes a fin de someterlos a consideración del Poder Legislativo.

SR. QUIROGA. — Pido la palabra.

Voy a empezar, con toda la ecuanimidad con que deseo desempeñar mi mandato en esta Conferencia, por no aceptar los términos que he oído de dos señores delegados, al referirse a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos que se va a designar.

No creo que una comisión formada por hombres que se han trasladado a esta ciudad con el objeto de hacer una obra patriótica y perdurable, pueda prestarse a ser osario de ningún proyecto que se le someta a estudio.

SR. CHEDUFAU. — Si me permite, señor delegado.

Yo me he anticipado únicamente, a manifestar mi opinión sobre la situación que podría resultar si adoptáramos ese criterio.

SR. QUIROGA. — Acepto la aclaración del señor delegado y la agradezco.

Por mi parte, tengo el honor de ser miembro de una comisión de asuntos generales de esta Conferencia y como conozco la debilidad de mis fuerzas, aceptaré gustoso que los dictámenes que produjera, fueran sometidos a la revisión de colegas que pudieran hacer lo que yo no hubiera conseguido por la escasez de mis fuerzas intelectuales.

Por esta razón, no me explico esta vehemencia con que se quiere combatir el nombramiento de esa comisión especial, por el hecho de que el trabajo de una comisión de especialistas, sería revisado por otra comisión.

Nosotros tenemos la obligación, como hombres de ley, y como hombres que estamos aquí reunidos forjar una obra perdurable y orgánica, de extremar el esfuerzo y hacer que esa obra pase por el tamiz de todas las críticas y todas las opiniones.

Y bienvenidas sean las comisiones que se nombren con ese objeto, porque cada uno de nosotros precisamente por la práctica diaria, nos convencemos, cada día más, de que sabemos muy poco

y de que ignoramos mucho. Entonces, no me parece que sea un argumento que pueda aceptarse así sin disensión, este escrúpulo y esta susceptibilidad de la comisión, porque se someta sus proyectos a una nueva revisión.

Y me permito hacer presente a la honorable Conferencia, que no tengo absolutamente ningún amor propio respecto de la moción que he formulado y que estas palabras no son hijas tampoco de ese amor propio, sino de la voluntad, del deseo que tengo de que las cuestiones que resolvamos aquí, salgan lo mejor posible.

Con estas palabras concluyo mi intervención en este asunto, que por otra parte, ha tomado un giro inusitado y que, confieso, no esperaba porque creí que mi moción era una moción absolutamente inocente.

SR. DONCEL. — Pido la palabra, para hacer una aclaración respecto de algunas manifestaciones que se han hecho, porque los que hemos firmado de buena voluntad los despachos o proyectos de bases aprobados, no hemos creído torcer de ninguna manera los propósitos de la Conferencia ni de nadie, y creo también que la Conferencia no puede aceptar que ninguna comisión se abrogue el derecho de permitir o no permitir el destino de los despachos que se produzcan.

La Primera Conferencia Nacional de Abogados — puede consultarse la publicación respectiva — ha sancionado ideas, declaraciones, etcétera, y no se ha ido a un enterratorio como el que se predice ahora. El doctor Silgueira nos ha aseverado que está en prensa el nuevo proyecto de reformas al Código de Procedimiento, objeto del estudio de la Primera Conferencia y de la comisión a que se remitieron esas bases.

Con intervención de la Conferencia y de los miembros de las comisiones referidas, hemos pensado que debiendo modificarse diversos capítulos del Código de Comercio, no era posible que cada uno de nosotros nos pusiéramos a proyectar correcciones que será menester coordinar más tarde con todos los despachos, y por eso hemos preferido

el procedimiento de que una vez aprobados los despachos se remitieran todos a una otra comisión especial para que formara un proyecto único, sin el propósito de agraviar a nadie.

SR. VILGRÉ LA MADRID. — Voy a hacer una indicación de orden, señor presidente. Creo que en realidad se ha traído una cuestión completamente ajena al debate, lo cual implica una violación del reglamento a que estamos sujetos. Este asunto que en sí parece sencillo, ha resultado de una gravedad inusitada y entiendo yo que no lo podemos resolver improvisando, por lo que convendría pasarlo a estudio de la comisión especial para que ésta dé su opinión al respecto. Hago moción en ese sentido.

SR. QUIROGA. — Por mi parte, y en obsequio a la brevedad del tiempo, acepto la moción que formula el señor delegado Vilgré La Madrid.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — Pasar a comisión las mociones de los doctores Quiroga y Carlomagno.

SR. QUIROGA. — A fin de producir despacho para la próxima sesión.

SR. CARLOMAGNO. — Yo únicamente preguntaría dónde van a pasar todos los proyectos y todo lo que estamos tratando, pues no lo sabemos.

SR VILGRÉ LA MADRID. — Lo va a resolver la asamblea, oportunamente.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Un momento, señores delegados. Establece el reglamento que cuando no se trate de asuntos comprendidos en el programa, deben considerarse sobre tablas o pasar a una comisión, que en el caso sea la especial para tales asuntos. Para tratarlos sobre tablas, son necesarios dos tercios de votos.

SR. CARLOMAGNO. — Hago moción de que mi proposición se trate sobre tablas.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — Se considerarán las mociones por su orden: primero, la moción del doctor Vilgré La Madrid para que las mociones de los doctores Quiroga y Carlomagno pasen a la comisión especial de estudio de asuntos no comprendidos en el programa; y la moción de preferencia para tratarlos sobre tablas.

SR. STANCHINA. — Previamente debe votarse la moción de preferencia.

SR. BAUDÓN. — Debe votarse si se trata sobre tablas o no.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — Corresponde poner a votación la moción de tratar sobre tablas.

—Apoyado.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar la moción de tratar sobre tablas.

—Se vota y resulta negativa.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Pasa a la comisión.

—Vuelve a ocupar la Presidencia el doctor Henoch D. Aguiar.

SR. BAUDÓN. — En atención a la gravedad del asunto y al interés que ha suscitado en la asamblea, debe establecerse que esta comisión producirá su despacho dentro de una brevedad mínima de tiempo, si es posible esta misma tarde, cosa de no hacer peligrar el asunto.

SR. VILGRÉ LA MADRID. — Sería un doble motivo para no apresurarse.

6

Contrato CIF.

SR. PRESIDENTE (AGUIAR). — Se va a dar lectura al nuevo despacho.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — Hay un despacho de comisión sobre cláusula CIF. (*Leyendo*):

A la Segunda Conferencia Nacional de Abogados.

Los miembros de la comisión sobre cláusula CIF, que subscriben, ruegan al señor presidente recomiende la aceptación del siguiente despacho, por las razones que dará a la Conferencia el miembro informante.

«Si el comprador no hubiese verificado los efectos en el lugar de expedición, o antes de su envase, tendrá derecho a hacerlo en destino, o a exigir que el vendedor demuestre la condición, calidad, cantidad, peso y medida de los artículos con certificados que procedan

de funcionarios cuyas atestaciones hagan fe al respecto.

«Tal derecho podrá ejercer el comprador antes de aceptar los documentos que habiliten la disposición de la carga, aun mediando estipulación en contrario.»

Jorge S. Castro, — Roberto Daniel Goytia, — Edmundo C. Chedufau.

SR. PRESIDENTE (AGUIAR). — Tiene la palabra el señor miembro informante

SR. CHEDUFAU. — Señor presidente: La situación que la Argentina ocupa respecto a los otros países de la comunidad mercantil, crea el hecho natural de la compraventa, que se cumple mediante un transporte marítimo.

Esta circunstancia, que pone en contacto un vendedor extranjero con un comprador nacional, pone en juego, al lado mismo del contrato de compraventa común, un contrato de fletamento y un contrato de seguro, coincidiendo los tres en tener por objeto la mercadería de cuya introducción al país se ha tratado.

Así, la compraventa, el fletamento y el seguro convergen, para nosotros, en una sola figura jurídica, que se ha dado en llamar cláusula CIF., cuyo enunciado literal no cumple recordar en esta conferencia, por ser suficientemente conocido de los señores delegados.

La lectura del despacho de la comisión, producido unánimemente, acaso haya sorprendido a muchos entre los señores delegados, porque la solución que proyecta no alude sino a una de las incidencias en la aplicación del contrato CIF.: la relativa a la verificación del estado, especie, cantidad, etcétera, de la mercadería, en el acto de su recepción por el comprador de la misma. Pero si aquellos señores delegados juzgaran la importancia de los problemas que plantea el contrato, no con el recuerdo de las lecciones del aula sino con su experiencia profesional, concordarían con la comisión, seguramente, en que la incidencia sobre las condiciones en la recepción de la mercadería, es la incidencia fundamental para el comercio de nuestro país.

El despacho sometido a la considera-

ción de la Conferencia ha sido proyectado teniendo en cuenta la proposición del señor doctor Goytia, sometida directamente a la comisión; el informe presentado a la rama francesa de la «International Law Association», por M. Jean Rénard, relator de la comisión nombrada en París para el estudio del tema; el proyecto elaborado por la rama francesa sobre la base de dicho informe y presentado por M. Léopold Dor al Comité Internacional sobre Contratos CAF.

El estudio que termino de referir ha permitido comparar nuestras vistas con la interpretación de los principios que dominan la materia en Italia, Francia, Bélgica e Inglaterra. Y al enfocar el problema del punto de vista de las obligaciones del vendedor, hemos tenido en cuenta las *transactions* de la Cámara de Comercio de la Unión Americana, de la Asociación del Comercio Extranjero, con asiento en Nueva York; por la Unión de Comerciantes de Nueva York; por la Asociación Norteamericana de Manufactureros; por el Museo Comercial de Filadelfia y por la Asociación de Manufactureros y Exportadores de los Estados Unidos.

Con documentación tan copiosa e importante, la comisión fue solicitada por uno de sus miembros para proyectar las bases de una legislación sobre contratos CIF., que pudiese regir en el futuro la nueva modalidad de la compraventa. De haber primado tal criterio, en vez del proyecto conciso y breve que termina de leer el señor secretario, hubiéramos sometido a la Conferencia un estatuto proporcionado a la extensión de la materia. En tal caso, y tomando aliento para nuestra labor, hubiéramos comenzado por excoigitar entre los dos métodos que han apartado a los estatutos, ora latinos, ora de tipo británico; si no hubiéramos de acompañar al Comité Internacional sobre contratos CIF., que preparó su *draft* para la última reunión en Viena de la International Law Association, sobre la selección, que M. Renard hiciera, en los usos comerciales de Bélgica, Inglaterra, Francia e Italia.

De seguir el procedimiento británico hubiéramos debido redactar un contrato-tipo, en cuyos extremos cupieren las

incidencias más frecuentes de nuestro comercio exportador, quizá tomando como base el de la Corn Trade Association, de Londres, cuyo dominio de aplicación ha trascendido a los puertos franceses de Burdeos y Nantes. De todos modos la comisión no hubiera carecido de fuente informativa, pues siguiendo a Jean Renard hubiera destacado el valor de los contratos típicos de la Refined Sugar Association, de Londres, o de L'Associazione del Commercio dei Cereali e Semi, de Génova, entre muchos otros.

Teóricamente, la tarea nos hubiera sido muy aliviada; pero nos hubieran faltado las sugerencias de los gremios interesados, cuya experiencia hubiera debido orientar nuestro despacho. La protección de una plaza importadora de materia prima puede lograrse sin apelar a los requisitos indispensables para lo mismo en los puertos suramericanos, por cuyas aduanas pasan artículos cuya elaboración aumenta su valor considerablemente, y que de arribar averiados o tardíamente, carecen de valor.

Si en vez de detenernos en una acumulación de casos concretos siguiéramos el método latino o deductivo, la Conferencia debería afrontar un despacho cuyo articulado previere las situaciones más generales en la vida de un contrato CIF. Hubiéramos recapitulado las obligaciones y derechos de las partes en el contrato; respecto de éste, las condiciones de validez y causales de nulidad y rescisión. Los hechos emergentes durante el transporte desembocan el asunto frente a una compañía de seguros y un fletante, cuyas pólizas y conocimientos debiéramos contemplar como integrantes del título representativo de la mercadería, puesto en manos de su consignatario o de un banquero, si la operación conecta con un crédito documentario.

De haber prosperado en el seno de la comisión la propuesta de aceptar como base de nuestro despacho el presentado a la conferencia de este año en Viena, a iniciativa de la rama francesa de la International Law Association, hubiésemos dividido nuestro dictamen en tres capítulos que diferenciaran las operaciones en el puerto de carga; la transmi-

sión de los documentos, y las operaciones en el puerto de desembarque. Dentro de tales límites articularíamos las condiciones del embarque y del conocimiento que lo instrumenta; la póliza de seguros que cubre los riesgos a que está expuesta la mercadería y la verificación de las condiciones de esta última en el acto de ser puesta a bordo. En el segundo capítulo estableceríamos cuáles son los documentos representativos de la mercadería, en qué condiciones hacen fe sus constancias y cuándo deben ser tramitados al comprador.

Y, finalmente, saliendo al encuentro de los que en la práctica de este contrato ven meramente una venta de documentos, hubiéramos articulado un capítulo tercero, con reglas de solución para los innumerables episodios que afronta la mercadería antes de llegar a poder de su comprador.

Pero un contrato de proyecciones internacionales no puede ser concertado sin un acuerdo con el contratante de ultramar; y si tales gestiones están fuera del objetivo inmediato de esta asamblea, la Comisión debió tenerlo en cuenta para no comprometer la eficacia y el porvenir de su despacho.

Por eso no hemos enfocado sino una de las consecuencias que para el comercio y el consumidor nacionales apareja la interpretación que, de las obligaciones del comprador, han manifestado ciertos tribunales del país.

Dentro de la economía de la ley argentina las obligaciones y derechos de las partes en el contrato de compraventa se distribuyen con un criterio jurídico y de equidad. Mas cuando el comprador adquiere CIF, nuestra importación queda sometida a situaciones de orden comercial, que desplazan el concepto supuesto por la ley argentina para los derechos del comprador. Al caracterizar las consecuencias que para éste trae el contrato (CIF), diríamos: que debe pagar la mercadería antes de verificar su calidad, su arribo a destino, ni la fecha en que podrá disponer de ella; si su calidad, cantidad, época de arribo, etcétera, no concuerdan con lo pactado el contrato se tiene por cumplido, y no acuerda al

comprador derecho sino a una bonificación.

Estas conclusiones de la doctrina CIF, consolidan en reglas jurídicas la prepotencia del comercio norteamericano más que el europeo, ejercitándose frente a nuestra importación menos organizada y sin coordinación con los intereses del consumidor.

La factura CIF, incluye: el valor de la mercadería, el costo de su flete y el importe de la prima del seguro. Y como la mercadería se considera recibida por el comprador en el puerto de embarque, el fletamento y el seguro contratados a su nombre; su interés se siente apercibido por los siguientes riesgos, aparte de las contingencias de la aventura marítima: las condiciones de «navegabilidad» del buque y las cláusulas limitativas de su responsabilidad al arbitrio del armador; la solvencia de la compañía aseguradora y la extensión de su responsabilidad, limitada o caduca, en los casos de cambio de ruta, de viaje o de buque. Y si a todo añadimos que el vendedor, el transportador y el asegurador europeos, se reservan la jurisdicción de sus tribunales para toda reclamación judicial, habremos completado el cuadro que sugiere la compraventa CIF, si permanecemos ante ella en un tolerante *laissez faire*.

La ficción jurídica que tiende un velo sobre estas realidades, supone un mandato del comprador otorgado al vendedor para contratar el fletamento y el seguro; pero aun cuando tal supuesto no se halla al abrigo de muy fundadas observaciones, aun en el dominio de la doctrina, ocurre que el vendedor aplica el tal mandato hasta la recepción de la carga: ¡dándose conformidad de su propia entrega!

¡Y esto es una ficción que excede a lo discreto, según la Comisión!

El despacho que aconsejamos tiene a satisfacer al comprador respecto a la calidad, estado, medidas, etcétera, de la mercadería, en el momento de su embarque; el cual no se tendrá por hecho en condiciones si no se le certifican las condiciones de la carga mediante atestaciones que hagan fe. Complementamos nuestro despacho facultando al com-

prador para exigir tales certificaciones antes de aceptar los documentos que dan por concluida la operación, o antes de efectuar su pago; siempre que no hubiera verificado la mercadería, en el lugar de su expedición, o antes de ser envasada.

Nuestro dictamen sale al encuentro de la jurisprudencia de la Cámara Comercial. Esta interpreta que el comprador CIF, carece de todo derecho a revisar la mercadería previamente a su pago, o a la aceptación de la letra que documenta un crédito por su importe. La única excepción que afecta ese principio de nuestra jurisprudencia, entra en juego cuando la aceptación o el pago se demandan estando ya en plaza la mercadería.

Este es el único rumbo que se ha logrado abrir a la doctrina de la Cámara Comercial.

Es de equidad reconocer que la jurisprudencia dominante no ha carecido de razón objetiva. Iniciada con los primeros embarques bajo esta cláusula, su interpretación es la que pudo adaptarse a la dependencia en que nuestro comercio hubo de hallarse, frente a los exportadores que proveían nuestro consumo a un precio en cuyo cálculo seguramente entrarían las seguridades y la fácil exigibilidad de sus créditos.

Pero los tiempos han cambiado, desde que nuestro país ha alcanzado en la escala de importación la grandiosidad que actualmente demuestra.

Si nuevas industrias no hubieran acelerado el progreso logrado por las naciones sudamericanas del Atlántico en los últimos quince años, nadie se extrañaría en pensar que nuestra actitud respecto de los bien organizados proveedores de nuestra importación tenía que ser, más bien, una actitud de acatamiento. Pero las circunstancias actuales son otras, repito; y una demostración de que las circunstancias han cambiado nos es dada por algunos de nuestros compañeros de la Conferencia, ilustres miembros del Poder Judicial hasta hace poco tiempo, quienes han establecido también este cambio en la situación respectiva de vendedor y comprador. En vista de las nuevas circunstancias del desarrollo de

nuestro comercio, y de la ingerencia grave que la cláusula CIF. tiene, hasta desorganizar la economía del Código de Comercio; yo tengo la manifestación hecha por algunos de los más prestigiosos en cuanto que, si otra vez hubieren de resolver el asunto, ya no se inspirarían en los principios teóricos, sino que, apreciando la situación actual la resolverían de conformidad a los bien entendidos intereses del país.

Por esa circunstancia nuestro despacho enfoca meramente la incidencia de la recepción de la carga, y entra a dictaminar articuladamente. Prevé, primeramente, la situación de que la carga haya sido revisada por el comprador — y cuando dice comprador dice su agente en el puerto de embarque — y en todos los casos le obliga a aceptar los documentos representativos de esa carga, como en una compraventa ya aprobada. Se coloca en el segundo supuesto: y en este enfoca las modalidades de la plaza de exportación. Es sabido que una profesión conocida en el comercio marítimo y que se ha desarrollado en los países exportadores de materia elaborada, es la de revisores de mercaderías, funcionarios que no tienen un carácter público, pero que gozan del consenso público en el sentido de autoridad pericial. Estos funcionarios expiden certificados, a solicitud del interesado, al establecer las condiciones de la carga, determinando en esos certificados las condiciones, la naturaleza, el peso y la medida de la mercadería, etc., que se deposita en las bodegas. En este segundo supuesto damos por bien entregada la carga: cuando al conocimiento de embarque, a la factura del vendedor, y a la póliza de seguros se agrega este certificado. De esta manera se asegura la perfecta transmisibilidad del conocimiento, que en el concepto de la nueva legislación internacional fundada en las reglas de La Haya, es un recibo de mercadería transmisible con la misma facilidad que la misma mercadería.

Estipulamos, como condición de defensa para el adquirente, en el caso de que no haya revisado la mercadería, o que no se anexen los certificados respectivos (los certificados de revisión, peso, etcétera), que tenga derecho de hacerlo

antes de aceptar la letra y de pagar por adelantado la mercadería. Y con el propósito de salir al encuentro del empuje que traen los contratos de adhesión con cláusula que el comprador no hubiese aceptado, de haber tenido ocasión de discutir, sanciona también el despacho presentado por unanimidad de la comisión la nulidad de toda disposición que tienda a disolver las garantías que nosotros ofrecemos al comprador, y que la Conferencia le dará en el caso de que este despacho sea aprobado, como lo solicito de la misma. (*Aplausos*).

SR. ZAEFFERER SILVA. — Pido la palabra.

Yo estoy conforme en general con las manifestaciones hechas por el señor delegado, pero observo que en su brillante exposición ha omitido considerar una circunstancia importantísima. Ha manifestado el señor delegado que el contrato de compraventa CIF. es el resultado de la concurrencia de tres contratos, el de la compraventa, el del seguro y el del fletamento. Pero ha olvidado un elemento esencialísimo y es el contrato de crédito, el de crédito documentario en que actúan como intermediarios los bancos, contrato que moriría sencillamente si la articulación propuesta fuera aprobada en la forma en que la presenta la comisión. Se establece que el derecho a revisar la mercadería existe mientras el comprador no ha recibido la documentación. Debo recordar a los señores delegados que las compras en el extranjero se hacen generalmente a base de la apertura del crédito documentario. Interviene el banco designado por el comprador aquí, para que le abra un crédito al vendedor en el extranjero. El banco se presenta en el extranjero y le comunica al vendedor que tiene a su disposición la cantidad de tantos pesos y que el banco está dispuesto a aceptar una letra en su contra por la suma de tantos pesos, siempre que le entregue al banco tales o cuáles documentos representativos de la mercadería que ha sido objeto de un contrato de compraventa entre el vendedor residente en el extranjero y el comprador argentino y a cuyo contrato el banco es totalmente extraño.

Es práctica uniforme en todos los países del mundo, práctica que ha sido consagrada y determinada ya en disposiciones especiales, tomada por los bancos ingleses, franceses, noruegos, belgas y norteamericanos, establecer que la función de intermediario del banco le substraerá en absoluto de toda obligación de investigar si la mercadería objeto de la documentación de embarque, responde o no a las estipulaciones del contrato de compraventa. El banco recibe la documentación representativa del embarque, tramita la utilización del crédito en la forma que ha sido concedido, trae los documentos a la Argentina y le notifica al comprador que los documentos están a su disposición, que la liquidación que arroja el préstamo hecho por él, tomando en consideración diferencias de cambio, comisiones, etc., es tal y que debe pagar tanto. Si ese banco para recibir el pago de su crédito que ha emitido con prescindencia y hasta con desconocimiento completo del contrato de compraventa, tiene que esperar a que el comprador se manifieste conforme con la mercadería, no habría ningún banco que otorgase créditos. El banco es extraño a eso, el banco entrega la documentación, cobra el importe de su liquidación y allá se las avenga el comprador y el vendedor si el contrato ha sido o no cumplido; pero no puede vincularse a esto a un tercero extraño que se ofrece para facilitar la operación y que no conoce, vuelvo a repetir, las estipulaciones de los contratos que generaron su intervención.

De modo que estimo indispensable que en el artículo que se ha sometido a discusión de la asamblea, se modifique la última parte y que se establezca el derecho del comprador de la mercadería CIF, de hacer la revisión aun después de recibida la documentación, es decir, mientras la mercadería no salga de la aduana; de otra manera matamos una institución jurídica o práctica, más bien dicho, que está en plena floración en el mundo entero y que está llamada a asumir un papel y una trascendencia enorme en las relaciones económicas internacionales.

Son estas las únicas manifestaciones que tengo que hacer. (*Aplausos*).

SR. PRESIDENTE (DR. AGUIAR). — No observándose, se da por aprobado en general el proyecto.

En discusión en particular.

SR. CASTILLO. — Pido la palabra.

Estoy en desacuerdo con la primera parte del proyecto y conforme con la segunda. La ley no puede modificar el concepto erróneo que aun se tiene de nuestro comercio en la mayor parte de los países europeos de donde proviene el mal que se quiere evitar.

El que vende con la cláusula CIF., quiere descenderse de la operación y de sus riesgos, desde el momento en que obtiene los documentos de embarque. Sobre todo se propone evitar cuestiones que pudieran ventilarse en el lugar de la entrega, por la poca confianza que les inspira por lo general, una justicia que no se conoce. Esa situación de la cláusula CIF., que ofrece mayores seguridades al fabricante o vendedor, influye en los precios.

Las nuevas exigencias del proyecto crearían otro peligro que haría necesario otras provisiones y mayores gastos, lo que vendría a encañecer el artículo, con perjuicio para el comprador, que no puede prescindir de aquel.

La facultad de revisar la mercadería antes de recibir los conocimientos o firmar la letra, en los casos que esta haya sido girada, para alguno de los efectos previstos, es una cuestión más delicada. La jurisprudencia italiana la negó al principio, pero evolucionó luego ante las graves consecuencias que ella había producido para el comercio nacional, estableciéndose que siempre que el destinatario tuviera noticias fundadas de que la mercadería no viene en las condiciones previstas, aquel puede revisar la mercadería, antes de recibir o aceptar los conocimientos o la letra.

Esa solución trajo la alarma a los bancos y a otros intermediarios de la operación, que han adquirido derechos al pago de aceptación de la letra, en razón de los documentos mismos y con toda independencia de la condición en que llegara la carga, porque se les impone una espera imprevista o se somete a tales documentos a condiciones que tampoco surgen de los mismos.

A mi juicio, puede acordarse el derecho a revisar la mercadería cuando se invoquen razones fundamentales, sin violentar ningún principio jurídico, porque la renuncia de esa facultad conferida por el derecho común, que envuelve en realidad la cláusula CIF, presupone el cumplimiento, por el vendedor, de las obligaciones del contrato, en cuanto a: calidad, cantidad, peso o envases especiales.

Es claro que esta solución produciría alguna incertidumbre a las negociaciones que se derivan bajo las garantías de la cláusula, pero cada operación debe cargar con su riesgo, en vez de hacer recaer todo él, sobre el comprador o importador.

Me parece que en ese sentido podría orientarse el proyecto que se discute.

SR. LAFAILLE. — Pido la palabra.

Mi intervención en este debate ajeno a la materia de mi preferencia, se debe a circunstancias relacionadas con el ejercicio de la profesión, que me han llevado a intervenir en algunos asuntos donde se ventilaba el alcance de la cláusula CIF, y precisamente con motivo de uno de ellos los Tribunales de la Capital han sentado jurisprudencia, resolviendo la posibilidad de investigar la mala calidad o el deterioro de la mercadería producidos antes del embarque. De manera que a la llegada de un artículo corruptible, por ejemplo, cuyo estado se prestara a dudas por el tiempo transcurrido, el receptor de la mercadería o sea el adquirente podría demostrar que tal mercadería había salido ya del puerto en condiciones inadecuadas. He aquí uno de los riesgos que la cláusula CIF, no cubre y no puede cubrir en derecho; a pesar de tal estipulación el dolo o la negligencia del vendedor no podrían servirle de excusa sin manifiesta inmoralidad, ni extenderse a estos casos un pacto relativo a las eventualidades del transporte. Por eso me extraña que el proyecto de la comisión no contenga un artículo, en el sentido que dejo indicado, porque de otra manera no se defiende suficientemente la situación de los compradores, a quienes se deja librados a los vaivenes de la jurisprudencia.

En virtud de estas razones desearía que la Conferencia adoptase estas indicaciones, a fin de que los magistrados llamados a resolver juicios de esta índole, se orientaran en el sentido de facilitar la prueba del deterioro de la mercadería con anterioridad a su salida.

Por lo que se refiere al segundo punto, o sea el riesgo que corre entre el puerto de salida y el de destino, me parece que cualquier tentativa contra la cláusula CIF, no llegaría a resultados prácticos en el presente. Nosotros estamos dependiendo del extranjero en punto a transporte marítimo, como así también por lo que hace al comercio y a la industria bien cimentada y todo alzamiento frente a una situación de hecho sería estéril, porque nos encontramos en verdadera inferioridad y no hay más remedio que aceptarlo y preparar lentamente la emancipación. Sería un asunto de prudencia por parte del adquirente buscar por ahora, en el seguro el medio de cubrirse con respecto a los riesgos de las mercaderías que navegan, mediante pólizas cada vez más severas, sin abrigar la esperanza — hoy ilusoria — de compartir estos peligros con el vendedor.

Quedaría por analizar únicamente la última parte del despacho y la encuentro muy adecuada.

Es notoria la conveniencia de que se permita revisar los efectos no sólo en el momento de la llegada y antes de pagar los documentos bancarios sino aun con posterioridad, siempre que no hubieran salido de la aduana, como muy bien acaba de indicarlo el miembro informante.

Creo que con mi agregado y el propuesto por el doctor Chedufau, se complementa el proyecto. La jurisprudencia, que hoy se inicia, contaría con el apoyo moral que vendría a imprimirle el voto de esta asamblea.

Nada más. (*Aplausos*).

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONGEL). — ¿Quiere concretar su indicación, señor delegado?

SR. LAFAILLE. — Procuro establecer que si el comprador no hubiese verificado los artículos en el lugar de expedición, tendrá derecho de hacerlo en

el de destino, o para exigir que el vendedor demuestre las condiciones de calidad, cantidad y peso con certificados emitidos por funcionarios dignos de fe. Debe facilitarse en esta forma, la prueba del deterioro sufrido por la mercadería con anterioridad al embarque.

En resumen, podría incluirse como un agregado o en forma de artículo 2º: «Debe facilitarse la prueba de los deterioros de las mercaderías producidas con anterioridad al embarque.» Se trata de un extremo que debe acreditar el comprador.

SR. CHEDUFAU. — Podría votarse el despacho de la comisión en la parte en que no ha sido observado concretamente y luego el agregado propuesto.

SR. CERVINI. — Debemos votar el despacho de la comisión.

SR. PRESIDENTE (AGUIAR). — Se dará por aprobado el despacho de la comisión si hay asentimiento general por parte de la Conferencia.

—Asentimiento general.

SR. PRESIDENTE (AGUIAR). — Queda aprobado el despacho de la comisión.

Está en consideración el agregado propuesto por el señor delegado doctor Lafaille.

SR. CHEDUFAU. — Pido la palabra.

La cuestión planteada con tan buen acuerdo por el señor delegado doctor Lafaille, enrola en esta relación de comprador y vendedor a una compañía aseguradora que no tiene intervención hasta que la mercadería haya sido embarcada. Los riesgos que la mercadería haya corrido antes de su embarque son más bien de consideración para la compañía aseguradora que toma el riesgo de cubrir la mercadería a embarcarse. Si no he entendido mal el supuesto del doctor Lafaille, es el de mercadería que salga ya deteriorada por ser precedera o por otra circunstancia: por no estar la fábrica ubicada en el puerto de embarque, y que por esa razón o cualquier otra ha de estar sometida a más de un transporte, por quedar en plazaleta sino hay otro mejor resguardo para ella, aguardando la ocasión de ser cargada y sufriendo riesgos todo el trans-

curso de ese tiempo. Se me ocurre que esto es más bien del resorte de la compañía aseguradora, no tanto del resorte del comprador. Si éste no fuera el supuesto del doctor Lafaille, agradeceré a él mismo, como al ex camarista doctor Castillo y al doctor Zaefferer Silva la gentil colaboración que le han prestado a la Conferencia sobre compraventa (CF., le rogaría que me aclarase este punto.

Y si quiere el señor delegado, colmando su gentileza, contestar a esta pregunta, se lo agradecería nuevamente: ¿los riesgos o deterioros hasta el momento del embarque son, acaso, de la responsabilidad de la compañía de seguros que ha cubierto el transporte marítimo?

SR. LAFAILLE. — No se me ha ocurrido nunca suponer que ellos pudieran quedar a cargo de la compañía aseguradora, por cuanto ella responde tan sólo por los riesgos relativos al transporte marítimo o sea de puerto a puerto. Los anteriores a la salida deben, a su vez, recaer sobre el vendedor en las situaciones planteadas por consecuencia de la teoría del dolo o de los principios que rigen los vicios inhibitorios.

Ahora, como la prueba le corresponde al adquirente, es en el sentido de facilitarla que se ha formulado mi observación. Pero nunca para hacer pasibles a las compañías de un riesgo que jamás ha entrado en sus cálculos ni dentro de los términos del contrato. No puede haber dos opiniones sobre eso.

SR. CHEDUFAU. — Precisamente porque lo entiendo así, es que yo creo que no nos conviene involucrar este otro supuesto, porque si hemos de atender a la observación del doctor Castillo y queremos proteger con un aluvión de cláusulas al comprador que todavía está en una relativa situación de dependencia respecto al vendedor extranjero, acaso estiremos la cuerda y agostemos prematuramente la institución de la compraventa (CF., que tanto entusiasmo ha despertado, a juzgar por la práctica de los comerciantes y la dedicación de los profesionales juristas.

Creo que no debemos acumular demasiada protección; el criterio particular del miembro informante hubiera sido

establecer sencillamente las prescripciones del Código de Comercio en protección del comprador, pero hemos considerado que estamos así en una situación de relativa dependencia y a mí me parece que respecto a la compraventa CIF, nosotros estamos lejos de tener que resignarnos a desempeñar un papel relegado en la comunidad mercantil. La última conferencia de la International Law Association tuvo en su orden del día la copiosa documentación de las distintas ramas nacionales que llevaban la compraventa CIF, como un asunto palpitante; y si es verdad que fué puesto en el orden del día, fué llevado a la discusión de los especialistas y movió el pesado rodaje de una conferencia internacional para que le dedicara sus deliberaciones, débese a la situación de dependencia de los importadores con respecto a determinado país exportador de materia elaborada y porque también el comercio francés, el comercio alemán, el comercio importador noruego, se hallan afectados lo mismo que nuestras hermanas, las repúblicas de Sudamérica por esa situación de dependencia impuesta por determinado comercio.

SR. LAFAILLE. — Pido la palabra para hacer una aclaración si fuese posible. Yo quisiera expresarme con los términos más precisos, pero parece que mi concepto no ha sido inteligible. Yo he dicho esto: si llega una mercadería al país, por ejemplo, fruta, susceptible de deterioro mediante el transporte, o producido con anterioridad a la salida, la prueba de que pudiera ser la indemnización a cargo del remitente, le corresponde al destinatario. Si el vendedor se defiende con la cláusula CIF, observo que ella lo cubre contra los riesgos del transporte y no frente a los producidos antes del embarque. Este razonamiento jurídico, que me parece evidente y hasta elemental, es necesario que se incorpore a la jurisprudencia. Y no solamente armoniza con el pensamiento de la comisión, sino que complementa al determinar el alcance de la cláusula que no es ciertamente de irresponsabilidad absoluta para el vendedor, ni mucho menos lo exonera de dolo, porque ello estaría prohibido por la moral y el derecho. Se trata de un

simple pacto para liberar al remitente por los riesgos a que está expuesta la mercadería entre el puerto de salida y el puerto de llegada.

SR. PRESIDENTE (AGUIAR). — Se va a leer el agregado propuesto por el señor Lafaille.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — «Sin embargo, debe facilitarse la prueba del deterioro de la mercadería producida con anterioridad al embarque.»

UN SEÑOR DELEGADO. — Creo que el señor delegado Dr. Lafaille, aceptaría una pequeña modificación en el sentido de decir «debe permitirse...» en lugar de «debe facilitarse...»

SR. LAFAILLE. — Decía «debe facilitarse» porque alguna vez la jurisprudencia lo ha permitido. Pero de todas maneras acepto complacido la modificación.

SR. REVIRIEGO. — Me parece que en vez de decir «sin embargo...» debería decirse «además».

SR. LAFAILLE. — Acepto. El pensamiento del artículo queda claro.

SR. VILLEGAS BASAVILBASO. — Lo que se ha querido expresar es que hasta el momento de la entrega el vendedor responde por la mercadería. Ese es el argumento jurídico.

Ahora, el decir que se permitirá la prueba del estado de la mercadería, tiene por objeto responsabilizar al vendedor de dichos artículos hasta el momento de la entrega en el puerto de embarque.

Me permito hacer esta observación al doctor Lafaille.

SR. MOLINA. — Ese es el efecto de todo contrato comercial; no hay necesidad de expresarlo nuevamente.

SR. LAFAILLE. — Yo creo haber explicado claramente cuál es mi pensamiento.

SR. VILLEGAS BASAVILBASO. — Me parece que debería establecerse que el vendedor responde de la mercadería hasta la entrega en el momento del embarque.

SR. LAFAILLE. — Eso mismo es lo que se quiere decir.

SR. VILLEGAS BASAVILBASO. — Pero no lo dice.

Se dice que se permitirá la prueba de si la mercadería fué o no debidamente entregada al embarque, en vez de significar que el vendedor responde por la mercadería entregada y a cuyo efecto se deberá remitir la prueba.

SR. LAFAILLE. — Lo que manifiesta el señor delegado es el principio jurídico, pero lo que se establece, es lo que corresponde a la práctica.

No trato de promover discusiones. Para los fines de la Conferencia buscamos soluciones prácticas; somos abogados, hombres de ley que no estamos discutiendo principios jurídicos sino en cuanto es necesario para justificar las soluciones que se deben adoptar.

El principio jurídico que menciona el señor delegado, es el mismo que he citado yo también puesto que sostengo la responsabilidad del vendedor hasta el momento del embarque, pero sin embargo no creo que sea indispensable establecerlo por cuanto se trata de una consecuencia de lo que se sanciona.

SR. CHEDUFAU. — Pero es que no sería la consecuencia en el caso de que no se incorporara ese agregado al cuerpo del despacho.

SR. LAFAILLE. — Yo sostengo que esa es la consecuencia, señor delegado.

Además, le voy a manifestar que en la práctica es casi imposible obtener esa prueba. A diario estamos presenciando que los vendedores fundan su defensa simplemente en la amplitud que atribuyen a la cláusula de que tratamos.

La jurisprudencia presenta muchas fallas y está expuesta a cambios imprevistos. Es la legislación la llamada a dar fijeza a las normas que se consideran adecuadas para dirimir los conflictos de intereses. Y tal es el caso que acabo de plantear.

SR. CHEDUFAU. — Encuentro muy atinada la proposición del doctor Lafaille sobre el asunto de la compraventa CIF., en sus consecuencias generales; y como me parece de importancia tenerla en cuenta, y para evitar largos debates sobre este asunto, debería des-

tinársele a la comisión encargada del estudio de asuntos que no estuvieran incluidos en el orden del día de la conferencia, para que formulara un anteproyecto que contemple no sólo la situación aludida por el doctor Lafaille, sino otras consecuencias sobre los mismos principios tan oportunamente previstos. En virtud de que es necesaria la concordancia entre las disposiciones sancionadas, las que el doctor Lafaille propone y las que pudiera sugerir cualquier otro miembro al estudiar la legislación existente en materia de compraventa (CIF., pediría que esta parte del proyecto pasara a consideración de la Comisión Permanente de Estudios Legislativos como una recomendación para ser tenida en cuenta cuando se formule el contrato tipo de compraventa (CIF., a discutirse en una próxima Conferencia de Abogados.

—Apoyado.

SR. PRESIDENTE (AGUIAR). — En discusión la proposición formulada.

SR. LAFAILLE. — Me parece que este asunto pertenece a la asamblea. Pienso, además, que todos los asuntos que votemos correrán la misma suerte. De manera que el distingo es inútil; tanto el proyecto de la comisión como mi agregado van a seguir ese curso.

SR. CHEDUFAU. — Acaso prejuzga el señor delegado...

SR. LAFAILLE. — Siempre que hablo, doy mi opinión, como es natural.

SR. CHEDUFAU. — Acaso prejuzga el señor delegado respecto al destino que ha de merecer el proyecto; la comisión que ha de expedirse sobre el asunto propuesto por el señor delegado, es la Comisión Permanente, si la asamblea no dispone otra cosa. Y en caso tal no seguiría el mismo curso que el despacho de la comisión que termino de informar, y que se ha aprobado, pues éste se comunicaría al cuerpo legislativo que entiende en la reforma del Código de Comercio.

Si la proposición del señor doctor Lafaille proeura ampliar los alcances de la reforma que intenta el despacho de la comisión, apreciamos su trascendencia

y la auspicia como miembro de la Conferencia.

Y por eso queremos que este propósito, tuitivo del interés del comerciante radicado en el país, se concilie con todas las garantías necesarias para que nosotros también, factores al fin en el comercio internacional, pero con todas las características que nos vinculan al comercio sudamericano, contribuyamos a hacer el tipo de compraventa que nos interesa. Por eso lo invitamos a que deponga su proposición y la destine a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, o a la deliberación de la próxima Conferencia.

SR. LAFAILLE. — Voy a decir unas palabras, pidiendo nuevamente disculpa a la asamblea. Me veo obligado a ello, dada la intervención en el debate del señor delegado y el pedido que formula. Me parece que esta proposición es un complemento necesario, a tal extremo, que hasta parecería inoficioso si se interpretaran por la jurisprudencia como en mi concepto corresponde, las reglas del derecho común aplicadas a toda esta materia. Pero puesto que en el hecho estamos avocados a una situación inestable que perjudica nuestro comercio, ya que resolvemos problemas prácticos debo insistir en mi agregado sin tener, por cierto, ningún interés personal ni hacer cuestión de amor propio.

SR. CHEDUFAU. — Si insiste, descuente que la vamos a votar, señor delegado.

SR. LAFAILLE. — Que se vote entonces.

SR. PRESIDENTE (AGUIAR). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor delegado doctor Lafaille.

Se vota y es aprobado.

SR. SECRETARIO (ALVO). — (*Leyenda*): «Tal derecho podrá ejercer el comprador antes de aceptar el documento que habilite la aceptación de la carga».

SR. CHEDUFAU. — Eso integra el despacho que está votado, porque si no existiera esa condición, lo anterior sería completamente ilusorio. Lo único que podría llegar a discurrirse es la validez de la cláusula en contrario. Pero parece que hay asentimiento general en el sen-

tido de que se declare nula y sin ningún valor.

SR. ZAEFFERER SILVA. — Yo propongo que se modifique este artículo en esta forma: «Tal derecho podrá ejercer el comprador aunque hubiera pagado el precio mientras la mercadería no haya salido de la aduana.»

SR. CHEDUFAU. — La comisión mantiene su despacho, señor presidente, y desea saber si está apoyada la proposición del señor delegado Zaefferer Silva.

VARIOS SEÑORES DELEGADOS. — Apoyado.

SR. LAFAILLE. — Si se aprueba el despacho no puede haber el agregado.

SR. PRESIDENTE (AGUIAR). — Son excluyentes. Se va a votar el artículo de la comisión.

—Se vota y resulta negativa.

SR. LAFAILLE. — Desearía saber si el doctor Zaefferer Silva estaría conforme con que se pusiera: «en los casos de crédito documentario», porque me parece que el pensamiento del señor delegado es ese y no en el caso de que se pagara la mercadería en efectivo.

SR. ZAEFFERER SILVA. — Perfectamente; no tengo inconveniente.

SR. CASTILLO. — Me parece que con la sanción anterior y con esa que se propone, se desnaturaliza completamente la cláusula, y con este último agregado resultaría que en los casos en que no hay crédito documentario ya no hay derecho documentario y es cuando más se necesita la revisión.

SR. ZAEFFERER SILVA. — Hago mi moción tal como estaba primitivamente.

SR. LAFAILLE. — Eso sería materia más bien de un agregado distinto. Es mejor que quede así. Retiro mi indicación.

SR. SECRETARIO (ALVO). — (*Leyenda*): «Tal derecho podrá ejercer el comprador aunque hubiera pagado el precio mientras la mercadería no haya salido de la aduana».

—Se vota y aprueba.

TERCERA SESION ORDINARIA

PRESIDENCIA DEL DOCTOR GUILLERMO G. CANO

DELEGADOS Y MIEMBROS DE LA CONFERENCIA, PRESENTES: Aguiar He-
noch D., Alegre Manuel V., Alsina Ramón M., Alvarez Julio, Alvo Sebastián E., Astrada
Ponce Carlos, Avalos Antonio, Avalos José M., Barbosa Feliciano, Barraquero Julián, Barrera
Juan F. de la, Bassi Aurelio, Báudón Héctor R., Berghmans Doncel Carlos A., Bullrich
Rodolfo, Cabral Angel H., Campa Juan de la, Canal Feijóo Bernardo, Cano Guill-
ermo G., Carlomagno Juan C., Carranza Adolfo, Casañas Miguel, Castellanos Benjamin,
Castiglione Antonio, Castillo Ramón S., Castro Jorge S., Cervini Francisco, Chedufau
Edmundo C., Codoni José E., Corominas Segura Rodolfo, Correa Alejandro, Corvalán César
S., Courel Carlos D., Day Alberto A., Díaz Santiago F., Doncel Salvador A., Echagüe
Pedro A., Escobar Sáenz Julio M., Ferreira Enrique A., Frias Leopoldo, Frias Wenceslao,
García Zavala Rafael, Gonnet Manuel B., González Sabathlé Juan M., Goyeneche Romoaldo,
Goytia Roberto D., Goytia Victor D., Grandi Domingo, Guisazá Alberto, Herre-
ra Santiago D., Jofré Tomás, Labanca Gabriel, Lafaille Héctor, Lagos García,
Luis, León y Basualdo Arturo de, Lobos Roberto N., López Domínguez Ramón, Llan de
Rosos Ernesto, Latella Frias Donato, Martínez Paz Enrique, Mazzi Rogelio, Méndez Miguel
G., Molina Luis E., Morey Ramón, Morixe Jerónimo A., Moyano Escalera Salvador, Novillo
Saravia Lisardo, Olmos Lucas A. de, Orgaz Raúl A., Ortiz Florencio J., Otero Capdevila
Benjamín, Palacios Benjamín, Páez de la Torre Manuel, Petra Demetrio, Quiroga Pedro R.,
Reviriego Emilio, Ríos Eduardo, Rodríguez Ribas Vicente, Rodríguez Saráchaga Oscar,
Romero del Prado Victor M., Rothe Guillermo, Serrey Carlos, Sierra Celestino D., Silgueira
J. Honorio, Sosa Loyola Gilberto, Stanchina Camilo F., Urraza Estanislao de, Vera Cruz,
Vera Vallejo Ricardo, Viechi Rodolfo, Vilgré La Madrid Juan, Villegas Basavillbaso Floren-
cio, Viñas Tharra Umberto, Zavala Ortiz Alfredo, Zaefferer Silva Oscar.

SUMARIO

1. Instituto de Compilación, Clasificación y Ordenación del Derecho Argentino. (Moción de preferencia).
2. Transferencia de establecimientos comerciales e industriales. Consideración y aprobación del dictamen de la Comisión Especial.
3. Arbitraje en materia comercial. Consideración del dictamen de la Comisión Especial.
4. Correlación de los Derechos Civil y Comercial en materia de obligaciones. Consideración y aprobación del dictamen de la Comisión Especial.
5. Agasajos.

6. Destino de las resoluciones de la Conferencia. Aprobación del dictamen de la Comisión Especial.

1

Instituto de Compilación, Clasificación y Ordenación del Derecho Argentino
(Moción de preferencia)

En Córdoba, a veintiocho días del mes de Octubre de 1926, reunidos en el salón de actos de la Universidad los señores delegados arriba indicados, y siendo las 9 y 30 horas, dice el:

SR. PRESIDENTE (CANO).—Está abierta la sesión.

SR. VILLEGAS BASAVILBASO. — Pido la palabra.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Tiene la palabra el señor delegado.

SR. VILLEGAS BASAVILBASO. — Deseo solicitar de esta Conferencia, que después de tratarse los asuntos entrados, se dé preferencia a un proyecto que he presentado sobre creación de un instituto para la compilación del derecho, pues entiendo que habiéndose creado la Comisión de Estudios Legislativos, es indispensable que se trate mi proyecto como un complemento de su finalidad.

Ese proyecto está a estudio de la comisión y desearía que se trate con o sin despacho.

SR. SILGUEIRA. — Pido la palabra.

Creo que no podemos ni debemos alterar el orden del programa de la Conferencia. Todos los asuntos deben seguir rigurosamente su orden. Los del punto primero ya han sido tratados; los del segundo se van a tratar hoy y ayer hemos llegado a considerar algunos del tercero. Los trabajos que se han presentado con posterioridad, encajen o no dentro de los asuntos del programa, deben tratarse después de haber concluido la consideración de las cuestiones de los tres puntos oficiales, porque de otra manera vamos a perturbar el regular funcionamiento que la comisión organizadora ha planteado y la Conferencia ha aceptado. Lamento, por tanto, tener que disentir con mi colega doctor Villegas Basavilbaso. Podría pedir preferencia para su asunto, dentro de los no previstos por el programa, pero no respecto de los relacionados con los puntos del mismo que aun no han sido considerados.

SR. VILLEGAS BASAVILBASO. — Mi proyecto encuadra dentro del primer punto del programa y también dentro del segundo.

SR. CASTIGLIONE. — Formo parte de la comisión primera, y no estando los doctores Goytia y Gil, yo creo que no hay inconveniente en dar preferencia a este asunto dentro de los que corresponden a esa comisión. Sin embargo, se podría aceptar la proposición como un anhelo, sin votarla, porque bien podría

la comisión despachar ese asunto para esta tarde.

SR. VILLEGAS BASAVILBASO. — Insisto en que se trate después de los asuntos que ya tienen despacho de comisión y que se han leído, porque hay sumo interés en este proyecto.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Se va a votar la moción de que se trate este asunto con preferencia, después de considerarse los que ya tienen despacho de comisión y los a cuyos despachos se acaba de dar entrada.

SR. SILGUEIRA. — Hay asuntos que han tenido entrada hoy, que deben pasar a la orden del día porque pertenecen a la comisión especial y que deben considerarse después de los tres puntos del programa oficial, por ejemplo, la ponencia presentada por el señor delegado doctor Rodríguez Saráchaga.

SR. VILLEGAS BASAVILBASO. — Mi proyecto encuadra perfectamente dentro de los puntos 1º y 2º del programa oficial de la Conferencia.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Se va a votar, entonces, la moción de preferencia que se ha formulado.

—Se vota y resulta negativa.

2

Transferencia de establecimientos comerciales e industriales

SR. PRESIDENTE (CANO). — Se va a dar lectura del dictamen de comisión sobre transferencia de establecimientos comerciales e industriales.

SR. SECRETARIO (ROMERO DEL PRADO). — (Leyendo):

Por las razones que expresará verbalmente el miembro informante, la comisión que suscribe aconseja la aprobación de la siguiente ponencia, presentada por la delegación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, doctores Romualdo Goyeneche y A. Jerónimo Morixe:

Artículo 1º — Todo acto de transmisión de un comercio o industria, para que surta efectos contra terceros, deberá realizarse por escrito e inscribirse en el Registro Público de Comercio, con arreglo a las formalidades de la presente ley.

Art. 2º — La transmisión — sea directa o en subasta pública — deberá ser previamente anunciada por el término de cinco días, en el Boletín Oficial, e inscribirse en el Registro Público de Comercio, una vez pasados quince días y dentro del plazo de treinta, de vencida la publicación.

Art. 3º — Las publicaciones se realizarán en una sección especial del Boletín Oficial, y deberán contener:

- a) El nombre de los contratantes, cuando sea directa, y el del vendedor, cuando sea en subasta pública;
- b) Domicilio o local del comercio o industria;
- c) Especificación de su ramo principal.

Art. 4º — El Registro Público de Comercio llevará libros especiales para la inscripción de las transmisiones y anotación de los embargos que se decreten, y expedirá los certificados de gravamen, que podrán solicitar — a más de los escribanos — los vendedores, cobrando a ese efecto, los emolumentos que determinen las leyes de impuestos.

Art. 5º — Anunciada la transmisión, los acreedores del vendedor podrán ejercitar las acciones relativas a la exigibilidad de sus créditos, aunque estos fueran a plazos y no se halle vencido; quedando sin efecto dicha exigibilidad si el comprador se hace cargo de la deuda.

No será aplicable esta disposición a los acreedores cuyos créditos no hayan tenido relación alguna con el giro del comercio o industria a transmitirse, presumiéndose que la tienen los créditos comerciales de causa indeterminada.

Art. 6º — La subrogación del comprador en la deuda del vendedor no exime a este último de su obligación ante el acreedor por el saldo pendiente.

Art. 7º — Sólo podrán oponerse al adquirente, los embargos dentro del plazo de quince días contados desde el vencimiento de la publicación, y a que se refiere el artículo 2º.

M. G. Méndez. — J. M. González Sabathic. — R. Goyeneche.

SR. PRESIDENTE (CAÑO). — En discusión en general. Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

SR. GOYENECHE. — El asunto sobre el que debo informar en esta considera-

ción en general, encierra una cuestión a la vez importante y sencilla. Espero que todos los señores delegados han de aceptar la necesidad urgente de que se dicte una reglamentación para las transmisiones de los fondos de comercio y establecimientos industriales. En obsequio, pues, a la brevedad del tiempo con que se cuenta, voy a concretar mi informe, permitiéndome leer los párrafos principales de los fundamentos del proyecto, agregando luego pocas palabras más.

Uno de los grandes vacíos de nuestra legislación comercial, lo constituye la falta absoluta de preceptos legales que reglamenten el contrato de compraventa de los comercios e industrias y que, al permitir la tan amplia libertad en la realización de esta clase de contratos, abre el camino a la mala fe del negociante sin escrúpulos, con el consiguiente perjuicio para el comercio serio del país.

No se trata, por cierto, de una cuestión nueva; se viene observando desde muchos años atrás. Pero el crecimiento cada día mayor de las actividades comerciales en las que, como es natural, intervienen elementos buenos y malos, exige, de manera imperiosa, que se adopten las medidas indispensables para establecer las garantías de que debe estar revestido el giro mercantil.

No se concibe el comercio sin el crédito, pero, en todo aquello que sea posible, vale decir, sin crear cortapisas a la necesaria celeridad de los negocios, es menester revestir a tan importante institución, de las seguridades que la pongan a la capa de los que pretendan usarla como un medio de dolosas maquinaciones.

En la actualidad, ocurre muy a menudo que una persona se instale con una casa de negocio, obtenga mercadería a crédito, y una vez que sus estanterías o depósitos se encuentran abarrotados de efectos adquiridos en esa forma, venda su comercio o industria, sin que le quede al acreedor que se los ha facilitado, otro recurso que aquel tan pobre de iniciar un juicio, a veces dispendioso y largo, y que en el mejor de los casos sólo se traduce en la declaración de la quiebra del deudor, pero que,

como cualquiera de los otros, en nada práctico se resuelve.

Podrá argumentarse que esto ocurre, en algunos casos, por la negligente, confiada o torpe conducta del acreedor; pero, en su gran mayoría, constituye el resultado de la habilidad y mala fe del deudor, amparadas por la impunidad que se obtiene de la tan fácil manera con que se enajena un fundo de comercio, en nuestro país.

Las disposiciones que comprenden el proyecto presentado, están encuadradas dentro del límite razonable a que debe ajustarse el propósito que las genera; no protegen al acreedor negligente, confiado o torpe, ni conspiran contra las modalidades que debe revestir todo acto de comercio: tienden solamente a establecer ciertas formalidades que concedan más seguridad, tanto a los acreedores del transmitente de un fundo, como al que lo adquiere.

Tales disposiciones no pueden ser un óbice al ejercicio del derecho del enajenante ya que la observancia de las susodichas formalidades están de acuerdo con la importancia del acto de enajenación del fundo, el que no puede equipararse a un acto de comercio común.

Por otra parte, las formalidades a que nos venimos refiriendo, sólo tienen que hacer con la validez de la enajenación, desde el punto de vista del interés de los terceros, lo cual quiere decir que en ausencia de éste, a nadie perjudicaría la inobservancia de esas formalidades.

Estos son, en síntesis, los fundamentos del proyecto a que se refiere el despacho. Los autores del primero no pretenden haber hecho obra perfecta de legislación, ni mucho menos. Se ha encarado el asunto con un criterio eminentemente práctico, con ese criterio a que se refería ayer el señor delegado doctor Lafaille y, sobre el cual, también piensa el que habla, que debe primar en esta Conferencia.

Por otra parte, entendiéndolo así la importante institución comercial que tenemos el honor de representar mi compañero de delegación y yo, aceptó la gentil invitación que se le dirigiera, de asistir a esta Conferencia, en la segu-

ridad de que de ella surgirán inspiraciones de resolución práctica.

En mi carácter de miembro informante de la comisión, dejo cumplido el honoroso cargo que se me confiara, y como delegado coautor del proyecto, lo entrego a esta asamblea, para que pase por el tamiz de los ilustrados criterios que la componen, perfeccionándolo en su articulado — si necesario fuese — y llegar, así, a la sana finalidad que se persigue.

Por último, debo hacer presente que la Bolsa de Cereales tiene el propósito de tomar a su cargo la tarea de obtener la adhesión de todas las entidades comerciales, para realizar un esfuerzo común y solidario ante el Congreso Nacional, gestionando que se sancione una ley de esta especie. (*Aplausos*).

Nada más, señor presidente.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Si ningún señor delegado hace uso de la palabra, se va a votar en general.

—Se vota y aprueba en general.

—En discusión en particular, se aprueba el artículo 1º.

SR. PRESIDENTE (CANO). — En discusión el artículo 2º.

SR. SILGUEIRA. — Pido la palabra. Es para llamar la atención sobre el concepto del término «subasta pública»; entiendo que significa «en remate judicial»; Y si se resolviera que la transmisión fuera en remate particular?

SR. GONZÁLEZ SABATINIÉ. — En ese caso sería una transmisión directa. Ahora si al señor delegado le parece, podría proponer alguna modificación.

SR. CASTIGLIONE. — En el artículo 3º se dice que la publicación se hará en el Boletín Oficial. Yo propongo que se agregue: «o en el diario que existiere o que el juez designare» porque en algunas provincias no hay Boletín Oficial, como en Santiago del Estero, por ejemplo.

SR. DONCEL. — En la última parte de este artículo se habla de un término de 30 días. Ese plazo ¿es previo al acto o previo al momento de la inscripción? Se dice en el artículo, que la inscripción de la transmisión debe ser hecha

dentro del término de 30 días de vencida la publicación; y la publicación debe hacerse durante 5 días. En el Código de Comercio hay una disposición de carácter general para toda inscripción, que señala un plazo de 15 días; si dejamos el artículo tal como está redactado crearíamos un régimen de excepción.

Ilago esta observación porque todos los proyectos de reformas al Código de Comercio que se presenten aisladamente, deben armonizar entre sí con el propio código.

SR. GOYENECHE. — Es un caso de excepción, como muy bien dice el señor delegado. La ley establece quince días para toda inscripción en el registro, pero nosotros, consultando el interés de los acreedores, hemos establecido un término total de treinta días, precisamente con el fin de establecer esta reforma para el caso especial. Según este artículo, la transmisión deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio, recién después de haber transcurrido quince días del vencimiento de la publicación, y dentro del plazo de treinta días posteriores al mismo vencimiento. Podría dejarse el término de quince días solamente pero, por una parte, el registro no podrá realizar de inmediato la inscripción y, por otra, es necesario dejar transcurrir algún tiempo para que los acreedores puedan ejercitar sus derechos: un embargo, por ejemplo.

SR. DONCEL. — Entonces la transmisión se cumpliría sin término y el acto no quedaría cumplido.

Por lo demás, es un despacho que no conoce la mayor parte de delegados.

SR. PRESIDENTE (CANO). — No ha habido tiempo para imprimir y repararlo a los señores delegados.

SR. CORMINAS SEGURA. — Pido la palabra.

Voy a plantear una cuestión de orden. Yo pediría que se postergue la consideración de este asunto hasta que sea posible entregar a todos los miembros de la Conferencia una copia del proyecto que se va a tratar. Estamos discutiendo una cosa que desconocemos y que tiene su importancia. Es imposible tratar asuntos fundamentales en esta forma.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Sin perjuicio de que la Conferencia resuelva lo que estime conveniente, la Secretaría me hace presente que todos los despachos que van entrando están en iguales condiciones y que no se podrán repartir a los señores delegados sino muy pocas copias, porque no hay personal ni tiempo para hacerlas.

SR. ZAVALA ORTIZ. Yo entiendo que nosotros más que sancionar artículos o proyectos, queremos dar las bases necesarias para la reforma de ciertos puntos de la legislación, haciendo deliberación serena y bien meditada y entonces no es posible pretender que por el hecho de ser abogados, en cualquier momento, estemos en condiciones para poder juzgar y sancionar el primer proyecto que se nos presente. Debe dárseles siquiera el tiempo material para leer esos proyectos, para conocerlos, a fin de que el voto que demos, sea un voto perfectamente meditado y tengan las resoluciones de esta Conferencia la única autoridad que deben tener ante el país, con estudios completos y serenos de las conclusiones que presenta. Yo creo que esto es fundamental. No podemos estar improvisando.

Hay una serie de proyectos que serán muy buenos, que se han presentado hace un instante, y que tienen o no despacho de comisión, pero que los delegados no conocemos. Los lee Secretaría y con esa lectura ya debemos tener un juicio exacto, y lo que es más, votar hasta el articulado de los proyectos, cuando la Conferencia debería limitarse en realidad a hacer declaraciones de carácter general, y a establecer bases y principios fundamentales, que una comisión especial debe tener en cuenta para después formular los anteproyectos, que serán elevados al Congreso o al Poder Ejecutivo de la Nación a fin de que les dé el trámite que sea conveniente. Creo que en ese sentido ya se pronunció en el día de ayer la Conferencia después de escuchar la autorizadísima palabra del doctor Castillo, que teniendo él mismo un proyecto sobre sociedades de responsabilidad limitada, no quiso presentarlo a discusión de la Conferencia, porque entiende que más

que sancionar artículos debe limitarse a establecer las bases generales para que una comisión de técnicos los redacte.

Hago moción de que se posterguen estos asuntos, para que los miembros de esta Conferencia podamos tener suficiente conocimiento de cada uno, a fin de discutirlos con conciencia plena de las cosas y de la responsabilidad que nos incombte.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Deseo hacer presente a la Conferencia en primer término, lo que el señor presidente ha recordado y es que si fuésemos a exigir de Secretaría para cada delegado una copia de los proyectos que se van a discutir, la Conferencia concluiría ahora mismo sus sesiones porque haría falta dos o tres días para empezar a repartir esas copias.

En cuanto al asunto en particular, creo — a pesar de que la modestia del señor delegado le ha llevado a declarar que el hecho de ser abogado no le hace suficientemente apto para juzgar de primera intención el proyecto — que la iniciativa de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, tan bien desarrollada por el señor miembro informante que es autor de la ponencia, responde a la necesidad, — que todos los abogados hemos tenido ocasión de palpar en las provincias — de reglamentar la trasmisión del activo y pasivo del comerciante.

SR. ZAVALA ORTIZ. — Una cuestión es la de los principios generales que todos conocemos, y otra cosa es el proyecto.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Si fuese una cuestión muy abstrusa lo admitiría, pero aquí de lo único que se trata es de sancionar las bases con que se han de dar a la publicidad las transmisiones.

Ahora creo que entre lo bueno y lo mejor, cuando lo mejor es enemigo de lo bueno, como en este caso, no hay por qué vacilar. No hay duda que lo mejor sería poseer un dictamen de los proyectos, pero no sólo no se hace porque no habría tiempo para ello, sino que de prosperar la moción formulada, la Conferencia no podría tratar ni la

quinta parte de los asuntos que tiene a su estudio.

SR. COROMINAS SEGURA. — Yo retiraría mi moción.

UN SEÑOR DELEGADO. — Para concretar, en una palabra, encuentro práctico considerar lo siguiente: no hemos venido a legislar, sino como bien decía el señor delegado doctor Zavala Ortiz, a dar bases o principios de legislación. El articulado que salga de aquí más o menos perfecto, lo corregirá el Congreso en su oportunidad.

SR. PRESIDENTE (CANO). — El autor de la moción la ha retirado, de manera que no hay nada en discusión.

SR. ZAVALA ORTIZ. — Yo mantengo la mía, en el sentido de que se postergue la consideración de los asuntos hasta que se impriman y puedan ser conocidos por los señores delegados.

SR. PRESIDENTE (CANO). — La presidencia entiende que se trata de la misma moción.

SR. GARCÍA ZAVALÍA. — Vamos a tener el mismo inconveniente. Nosotros sentamos simplemente las bases; el Congreso es el que legislará luego.

SR. DONCEL. — Para conciliar intereses ya que se presentan tantas dificultades, sería conveniente que se distribuyera a los señores delegados una copia, aunque fuera escrita a máquina, para que podamos conocer los asuntos. En este caso el mocionante podría modificar su proposición en el sentido de postergar la consideración de los asuntos hasta la sesión de la tarde.

SR. SUGUIERA. — Pido la palabra simplemente para suministrar un pequeño informe de la presidencia titular: no damos abasto con el personal de cinco empleados que tenemos, no damos abasto con las dos imprentas, la de la Universidad y una particular, para imprimir y poner en conocimiento de los señores delegados los despachos de comisión emitidos. Uno de los motivos por los cuales hay atraso en este particular, es porque los despachos de comisión se han emitido a última hora desde que no ha sido posible reunir las comisiones antes. Yo me explico que los señores delegados deseen conocer previa-

mente los asuntos que se van a tratar a fin de tomar suficiente conocimiento en cada caso y votarlos a conciencia. Pero no olvidemos que en primer lugar somos abogados, que tenemos una preparación jurídica más o menos general y que estamos en condiciones de formar opinión sobre cualquier asunto que no reviste capital importancia y emitir eficientemente nuestro voto; no olvidemos tampoco que el dictamen de la comisión es el dictamen de abogados especializados sobre la materia y que pueden merecer la confianza de los señores delegados, cuando no hay disidencias fundamentales; no olvidemos por último, que mañana a la tarde debemos clausurar la Conferencia y que si vamos a ir postergando los asuntos, esta Conferencia, que ha tenido la resonancia en la República, que los señores delegados saben, va a resultar un fracaso, resolviendo dos o tres asuntos, por falta material de tiempo para que los señores delegados formen conciencia sobre los demás. De modo que yo rogaría a los señores delegados que si no tienen disidencias fundamentales sobre cuestiones graves de derecho, sean deferentes en cuanto a la manera como se van a tratar los asuntos y no empecemos a postergar, porque mañana a la tarde debe clausurarse necesariamente la Conferencia.

SR. VILLEGAS BASAVILBASO. — Yo entiendo, señor Presidente, que debe conculcarse esta situación con arreglo a lo que verdaderamente corresponde.

SR. SILGUEIRA. — La Secretaría acaba de darme una información: se han impreso cincuenta copias de este despacho y se han entregado a cincuenta delegados. De manera que la Conferencia, en el número de cincuenta de sus miembros, tiene conocimiento de ese despacho.

SR. VILLEGAS BASAVILBASO. — Entiendo que esta Conferencia debe sancionar orientaciones, como decía el doctor Castillo. Ahora bien, los proyectos que se presenten articulados y que la comisión haya despachado favorablemente, deben recomendarse para que se publiquen junto con las sanciones generales, porque entiendo que votar disposiciones de detalle que están o pueden

estar en pugna con los artículos de leyes fundamentales, sería hacer un trabajo tal vez inútil. Lo que nosotros necesitamos es exponer al país cuáles son las orientaciones necesarias para que se legisle.

SR. GOYENECHE. — No se pueden medir todos los asuntos con la misma vara.

SR. BARRAQUERO. — Voy a formular una moción que creo va a conciliar todas las opiniones. Voy a movernos para que este asunto sea suspendido hasta la primera hora de la sesión de la tarde. En esta forma, los delegados que no hayamos tenido a mano los ejemplares que se han repartido, tendremos la oportunidad de estudiarlo. Sería para el caso de ser rechazada la moción formulada.

SR. PRESIDENTE (CANO). — La presidencia hace presente de acuerdo con el informe de Secretaría, que no será posible entregar más copias a los señores delegados.

SR. BARRAQUERO. — Pero los que tengan mucho interés, las buscarán.

SR. SERREY. — Propondría que el proyecto a que se acaba de dar lectura, sea reemplazado por un solo artículo, en el que la Conferencia manifieste la conveniencia de introducir en el Código de Comercio, las reformas necesarias.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Es un asunto ajeno a la moción de aplazamiento en consideración.

SR. SERREY. — Pero esto podría evitar el aplazamiento, porque no se puede votar un articulado que puede estar en contradicción consigo mismo o con el Código de Comercio, y lo que la Conferencia debe sancionar son principios generales, la expresión del deso general; de esta manera podría votarse ahora mismo. Yo no me explico cómo van a poder conocer el proyecto todos los señores delegados. Los que tengan copia de los asuntos, podrán votar a conciencia, los demás están obligados a votar sin conocerlos. Por estas razones pido que se postergue la consideración de los asuntos hasta la sesión de la tarde.

SR. STANCHINA. — Acaba de manifestar el señor delegado doctor Silgueira

que hay varios despachos de comisión que están en estas mismas condiciones.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Absolutamente todos están en estas condiciones.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Otros están aún en peores condiciones porque se ha sacado una sola copia de ellos.

SR. DONCEL. — La objeción que se hace es para los proyectos de articulado en detalle; pero hay proyectos o despachos de comisión que se refieren a bases, y éstos creo que todos estamos en condiciones de votarlos. De manera que no podemos generalizar.

SR. VILGRÉ LA MADRID. — Hago indicación de que se cierre el debate.

— Acertimiento general.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Se va a votar la moción de aplazar la consideración de estos asuntos hasta la sesión de la tarde.

— Se vota y es negativa.

UN SEÑOR DELEGADO. Pido que se rectifique la votación.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Se va a votar nuevamente la moción formulada.

— Se vota y es negativa.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Continúa la consideración del artículo 2º del proyecto.

SR. DONCEL. — Pido la palabra.

En el artículo 2º del proyecto se fija un plazo de treinta días una vez efectuada la publicación, para la inscripción en el Registro Público de Comercio, y se decía también en la discusión que la transmisión no podía cumplirse sino una vez efectuada dicha inscripción. Pido que se establezca un término de quince días, concorde con el Código de Comercio.

SR. GOYENECHE. — Pero tenga en cuenta el señor delegado que los quince días son un plazo previo a la inscripción para que los acreedores puedan ejercer sus derechos.

SR. DONCEL. — Pero después se fija un término de treinta días, señor delegado.

SR. GOYENECHE. — No, señor; vienen a ser quince días después de los quince primeros transcurridos desde el vencimiento de la publicación. Quiere decir que se acuerda a todos los acreedores el plazo previo de quince días para que ejerciten sus acciones contra las transferencias y recién después, si no se ejercita ninguna, se acuerdan otros quince días para la inscripción en el registro público.

SR. DONCEL. — No es ese el pensamiento.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Sí, señor delegado; ese es el pensamiento.

SR. CASTILLO. — Esta discusión viene a confirmar una vez más la opinión que me he formado sobre el alcance del pronunciamiento de la Conferencia, respecto de los distintos trabajos que se presentan. La asamblea no puede hacer otra cosa que considerarlos desde un punto de vista general, sin perjuicio de recomendar los proyectos que considere dignos de esa mención, para un estudio más detenido por la comisión que se constituya para tal objeto. Por eso creo que deben aprobarse las bases generales, declarando «que es urgente y necesario reglamentar la transferencia de las casas de comercio y establecimientos industriales y recomendar el proyecto presentado por la Bolsa de Cereales».

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Yo creo, señor presidente, que en el fondo la cuestión que plantea el señor delegado de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, tiene mucho de una discusión de palabras, porque podría resolverse la encabezando el despacho mediante la recomendación en principio de la necesidad de legislar las transmisiones de activo y pasivo comerciales en bloque, señalando la importancia de las bases propuestas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Llamémosle artículos o bases, siempre será necesario que la Conferencia las vaya tratando una por una, de modo que en el fondo se me ocurre que entre «artículos» y «bases» hay una diferencia puramente verbal, puramente de vocablo, porque en definitiva esas bases son las expresiones del

objetivo que persigue la declaración en general.

SR. DONCEL. — Se ha hecho notar ayer una gran consecuencia de la diferencia entre «artículos» y «bases»: que el articulado sería propuesto directamente para su sanción y las bases irían a estudio de una comisión.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Esa es una cuestión que va a derivarse de la importancia con que se haya contemplado la redacción de detalle. Deseo hacer presente como miembro de la comisión, que ésta no tiene ningún inconveniente en aceptar la modificación propuesta por el doctor Castillo en lo que se refiere a encabezar el despacho, de modo que en vez de ir simplemente el articulado, iría con una declaración general expresiva, de que la Conferencia recomienda la necesidad y urgencia de legislar la transmisión de activos y pasivos comerciales en bloque sobre las bases que contiene el dictamen, quedando los artículos considerados como bases. La comisión no encuentra inconveniente para modificar su despacho en esta forma.

SR. PRESIDENTE (CANO). — ¿Quiere formular su moción el doctor Castillo?

SR. CASTILLO. — No sé si acepta mi moción la comisión.

SR. PRESIDENTE (CANO). — La acepto, pero mantiene como bases el articulado del proyecto, y entiendo que la moción del doctor Castillo consiste en eliminar el articulado.

SR. CASTILLO. — Podría establecerse que la asamblea declara que es urgente y necesario reglamentar las transferencias de casas de comercio y establecimientos industriales, y recomendar el proyecto presentado por la Bolsa de Cereales.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Debo hacer presente que lo que está en discusión no es precisamente ese proyecto, pues ha sufrido algunas modificaciones en el seno de la comisión.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Lo que está en discusión es el despacho de la comisión.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Yo aceptaría que la asamblea declarase lo si-

guiente: «recomendando igualmente las siguientes bases».

SR. CASTILLO. — Yo aceptaría lisa y llanamente el proyecto de la Bolsa de Cereales, con las modificaciones introducidas por la comisión, sin pronunciarnos sobre las bases, porque es entrar al detalle, y esto ya es difícil. La mente de la moción es excluir la discusión de las bases.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Entonces no estamos de acuerdo.

SR. GOYENECHE. — La comisión insiste en que se traten las bases.

SR. DONCEL. — Para evitar mayores discusiones y conciliar con los señores delegados que no están de acuerdo en que se voten las bases, yo propondría lo siguiente: la asamblea resuelve recomendar las bases que resulten del siguiente articulado.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Muy bien, no tengo inconveniente.

SR. SECRETARIO (ROMERO DEL PRADO). — (*Leyendo*):

«La Segunda Conferencia Nacional de Abogados declara que es necesario y urgente reglamentar la transferencia de establecimientos comerciales e industriales, y recomienda a ese efecto las siguientes bases, etc.»

— Se vota y es aprobado.

3

Arbitraje en materia comercial

SR. PRESIDENTE (CANO). — Se va a pasar al segundo punto del despacho de la comisión, sobre arbitraje en materia comercial.

SR. SECRETARIO (ROMERO DEL PRADO). — (*Leyendo*):

«La Segunda Conferencia Nacional de Abogados recomienda el establecimiento de tribunales arbitrales en materia comercial, sobre las bases siguientes:

- a) Creación en las bolsas de comercio de dos colegios arbitrales permanentes, elegidos uno por los socios de las mismas de entre ellos y el otro por el presidente entre comerciantes no asociados a la institución;

- b) En los juicios derivados de contratos concluidos entre asociados de la bolsa de comercio el tribunal será de tres miembros designados por sorteo entre los nombres de la lista aludida en primer término en el párrafo precedente. Cada parte podrá deducir hasta dos recusaciones sin expresión de causa;
- c) En los juicios derivados de contratos concluidos entre comerciantes no asociados o un asociado y un extraño a ella, el tribunal se compondrá también de tres miembros, elegidos uno por cada parte y el presidente por los otros dos, de entre los componentes de la lista aludida en segundo término en el párrafo a);
- d) Secretaría a cargo de un abogado que deberá recibir la demanda escrita u oral, citar a las partes para la constitución del tribunal, labrar las actas y redactar el fallo. El secretario tendrá voz consultiva en el pronunciamiento;
- e) Previa una audiencia de conciliación, el procedimiento será oral y público y fijado en los demás por el propio tribunal, en cada caso;
- f) Supresión total de los recursos y concesión de una acción de nulidad, a entablarse dentro de un término brevísimo ante la justicia ordinaria. Dicha acción que no tendrá efecto suspensivo sólo podrá fundarse en alguna de estas causas: fallos de cuestiones no comprometidas, ilegalidad de la constitución del tribunal, nulidad del compromiso y violación de normas de orden público.»

M. G. Méndez. — R. Goyeneche. —
J. M. González Sabathíé.

SR. PRESIDENTE (C'ANO). — En discusión general.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Debo hacer presente a la asamblea que al informar el despacho de comisión, reuno también el carácter de autor de la ponencia para prevenirla en mi contra en la medida que sea necesario.

El problema de la morosidad judicial que está siempre presente en los estudios de todos los que se han preocupado

de los problemas que plantea la administración de justicia, no ha sido, por desgracia, resuelto en forma satisfactoria, ni ha logrado tampoco agotarse la consideración de esos casos variados y complejos. La importancia que en esta cuestión, como en tantas otras, tiene el factor personal, ha acentuado la desorientación determinada en los estudiosos por la falta de estadísticas judiciales completas y exactas, y ha dado margen así, a que se nos ofrezcan como soluciones eficaces del problema, remedios que apenas si son empíricos. En razón de la importancia de los problemas que compromete, la situación ha determinado la proposición de reformas generales de nuestra legislación procesal (entre las cuales me hago un deber citar en este momento como excelente la que la Facultad de Derecho ha mandado imprimir, redactada por el doctor Jofré), reformas, digo, que no han logrado todavía la sanción legislativa y que quizá por mucho tiempo deban esperarla aún. En tanto, va ocurriendo en este asunto lo que dice el viejo adagio de que lo mejor es enemigo de los buenos, porque en el propósito de obtener soluciones generales del grave problema, hemos omitido la consideración de la posibilidad de encontrar soluciones parciales que resultasen realmente eficaces. En el convencimiento de que este problema tan zaramendeado de la morosidad judicial, pueda resolverse en un aspecto particular en lo que a los juicios que se derivan de obligaciones comerciales se refiere, es que he presentado este trabajo a la Conferencia, en el cual, probablemente por intuición, me he adelantado a las objeciones hechas hace un momento, limitándome a recomendar la importancia del arbitraje comercial, indicando una serie de bases que contienen lo esencial del proyecto y en cuya forma externa no insistiré mayormente.

En la mayor parte de las legislaciones europeas, y especialmente en la francesa, ha sido considerado como acreedor a un trámite especial el pleito por obligaciones comerciales. En Francia existe una jurisdicción comercial que no es como la nuestra (que está desempeñada por jueces iguales a los

civiles y desarrolla un procedimiento igual al civil) sino que ofrece esta característica: está integrada exclusivamente por comerciantes elegidos entre los de la matrícula en cada ciudad en que ejercen su ministerio. Esta institución a la cual los tratadistas franceses tienen bastante apego, ha sido discutida casi desde su iniciación, pero la oportunidad en que se le hizo mayor cúmulo de objeciones fué en la de la reforma alemana del año 87. En esa ocasión se hicieron diversas observaciones al sistema francés que entonces imperaba en algunas ciudades de Alemania, y de entre ellas hago gracia a la Conferencia de las que me parecen de menor importancia y entresaco la que sin duda es fundamental: la observación de que si bien el comerciante conoce el aspecto práctico y las cuestiones de hecho que el caso comercial plantea, no está en condiciones de conocer el aspecto legal de la cuestión, la faz jurídica del pleito. Esta objeción tan seria ha sido resuelta en las legislaciones de dos provincias hoy francesas, mediante un tipo de tribunal mixto de legos y letrados en Alsacia y Lorena, cuando después de la guerra del 70 Alemania las incorporó a su territorio y al tratar de germanizar sus instituciones introduciendo toda su legislación, tropezó en materia mercantil con la diferencia substancial de los tipos de jurisdicción, pues mientras en las provincias conquistadas existían los tribunales de legos, la legislación alemana iba a introducir los de letrados, constituidos del mismo modo que los tribunales civiles. La transacción entre ambas legislaciones se concretó en una fórmula feliz que vino a asegurar al existente una eficiencia extraordinaria: el tribunal de tipo mixto, presidido por un juez letrado e integrado por dos comerciantes.

La bondad de esta jurisdicción demostrada en el tiempo que lleva establecida, desde el año 70 y tantos, ha llamado de tal modo la atención de los juriconsultos franceses que cuando se discutía la ley del año 1922 por la cual se introdujo nuevamente en Alsacia y Lorena la legislación francesa, no sólo se respetó la legislación alemana al respecto, sino que se estudió muy se-

riamente la conveniencia de llevar a Francia las bases sobre las cuales funcionan esos tribunales de tipo mixto.

Pero sin duda recomendar por nuestra parte una institución de esa naturaleza, implicaría proyectar una reforma que adolecería del defecto esencial a que me he referido al principio: su excesiva importancia. Por eso es que, contemplando en detalle los motivos que determinaron el establecimiento de esta jurisdicción, he creído que la Conferencia podría hacer obra útil al país recomendando la adopción de un tribunal arbitral constituido sobre bases análogas. Y antes de concretar mi punto de vista al respecto, me he encontrado con un trabajo que responde esencialmente a los mismos objetivos: el presentado por Alberto Asquini, profesor de la Universidad de Padua al VI Congreso Nacional del Foro Italiano (reproducido en «*Rivista di Diritto Processale Civile*», Enero de 1926, página 4).

En dicho trabajo, que mereció la aprobación de la asamblea, el profesor Asquini detalla el funcionamiento de un tipo de tribunal arbitral que existe en la Bolsa de Trieste y cuya constitución descansa sobre las bases que la Conferencia acaba de oír.

El estatuto de la Bolsa de Comercio crea dos colegios arbitrales de sesenta miembros el uno y veintiocho el otro. El primero es elegido por tres años entre los miembros de la bolsa que reúnan requisitos determinados y que se designan por los propios asociados de la misma: el segundo, de veintiocho miembros, llamados árbitros extraordinarios o jueces de lista, es elegido por el presidente de la Cámara Comercial entre comerciantes ajenos a la bolsa. En las dos listas de ese colegio se eligen los miembros que han de constituir los tribunales arbitrales, según sea la condición de las partes que van a someter sus diferencias. Cuando se trata de cuestiones derivadas de contratos entre partes que son asociadas a la Bolsa de Comercio, el tribunal se elige por sorteo practicado entre los miembros de la primera lista, pudiendo deducirse hasta dos recusaciones sin causa. Cuando las cuestiones a someterse se

plantean entre partes que son extrañas a la bolsa, el tribunal es elegido por ellas mismas de entre miembros de la segunda lista, de veintiocho árbitros extraordinarios, en la forma siguiente: uno por cada parte y el tercero, presidente, elegido por los otros dos. Ambos procedimientos se combinan cuando una sola de las partes es asociada a la bolsa. En caso de renuncia del cargo, el reemplazante es designado por el presidente.

Ambos tribunales funcionan con un secretario que debe ser necesariamente abogado y reunir las demás condiciones para ser juez, y en cuya intervención radica la verdadera causa de la eficiencia del instituto. El secretario recibe la demanda, que puede ser escrita u oral, cita a las partes para que asistan a la constitución del tribunal, designa la audiencia para la discusión de la causa, recibe igualmente las excepciones de incompetencia, labra las actas, toma parte con voz consultiva en el fallo y lo redacta, dándole fuerza ejecutiva con su sola firma. La discusión ante el tribunal debe ser necesariamente oral y pública: en lo demás, el procedimiento es fijado por el mismo tribunal. Las partes se hacen representar casi siempre por abogados y salvo el preliminar de conciliación que es impuesto por la ley, el procedimiento se rige, como lo he dicho, por lo que disponga el tribunal en cada caso.

La legislación de los recursos contra el laudo arbitral es de singular importancia. No se consiente más que el de nulidad, que se concede sólo en casos taxativos: invalidez del compromiso, ilegalidad de la constitución del tribunal, incompetencia, violación de determinadas formas procesales, o transgresión de normas de orden público.

Este procedimiento ha dado en la Bolsa de Trieste resultados sumamente satisfactorios, en consideración a la celeridad de la justicia. En el año 1924, el 70 % de las causas se falló en menos de un mes; el 26 % en menos de tres meses; el 3 % en más de tres meses, y ninguna causa llegó a demorar más de seis meses en su substanciación y fallo.

Las bases que recomienda la ponen-

cia están tomadas de ese instituto que tan buenos resultados ha dado en la práctica.

No tengo más que decir. (*Aplausos*).

SR. CASTILLO. — Pido la palabra, para dejar constancia de mi opinión sobre este importante asunto. Comienzo declarando que en principio soy contrario al arbitraje forzoso. El que autoriza nuestro Código de Comercio ha resultado, en la práctica, una verdadera calamidad, tanto que los tribunales superiores de la Capital Federal, han pedido insistentemente su derogación. No es porque piense que el arbitraje es malo en sí, sino porque las situaciones son diversas y es difícil acertar en la elección anticipada de una jurisdicción.

Otra cosa es el arbitraje voluntario, la jurisdicción que pueden crear las partes en el momento de la contienda, ampliamente garantizado por nuestras leyes, o el que establecen ciertas instituciones, como la Bolsa de Comercio, para juzgar los actos de los coasociados, en lo que concierne a los intereses de la asociación o a asuntos de una naturaleza determinada, que tienen su juez mejor preparado, en la asociación misma.

De ahí a imponer a los comerciantes a aceptar como juez de sus posibles contiendas a un tribunal formado por un socio de la bolsa, un letrado y un comerciante, media una gran distancia, y se agravaría, en vez de mejorar el arbitraje del Código de Comercio impuesto para las cuestiones entre socios.

Me explico y justifico el anhelo de los comerciantes para darse sus jueces, y fijar reglas procesales fáciles y expeditivas, pero la Federación de Colegios de Abogados ha tomado en consideración ese anhelo legítimo y ha propuesto los medios de satisfacerlo, en el proyecto que pronto será elevado al Poder Ejecutivo. Volver sobre el tema para establecer bases distintas, importaría una desautorización a la primera resolución. Sin entrar en los pormenores del proyecto, me bastará considerar lo que ocurrirá, cuando la bolsa se vea asociada por los candidatos a figurar en la lista de la cual se formará el tribunal,

pues es de suponer, que serán cargos rentados.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — No, señor delegado, porque será una función gratuita.

SR. CASTILLO. — Me parece entonces que el asunto fracasará.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Hay que tener en cuenta que los que no son socios van a formar parte de un colegio distinto: la consulta de un árbitro, no es una imposición; simplemente se recomienda.

SR. CASTILLO. — Pero sin embargo, se crea una jurisdicción.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Se crea para que la usen si lo consideran necesario.

SR. CASTILLO. — No; nosotros no debemos sino hacer declaraciones de carácter general.

SR. GOYENECHE. — En el proyecto se deja librado a la voluntad de las partes la elección de los jueces.

SR. CASTILLO. — Pero en ese caso, somos los menos indicados para aconsejar a los comerciantes. Ellos saben mejor que nosotros la forma de arreglar directamente sus asuntos.

De todos modos y sin entrar a los detalles del proyecto que recién he podido conocer, insisto en algo que considero fundamental. La Federación de Colegios de Abogados ha considerado este asunto y ha nombrado una comisión para que redacte un proyecto que facilite la rapidez de los trámites judiciales, de acuerdo con las bases establecidas, con lo cual se persigue la misma finalidad que con el proyecto en discusión.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Mi respeto por la limitación de tiempo señalada a cada relator, me ha inducido a ser breve y quizás no suficientemente explícito.

Debo hacer presente en primer lugar que las bases que el proyecto recomienda tienen por objeto señalar a la consideración de los comerciantes las ventajas de este tipo de arbitraje, pero en modo alguno tienden a constituirlo en una jurisdicción forzosa. Hemos contemplado especialmente un aspecto de

la realidad en nuestra vida comercial: que el arbitraje va entrando en un auge cada vez mayor. Consta que todas las bolsas de comercio del país, sobre todo en Buenos Aires y Rosario, tienen establecido el procedimiento arbitral, que rendiría mayores beneficios si pudiera extenderse a los no asociados a las bolsas de comercio y a cuestiones que no deriven exclusivamente de cereales, que en la actualidad son las únicas que se consideran.

En cuanto a la objeción relativa a la sanción de la Primera Conferencia Nacional de Abogados, que aprobó las bases para un código de procedimiento, cuya sanción vendría a quedar en cierto modo desautorizada por la recomendación del arbitraje comercial, me parece que no es de suficiente consistencia y la oportunidad me brinda un antecedente tan aplicable al caso, que la asamblea ha de permitirme lo haga presente. El profesor Asquini, al estudiar la organización del arbitraje en la Bolsa de Trieste y pedir al Congreso Nacional del Foro Italiano, en los mismos términos casi con que me estoy expresando, la recomendación de su procedimiento, iniciaba su trabajo con un párrafo del eminente Carnelutti, que dice así (*leyendo*): «La crisis actual de la administración judicial radica en una insuficiencia de medios disponibles para la pronta solución de los litigios por la justicia: insuficiencia de calidad, insuficiencia de cantidad, insuficiencia de jueces, de abogados, de procedimientos. La crisis, particularmente en algunos puntos, es tan grave, que el remedio no debe tardar. Además, el problema es tan grave, que requiere, indudablemente para su solución definitiva, mucho tiempo y mucho dinero. Pero, nosotros no tenemos ni tiempo ni dinero. Estamos presos en las tenazas de la justicia y las de las finanzas. Debemos encontrar remedios que no nos cuesten ni un centavo; al menos que no cueste ni un centavo al Estado. Y entre esos remedios — agrega Asquini — mi ilustre y querido maestro, con la autoridad que se deriva no sólo de su gran versación sino también de su vasta experiencia, insinúa especialmente en uno: la reforma del arbitraje.»

Y es precisamente Francisco Carnelutti, el eminente redactor del proyecto de código de procedimiento civil italiano, el cual, al proyectar la primera parte del mismo, que ha sido también publicado por la «Revista de Derecho Procesal» no ha hecho ninguna referencia al arbitraje comercial. Tenemos, pues, este antecedente, abonado por la autoridad del maestro: que el arbitraje que nosotros queremos recomendar a los justiciables, no es en ninguna forma excluyente de los demás remedios que buscamos para solucionar el problema de la morosidad judicial, ni implica de ningún modo una desautorización a las soluciones generales que pueden encontrarse. Estamos frente a un hecho de la realidad jurídica extranjera y nacional: la posible importancia del arbitraje en materia comercial, si se extiende la esfera de aplicación de su jurisdicción. Repito el antecedente, que seguramente conocen los señores delegados, que tanto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires como en la de Rosario, funcionan desde antiguo tribunales de arbitraje comercial, cuya ineficiencia descansa en que no tienen más sanción que la de expulsión del miembro que no cumpla sus fallos, sanción interna que en ningún caso puede aplicarse a los que no fuesen miembros de la Bolsa.

Entonces, frente a un problema tan importante como la morosidad judicial y que compromete tan graves intereses, no creo que la Conferencia invada jurisdicciones, sino que está dentro de su misión de propender, en la medida de sus medios, al mejoramiento de la legislación aplicable, al decir a los comerciantes: «Señores, ustedes que son quienes más se quejan de la morosidad judicial, tomen nota de que el arbitraje planteado sobre determinadas bases y legislado sobre determinadas bases también, asegura la efectividad de los laudos e impide las cuestiones de nulidad que se multiplican en nuestro procedimiento, evitando así la situación que con mucho acierto ha pintado el doctor Castillo, de total desprestigio del arbitraje. No creo yo, repito, que estemos fuera del asunto al recomendar esta jurisdicción a nuestros clientes, que son los que con mayor angustia nos plantean cada día los inso-

lubles problemas que de la morosidad judicial se derivan. No hay ningún inconveniente en que les recomendemos un tipo de arbitraje que les permita resolver los pleitos con rapidez, escaso costo y justicia.

SR. PRESIDENTE (CANO).—Se va a votar en general el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta negativa.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Habiendo sido rechazado en general el proyecto, queda concluido el asunto.

4

Correlación de los derechos civil y comercial en materia de obligaciones

SR. PRESIDENTE (CANO). — Se va a pasar a considerar el punto de la orden del día relativo a la correlación de los derechos civil y comercial en materia de obligaciones.

SR. SECRETARIO (ROMERO DEL PRADO). — (*Leyendo*):

A la Segunda Conferencia Nacional de Abogados.

La comisión encargada por la Federación de Colegios de Abogados de la República para realizar la correlación de los derechos civil y comercial en materia de obligaciones, piensa que el trabajo debe realizarse sobre las siguientes bases:

- a) Simplificar los textos legislativos eliminando del Código de Comercio todas las disposiciones que continen análogas a las del Código Civil;
- b) En los casos de omisión, oposición o modificación de unas y otras, optar por la que consulte mejor los principios científicos y prácticos que la determinen o por la subsistencia de ambas.

La Conferencia designará una comisión que verifique esta labor de acuerdo con las bases establecidas.

El miembro informante, doctor Santiago F. Díaz dará en nuestro seno los fundamentos de este dictamen. — *Héctor Lafaille*. — *Carlos Scryeg*. — *Henech D. Aguilar*. — *Sofanar Novillo Corvalán*. — *José M. Valdez*. — *Santiago F. Díaz*.

SR. DÍAZ. — Pido la palabra.

Señor presidente:

La comisión encargada por la Federación de Colegios de Abogados de la República, del estudio relativo a la correlación de los derechos civil y comercial en materia de obligaciones, erce indispensable fijar en primer término el *contenido jurídico* que atribuye al tema propuesto a su consideración. Ello se explica no sólo por una razón necesaria de método, sino también como fundamento de las conclusiones que adopta en la materia y las soluciones prácticas que aconseja en cuanto atañe a la obra legislativa posible.

Parecería que un trabajo jurídico sobre correlación de obligaciones civiles y comerciales podría suscitar de nuevo la cuestión relativa a la *autonomía absoluta del derecho comercial*, o al menos la del carácter excepcional o meramente suplementario que algunos atribuyen a sus preceptos sobre los principios o las fórmulas jurídicas del derecho civil. La comisión considera que no es necesario volver sobre tan interesante punto de la doctrina que, si es necesario estudiar en las generalizaciones del aula, como parte esencial de la enseñanza para la formación de la conciencia jurídica, no lo es ya para fundamentar conclusiones de una conferencia de abogados. Prescindimos pues de exponer en esta memoria, aunque fuera en resumen, extenso de suyo, toda la vasta discusión que se iniciara por Delamarre y Le Poitevin en 1840 (*Traité théorique et pratique de Droit Commercial*, 1861, tomo I, capítulo 1), sosteniendo la independencia del derecho mercantil, a los que respondió Troplong con un artículo de la «Revue de Législation», 1842, tomo 16, página 62 y siguientes, inserto luego en el prólogo de su tratado *Du Nantissement* y en el tomo II del *Contrat de Société* (R. 1.070), en los que, con su elocuencia habitual, sostiene que el derecho civil, como derecho común gobierna los asuntos civiles y comerciales. Esta larga cuestión, si se quiere, podría llegar, por el necesario remonte de las ideas, hasta las épocas de los primeros códigos de comercio, como la ordenanza de Luis XIV y esencialmente el Código

de Comercio francés de 1807 en cuanto ellos separaron en un nuevo conjunto del enorme acervo formado por el pensamiento jurídico de los siglos y el trabajo silencioso y profundo de las costumbres, todas las reglas atinentes a la persona de los mercaderes y a los actos genuinos de su actividad encaiminada a la consecución de la riqueza, por el tráfico habitual sobre mercancías. Fácil es comprender que, prescindiendo de algunas reglas sobre el comercio marítimo, de la más remota antigüedad, como las leyes Rodias que conocemos por un fragmento del *Digesto* («De lege Rhodia», de iactu, libro XIV, título 2) y de algunas otras sobre materias especiales: relaciones de personas dependientes y *sui juris* respecto a sus principales en actos de comercio (*Digesto*, «De exercitoria actione» libro XIV, título I); «De institoria actione» (XIV, 3); «De distributoria actione» XIV, 4); sobre el préstamo de la gruesa («De Nautico fœnore» libro XXII, 2); averías comunes (XIV, 2, allí); responsabilidad del armador (IV, título 9, «Nauta caupones stabularii»); y prescindiendo asimismo de las compilaciones de leyes y del derecho estatutario con que la Edad Media llenó el pensamiento jurídico de ambas márgenes del Mediterráneo—la aparición del Código Francés; como cuerpo el más completo de doctrina y de jurisprudencia comercial, suscitó el análisis de su contenido jurídico y de su relación con el derecho civil ya que muchas de las convenciones regidas por éste, constituían asimismo, con modalidades características, la materia del nuevo código. No intentaremos pues, como se dijo más arriba, recordar toda la literatura que ilustra hasta el día esta larga controversia, la que pareció encenderse de nuevo con la sanción del Código Federal de las Obligaciones en Suiza, que constituye el libro V del Código Civil de la Confederación y en el cual debe verse, ante todo, la realización jurídica de la unidad política de la Nación del mismo modo que nuestro Código Civil conforme al pensamiento orgánico de la Constitución Nacional, realizó también la idea jurídica del federalismo argentino, claramente marcada por la corriente profunda de la vida colonial

en la vigorosa unidad de la legislación de Indias.

Acase sea innecesario decir que ni la promulgación de aquel código, ni la vasta producción de los escritores sobre el debatido punto de las relaciones de ambos derechos, habrían agotado la materia, sobre todo si en cada caso hubiere de adoptarse una posición extrema bajo los colores de banderas diversas. No parece que éste fuera el método más adecuado a la construcción científica cuya armonía en la justa estructura del todo, resulta de la lenta acomodación de las ideas y de los hechos, al sentimiento profundo de justicia que, como decían los romanos, brota en el corazón de todos los hombres honrados. Y si esta vasta y bella generalización es suficiente como un fecundo principio ontológico, para satisfacer nuestra honda visión espiritual de armonía, explicando por su medio la fuente común de todo derecho, así como percibimos la unidad fundamental de toda la ciencia, bien se comprende que ello solo no baste para explicar la naturaleza y caracteres de los diversos elementos que constituyen ahora la materia de las ciencias o de los derechos civil y comercial en particular. Es por eso que toda la emoción ética y jurídica de los tiempos anteriores, resumida en la prístina y magnífica unidad del derecho romano no fué bastante al mismo talento de Pothier para fundamentar el derecho comercial en las instituciones jurídicas de Roma exclusivamente. Del mismo modo no podríamos decir nosotros ahora que el derecho civil sea la única fuente del derecho comercial, aún cuando aquel, como es cierto, gobierne el más vasto conjunto de relaciones humanas. No tendría esto valor científico que implica verdad absoluta, tal cual es, según la precisa definición de la escuela y no podríamos fundar en esta afirmación de verdad incompleta un sistema de unificación de ambos derechos. Los usos y costumbres del comercio (*consuetudo mercatorum*) fueron el origen de este derecho. La utilidad consiguiente y la ley que consulta la finalidad económica de los actos de comercio, han ido sedimentando sus elementos básicos en la formación del derecho comercial y dándole por eso

mismo su fisonomía propia en ciertas instituciones, al modo que el ambiente geográfico imprime genuino relieve a las cosas del mismo género. Tal vez baste para ilustrar esta verdad, no siempre visible en su claro fulgor para la especulación de ciertos espíritus excesivamente generalizadores así en lo político como en lo jurídico, la estructura singular del contrato y de la letra de cambio y las instituciones del derecho comercial, marítimo, personas, contratos o cosas que aparecen como saturados por el magnífico elemento en que se desenvuelven, cuyas extrañas mutaciones de serenidad azul y de furia destructora, consultan las reglamentaciones del personal, el carácter jurídico del patrimonio marítimo y los efectos de las convenciones, la gruesa, el caso, en la que, la buena o mala fortuna del viaje, decide sobre la obligación del deudor.

Es indudable pues, que las costumbres comerciales y la equidad formaron un derecho distinto introduciendo además, siempre que fué necesario, modificaciones o derogaciones expresas al derecho común, de tal modo que, como lo enseñan Lyon Caen y Renault puede decirse con verdad del derecho mercantil relativamente al derecho civil, lo que en igual relación dijo Pomponio del derecho del pretor: el derecho comercial confirma el derecho civil, lo completa o lo modifica (*Traité de Droit Comm.*, I & 10). Es esta naturalmente la misma enseñanza de Papiniano: derecho pretoriano es el que por utilidad pública introdujeron los pretores a fin de ayudar, suplir o corregir el derecho civil (*Digesto*. «De instituta et jure» título I, libro 7, n. I).

Ni se explicaría de otro modo que por la realidad de un derecho especial, la penetración cada vez más notoria de las instituciones del derecho comercial en las del derecho civil, como ocurre entre otros casos con la cláusula o la orden en los documentos de crédito (Código Civil, artículo 1.456), la limitación de la responsabilidad y la división del capital en acciones, siempre posible, para las sociedades civiles como lo es para las de comercio y la aplicación de la ley mercantil en los casos en que, conforme a lo dispuesto por el artículo 7º del C6.

digo de Comercio, la relación contractual tenga ese carácter para una de las partes solamente.

Después de lo dicho no es necesario «superabundar en la prueba para concluir que uno y otro derecho se caracterizan por *analogías de género y diferencias específicas*, elementos lógicos suficientes para darnos, con el conocimiento de las cosas, la regla de la definición perfecta. Con este criterio los escritores franceses han entendido la ampliación de las leyes civiles a los negocios mercantiles, a falta de una disposición sobre el particular, aun cuando el Código Francés de Comercio no lo preceptúa expresamente como el nuestro, sino de un modo ocasional (artículo 18) a propósito de las sociedades. Y con el mismo concepto de que el derecho común rige las relaciones mercantiles análogas, los códigos modernos han resuelto de modo uniforme la aplicación del derecho civil para los casos no previstos en el de comercio, sin referirme acá, naturalmente, a la primacía o no de los usos mercantiles. No ha parecido necesario suscitar de nuevo la controversia sobre la unificación; y cabe notar aquí los conceptos del propio Vivante al respecto, en 1922, como presidente de la Comisión Redactora del proyectado del nuevo Código de Comercio Italiano, quien anteriormente la había propiciado, como se sabe.

«Antes de ponerse a la obra, escribe en su relación el eminente profesor, la comisión tuvo cuidado de estudiar la oportunidad de unificar el Código Civil y el Código de Comercio en un solo código. Formaban parte de ella, elementos entusiastas de esta fusión quienes creían que por medio de ella, muchas ramas ya secas del Código Civil habrían podido podarse, libertando así al Código de Comercio de su pesada armadura profesional. Ellos creían que, como consecuencia de esta fusión se habría podido formar una teoría general de las obligaciones más nueva y más capaz de dominar todo el derecho privado. Pero el estado de madurez de las dos ramas del derecho es demasiado diferente. Si se hubiese debido esperar que el estudio de la teoría general de las obligaciones y la de los contratos

hubiese llegado a igual estado, se habría debido renunciar a la reforma del Código de Comercio: la diversa marcha con la que se elabora el contenido de estos códigos, quizás oponga siempre un obstáculo insalvable para la unificación. Por este motivo el presente proyecto deja intacto el contenido de ambos códigos.» (*Progetto preliminare per il Nuovo Codice di Commercio*. Relazione, página 200, Hoepli, edición 1922).

Por cierto que conforme a esta manifestación terminante, el texto del proyecto sobre relación de las leyes civiles con la materia comercial es análogo con la del código vigente (artículo 1º). Y es justo recordar ahora que la opinión transcrita de Vivante, coincide en lo esencial con los motivos que expuso sobre la materia treinta y tres años antes, la Comisión de Códigos de la Cámara de Diputados de la Nación en su informe sobre la reforma de 1889. Al mantener el Código Civil, como la regla general que rige al comercio mismo en los casos no previstos por la legislación comercial, expuso: que en el estado actual de la evolución jurídica, no es conveniente independizar por completo la legislación mercantil y agregó: «La legislación civil rige relaciones generales que comprenden a todas las personas, incluso los comerciantes y a todos los bienes, sean o no objetos de comercio. Los tipos generales de contratos y obligaciones, como los referentes a la adquisición y transmisión de los bienes, comprende en sus contornos a las relaciones análogas del derecho comercial. El derecho racional y la utilidad general, que son la fuente y razón de las leyes civiles, lo son al mismo tiempo de las comerciales; de donde resulta que sus prescripciones tienen que coincidir e identificarse, cuando se trata de relaciones jurídicas cuya naturaleza permanece la misma, sean civiles o comerciales. No hemos vacilado, pues, en establecer de la manera más general y terminante que las leyes civiles suplen a las comerciales en los casos no previstos por éstas.» (Informe, página VII, Código de Comercio. Lajouane, edición, 1896).

Es el mismo pensamiento que inspira la enseñanza del ya citado profesor de Roma en sus *Instituzioni*, edición 1924.

para quien no aparece inconveniente alguno de la aplicación del derecho civil a los negocios comerciales porque, dice, en él se reúnen casi todas las normas generales sobre las obligaciones, las que el Código de Comercio no ha derogado sino en muy pocos casos y porque, para muchas relaciones mercantiles, el Código de Comercio no ha establecido norma alguna como ocurre en los casos relacionados con inmuebles o sobre el trabajo, en los cuales es necesario recurrir, casi exclusivamente al Código Civil.

La comisión ha considerado así, señor presidente, la realidad jurídica y su profundo arraigo en la vida de relación y ha creído que, atendiendo a la trascendencia del tema debía consultar previamente a la Conferencia sobre el contenido jurídico que le atribuye y su realización práctica. Con este pensamiento establece las bases consignadas en el dictamen sobre el cual he tenido el honor de informar. (*Aplausos y felicitaciones al orador*).

Sr. LAFAILLE. — Después de las palabras tan acertadas que acaba de pronunciar mi distinguido colega doctor Díaz, que honra en esta casa la cátedra de derecho comercial, tal vez pareciera innecesario que se agregara algo en apoyo de sus conclusiones. Sin embargo, considero útil deslindar la situación de esta comisión segunda, llamada a examinar, tal vez el punto más importante del programa, que aparece sin aconsejar nada sobre el fondo de la cuestión y delegando esa tarea en una entidad extraña.

No sería justo, sin embargo, acusarla de negligencia o desuido en el desempeño de su tarea. Todos los miembros que la componen no han esperado esta Conferencia, para preocuparse de la correlación entre los códigos Civil y Comercial; correlación que no solamente plantea todos los problemas teóricos que acaba de señalar el doctor Díaz, sino también una serie de cuestiones prácticas interesantísimas, tales como averiguar cuál deberá ser la preponderante entre dos o más cláusulas de ambas legislaciones, unas veces antagónicas y otras, con meras antino-

mias aparentes. Pero la comisión no ha querido entrar en esos detalles de orden técnico, precisamente por las atinadas consideraciones que se han hecho valer en el curso de los debates, cada vez que hemos discutido ciertos proyectos con demasiada extensión. En el fondo, pensamos que esta Conferencia no debe sino sancionar principios de carácter general; si nos hubiéramos engolfado en los artículos para modificar los textos vigentes, ello nos habría conducido a una obra de orden técnico, lenta y engorrosa, capaz de prolongar el término de nuestras reuniones y aun de substraer esta asamblea a su labor normal.

Además, por la misma seriedad de la Conferencia no se debe resolver ninguno de estos puntos sin una discusión unánime y serena, que sólo puede desenvolverse mediante comisiones de especialistas como lo señala el proyecto. Podría ser en este caso la misma que se designe para estudiar el primer tema o una especialmente nombrada a tal efecto. Así, por ejemplo, esa comisión tendrá que decidir si el pacto comisorio implícito que en materia civil aparece excluido por el artículo 1.203, debe quedar proscripto, o si ha de prevalecer en cambio la disposición más elástica y conveniente para las necesidades prácticas que consagra el artículo 216 del Código de Comercio cuando legisla dentro de su órbita.

Debo manifestar también, que, en realidad, esa contradicción tan flagrante a primera vista entre los dos grandes códigos es más aparente que real, pues como es sabido, nuestra ley civil después de sancionar el principio, ha establecido tantas excepciones que casi lo cubren sobre todo en los contratos más comunes como la locación de cosas, la de servicios, no menos que en la sociedad y hasta, bajo ciertos aspectos, en la compraventa. De igual modo tendrá que pronunciarse en cuanto a la enajenación de la cosa ajena, declarada nula por el Código Civil (artículo 1.329) y válida por el de Comercio (artículo 453), divergencia bien explicable sin embargo, cuando se repara que el uno aplica la norma de que nadie puede transmitir un derecho mejor que el

propio, al paso que el otro legisla sobre muebles no sometidos a esa regla, aún en los códigos más apegados a ella. Sería menester, pues, una revisión encaiminada a retocar los preceptos que se relacionan con aquellos textos y a fijar claramente los términos de uno genérico que habría de dominar todo el derecho privado, en lo relativo a esta materia.

Añádase muchas contradicciones de orden secundario, que sería forzoso corregir. Así, las arras que dan margen al arrepentimiento (artículo 1.202, Código Civil) y que la excluyen salvo pacto expreso (artículo 475, Código de Comercio), o la cláusula de ensayo (*ad gustum*) suspensiva en aquel (artículos 1.336, 1.365, 1.377) y resolutoria en éste (artículo 455). Estos ejemplos corroboran que la Conferencia por su brevedad y los fines que persigue no se encuentra en condiciones para discutir los temas que sugiere la armonización de los códigos Civil y Comercial — y que esta obra, de tanto interés para el foro, debe ser encomendada a los especialistas. Ella habrá de considerar las dos grandes ramas del derecho privado, la una que está sometido a un ritmo más lento, pero a cuya transformación profunda estamos asistiendo; la otra que por su relación más directa con la realidad y con la vida, se mueve, se transforma de una manera más rápida. Ambas deben conciliarse si no en un código único por lo menos en los textos contradictorios. Sería un timbre de gloria para esta Conferencia y un paso hacia adelante en el perfeccionamiento de las instituciones jurídicas.

Teniendo ya la comisión estudios adelantados sobre muchos de estos puntos, ha entendido por todas las razones expuestas que no debía pronunciarse, en esta oportunidad, ni someter a la asamblea un proyecto articulado. Esa es una obra incompatible con la índole de nuestras sesiones; de suerte que la asamblea debe fondearla, pero no llevarla a cabo. Por ello, sea que se encargue a la misma comisión, sea que se nombre otra nueva, siempre estaré conforme con que se apruebe este pensamiento para llevarlo adelante con los

medios adecuados, que dejaremos establecidos en estas reuniones.

Nada más. (*Aplausos prolongados*).

SR. GOYTÍA. — La Conferencia de abogados debe recordar que ha creado una Comisión Permanente de Estudios Legislativos que tiene por propósito precisamente que se le lleven temas para estudio. Esta designará los redactores que con la serenidad del caso, puedan tratar los temas presentados y ofrecer su dictamen al cabo de un tiempo a la Comisión Permanente, la que a su vez adoptará estos dictámenes, los reformará o rechazará. Por consiguiente, la propuesta de hacer un estudio de correlación del derecho civil y comercial, hecha por los dos señores delegados que han fundamentado el proyecto en forma tan elocuente, puede tener su medio de realización sin crear ninguna otra comisión en la ya creada Comisión Permanente de Estudios Legislativos.

Es el caso, entonces, no de entrar al estudio particular del proyecto, sino sencillamente que la Conferencia dé un voto en general, si se puede o no pasar el proyecto de referencia a dicha Comisión. Dejemos a ella, como decía el doctor Lafaille, el estudio en particular del asunto y la correlación de ambos derechos. Por otra parte, si siguiéramos la propuesta de que se nombrara una comisión para agregarse a la ya existente, no haríamos sino perjudicar a esta última. Debemos dejar — por las mismas razones que se dieron en la sesión anterior — en absoluta libertad a esta comisión, ya creada por la Conferencia; así que mi apoyo es al proyecto en general y mi oposición es en cuanto a la forma de llevarlo a la práctica, en el sentido que no se cree ninguna comisión, sino que se destine el proyecto a la Comisión de Estudios Legislativos y en apoyo de lo cual creo que ha de haber conformidad de parte de los señores delegados.

SR. CASTILLO. — Hago moción, para que se designe a la misma comisión que se ha expedido sobre el asunto.

SR. AGUIAR. — El despacho de comisión se ha limitado simplemente a fijar las bases dentro de las cuales la comisión que se nombre deberá desarrollar

su programa de correlación de ambos derechos y esta comisión, puede muy bien ser la Permanente de Estudios Legislativos que se ha creado en la primera sesión de esta Conferencia, como puede ser una comisión dependiente de ella y por ello se ha dejado establecido una opción en la parte final del dictamen cuando dice: «Para verificar esta labor, la Conferencia designará una comisión, que podrá formar parte de la Comisión de Estudios Legislativos creada ya por esta Conferencia».

Es posible, señor presidente, que la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, por una u otra razón, no pueda ocuparse o dedicarle a la correlación de las obligaciones de los dos derechos, el tiempo o la preparación necesarios, y sea indispensable constituir en tal caso una comisión de técnicos capacitados en las dos materias, es decir, especialistas en derecho civil y comercial para que lleven a cabo tan ardua labor. De manera que sostenemos el despacho de la comisión en la forma en que ha sido presentado en cuanto queda a elección de la Conferencia determinar que sea la Comisión Permanente de Estudios Legislativos o una comisión distinta de ella.

SR. SILGUEIRA. — Pido la palabra.

Quiero dar simplemente un antecedente que tal vez sirva para que el doctor Goytía retire su moción, antecedente que proviene de la comisión organizadora de la Conferencia. Se designaron tres comisiones, una encargada de estudiar el primer punto; otra comisión mixta de Derecho Civil y Comercial encargada de estudiar el segundo punto, cuyo núcleo central estaba aquí en Córdoba y una tercera Comisión de Derecho Comercial encargada de estudiar las cuestiones referentes a tres puntos, cuyo núcleo central también estaba en Córdoba. Con este motivo, y con todas las deferencias que la comisión organizadora reconoce y agradecer, aceptaron formar parte de esa comisión especialistas en derecho civil y comercial como los doctores Aguiar, Díaz, Martínez Paz, Novillo Corvalán, Valdés.

Bien; esa comisión hizo estudios en el término de seis meses sobre puntos aislados; ha combinado ideas; ha formu-

lado un plan general que ha sufrido ligeras modificaciones por la actual comisión. De suerte que tenemos adelantado el trabajo sobre el particular; debería ser, pues, esta Comisión especial la encargada de continuar este estudio, porque de lo contrario se corre el riesgo de que estos miembros de la comisión especial no resulten designados, con lo cual perderíamos un aporte valioso y útil acumulado con anticipación. Este es el informe que doy en nombre de la comisión organizadora de la Conferencia.

SR. BAUDÓN. — Pido la palabra.

Para apoyar la moción formulada por el doctor Castillo en el sentido de que la comisión que ha estudiado laboriosamente y con la anticipación de tiempo a que acaba de referirse el doctor Silgueira, este asunto, sea la misma que continúe estudiando su dictamen con el proyecto definitivo, por las razones del trabajo hecho, por el orden del mismo y por la elocuentísima exposición del señor miembro informante doctor Díaz. Creo que hay un detalle fundamental y sencillo que viene a facilitar y eliminar la observación hecha por uno de los miembros de la comisión que presentó el proyecto de creación de la comisión permanente, y es éste: entiendo que el proyecto de la Comisión Permanente establece que ese instituto en cada caso nombrará miembros o redactores de fuera de su seno para estudiar los asuntos especiales e informar a la Comisión, la que se limitará a estudiarlos y formular su despacho. De manera que si ese es el procedimiento articulado y normal con que va a trabajar el instituto hay una afinidad absoluta en el propósito perseguido de que la comisión especial que ya tiene su trabajo hecho continúe en la elaboración del mismo proyecto y el procedimiento normal de estudio de los trabajos por parte de la Comisión Permanente de Estudios Legislativos. Creo que esta pequeña observación elimina toda discusión al respecto y facilita la aprobación de la moción del doctor Castillo.

SR. GOYTÍA. — Efectivamente con la explicación dada por el doctor Silgueira, parece más adecuado que sean los

misimos miembros de la comisión especial los que se ocupen de este asunto.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Hago notar que el proyecto está en discusión en general y los señores delegados se están refiriendo al artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

—Se vota y es aprobado.

—Se lee el artículo 1º.

SR. CASTILLO. — Del Código de Comercio y del Código Civil, debe decirse.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Dice el despacho: «eliminando del Código de Comercio.»

SR. DÍAZ. — El concepto está previsto en la base b), señor presidente.

—Se leen las bases a) y b).

SR. AGUIAR. — El caso es claro. Cuando la misma cláusula está en el Código Civil y en el Código de Comercio, se elimina la del Código de Comercio, que es una especialización de materia más vasta y general.

SR. LAFAILLE. — Hay que dar siempre al Código Civil el carácter de regla general y así habría que suprimir una cantidad de resabios del viejo código de 1862, que han pasado al de Comercio, que hoy nos rige y no siempre son congruentes con las soluciones a que Vélez llegó más tarde.

—Se aprueban las bases a) y b).

—En discusión la base c).

SR. CARLOMAGNO. — Me resulta violento, señor presidente, insistir una vez más sobre este procedimiento de la comisión que tendrá que estudiar y darnos la solución definitiva en los proyectos que se han presentado a esta Conferencia. Y vuelvo una vez más a hacer resaltar que ayer se aprobó tal vez con un estudio poco meditado de la Conferencia, el proyecto de la Comisión Permanente de Estudios Legislativos. El delegado que me ha precedido en el uso de la palabra sobre esta cuestión, acaba de decir que se va a facilitar la solución con la designación de los redactores, que

serán los mismos miembros que han compuesto la comisión que acaba de presentarnos este proyecto.

SR. BAUDÓN. — Sí, he sido yo. No ha sido esa la modificación; decía esto: que el proyecto aprobado creando el instituto permanente, establece que para el estudio de los proyectos se designarán redactores, lo que quiere decir que queda así implícitamente autorizada la comisión para nombrarlos; de modo que hay una coincidencia de procedimiento.

SR. CARLOMAGNO. — A mi juicio, esos redactores deben trabajar por separado, y como son rentados...

SR. BAUDÓN. — No hay que vincular una cosa con la otra.

SR. CARLOMAGNO. — Es mi opinión que este proyecto o tiene que pasar a la comisión que lo ha tenido hasta hoy, cuya información hemos escuchado hace un momento, o tiene que pasar a la Comisión de Estudios Legislativos.

Esta última no lo va a poder estudiar en la forma que fuera necesario, porque como se ha anticipado por los señores delegados que han hecho uso de la palabra anteriormente, debe ser sometido a estudio de especialistas en la materia, que reúnan las condiciones necesarias y entre los cuales se encuentran los miembros que componen esa comisión. Entonces sería imposible pasarlo a la Comisión de Estudios Legislativos que, por otra parte, no se ha constituido todavía. Lo mismo va a pasar con otros proyectos en materias de derecho civil y comercial; todos ellos tendrán que pasar directamente a estudio de especialistas y la Comisión de Estudios Legislativos se compone en esta forma: en su mayoría por miembros nombrados por los colegios de abogados de la República; estos colegios de abogados designan un miembro titular, el cual debe ser elegido de acuerdo con las condiciones que se establecen en cada colegio o con las modalidades que se determinan en su elección. Este cuerpo colegiado se dividirá en secciones, pero yo encuentro — y voy al lado práctico — que va a ser difícil establecer comisiones de especialistas en cada materia. En la cuestión que estamos tratando están los doctores Díaz, Lafaille, Aguiar, Valdés, Corvalán, Serrey y Mar-

tiñez Paz; es decir, está compuesta por distinguidos abogados de la ciudad de Córdoba, uno de Buenos Aires y otro de algún otro punto, y tendría que dar la coincidencia de que el colegio de abogados respectivo los elija a ellos mismos para formar parte de la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, y por la resolución aprobada, cada colegio no podría elegir más que uno. De manera que todos los demás quedarían desplazados. Entiendo, por lo tanto — y no quiero cansar a los señores delegados — que la Conferencia debe tratar el proyecto que pasó a comisión, resolviendo que todos los asuntos que sean breves, ya sean bases de legislación o articulados de ley, pasen directamente a la comisión que se designe por esta Conferencia en este acto, o al Poder Legislativo en caso de aprobarse como proyecto de ley.

SR. STANCHINA. — Ayer, si mal no recuerdo, se resolvió este punto al ser tratados los despachos de comisión, y yo había propuesto entonces que se designaran los miembros de las comisiones, pero a indicación del doctor Silgueira se aceptó que sea la Federación de Colegios de Abogados la que los designe. Es necesario, pues, armonizar esos criterios para que no intervengan, por una parte, miembros de la Conferencia, y por otra, la Junta de Gobierno de la Federación de Colegios de Abogados, sin una razón especial que lo justifique, por lo que propongo que, según los casos, se les nombre, ya sea por la Conferencia, por dicha Junta, o en su defecto, por la Comisión Permanente de Estudios Legislativos.

SR. CARLOMAGNO. — Que se vote la moción del doctor Castillo, cerrándose el debate.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Se va a votar la moción de cerrar el debate.

—Se vota y es afirmativa.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Se va a votar el artículo 3º del despacho de la comisión.

SR. CHEDUFAU. — Me permito preguntar si el proyecto del doctor Castillo en aprovechamiento del trabajo...

SR. PRESIDENTE (CANO). — Se ha cerrado el debate, señor delegado.

SR. BAUDÓN. — Yo rogaría al señor presidente que me permitiese aclarar si la votación favorable del artículo 3º implicará el rechazo de la moción del doctor Castillo.

SR. AGUIAR. — No importa el rechazo de la moción del doctor Castillo, desde el momento que dice que podrá formar o no parte de la Comisión Permanente de Estudios Legislativos y en seguida la Conferencia resolverá cómo debe hacerse.

SR. DE LA CAMPA. — Concordando, señor presidente, propongo que se vote en primer término la moción del doctor Castillo, y si no fuera aprobada...

SR. LAFAILLE. — Una simple indicación. En nuestro informe no nos hemos pronunciado en cuanto a si la nueva comisión debe formar parte o no de la designada para el primer tema de la Conferencia. Dejamos este punto al criterio de la asamblea. Pero después de lo propuesto por el doctor Castillo, sólo nos resta decir que sería un honor para nosotros si tal iniciativa llegara a ser votada.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Se va a votar la moción del doctor Castillo.

SR. CARLOMAGNO. — ¡Pero si esa moción entra dentro del artículo 3º!

SR. PRESIDENTE (CANO). — El artículo dice: «Para verificar esta labor la Conferencia designará una comisión que podrá formar parte de la Comisión de Estudios Legislativos, creada ya por esta Conferencia». Resuelta esta cuestión, vendría la forma de componer esa comisión.

SR. CARLOMAGNO. — Si no se aprueba el artículo, no se puede votar la moción del doctor Castillo.

SR. CASTILLO. — Yo insisto en mi indicación. La comisión no tiene inconveniente en que se vote.

—Se lee la moción del doctor Castillo.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Se va a votar la moción del doctor Castillo.

—Se vota y resulta afirmativa.

SR. SILGUERA. — Está integrada esta comisión con los doctores Valdés, Aguiar, Díaz, Lafaille, Martínez Paz, Novillo Corvalán y Serrey.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Queda sancionado el despacho de la comisión.

5

Agasajos

SR. PRESIDENTE (CANO). — La Presidencia ruega a los señores delegados que están dispuestos a asistir a la excursión del sábado a las sierras, se sirvan dar los nombres a un empleado que durante la sesión los va a tomar, para saber si se va a realizar o no, porque hasta este momento la mayoría de los señores delegados no han contestado. Es necesario saber a qué atenderse.

Completando la información, debo hacer presente que esta excursión es absolutamente gratis; los señores delegados no tienen que hacer ningún gasto, pudiendo concurrir con sus respectivas familias. Los Ferrocarriles del Estado han tenido la deferencia de establecer condiciones especiales a fin de facilitar esta excursión.

6

Destino de las resoluciones de la Conferencia

SR. PRESIDENTE (CANO). — Se va a leer el despacho de la Comisión Especial sobre el destino de los asuntos que resuelva aprobar la Conferencia, pues no existe hasta este momento otro despacho de comisión sobre puntos del programa oficial.

SR. SECRETARIO (ROMERO DEL PRADO). — (*Leyendo*):

Vuestra comisión especial ha considerado la consulta sobre el destino que debe darse a las declaraciones y sanciones de la Conferencia y os aconseja la aprobación del siguiente proyecto de resolución:

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados resuelve no dictar reglas de carácter general respecto al destino de las declaraciones y sanciones de la Conferencia, el que se determinará por ésta en cada caso.

(*Siguen las firmas*).

SR. PRESIDENTE (CANO). — En discusión.

SR. BARRAQUERO. — Pido la palabra. No se ha designado miembro informante de este asunto, pero como miembro de la comisión que lo ha estudiado, voy a decir algunas palabras al respecto. Teniendo la Conferencia su reglamentación, no debe complicar su procedimiento con disposiciones de carácter general. En cada caso la Conferencia debe determinar qué procedimiento corresponde según sea la naturaleza de los asuntos.

SR. DONCEL. — Posiblemente haya habido una falla en la proposición estudiada. El caso es que según mi manera de ver, lo que se deseaba saber era dónde debían ir los proyectos relacionados con el punto tercero; es decir, todo lo relacionado con la reforma del Código de Comercio. A objeto de procurar salvar ese inconveniente, hice un pedido de reconsideración respecto a lo resuelto en el trabajo del ingeniero Ramallo que se mandó a una comisión especial. Se me hizo la objeción de que no se podía rectificar. Y yo creo que es más edificante rectificar lo rectificable, que mantener lo que se ha pensado mal, por el simple hecho de que ya se ha pensado. Por otra parte está en el deseo de todos que se sancionen los proyectos y que la Conferencia dé resultado; pero una vez abierta la discusión de un precepto no debe cerrarse precipitadamente el debate como ocurrió hace un momento en que fui interrumpido en el uso de la palabra por una moción de cerrar el debate que se votó inmediatamente. Yo iba a hacer algunas reflexiones a lo resuelto ya por la comisión especial encargada de estudiar los asuntos del punto segundo del programa, porque desde el punto de vista que yo contemplo la cuestión el problema varía. Tenemos ya nombrada por la Conferencia la comisión que debe estudiar el Código de Comercio y que debe correlacionar todas las disposiciones. Páreceme entonces que esta nueva disposición establecida, nos pone en el caso de remitir a esa comisión todas las conclusiones de la Conferencia que importen reformas al Código

de Comercio y en ese sentido voy a fundar una moción substitutoria del despacho de la comisión, insistiendo al mismo tiempo en mi proyecto de reconsideración del nombramiento de comisiones para estudiar el proyecto del señor Ramallo, a objeto de que ese asunto, por importar también una reforma al Código de Comercio vaya a la misma comisión, es decir, que ésta, cuya competencia se reconoce ampliamente, pueda presentar un proyecto de reforma total al Código de Comercio, teniendo en cuenta todo el estudio pertinente de esta Conferencia.

-Apoyado.

SR. PRESIDENTE (CANO). — ¿Quiere redactar su moción el señor delegado?

SR. DONCEL. — Que se remita a la comisión que ha estudiado el segundo punto, todas las conclusiones sancionadas por la Conferencia relativas al punto tercero. Item más: podría proponer que el proyecto que elabore esa comisión sea presentado por la Junta de Gobierno de la Federación directamente a las autoridades nacionales, consecuente con los antecedentes de la Conferencia anterior. Si acaso pudiera pensarse en un recargo grande de trabajo para la comisión, creo que está en nuestras manos designar auxiliares o autorizar a la comisión a designarlos.

Podríamos escuchar la opinión de los miembros de la comisión.

SR. CASTRO. — Me he de oponer a la indicación del señor delegado, ya que con ello habríamos desnaturalizado en principio la finalidad que ha tenido muy especialmente en cuenta la Conferencia al designar esa comisión.

Como se desprende de los fundamentos del proyecto que la ha creado, lo que se propone obtener es la realización de un estudio prolijo y meditado para conseguir la eliminación del Código de Comercio y del Código Civil, todas aquellas disposiciones inútiles, por estar repetidas en uno y otro cuerpo de legislación, o antagónicas, por obsecer su sanción a diferentes épocas, y por tanto a distintos criterios legislativos. La parte esencial de la tarea de

esa comisión debe referirse a la forma en que se legisla en ambos códigos la materia de obligaciones, que hoy constituyen articulados que no guardan la correlación lógica que debiera existir entre la legislación de fondo, o sea la civil y la de excepción como lo es la comercial. Es en realidad una tarea científica de depuración.

No es posible entonces que a una comisión de especialistas en esa materia, designada ya con ese criterio, la coloquemos en el caso de realizar investigaciones sobre temas de derecho marítimo y otros de carácter excepcional dentro de la misma legislación mercantil, como lo son los relativos a la cláusula CIF y crédito documentario; tareas ajenas a su vocación, y que les quitarían, además, el tiempo necesario para finalizar con eficacia y rapidez la misión fundamental encomendada.

Como a la vez se ha proyectado una Comisión Permanente de Estudios Legislativos, considero lo más acertado enviar a ella las ideas de esa índole, o si no determinar en cada caso dónde debe ir el asunto, pues no sería difícil que un proyecto, por su naturaleza especial no correspondiera destinarlo ni a la comisión que estoy defendiendo, ni a la Permanente de Estudios Legislativos.

Por estas razones voy a votar el despacho de la comisión tal como está redactado, ya que él establece un criterio general que nos permite resolver el problema, indicando un sistema, y dentro de ese sistema la Conferencia ajustará en cada caso su conducta. Nada más.

SR. GORTÍA. — Yo creo que por la forma en que ha sido planteado el asunto, volvemos a la verdadera cuestión, que es votar el despacho de la comisión. No se harán declaraciones de orden general sino que en cada caso concreto se designarán las comisiones dando a los asuntos el destino que se crea conveniente. La moción del señor delegado Doncel me parece que queda fuera de la cuestión, porque se refiere a un asunto que ya hemos tratado. Por eso propongo que se vote primero el despacho de la comisión especial.

SR. STANCHINA. — Yo estoy de acuerdo con la proposición del señor delegado Goytía; es menester nombrar comisiones especiales porque hay varios delegados que se han especializado en el estudio de ciertos temas, como ser en el referente a los transportes terrestres. Así hay representantes de las empresas ferroviarias e instituciones afines que son los más indicados para dictaminar sobre el punto, pero, quiero advertir, que, de estas comisiones quedarían excluidos varios delegados que han presentado proyectos, como sucedería en el caso especial del ingeniero Ramallo, si no se aceptara dicho temperamento.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Se va a votar en general el despacho de la comisión.

—Se vota y es aprobado.*

—Se vota y aprueba en particular sin modificación.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Queda aprobado el despacho de la comisión.

Debo hacer presente a la Conferencia que hay algunos asuntos sancionados a los que se les ha dado destino y a otros no.

SR. REVIRIEGO. — Esos asuntos pueden pasar a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, por dos razones: primero porque es necesario infundirle un principio de vida a esta organización que hemos creado, y segundo porque esos despachos no contienen sino principios básicos.

—Asentimiento general.

SR. PRESIDENTE (CANO). — En consecuencia, pasarán a estudio de aquella comisión.

SR. VILGRÉ LA MADRID. — Hago moción de que se levante la sesión.

—Asentimiento general.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Invito a la asamblea a levantar la sesión.

--Son las 12.40 horas.

CUARTA SESION ORDINARIA

PRESIDENCIA DEL DOCTOR MANUEL PÁEZ DE LA TORRE

DELEGADOS Y MIEMBROS DE LA CONFERENCIA PRESENTES: Doctores Aguiar Henech D., Alegre Manuel V., Alsina Ramón M., Alvarez Julio, Alvo Sebastián E., Asdrada Ponce Carlos, Avalos Antonio, Avalos José M., Barbosa Feliciano, Barraquero Julián, Barrera Juan F. de la, Bassi Aurelio, Baudón Héctor R., Berghmans Doncel Carlos A., Biscayart Blanco Juan P., Bullrich Rodolfo, Cabral Angel M., Campa Juan de la, Canal Feijóo Bernardo, Cano Guillermo G., Carlomagno Juan C., Carranza Adolfo, Casallas Miguel, Castellanos Benjamín, Castiglione Antonio, Castillo Ramón S., Castro Jorge S., Cervini Francisco, Chedufau Edmundo C., Codoni José E., Corominas Segura Rodolfo, Correa Alejandro, Corvalán César S., Courel Carlos D., Day Alberto A., Doncel Salvador A., Echagüe Pedro A., Escobar Manuel F., Escobar Sáenz Julio M., Ferreira, Enrique A., Frías Leopoldo, Frías Wenceslao, García Zavallia Rafael, Gil Enrique, Gonnet Manuel B., González Sabathié Juan M., Goyeneche Rómulo, Goytia Roberto D., Goytia Víctor D., Grandi Domingo, Guisazú Alberto, Herrera Santiago D., Jofré Tomás, Labanca Gabriel, Lafaille Héctor, Lagos García Luis, León y Basualdo Arturo de, Lobos Roberto N., López Domínguez Ramón, Llan de Rosos Ernesto, Latella Frías Donato, Martínez Paz Enrique, Mazzi Rogelio, Méndez Miguel G., Molina Luis E., Morey Ramón, Morixe Jerónimo A., Moyano Escalera Salvador, Novillo Saravia Lisardo, Olmos Lucas A. de, Ordóñez B., Orgaz Raúl A., Ortiz Florencio J., Otero Capdevila Benjamín, Palacios Benjamín, Páez de la Torre Manuel, Petra Demetrio, Quiroga Pedro R., Reviriego Emilio, Ríos Eduardo, Rodríguez Ribas Vicente, Rodríguez Saráchaga Oscar, Romero del Prado Víctor N., Rothe Guillermo, Sierra Celestino D., Silgueira J. Honorio, Sosa Loyola Gilberto, Stanchina Camilo F., Urreza Estanislao de, Vera Cruz, Vera Vallejo Ricardo, Viechi Rodolfo, Vilgré La Madrid Juan, Villegas Basavilbaso Florencio, Viñas Ibarra Humberto, Zavala Ortiz Alfredo, Zaefferer Silva Oscar.

SUMARIO

- 1.—Reforma de la Constitución. Moción de preferencia.
- 2.—Crédito documentario. Consideración y aprobación del dictamen.
- 3.—Reforma de la Constitución. Consideración y aprobación del dictamen.
- 4.—Corte de Casación interprovincial o argentina. Consideración y aprobación del dictamen.

En Córdoba, a 28 días del mes de Octubre de 1926, reunidos en el Salón de Actos Públicos de la Universidad, los señores delegados arriba indicados, y siendo las 15 y 40 horas, dice el:

SR. PRESIDENTE (PÁEZ DE LA TORRE). — Está abierta la sesión.

SR. BARRAQUERO. — Pido la palabra.

SR. PRESIDENTE (PÁEZ DE LA TORRE).

—Tiene la palabra el señor delegado.

1

Reforma de la Constitución

Moción de preferencia

SR. BARRAQUERO. — Hago moción a fin de que después de ser considerados los asuntos que están a la orden del día del programa de esta Conferencia, se dé preferencia al proyecto por el que se recomienda la reforma de la Constitución, pues se trata de un asunto de fundamental importancia y además ha sido el primero que ha despachado la comisión.

—Apoyado.

SR. CARRANZA. — ¿Hay algún asunto a la orden del día en el programa de la Conferencia?

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — Sí, señor delegado. Es el referente a crédito documentario.

SR. CARRANZA. — En ese caso, debe tratarse primero el proyecto de crédito documentario.

SR. BARRAQUERO. — Yo pido que este asunto sea tratado después de aquellos que se encuentran a la orden del día. Además, voy a manifestar que este proyecto fué el primero entregado ayer, inmediatamente después de ser despachado.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — No podría establecer con toda precisión el orden de presentación de los despachos, porque varios han sido entregados a Secretaría al mismo tiempo.

SR. BARRAQUERO. — El proyecto a que hago mención, fué el primero despachado ayer a primera hora y entregado inmediatamente a Secretaría. Creo que es reglamentario que de todo despacho de comisión debe darse inmediatamente cuenta a la Conferencia.

SR. GARCÍA ZAVALÍA. — Tengo entendido que tuvo entrada en la sesión anterior. La Secretaría puede informar.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — Efectivamente, ese despacho tuvo entrada en la sesión de esta mañana; pero como en Secretaría se encuentran varios despachos que han sido entregados al mismo tiempo, la Conferencia debe decidir sobre el orden que les corresponde.

SR. BARRAQUERO. — Quiero establecer la verdad de las cosas, y un señor delegado acaba de manifestar lo mismo: este proyecto tuvo entrada ayer, señor presidente.

SR. DE LA CAMPA. — Me parece que la indicación que hace el señor delegado no ha sido observada por nadie. No interesa saber si ese proyecto ha venido antes o después a Secretaría. Si la presidencia se toma la molestia de hacer votar la moción del señor delegado, habremos terminado con este pequeño inconveniente.

SR. PRESIDENTE (PÁEZ DE LA TORRE). — Se va a votar la moción formulada.

— Se vota y es afirmativa.

2

Crédito documentario

SR. PRESIDENTE (PÁEZ DE LA TORRE). — Se va a pasar a la orden del día.

SR. SECRETARIO (ZAVALA ORTIZ). — (*Leyendo*):

A la Segunda Conferencia Nacional de Abogados.

La comisión encargada del estudio de los proyectos relativos a crédito documentario, formula el siguiente despacho:

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados señala la urgente necesidad de legislar todo lo relativo a crédito documentario recomendando especialmente los proyectos presentados a la misma por el Comité de Bancos, doctor Teodoro Berú y doctor Oscar Zaefferer Silva,

Oscar Zaefferer Silva. Juan M.
González Sabathíé. Ramón S.
Castillo.

SR. PRESIDENTE (PÁEZ DE LA TORRE). — En discusión en general.

SR. ZAEFFERER SILVA. — Pido la palabra.

Voy a tratar un tema un poco complejo, y realmente declaro que me sorprende la necesidad de ser yo quien deba informar, porque confiaba en la asistencia del señor delegado doctor Juan Carlos Cruz, profesor de derecho comercial de la Facultad de Buenos Aires, que por su condición de catedrático y de abogado del Banco de la Nación está mucho más habilitado que yo para debatir este asunto. De manera que me veo en la necesidad de ordenar mis ideas en el curso de la exposición y solicitar de los señores delegados toda la indulgencia necesaria durante el tiempo que voy a ocupar su atención.

El crédito documentario es un elemento de mediación en el comercio internacional que se ha hecho, casi puede decirse, indispensable en la vida de los negocios entre naciones, a tal ex-

tremo que de cien negocios, posiblemente noventa y nueve estén vinculados con el crédito documentario. Así se explica que las prácticas comerciales que fluctúan en los ambientes europeos y norteamericanos se hayan concretado en disposiciones articuladas, que han sido adoptadas como reglamentación en distintos países. Así tenemos que en Nueva York se reunió en 1920 una conferencia que se llamó de crédito comercial bancario, que estableció las bases sobre crédito documentario: luego la Unión Sindical de Banqueros de París y de las provincias de Francia dictó a su vez su reglamentación, y por último, la Unión Gremial de Banqueros de Noruega, fijó también las reglas que hoy priman en ese país.

Estas tres leyes de orden práctico son las que reglamentan esta difícil cuestión del crédito documentario en el mundo. Y es de desear que la República Argentina, que ocupa un lugar preferente en el mercado de los negocios, adopte medidas al respecto para introducir también sus disposiciones en esta característica mercantil. Voy a señalar una fase de lo que es este asunto para que los señores delegados se compenentren perfectamente bien de sus modalidades. Un comerciante de Buenos Aires conviene por medio de correspondencia, con un comerciante de Génova, por ejemplo, en un contrato de compraventa determinando todas las condiciones del mismo; y al estipular la forma del pago del precio, se establece que se hará por medio de la apertura del crédito documentario. En virtud de esta convención, el comerciante de Buenos Aires se dirige a un banco y le dice, por medio de una carta que se llama carta-orden: «Sírvasse abrir al comerciante X, residente en Génova, un crédito por tantas libras o tantos pesos o la moneda que se designe, crédito que estará en vigencia durante tanto tiempo y que será utilizable por el comerciante de Génova mediante la entrega de documentos de embarque que representen el envío de tal cantidad de mercadería de tal calidad y que justifique que su embarque se ha verificado dentro de tales oportunidades». El Banco de Buenos Aires se dirige entonces a su corresponsal en Génova si lo tiene, a fin de que verifique

esta apertura de crédito. Esta sucursal le comunica al comerciante exportador que ha recibido una orden que emana originariamente de tal parte a objeto de poner a su disposición la cantidad de tantas libras durante tanto tiempo, y repite todas las modalidades de la carta-orden originaria. El comerciante de Génova embarca su mercadería con destino a Buenos Aires, reúne su documentación, se presenta al Banco en Génova, le entrega los documentos y utiliza el crédito en la forma convenida. El Banco de Génova remite toda esta documentación a Buenos Aires y el Banco de Buenos Aires se entiende con el comprador, le hace la liquidación de todo ese negocio, reduce las libras al cambio del día, le agrega los intereses correspondientes del tiempo que ha durado el desembolso, los gastos y distintas comisiones y junto con eso le entrega la documentación. El comerciante de Buenos Aires paga, retira la documentación y aquí acaba la historia del proceso del crédito documentario en su forma más simple.

Ahora bien; basta simplemente exponer esta tramitación del crédito documentario para darse cuenta del número de relaciones jurídicas de diverso orden que entraña y de la serie de combinaciones y dificultades a que da origen. Desde luego, la relación entre comprador y vendedor; las relaciones entre el comprador u ordenante del crédito en Buenos Aires y su banquero; las relaciones entre el beneficiario de Génova y el banquero de Génova; entre el banquero de Génova y el de Buenos Aires; las relaciones entre todos los banqueros que han actuado y formado la cadena de intermediarios; los que intervienen cuando el banquero que recibe la orden no tiene sucursal o corresponsal en el lugar donde debe abrirse el crédito; las relaciones entre el vendedor de Génova y todos los banqueros, incluso el de Buenos Aires; y entre el comprador de Buenos Aires y todos los demás banqueros. Agreguemos las garantías que tiene el banquero con respecto a las mercaderías o a los adelantos de dinero que ha hecho al comprador; agreguemos el contrato de fletamento y de seguro y tendremos en una medida completa y absoluta, expuesto en su forma más sintética lo que es el crédito documentario.

El crédito documentario se divide principalmente en dos clases: simple o revocable y confirmado o irrevocable. El crédito simple consiste en la simple comunicación que hace el banquero de Génova al vendedor de que a su disposición se encuentra un crédito utilizable en tal cantidad y en tal forma. El banquero no asume en virtud de eso, obligación de ningún género con el beneficiario; el banquero puede en cualquier momento, sin responsabilidad ante el beneficiario revocar el crédito. Las relaciones entre el banquero y su comitente son distintas: si revoca sin causa justificada ese crédito, asume la responsabilidad consiguiente, pero con respecto al beneficiario no asume responsabilidad de ningún género. La otra especie de crédito documentario es la de crédito confirmado o irrevocable en que el banquero asume una responsabilidad efectiva de mantener un crédito abierto durante todo el tiempo de su utilización. El banquero en este caso no puede revocar el crédito ni modificar las condiciones bajo las cuales ha sido abierto sin asumir toda la responsabilidad consiguiente. Más aún: si recibe orden de su comitente o mandante de modificar el crédito, retirarlo o revocarlo, no puede hacerlo sin desligarse de la responsabilidad consiguiente. Y aun más: si su mandante fallece, se inhabilita, cae en falencia o sufre cualquier otra alteración de orden económico, el banquero mantiene la obligación contraída. Junto a estas cuestiones surge una serie de otras que constituyen la modalidad del crédito documentario. Desde luego no es posible en una Conferencia de este género entrar a estos detalles; sin embargo voy a expresar muy rápidamente algunas de sus características. Tenemos en primer lugar la cesibilidad del crédito, usada en los casos en que los que contratan una compraventa con el extranjero, no lo hagan en interés propio sino como simples intermediarios o especuladores. Entonces se establece siempre el derecho de ceder el crédito; de cederlo ilimitadamente y por el total o parcialmente. Yo, intermediario en Génova, conozco 4 ó 5 comerciantes que ven-

den por mi intermedio sus mercaderías y cuando llega el crédito a mi favor les digo: de este crédito hará uso en tal cantidad fulano o zutano y yo me reservo el resto. Luego viene la delegación de la prestación y establezco que al ceder la parte del crédito delego en fulano de tal, la obligación de entregar la documentación en parte o parcialmente. Esta delegación es, como dicen los tratadistas o prácticos, *in finito*. Otra cuestión de discusión es la del margen, como se llama entre los banqueros, o sea el depósito de dinero que el banquero exige al mediador para garantizarse de los riesgos de desvalorización de las mercaderías en tránsito. Según nuestras leyes no hay privilegios sobre este margen, y en caso de falencia viene la pérdida de toda preferencia sobre esa garantía del crédito, cuestión sumamente debatida y que es necesario tratarla y tomarla en consideración por los redactores del proyecto. Otro punto también interesante es el que originan las cuestiones de cambio, íntimamente vinculadas con el crédito documentario. Frecuentemente, los compradores celebran un contrato de cambio con el ordenante y con el banquero; es necesario establecer la presunción que vincula un contrato con otro a fin de poder hacer en su época la liquidación conjunta de esta operación; por último, es necesario establecer también las cuestiones de jurisdicción y competencia.

Hay tres proyectos sometidos a la consideración de la asamblea. Uno del Comité de Bancos; otro del doctor Becú y otro mío. Dada la naturaleza y la complejidad de estas cuestiones y que no es posible resolverlas sin un análisis detenido y una contracción absoluta, hemos considerado del caso formular una proposición de carácter general: recomendar la urgente necesidad de legislar esta cuestión a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, y pasar a su consideración los trabajos que han sido presentados.

Veo, señor presidente, que la hora no se ha detenido para mí, como para nadie, y que estoy al margen del reglamento, y para no cansar mayormente la atención de la asamblea termino dán-

dome cuenta de que no solamente he usado sino que he abusado de la indulgencia que solicité al principio y al par que formulé por ello mis excusas, expreso mi agradecimiento por la benevolente atención con que se me ha escuchado. (*Aplausos*).

SR. PRESIDENTE (PÁEZ DE LA TORRE). — Si no se hace uso de la palabra, se votará en general la proposición sobre crédito documentario.

—Se vota y es aprobada.

UN SR. DELEGADO. — Voy a proponer un agregado, en el sentido de que se destine este proyecto a estudio de la misma Comisión Permanente.

SR. ZAEFFERER SILVA. — No se estableció esto en el despacho, porque no se conocía la existencia de esta comisión.

SR. DONCEL. — Yo también desearía que se agregue que pasará a estudio de la Comisión Permanente de Estudios Legislativos.

SR. CARLOMAGNO. — Desearía saber cómo está formada la comisión especial para estudio de leyes de crédito documentario.

SR. SECRETARIO (ZAVALA ORTIZ). — Está constituida por los doctores Zaefferer, Silva, Castillo y González Sabathic.

SR. PRESIDENTE (PÁEZ DE LA TORRE). — ¿La comisión acepta el agregado propuesto?

SR. ZAEFFERER SILVA. — No hay ningún inconveniente en que sea agregado al texto del despacho.

SR. PRESIDENTE (PÁEZ DE LA TORRE). — Se dará lectura del artículo con el agregado propuesto.

—Se lee.

SR. PRESIDENTE (PÁEZ DE LA TORRE). — Si no se usa de la palabra, se votará el artículo en la forma que se ha leído.

—Se vota y es aprobado.

3

Reforma de la Constitución

SR. PRESIDENTE (PÁEZ DE LA TORRE). De acuerdo con la resolución adoptada por esta Conferencia corresponde

entrar a tratar el proyecto del que es autor el doctor Julián Barraquero, sobre reformas de la Constitución.

SR. BARRAQUERO. — Pido que por Secretaría se dé lectura del proyecto a que se hace referencia.

SR. SECRETARIO (ZAVALA ORTIZ). — (*Leyendo*):

A la Segunda Conferencia Nacional de Abogados,

Habiendo estudiado la ponencia del doctor Julián Barraquero sobre reforma constitucional, la comisión especial de estudio de proyectos no previstos por el programa de la Segunda Conferencia Nacional de Abogados, aconseja el siguiente dictamen para su aprobación:

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

Artículo 1º — Declarar la urgente necesidad de la reforma de la Constitución Nacional y solicitar del Congreso la sanción de la ley respectiva.

Art. 2º — Encomendar a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, determinar los puntos que ha de comprender la reforma.

Art. 3º — Comunicar esta resolución a los poderes públicos de la Nación y de las provincias.

Julián Barraquero. — Pedro R. Quiroga. — Wenceslao Frías. — Aurelio Bassi. — Tomás Jofré. — Ramón Morey. — Carlos D. Courcel. — Oscar Rodríguez Saráchaga. — Guillermo G. Cano.

SR. PRESIDENTE (PÁEZ DE LA TORRE). — En discusión en general.

SR. BARRAQUERO. — Pido la palabra. Principiaré, señor presidente, por pedir la indulgencia reglamentaria, porque quizás requiera más del tiempo establecido para exponer los fundamentos de este asunto, y al exponerlos, me voy a permitir hacer dos declaraciones de carácter previo. La primera, que yo estoy aquí sin ningún encargo ni mandato del gobierno que me ha honrado con su representación en esta magna asamblea de abogados y que por tanto todo lo que expongo cae bajo mi exclusiva responsabilidad; y segundo, que lo hago

con el derecho que acuerda la Constitución a todo ciudadano e institución del país.

Antes de decidirme a presentar este proyecto me asaltaron dos dudas: la una de carácter protocolar y la otra sobre la competencia de la Federación de Colegios de Abogados, para tratar reformas de carácter constitucional.

No estando mi proyecto dentro del programa de esta Conferencia, dudaba si sería pertinente su presentación.

Pero revisando los antecedentes de la Primera Conferencia me enteré de que los doctores de Tomaso y González Sabathié, habían presentado proyectos sobre reformas de la Constitución Nacional.

Abrigo la más íntima convicción, señor presidente, que sin la reforma constitucional será imposible dar solución a los problemas de mayor gravedad, que hoy perturban la vida institucional y económica del país y detienen su mayor progreso y cultura.

Me asiste la esperanza de llevar a la conciencia de esta representativa asamblea, que la reforma constitucional es la obra más benéfica y que constituye su más imperativo deber.

No es un misterio para los habitantes de la República que la justicia no llena sus altos fines; que el federalismo es un mito, que la autonomía de las provincias vive avasallada y nulificada por la omnipotencia dictatorial del presidente de la Nación y por las leyes de avaricia fiscal que les arrebatan las fuentes de sus rentas, aniquilando su vida financiera y deteniendo su progreso económico.

Como debo juzgar con ruda franqueza los vicios institucionales que carcomen a la Nación, ruego que se me dispense el favor de creer que a mis palabras no las inspira ninguna pasión de carácter político.

He consagrado la modesta y accidentada actuación de mi vida pública, al progreso de nuestras instituciones gubernamentales y desde la prensa, la cátedra y la tribuna parlamentaria, he batallado por la verdad del sistema representativo, republicano, federal, soñando por los autores de nuestra Carta Fundamental.

No es extraño, pues, que hoy aproveche esta honrosa tribuna para ser consecuente con el ideal de toda mi vida.

Será muy útil e interesante el programa de esta Conferencia; pero ninguno de sus proyectos es tendiente a dar solución a los más graves problemas que agitan la opinión nacional.

Desde 1880, que se inició el período de las intervenciones ejecutivas, las provincias han vivido bajo la influencia omnipotente del presidente de la República y su autonomía ha estado librada a su exclusivo criterio personal.

En los tiempos de las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, las intervenciones eran ordenadas por el Congreso y cada una provocaba una batalla parlamentaria descomunal; y me bastará recordar el memorable debate sobre la intervención a San Juan, en el que el general Mitre y otros eminentes argentinos, interpretaron los artículos constitucionales que autorizan las intervenciones.

Pero a medida que hemos ido degenerando en la práctica de nuestras instituciones políticas, las provincias han soportado las más inequias intervenciones.

La histórica y docta Córdoba, centro de cultura universitaria se encontraba en tranquilo ejercicio de su autonomía, gobernada por un ilustre patricio, el doctor Ortiz Herrera, sin que nada hiciera sentir que sus autonomías, derechos y libertades fueran ahogadas por un atropello federal.

Pero un presidente omnipotente, como todos, por la suma de poder público que la Constitución pone en sus manos, deseaba elegir a dos senadores nacionales que secundaran su política y decretó una intervención amplia que cumplió sus designios.

Buenos Aires, titulada con justicia, la primer provincia argentina soportó otra intervención amplia para desalojar a un gobierno bien constituido y honesto, porque no respondía a la nueva política que había surgido del primer ensayo de la ley electoral Sáenz Peña.

A La Rioja, fué otra intervención amplia, que duró tres años, porque el

gobernador elegido por la misma, no era del agrado de la política presidencial y se decidió que caducase su mandato sin dejarlo asumir el poder.

A San Luis, se le brindó otra intervención amplia que duró más de dos años, sin elegir sus poderes, porque surgían dudas si podría triunfar el partido que respondía a la política presidencial.

A Mendoza, fueron tres intervenciones, tan amplias que dictaban leyes, ordenanzas municipales, creaban impuestos, repartían el agua a su arbitrio y una de ellas de carácter guaranítico, llegó hasta emitir letras clandestinas de tesorería, con el fútil pretexto de hacer el servicio de la deuda externa de la provincia.

San Juan hace más de un año que fué intervenida, depuestas todas sus autoridades y, curados los males que la motivaron; pero el interventor no convocaba a elecciones porque habían dudas si convenía entregar el poder al partido cuyo triunfo era inevitable.

Con estas expresivas muestras no sé quien pueda afirmar que practicamos el régimen federal y que las provincias no son más que simples agencias políticas del presidente de la República.

Mientras la reforma constitucional no prohiba decretar intervenciones ejecutivas, durante el receso del Congreso, nuestro federalismo continuará siendo una parodia grotesca y una simulación las autonomías provinciales.

Y al unitarismo político se agrega el económico con el régimen de los impuestos internos que arrebatan a las provincias sus fuentes de rentas, para obligarlas a recibir limosnas nacionales, en forma de obras públicas, subvenciones escolares, etcétera.

Y para completar el unitarismo económico, en estos momentos se pretende arrebatar, a las provincias más pobres sus minas de petróleo, por medio de una ley, que según la opinión reciente de nuestro ilustrado colega, el doctor Gonnet, es violatoria de prescripciones terminantes de la Constitución Nacional.

Toca ahora el turno a la justicia federal, cuya ineficacia es el más grave problema que debe resolver la reforma constitucional.

La Suprema Corte, que en los Estados Unidos, es el poder regulador, que mantiene en su órbita a los demás y garantiza todos los derechos y libertades, carece entre nosotros de atribuciones para amparar las autonomías provinciales.

La Suprema Corte, en repetidos fallos, ha establecido una jurisprudencia que la petrifica y la obliga a lavarse las manos como Pilatos, cuando se le pide amparo contra los atropellos de las intervenciones federales.

Ha declarado que no es competente para amparar los derechos y libertades consagrados en la Constitución, cuando estos son vulnerados por una intervención; porque se trata de poderes políticos del presidente y del Congreso que están fuera del alcance de su jurisdicción.

Esta jurisprudencia, contraria al espíritu de la Constitución y a la establecida por la Corte de los Estados Unidos, deja sin amparo las autonomías provinciales y pone en manos del presidente de la República un poder dictatorial e irresponsable por no ser posible el juicio político.

La reorganización de la justicia requiere reformas fundamentales para hacerla más rápida y afianzar su independencia.

Los miembros de la Suprema Corte deberían ser nombrados por el Poder Ejecutivo de ternas propuestas por el Senado y los demás jueces, de ternas propuestas por la Suprema Corte.

Sólo así se conseguirá evitar la influencia perniciosa de la intromisión política en la designación de los jueces.

Habría que simplificar el juicio político de los miembros de la Suprema Corte y todos los demás jueces deberían ser enjuiciables ante ella.

La separación de la Iglesia del Estado es otra de las reformas de urgencia perentoria. Es un anacronismo inexplicable que en un país libre, que invita a todos los hombres del mundo civilizado a habitar su suelo, se exija el requisito de ser católico, apostólico, romano, para ejercer la Presidencia de la República.

Tal exigencia es contraria a la libertad de cultos declarada en la Constitución.

Los que profesamos la religión católica jamás votaremos la elección de un presidente ateo o que repudie los preceptos de la moral cristiana; pero es un adelfio el artículo de la Constitución que impone una exigencia secular.

Los católicos sinceros deben aceptar la separación, inspirándose en las opiniones del eminente maestro, del gran patrio, José Manuel Estrada, que en sus sabias conferencias, declaraba que la Iglesia no debía comprometer su libertad y su autonomía por un plato de lentejas que representan los emolumentos del presupuesto nacional.

El Uruguay y Chile, los países más católicos de América, han separado la *Iglesia del Estado con el voto unánime* de la opinión pública.

Otra de las reformas que se impone como necesidad suprema para sacar al Congreso del tutelaje presidencial y curar su perpetua esterilidad, es la adopción de la representación proporcional a base del cociente electoral.

Con el sistema de la pluralidad que establece la Constitución y el de la mayoría limitada de la ley vigente, la Cámara de Diputados no representa la opinión nacional, ni responde al principio fundamental del gobierno republicano representativo de que fueron inventores los sabios constituyentes de Norte América.

Los expositores de ese monumental código político, en que se han inspirados las constituciones de los pueblos libres del mundo, declararon que el gobierno republicano representativo era el gobierno de la sociedad por sí misma, y que en la Cámara de Diputados debían estar representados todos los intereses que se desarrollan en su seno.

Según ese principio básico del sistema representativo, debe establecerse un sistema electoral que dé representación a los partidos políticos, al comercio, a la industria, a las corporaciones científicas y a los intereses de toda índole, que forman la Nación.

Pero según nuestro régimen electoral, en la Cámara de Diputados sólo están representados los intereses de los partidos políticos.

Con tan absurdo y funesto sistema electoral quedan sin representación todos los ciudadanos y corporaciones ajenos a los intereses políticos; y así se explica el ínfimo porcentaje que acude a los comicios electorales.

El sistema de la representación proporcional no sólo responde al principio absoluto de justicia, de dar a cada uno lo que es suyo, sino que selecciona el componente de los parlamentos, eligiendo a los más aptos.

La provincia de Corrientes que tiene el mejor sistema electoral, a base de la representación proporcional y en la que su Constitución ha desmontado la prepotencia ejecutiva, es la mejor constituida y la mejor gobernada en la República.

La provincia de Buenos Aires, no recoge los mismos beneficios del sistema proporcional, porque en su Constitución no pudimos suprimir la dictadura del Poder Ejecutivo; y el gobernador interviniendo las municipalidades ejerce influencia decisiva en las elecciones de los legisladores, que los hacen irresponsables, porque es imposible el juicio político.

Córdoba, cuyos últimos gobiernos se han distinguido por su honestidad y su labor progresista, se ha dado una flamante Constitución con reformas inspiradas en las modernas tendencias de la ciencia política; pero contiene una falla retrógrada en lo que respecta a su régimen electoral.

En vez de adoptar el sistema proporcional, aspiración de todos los partidos argentinos, ha consagrado el sistema del dictador Mussolini que adjudica una abrumadora representación a la mayoría gobernante y una ínfima a todas las minorías.

En el primer ensayo de este sistema, tendiente a asegurar la irresponsabilidad de los gobiernos, se han cumplido sus funestos resultados.

Habiendo triunfado el partido opositor, su absorbente mayoría en la Cámara de Diputados, ha provocado un conflicto que tiene perturbada la armonía de sus poderes.

Lo justo, lo racional era que si los dos partidos contrincantes obtuvieron casi igual número de sufragios, tuvie-

ran igual representación en la Cámara; pero sólo el sistema proporcional es apto para dar soluciones normales y justicieras.

En todas las repúblicas del Centro y Sudamérica, con excepción de Chile y el Uruguay, ha regido la dictadura presidencial, con el sistema de la representación de las mayorías.

Todas ellas, con pocas variantes, han soportado los estragos de las revoluciones, de los levantamientos militares y dictaduras presidenciales.

En Bolivia se eligió hace poco tiempo un presidente y antes de asumir el mando tuvo la veleidad de ofrecer ministerios al partido opositor.

El presidente dictador, que lo había hecho elegir, fulminó esa veleidad ordenando al Congreso la nulidad de la elección y la designación de otro candidato.

En el Perú otro presidente dictador no podía ser reelecto, por expresa prohibición constitucional y para suprimir el obstáculo ordenó la reforma de la Constitución; el Congreso la votó a tambor batiente y fué reelecto por el voto del pueblo soberano.

Nuestra República ha tenido la suerte providencial de ser, tal vez, la menos castigada por las dictaduras presidenciales, las revoluciones y los unicatos; pero estamos muy distantes de practicar el sistema representativo federal que consagra la Carta Fundamental.

Nuestro federalismo es una grotesca simulación, porque el presidente de la República decretando intervenciones, en el receso del Congreso, atropella las autonomías provinciales y éstas carecen hasta del amparo de la justicia federal que no tiene atribuciones para corregir sus desmanes.

El pueblo argentino y sus derechos y libertades viven a la buena o mala ventura, según sean las actitudes personales del ciudadano que ejerce la dictadura presidencial.

El presidente como jefe de las fuerzas de mar y tierra nombra y remueve a los oficiales.

Nombra y remueve, a su arbitrio, a los millares de empleados de la administración porque no hay ley que establezca su inamovilidad.

Como jefe de la hacienda pública, dispone a su arbitrio de las rentas nacionales y gasta fuera del presupuesto por acuerdos de ministros, siendo irresponsable de las malversaciones en que incurra, porque está exento del freno del tribunal de cuentas y del juicio político.

La facultad del Congreso para examinar las cuentas de la administración ha sido siempre irrisoria y el control de la Contaduría General es también inofensivo, porque sus observaciones son anuladas por acuerdos de ministros.

Y fuera de todos estos poderes dictatoriales, el presidente es el verdadero legislador porque jamás puede ser sancionada una ley sin su beneplácito. Con su derecho de veto nulifica las iniciativas parlamentarias porque le basta un tercio de adietos, en cada Cámara, para que el Congreso no pueda insistir en su sanción.

De esta manera nuestro régimen representativo está viciado en su principio fundamental de la división de poderes; siendo el presidente el verdadero legislador, el Congreso es un resorte decorativo que sólo ejerce la función mecánica de sancionar las leyes.

Hablo por propia experiencia.

He tenido el honor de representar a mi provincia, durante doce años, en la Cámara de Diputados y fui iniciador de varias leyes todavía en vigencia.

La de vinos, la de eracción de las cámaras federales de apelación y la de pavimentación en la Capital Federal, se sancionaron rápidamente porque tuvieron la conformidad del Poder Ejecutivo. Pero mi proyecto de carta orgánica del Banco de la Nación, tuvo seis años de viaceruís, caducando dos veces por la ley Olmedo, porque el presidente y el ministro de hacienda doctor Terry ordenaban su estancamiento en las comisiones.

Pué necesaria la influencia del presidente electo, doctor Quintana, para que la ley fuera sancionada; pero el presidente y ministro derrotados no quisieron promulgarla, ni se atrevieron a vetarla, y entró en vigor vencido el término constitucional de diez días.

Es una de las pocas leyes en vigencia que no aparecen con decreto de promul-

gación. Y esta ley tan resistida por el Poder Ejecutivo y sancionada en forma tan providencial, fué la impulsora de la gran prosperidad del Baneo de la Nación, como lo han declarado todos sus directores y muy especialmente el ex presidente, doctor Ramón Santamarina.

Como un complemento del sistema proporcional, debería calificarse el derecho de sufragio, exigiendo la condición de saber leer y escribir para ejercitarlo.

Tal reforma dignificaría y enaltecería la idea del sufragio, porque la generalidad de ciudadanos que no saben leer y escribir no están en aptitud de apreciar los deberes y responsabilidades que el ejercicio de esa función pública lleva aparejados.

No debemos hacernos la ilusión de que con esta restricción al sufragio, hayamos encontrado la piedra filosofal, ni que con ella se vayan a curar de raíz los vicios que carcomen el sufragio popular.

No creo tampoco que baste saber leer y escribir para inculcar moralidad y patriotismo en el corazón de los ciudadanos, pero sí pienso lo que piensa hoy la razón pública de todos los pueblos cultos y libres de la tierra, y lo que Aristóteles, presintiendo el ideal del porvenir, decía: «La suerte de las naciones dependerá siempre de la educación del ciudadano.»

Es verdad que la educación no consiste en saber leer y escribir, pero ¿quién podrá negar que la instrucción es la base y el alma de toda educación y de toda cultura en el orden moral, social y político?

Esta calificación no es atentatoria al principio democrático de la igualdad, porque en absoluto ésta sólo existe en el orden civil, porque en el político sólo es un principio declaratorio, sujeto a todas las restricciones convenientes y racionales, que la autoridad social impone al ejercicio de los derechos inherentes a la ciudadanía.

Esta reforma obligaría a los partidos a emplear sus recursos en la creación de escuelas en vez de invertirlos en bacanales electorales; y sería además moralizadora del sufragio, civilizadora del pueblo y hasta humanitaria, porque

aspira a convertir al ciudadano máquina, al ciudadano por boleta, al ciudadano escalón de caudillaje, en un ciudadano pensante y libre, tal como lo concibe y requiere la democracia republicana.

La situación anormal de los Territorios Nacionales exige una reforma urgente y fundamental.

No se concibe que más de un millón de ciudadanos estén privados del derecho del sufragio en las elecciones nacionales. Deben tener representación en el Congreso y en municipalidades autónomas y ser declarados provincias sin necesidad de previa ley, tan pronto como alcancen la población que establezca la Constitución.

La Pampa Central que tiene más población que tres provincias, no ha adquirido todavía este rango por razones de politiquería; y el único medio de prevenir estos abusos es la declaración constitucional que dejo indicada.

La libertad de la prensa requiere una reforma constitucional que modifique la reciente jurisprudencia de la Suprema Corte Federal, que es peligrosa para su libre desenvolvimiento.

La prensa no puede estar amenazada por la mordaza de entorpecer leyes penales, sino regida exclusivamente por el código que dicte el Congreso.

La jurisprudencia de la Suprema Corte declarando que los delitos de la prensa cometidos en las provincias, no están sujetos a las disposiciones del Código Penal de la Nación y que cada provincia debe dictar su ley, es contraria al texto y espíritu de la Constitución, como lo sostuvo el ex Procurador General doctor Matienzo. Para destruir esa peligrosa jurisprudencia, la Constitución debería adoptar las garantías que establece la de Buenos Aires, poniendo a la libertad de la prensa al amparo de la jurisdicción y leyes penales de la Nación.

Ante la anomalía institucional, ante la simulación del federalismo, ante el unitarismo político y económico en que vive la República, desde hace medio siglo, se ocurrirá preguntar: ¿Por qué en las provincias, en las asambleas populares, en las columnas de la pren-

sa, no se agita la idea de la reforma constitucional?

Parecería que nuestras enormes riquezas materiales, que nuestra gran metrópoli, orgullo de América y de la raza latina, que las bondades de nuestro ciclo y de nuestro maravilloso clima, produjeran en el alma del pueblo argentino, esta conformidad musulmana, para vivir al margen del sistema de gobierno que tenemos escrito en la Constitución.

La República debe salir de la anomalía en que viven los gobiernos de provincias y el de la Nación, ya sea confirmando el centralismo unitario, que ejercitan las dictaduras presidenciales, o asegurando el régimen federal con reformas constitucionales que amparen las autonomías provinciales.

Son y han sido abogados el noventa por ciento de los presidentes de la República, de los senadores, diputados, ministros y gobernadores y si han sido y son el pensamiento y la fuerza directriz de la Nación, debemos cargar con la honra de los progresos alcanzados y con las responsabilidades de los males y vicios institucionales de la hora presente.

Pienso en consecuencia que la Federación de Colegios de Abogados tiene el deber imperativo y patriótico de luchar por una reforma constitucional que afiance y haga una verdad del gobierno republicano representativo federal que fué el anhelo de la gloriosa revolución de Mayo, del inmortal Congreso de Tucumán y de los beneméritos constituyentes de 1853. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos!*).

SR. CARRANZA. — Pido la palabra.

Por las fundadas razones expuestas por el señor delegado doctor Barraquero, apoyo el proyecto de reformas a la Constitución, especialmente en lo que se refiere a los derechos de intervención federal y al sistema electoral para la elección de presidente y vicepresidente de la República y senadores nacionales. En cuanto a los impuestos internos, tengo aquí unas líneas para refutar al doctor Molina. (*Leyendo*): — «Así el diputado doctor V. M. Molina, que ocupa actualmente una banca en la Cáma-

ra de Diputados, decía: por otra parte, insisto en el argumento que he hecho: esta materia está gravada en muchas provincias del interior, y como todo impuesto dejado a las provincias por la Constitución no puede ser usado por el gobierno nacional sino en casos extraordinarios. Yo no veo por qué habremos de privar a las provincias de uno de los medios ordinarios de formar sus rentas, que consiste en este impuesto.» (*Trabajos sociales*, que publiqué en 1918, 1ª edición, página 53).

El ministro doctor López, había pedido por favor se le diera temporariamente autorización para cobrar esos impuestos y ya se ve cómo se trató esta cuestión por el ministro de Hacienda de la Nación, ex diputado doctor Molina en el año 90, en contra de esta opinión.

SR. JOFRÉ. — Yo voy a votar a favor del proyecto, bien entendido que esto no significa que participe de todas las razones expuestas por el señor miembro informante del mismo, porque todos los delegados no estamos obligados a coparticipar de todas sus ideas.

SR. BARRAQUERO. — Efectivamente, señor delegado.

SR. BAUDÓN. — Pido la palabra.

El doctor Jofré se ha anticipado en absoluto a lo que voy a manifestar. Yo daré mi voto a favor de este proyecto, en cuanto él manifiesta un anhelo porque se proponga la reforma, revisión o estudio de la Constitución en sus múltiples aspectos, para concordarlos con las necesidades y exigencias económicas y jurídicas del momento actual. Pero debo declarar en honor a mis propias convicciones políticas que respecto de los fundamentos, disiento en absoluto con los motivos que ha dado el doctor Barraquero. No obstante esto, declaro que como el tema que ha traído el doctor Barraquero es de lo más abundante y proficuo para hacer todo género de comentarios, me limitaré a este aspecto y desearía que la Conferencia en lugar de votarlo lo pasara a la comisión especial que se ha designado o al instituto creado para que no quedara con este simple aspecto de un anhelo general, sino para que se estudie la Consti-

tución actual y al controlarla con las necesidades de la época la confronte con la vida real, económica y jurídica del país y proyecte con serenidad y tiempo todas las medidas necesarias, en la exactitud precisa, y las pase luego, ya sea a la consideración del Poder Ejecutivo o al Congreso de la Nación para que ellos, que son los encargados, por delegación de la soberanía, de obtener la reunión de la convención constituyente, tomen las medidas conducentes a esta finalidad. Hago esta propuesta persiguiendo darle mayor eficacia a la intención del proyecto, que hasta ahora es puramente declarativa.

SR. BARRAQUERO. — Se hace la declaración con una aspiración y mientras el Congreso dé la ley respectiva y se elija la convención constituyente.

La comisión se encargará de estudiar el asunto. Hoy lo único que hace esta asamblea, es hacer suya una aspiración general que pide la reforma de la Constitución nacional, como una presión sobre el Congreso.

SR. PRESIDENTE (PÁEZ DE LA TORRE). — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativo.

SR. VILLEGAS BASAVILBASO. — Que se establezca si hay unanimidad.

SR. PRESIDENTE (PÁEZ DE LA TORRE). — Hay evidente mayoría, casi la unanimidad.

SR. QUIROGA. — A mí me parece conveniente, que se deje constancia del número de votos, tanto por la afirmativa como por la negativa.

SR. SECRETARIO (ZAVALA ORTIZ). — Son 55 votos por la afirmativa.

SR. PRESIDENTE (PÁEZ DE LA TORRE). — Hay un solo voto por la negativa.

En consideración en particular.

SR. REVIRIEGO. — Desearía saber si esta declaración va a pasar a comisión.

SR. BARRAQUERO. — Esta es la declaración que hace la asamblea.

SR. REVIRIEGO. — Me sugiere la duda lo que dice el artículo 1º, de solicitar del Congreso la reforma y como no puede peticionarse una reforma de esta naturaleza con la simple declaración general...

SR. BARRAQUERO. — Tiene derecho a hacerlo esta asamblea, como lo tiene el último ciudadano de la República.

SR. REVIRIEGO. — Es que carecería de objeto...

SR. BARRAQUERO. — No obstante las leyes y la aspiración nacional, el Congreso no ha resuelto nada todavía.

SR. REVIRIEGO. — Que se lean los artículos siguientes, a fin de concordarlos.

SR. SECRETARIO (ZAVALA ORTIZ). — En el artículo 3º se dice: que se comunicará esta resolución a los gobiernos de la Nación y de las provincias.

SR. REVIRIEGO. — Entonces, se puede suprimir la segunda parte del artículo 1º.

SR. CANO. — En el seno de la comisión que ha despachado el asunto, de la que formo parte, se suscitó una discusión alrededor del mismo punto y varios miembros votamos en contra del agregado que dice: «solicitar del Congreso...», etcétera, porque entendíamos que si la declaración es de carácter general, sin precisar puntos y esos puntos los va a determinar la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, no sé qué vamos a pedir ahora al Congreso. Sería no concretar ningún pensamiento sobre las distintas cuestiones que debe abarcar la reforma.

Aunque el despacho lleva mi firma, sobre este punto he estado en disidencia y es lo que quería manifestar.

SR. VILLEGAS BASAVILBASO. — Había solicitado la palabra para manifestar, que tal vez conviene decir en lugar de «la reforma de la Constitución», «la revisión de la Constitución», porque decir «reforma» sin especificar qué se va a reformar, es una indicación abstracta. Parecería significar que la Constitución no sirve y que hay que hacer otra.

SR. CANO. — Pido que se vote por partes, primero el inciso y después el agregado que ha motivado la incidencia.

—Se lee el inciso, apropiándose.

—Se lee el agregado del despacho propuesto.

UN SEÑOR DELEGADO. — Podría retirarse ese agregado.

Sr. PRESIDENTE (PÁEZ DE LA TORRE).
— ¿Acepta la comisión, que se retire el agregado?

Sr. BARRAQUERO. — No tengo ningún inconveniente.

Sr. PRESIDENTE (PÁEZ DE LA TORRE).
— Entonces queda aprobado el inciso, en la forma que se ha leído.

—Se votan y aprueban los demás artículos sin modificación.

4

**Corte de Casación Interprovincial
o Argentina**

Sr. PRESIDENTE (PÁEZ DE LA TORRE).
— Se va a dar lectura al dictamen que sigue.

Sr. SECRETARIO (ZÁVALA ORTIZ). —
(*Leyendo*):

A la Segunda Conferencia Nacional de Abogados.

Estudiada la ponencia de los delegados de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán sobre el proyecto de creación de una Corte de Casación Interprovincial o Argentina, la comisión especial de estudios de proyectos no previstos por el programa de la Conferencia os aconseja la aprobación del siguiente proyecto de resolución:

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

Passar a consideración de la Comisión Permanente de Estudios Legislativos el proyecto de los delegados de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán, sobre creación de una Corte de Casación Interprovincial o Argentina.

Juliano Barraquero. — O. Rodríguez Saráchaga. — Ramón Morey. — Carlos D. Courel. — Guillermo G. Cano.

Sr. JORRÉ. — Pido la palabra.

No soy el miembro informante de la comisión que ha estudiado este proyecto; pero debo declarar que merece todas mis simpatías.

Siempre he pensado que el punto débil de todas las instituciones judiciales de orden provincial radica o finca en la falta de una corte de casación que haga práctico el artículo 67 en su inciso 11 de la Constitución federal que establece la unidad de códigos, vale decir, que ha de existir un Código Civil, un Código de Comercio, un Código Penal y un Código de Minería para toda la República.

¿Qué es lo que ha ocurrido desde la sanción de la Constitución, desde el año 53, o más bien dicho, desde el año 60 hasta la fecha? Nos encontramos tantos códigos como provincias o tribunales hay en la República. Demos un solo ejemplo, el más típico de todos. No citaré como ejemplo el viejo Código Penal que recibía cuatro o cinco interpretaciones cuando se trataba de aplicar una pena, sino las interpretaciones que sobre prescripción ha recibido el código de 1922.

Un buen día se incorporó a la Cámara federal de La Plata un dignísimo magistrado, el doctor Benza, y a la Cámara federal de la Capital otro magistrado que antes había actuado en La Plata. Inmediatamente ocurre un fenómeno curiosísimo: el Código Penal cambia en la provincia de Buenos Aires sin sanción de la Legislatura, el código penal cambia asimismo en la Capital Federal, sin sanción del Congreso de la Nación. Todo esto sucedió por el cambio de un solo hombre que había sido trasladado de una Cámara a otra.

Así, por ejemplo, en la Capital Federal, los pleitos de carácter penal se prescribían mientras la tramitación del proceso continuaba, hasta que vino un nuevo magistrado y ya no se prescribieron, es decir, cambió el código; en La Plata, donde no ocurría la prescripción vino también a cambiarse el sistema, vale decir, que allí lo que antes no se prescribía ahora se prescribe.

¿Es aceptable que esto suceda en un país federal como el nuestro, y de unidad de códigos? De ninguna manera.

Algo parecido ha ocurrido en Francia — me parece que en el año 1831 — cuando un procurador de la corte hizo cambiar la jurisprudencia de la corte de casación en lo que se refiere a la

represión del duelo. Antes de esto era una acción inofensiva, inocente, y después pasó a ser un delito, un asesinato.

Lo que ha pasado con la interpretación del Código Penal, ha ocurrido con todos los demás códigos, por ejemplo con el Código Civil en materia de reivindicación, en materia de extradición, y en muchísimos otros puntos que no tengo presentes en este momento.

El doctor Barraquero citaba en su informe las vicisitudes porque atravesó la ley de imprenta en su provincia, pero debo manifestarle que durante una gran cantidad de años, han corrido igual suerte en la totalidad de los tribunales de la República, hasta que la Corte de la Nación estableció una jurisprudencia al respecto. Por estas consideraciones sería indispensable crear una corte de casación al estilo de las existente en Francia, Alemania, etcétera.

Muchos se preguntarán cómo es posible la existencia de una corte de casación en nuestra República, en presencia de disposiciones como las que tiene nuestra Constitución al decir que la Corte Nacional no conocerá en otros asuntos que aquellos que taxativamente le han sido fijados en dicho instrumento. ¿Eso es posible? Sin embargo, es posible porque la Constitución dentro de su mecanismo permite los acuerdos sobre administración de justicia que todas las provincias podrían formar y que el Congreso, no obrando en su carácter de Congreso sino como legislatura local, podría establecer para la Capital de la República. Así vendríamos a tener una corte de casación que funcionaría donde la ley lo estableciere, en la que participarían todas las provincias de acuerdo con los antecedentes argentinos y que el autor del proyecto creo que sustenta en su exposición de motivos, y podría desenvolverse administrativamente para todas las aplicaciones del derecho común, que es el que se refiere al derecho federal. Pero ya tenemos la Corte Suprema de la Nación que establece el verdadero alcance de las leyes que dicta el Congreso. Y en estas condiciones, sin reformar la Constitución, llegaríamos a obtener dos cortes que funcionarían perfectamente bien

y que llevarían la unidad de la justicia en el país, y estableceríamos lo que anhelaba todo el mundo, es decir, saber a qué atenerse en materia de los códigos que sanciona el Congreso. Esta es mi opinión sobre el asunto.

SR. REVIRIEGO. — El punto que acaba de someterse a consideración de la asamblea tiene una relación estrecha con uno de los temas que formó parte del programa de la Conferencia anterior, el de la organización judicial, y como tuve oportunidad de formar parte de la comisión respectiva en aquel entonces y de informar en nombre de la misma, me voy a permitir exponer algunas ideas respecto de esta iniciativa. En principio, sería deseable su implantación, pero las palabras con que el destacado jurista doctor Jofré fundió los motivos de la misma, plantea la dificultad práctica que ocurriría, porque desde luego quedaría subsistente la actual Corte Suprema de la Nación, con todos los poderes que le han sido conferidos. Bien sabido es que en medio de la enorme jurisdicción que comprende, no le es ajeno el conocimiento de materias que atañen a los códigos Civil, Comercial y demás. Por consiguiente, se plantearía una doble jurisprudencia sobre la interpretación de la legislación de fondo. Y resultaría irrealizable, pues serían dos autoridades de la misma naturaleza dentro de la Nación Argentina, con igual jerarquía, pero que la tendría quizás mayor la que ha sido instituida por la Constitución y que acaso fuera la que aceptarían los tribunales provinciales y de la Capital, y en fin múltiples dificultades que pueden presentarse. Ahora si el asunto se plantea desde el punto de vista de una reforma de la Constitución...

SR. BARRAQUERO. — Este asunto está destinado simplemente a pasar a estudio de la Comisión Permanente.

SR. REVIRIEGO. — Quizás pueda establecerse un organismo semejante sin reformar la Constitución...

SR. BARRAQUERO. — Eso no puede hacerse.

SR. REVIRIEGO. — ...pero va a surgir la dificultad práctica que acabo

de apuntar. Y entonces se le restaría enorme autoridad científica y moral al nuevo organismo, o a la Corte Suprema actual que se sentiría como disminuida en su investidura de alta Corte argentina.

SR. GARCÍA ZAVALÍA. — Pido la palabra.

Como uno de los que subscriben el proyecto y como miembro de la Corte Suprema de Tucumán, desearía aclarar algunas ideas con respecto al punto que indica el señor delegado doctor Reviriego. Desde luego, tal como se define la ponencia respectiva, esta es un anhelo, y el despacho de comisión, tiende a que la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, en su oportunidad, y contando, entre otros, con los antecedentes que nosotros suministramos y que voy a permitirle leer, porque son breves, pueda llegar a algo concreto y práctico.

La dificultad principal que encuentra el doctor Reviriego, consistiría en que la Corte Suprema de la Nación no solamente legisla en materia constitucional y en los casos de derecho federal, sino que también juzga en lo común para los territorios nacionales, con una tercera instancia en lo penal.

SR. CARLOMAGNO. — En los pleitos de residencia originaria.

SR. GARCÍA ZAVALÍA. — Pero el objeto principal de la Corte Suprema es juzgar en lo excepcional, y como el artículo 107 de la Constitución establece que las provincias podrán celebrar tratados con fines de administración de justicia, no veo porqué la Capital Federal no pudiera — en cuanto a los tribunales ordinarios—también celebrar un convenio o tratado que permitiera la aplicación del derecho común; y de esta suerte, en pactos consentidos y aprobados por el Congreso, podríamos llegar a la realización casi uniforme de la justicia nacional.

Esto para el sistema federativo vigente, porque de reformarse la Constitución, no habría ya necesidad de recurrir a pactos, arreglos o convenios entre las provincias; directamente podría determinarse que la corte principal del

país se organiza como Corte de Casación.

SR. JOFRÉ. — Yo creo que con establecer que los fallos de la Corte de la Nación sobre derecho común tuvieran la autoridad que tienen los fallos de las Cámaras en pleno de la Capital, o sea que fueran obligatorios, es suficiente.

SR. GARCÍA ZAVALÍA. — El anhelo que se viene manifestando, es que estos proyectos de derecho público, de tanto o mayor interés que los de derecho privado, hasta ahora discutidos, se manden a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, que se encargará de desarrollarlos.

Nos es muy grato recalcar en esta asamblea, que la iniciativa la dieron las provincias del Norte, habiendo quedado una interesante documentación histórica que data de 1856 y así, dijimos al presentar el proyecto:

«Los que subscriben, delegados a la Segunda Conferencia Nacional de Abogados, por la Corte Suprema de Justicia y por el Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán, consideran de alta conveniencia la creación del tribunal arriba expresado a objeto de uniformar la jurisprudencia, en cuanto a la aplicación de la ley, de acuerdo a las conclusiones o lineamientos generales que se expresan, bajo el epígrafe de: «Notas sobre un proyecto de Corte de Casación interprovincial o argentina» y, teniendo en cuenta asimismo, los antecedentes históricos que la abonan, desde el 13 de Mayo de 1856, relativos al establecimiento de un Tribunal Supremo de Justicia común a las provincias del Norte, según el tratado celebrado ese año por los respectivos gobiernos de las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero, aprobado al año siguiente por el gobierno nacional del Paraná.»

Tales antecedentes suministrados por el doctor Joaquín de Zavallia, ex camarista de la Corte de Tucumán y promotor principal de la idea que informa este proyecto, se agregan también en copia.

La institución de que se trata, ha sido ya preconizada por distinguidos hombres de ciencia, como los doctores Argieri y Tomás Jofré y nosotros repre-

dueimos la idea y la sometemos a la decisión de esta asamblea o de la comisión respectiva.

Ahora bien; los fundamentos de nuestro proyecto son los siguientes:

I. — *Antecedentes constitucionales e históricos.* — Las provincias pueden celebrar tratados para fines de administración de justicia. (Artículo 107, Constitución nacional). Esto es consecuencia de los pactos federales preexistentes: Tratado del cuadrilátero 1822, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, del Pilar 1820 — que es la base o piedra angular de la organización federal.

Ya en 1830 y a consecuencia del tratado de unión, defensa y organización firmado en Córdoba por las provincias del interior y aprobado por la Sala de Representantes de Tucumán, en sesión del 25 de Septiembre de 1830 (acta N° 8 de 1830) — Actas de la Sala de Representantes — un volumen, publicación oficial. — la provincia de Tucumán dictó una ley en primero de Octubre (acta N° 9, *ibidem*) aprobando el proyecto del Poder Ejecutivo «a que se le faculte para negociar con el de Córdoba, que el Supremo Tribunal de Justicia de la misma entienda en último recurso en las causas que se le remitan de la provincia.»

La misma provincia en su primera Constitución dictada después de Caseros (en 19 de Mayo de 1856) y aprobada por el Congreso nacional, dispone en el artículo 56: «El tribunal de justicia puede componerse de vocales de tres a cinco provincias, en la que se incluya la de Tucumán, con jurisdicción sobre el territorio de todas ellas, siempre que preceda acuerdo de las que se unan a este fin y se haga con conocimiento del Congreso Federal.» (Ver *Composición Ordenada de Leyes, Decretos y Mensajes.* — Publicación Oficial. — Tomo 1°, página 391).

A esta organización adhirieron las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Los antecedentes de esta organización, pasos que dieron los gobiernos, etcétera, pueden verse en Registro Oficial de Tucumán de 1857-58 y en *Composición Ordenada* dados a continuación.

II. — *Procedimientos para la organización de esta Corte.* — Convendría que fuera precedida de leyes dictadas por las provincias adherentes, declarando la necesidad y la adhesión de la provincia a la organización de esta corte, pues todo tratado ad referendum sería siempre aleatorio.

La organización de la corte, el número de jueces, sus salas, personal auxiliar, procedimiento, sede del tribunal, podrían ser motivo del tratado, pues si cada una de las provincias adherentes quisiera legislar estas materias, vendría una posible confusión de ideas y sistemas.

III. — *Corte única.* — El desiderátum sería una sola corte; recordemos la situación de Italia con cinco cortes de casación (Roma, Florencia, Turín, Nápoles y Palermo).

Pero si no fuera posible la corte única, siempre sería un paso muy grande hacia la unificación del criterio judicial en la interpretación de la ley, la existencia de una corte con jurisdicción sobre cinco o seis provincias. Las provincias argentinas no tienen, además, los precedentes políticos de los estados que han constituido la monarquía italiana, lo que facilitaría mucho la constitución de una sola corte.

IV. — *Competencia de la corte.* — Una corte de casación, juzga 1°, de la aplicación de la ley; 2°, de la nulidad por vicios de forma o violación de garantías, como los procesos al capitán Dreyfus, por ejemplo, que fué condenado por el consejo de guerra de París, sin comunicar ciertas piezas a la defensa; 3°, de las competencias entre cortes.

Como la Corte Suprema nacional tiene competencia de fuente constitucional para las causas que el artículo 100 determina, la de la corte de casación no podría extenderse sino a la aplicación de la ley y nulidad de vicios de forma que no implicase violación de garantías constitucionales.

Aun podría decirse que, dada la multiplicidad de códigos de procedimientos provinciales que, aun cuando muy análogos, tienen sus diferencias, sería más prudente dar a la corte la competencia única para juzgar de la recta aplicación de la ley de fondo, que en

definitiva es lo más esencial y por sí sola justificaría su creación, y dejar a los tribunales de apelación de provincias, el conocimiento en vista y los demás recursos procesales.

V. — *Superintendencia.* — Establecida la corte sería de desear que fuera el Consejo Superior de la Magistratura y velara sobre la disciplina y conducta de los magistrados de las provincias y que pudiera juzgarlos. Pero en el estado actual de la organización política argentina, que reconoce ese poder en sus legislaturas, sería preciso cambiar el régimen previamente. En cuanto a la corte misma, ella puede ser el juez de sus individuos, porque ese nuevo organismo puede ser sometido por las leyes de su creación a reglas especiales, que las constituciones no han contemplado.

VI. — *Fuerza de sus decisiones.* — Aunque no se admita la infalibilidad de las cortes de casación, es indudable que los intereses ventilados en justicia, no pueden quedar a merced de la interpretación individual; si el Poder Judicial no legisla en el sentido escrito, fija normas que guían las acciones humanas, y los cambios de jurisprudencia, bastante comunes, traen la incertidumbre en la conservación y el ejercicio de los derechos.

Cuando se discutía la ley número 7.055, que entre otras creaciones erigió en la Capital una otra cámara civil, fué tratada la cuestión de la unificación de la jurisprudencia, defendiéndola Montes de Oca, Saavedra Lamas, Pinedo. Las cámaras, sin embargo, no imponen sus decisiones.

Creemos más conforme con la razón de ser de una corte de casación el sistema francés, que impone la decisión después de una segunda casación sobre la misma cuestión y las mismas partes.

Sr. GONNET. — Pido la palabra.

El asunto que está a consideración de la Conferencia, presenta diversos aspectos y su discusión nos llevaría muy lejos. Además, voy a hacer presente que quedan muchos asuntos por tratar todavía y no tenemos más que dos sesiones para que la Conferencia termine con su labor.

Yo pensaba traer algunas de las observaciones que tengo establecidas, además de trabajos escritos respecto de uno de los puntos que involucra el proyecto de creación de una corte de casación. Pero, no tendría ningún inconveniente en aceptarlo, siempre que se lo destinara a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos. A mi juicio, su propósito es buscar la unidad de la jurisprudencia, o decisión de un solo tribunal, a fin de que se imponga a los demás tribunales de la República, una manera de pensar que no sería la de juicio, sino la del tribunal mismo.

Yo considero que el derecho se origina en los hechos, y como cada pleito es un hecho, genera un nuevo derecho. El señor delegado que acaba de predecirme en el uso de la palabra, citó entre los antecedentes que trajo a esta Conferencia, las decisiones de la Corte de Casación de Francia, donde se establece que es necesario una segunda revisión de la causa para que pueda ser obligatoria para las partes; de manera que la Corte de Casación de Francia no establece como obligación de los tribunales inferiores el someterse a las decisiones de un tribunal que viene a cristalizar la legislación, imponiendo maneras de pensar, con hechos que son completamente distintos, porque, como ya he dicho, cada pleito es generador de una cuestión de derecho.

No desco molestar más la atención de los señores delegados, porque ya en la Primera Conferencia, cuando se trató este punto, hice una exposición al respecto.

Me permitiré leer solamente las conclusiones a que he llegado en aquella oportunidad y que no discutiré ahora, porque ya se hará en la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, a la que va a pasar este proyecto.

No he pasado en silencio la consideración de este asunto, y he formulado estas breves aclaraciones, para que no quede como que acepto el principio que la unidad de la jurisprudencia en nuestro país, sea beneficiosa para su legislación, ni para su jurisprudencia.

Las conclusiones a que me he referido, son las siguientes (*leyendo*):

1º — Considero un error buscar la unidad de la jurisprudencia, con carácter obligatoria para los jueces y tribunales inferiores.

2º — Si la jurisprudencia no se uniformara para darle el carácter de obligatoria, sería crear una nueva instancia que prolongaría los juicios, en detrimento de su brevedad.

3º — El único propósito serio que se aduce para llegar a la uniformidad de la jurisprudencia, es que ella fijaría una interpretación precisa a cada ley, con lo que las partes interesadas, en casos análogos, sabrían a qué atenerse al realizar hechos, al celebrar contratos, al constituir obligaciones, etcétera.

Pero, con la unidad y sin la unidad de la jurisprudencia, jamás los interesados podrán precisar el concepto de la ley para casos análogos, porque no son las leyes las generadoras de los actos jurídicos, sino los hechos, y los hechos son tan distintos los unos de los otros, que no puede existir una igualdad, sino apenas una analogía. La analogía, como he dicho, es la relación de semejanza entre casos esencialmente distintos.

4º — Por eso es que las sabias máximas del derecho prescriben, que las sentencias se consideran como la expresión de la justicia, sólo para el caso juzgado y no para otros casos, por análogos que parezcan.

5º — Imponer la uniformidad de la jurisprudencia, como obligatoria, es admitir que la interpretación de las leyes por el tribunal superior es de criterio infalible, mientras no se reforme ese criterio por el mismo tribunal.

6º — Imponer a los jueces una manera de interpretar la ley, por más razonado que sea el criterio del tribunal superior, es constituir al poder judicial en el punto uniformado, en agente de aplicación automática de las leyes, lo que, aparte de estimular la negligencia de los malos jueces, no permite a los buenos el estudio razonado de las cuestiones de derecho ya decididas por la jurisprudencia, perdiéndose así el verdadero caudal de la misma.

Sr. GARCÍA ZAVALÍA. — Muy respetable la opinión del doctor Gonnet; no voy a refutarla porque no vamos a hacer debate por no tener tiempo para ello y además porque no es este, propiamente, el objeto de esta Conferencia; no venimos a decidir, no venimos a legislar, venimos sencillamente a traer ideas, a proponerlas. Es la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, que tiene en su seno un miembro tan ilustrado como el doctor Gonnet, la que se pronunciará al respecto.

Sr. GONNET. — No estoy nombrado, señor delegado.

Sr. GARCÍA ZAVALÍA. — Pero lo será y me satisfaría mucho, como asimismo lo serán otros de igual capacidad intelectual, que han de estudiar estas sonoras bases que hemos entregado a la Conferencia. En nosotros, repito, no ha habido más que el anhelo de traer la cuestión para que sea debidamente estudiada.

Sr. GONNET. — Yo no tengo inconveniente en que se estudie; todo lo contrario.

Sr. REVIRIEGO. — El simple propósito de pasar este despacho de comisión a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, importa darle el auspicio de la Conferencia. No creo que se pasen iniciativas o proyectos por si acaso los considere aceptables; ya va implícita en la iniciativa o en el proyecto una especie de opinión favorable a su contenido, a la idea expresada. Por consiguiente y no viendo que la objeción que he hecho se haya discutido, (pues creo que sólo por una reforma constitucional podría arribarse a las conclusiones que se desea) y como tengo verdidas opiniones respecto a la Corte Suprema nacional, siento mucho pero me verá forzado a votar en contra.

Sr. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar en general el despacho de la comisión.

Sr. SECRETARIO (ZAVALA ORTIZ). — Es un artículo único, así que se votaría en general y en particular.

Sr. GONNET. — Yo lo voy a votar, pero con las reservas naturales que co-

responden al principio de la unidad de la jurisprudencia.

SR. LAFAILLE. — Voy a sostener, por mi parte y calurosamente, el proyecto de la comisión, no solamente en cuanto a su fondo, por las ventajas que a mi juicio reportaría unificar la jurisprudencia en el país, sino por la circunstancia muy interesante para todos de que la iniciativa procede del poder judicial y del poder judicial de una provincia. Por otra parte, y sin perjuicio de todas las razones que dió el doctor Jofré, tomándolo desde mi punto de vista, yo también le encuentro una conveniencia muy grande en que llegue a constituirse una corte de casación. Las leyes no tienen sino una vida efímera cuando la jurisprudencia no las consolida mediante una firme y acertada interpretación. Al cabo de pocos años, sobre todo en los países que progresan y se transforman velozmente, los códigos mejor inspirados ya no responden a las necesidades colectivas y exigen imperiosamente una reforma. Así ha ocurrido con todos los nuestros que se han traído a discusión en los últimos años y hoy está sobre el tapete nada menos que el propio Código Civil. Si existiera una corte de casación que le diera siquiera unidad relativa a la jurisprudencia, no la unidad forzada u obligatoria que alguien observaba, sino simplemente la que resulta de la autoridad de un tribunal superior...

SR. GONNET. — Eso lo acepto.

SR. LAFAILLE. — ... (como creo que lo acepta el doctor Gonnet); si existiera una corte de casación, nuestro código podría disfrutar de una vida más larga; nos ahorraríamos más de una reforma y se producirían todas las ventajas inherentes a una mayor estabilidad legislativa. El ejemplo está en los labios de todos, y es el Código Civil francés, mucho más antiguo, mucho más atrasado que el nuestro, y que, sin embargo, después de 1804, sin modificaciones substanciales, ha podido subsistir gracias principalmente a la corte de casación. Por eso yo creo que esta última no solamente llenaría la función, utilísima de imprimir certidumbre al derecho, sino la otra no menos útil, de limitar las reformas y de obtener con una interpretación inte-

ligente y calificada que la ley se adapte a las necesidades y circunstancias nuevas del país. El Poder Legislativo no está organizado para esa tarea, que es propia del Judicial, a quien debemos facilitársela con todo empeño, aun mediante un cambio en los textos de la Constitución. Es por eso que estoy, y calurosamente, como he dicho, a favor del despacho propuesto.

SR. BAUDÓN. — Por cumplir con el mandato recibido y habiendo cambiado ideas sobre este asunto, debo manifestar, después de los delegados que han hecho uso de la palabra, que no coincide con el propósito fundamental por conceptuar, en primer término, que no es precedente dentro de la organización de la justicia dada por nuestra Constitución Nacional. Podría, en todo caso, dentro del propósito general de reforma de la Constitución, ir perfectamente incluido como uno de los anhelos de esta Conferencia y como una de las necesidades más urgentes y más sentidas de la organización de la justicia.

Ahora, sobre otro aspecto fundamental de esta cuestión, entiendo que si bien existe conveniencia en el funcionamiento de un tribunal de casación, no es posible, en manera alguna, dentro de nuestras instituciones, de la ley y del interés social declarar la obligatoriedad de la interpretación o jurisprudencia que establezca. En absoluto. El tribunal podrá y deberá ejercer su alta función reguladora pero sin imponer sus fallos como norma porque sería mecanizar la justicia del país, matar la iniciativa y la conciencia de los jueces, contrariando, evidentemente, la Constitución y todos los códigos de procedimientos. Las leyes procesales de todos los estados federales imponen al juez o tribunal el imperativo de dictar sentencia de acuerdo con la ley y su conciencia, o sea, su honesta interpretación de aquella; luego, ¿dónde empezaría la función del magistrado si éste debe, inexorablemente, aplicar la interpretación de un superior único? Me pregunto, si esto no es crear la infalibilidad de un tribunal y cerrar el mejoramiento progresivo de la jurisprudencia que se deriva de la concurrencia de las capacidades y del estudio continuo de los miembros de la

magistratura. Todo esto es elemental. Luego, es erróneo sostener que la jurisprudencia debe reemplazar la legislación, menos en un país nuevo en continuo dinamismo. Es propiciar la confusión de poderes con funciones diferenciadas por la ley suprema: judicial y legislativo. Este hace la ley, el otro la interpreta y aplica fielmente al hecho real.

El delegado que hablaba, brillantemente en cierto modo, ha destruido la tesis que entiendo ha querido sostener con un argumento en mi concepto decisivo. Se refería, el señor delegado, a los hechos. Los hechos son el reflejo de la vida, la vida misma manifestada por los actos humanos y la movilidad y transformación de esos hechos significa, a su vez, el progreso continuo de las ideas, todo lo cual hace que se produzcan en distinta forma las manifestaciones individuales y colectivas, lo que exige, de período en período, el cambio equivalente de la legislación que debe encuadrarse dentro de una interpretación exacta de los hechos que se tiende a resolver y de la justicia que se va a distribuir, aplicándola de acuerdo con el espíritu de la época, sin desconocer que el poder judicial, las cortes, las cámaras y los jueces tengan la plenitud de autoridad de los actos que realizan y efectúan la aplicación perfecta y honesta del derecho que rige en estos momentos en el país. De manera que opino que primero es la ley y luego su aplicación por los funcionarios, por los representantes de la misma. Entiendo que la Corte de Casación no puede ser una solución si tenemos una legislación anticuada; ésta debe modificarse oportunamente, haciendo concordar las leyes con el espíritu de la época; en esta forma daremos a la justicia la autoridad y la exactitud que necesita para su aplicación. Ahora, desde otro punto de vista, entiendo que inmutabilizar las leyes es pernicioso y contrario a la vida misma de la sociedad y del derecho. Este concepto es tan práctico y tan elemental de suyo (todos los días en la vida de los tribunales lo estamos palpando) que no merece mayores comentarios ni afirmaciones. Entiendo, también, que más pernicioso que obligar

a la justicia del país a interpretar exactamente una ley, es obligar a los jueces a proceder con un cartabón; es establecer que los jueces dicten sentencia de acuerdo con la ley y contra su conciencia, contra la amplitud de ideas, de espíritu, de sentimientos que los animan. Y me figuro la situación de un magistrado que frente a su conciencia tuviera que producir sentencia contraria a su interpretación directa porque la unificación de la jurisprudencia le obliga a pronunciarse en contra. Con todos sus riesgos debe prevalecer el juez.

Refiriéndome a un caso práctico que citara el doctor Jofré, yo recuerdo también que una de las Cámaras de La Plata, es un asunto muy importante de derecho civil, sostenía una tesis y la otra sostenía una distinta. Entonces variaba la suerte de los asuntos según el turno de las cámaras. Y también recuerdo el caso práctico que nos habrá ocurrido a todos, de esperar con sumo anhelo que un juez fuera cambiado de cámara o fuera ascendido de primera instancia para que cambiase la interpretación de la ley.

Estos breves comentarios demuestran que no es posible inmutabilizar la jurisprudencia y que la unificación de la misma con carácter imperativo es pernicioso porque no deja una forma amplia para pronunciarse a los jueces del país.

SR. CASTIGLIONE. — Hago moción de que se cierre el debate.

SR. CANO. — Está en el uso de la palabra un señor delegado.

SR. CASTIGLIONE. — Retiro la moción, señor presidente.

SR. PRESIDENTE (PAEZ DE LA TORRE). -- Continúa en el uso de la palabra el señor delegado doctor Baudón.

SR. BAUDÓN. — No he tenido interés en hacer uso de la palabra, señor presidente, pero he creído de mi obligación exponer estas apreciaciones al respecto.

Sólo deseaba manifestar, como complemento, que la Cámara de la provincia de Buenos Aires, que entiendo represen-

ta el mismo papel que el tribunal a que se hace referencia, cambia a diario sus fallos basándose en las distintas interpretaciones que da a la jurisprudencia.

Nada más.

SR. CASTIGLIONE. — Hago moción de orden en el sentido de que se cierre el debate.

—Apoyado.

SR. PRESIDENTE (PAEZ DE LA TORRE). — Si no se hace uso de la palabra, se votará la moción formulada.

—Se vota y es afirmativa.

SR. PRESIDENTE (PAEZ DE LA TORRE).

— Si no se usa de la palabra, se votará el despacho de comisión.

—Se vota y es aprobado.

SR. CANO. — Formulo moción de levantar la sesión.

—Apoyado.

SR. PRESIDENTE (PAEZ DE LA TORRE). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor delegado Cano, en el sentido de levantar la sesión.

—Se vota y es afirmativa.

SR. PRESIDENTE (PAEZ DE LA TORRE). — En consecuencia, queda levantada la sesión.

—Son las 17 y 55.

QUINTA SESION ORDINARIA

PRESIDENCIA DEL DOCTOR J. HONORIO SILGUEIRA

DELEGADOS Y MIEMBROS DE LA CONFERENCIA PRESENTES: Doctores Aguilar Henoch D., Alegre Manuel V., Alsina Ramón M., Alvarez Julio, Alvo Sebastián E., Astrada Ponce Carlos, Avalos Antonio, Avalos José M., Barbosa Feliciano, Barraquero Julián, Barrera Juan F. de la, Bassi Aurelio, Baudón Héctor R., Berghmans Doneel Carlos A., Bullrich Rodolfo, Cabral Angel H., Campa Juan de la, Canal Feijóo Bernardo, Cano Guillermo G., Carlomagno Juan C., Carranza Adolfo, Casañas Miguel, Castellanos Benjamín, Castiglione Antonio, Castro Jorge S., Cervini Francisco, Chedufau Edmundo C., Codoni José E., Corominas Segura Rodolfo, Correa Alejandro, Corvalán César S., Courel Carlos D., Day Alberto A., Díaz Santiago F., Doneel Salvador A., Echagüe Pedro A., Escobar Sáenz Julio M., Ferreira Enrique A., Frías Leopoldo, Frías Veneciano, García Zavallia Rafael, Gonnat Manuel B., González Sabathié Juan M., Goyeneche Romualdo, Goytia Roberto D., Goytia Victor D., Guinazú Alberto, Herrera Santiago D., Labanea Gabriel, Lafaille Héctor, León y Basualdo Arturo de, Lobos Roberto N., López Domínguez Ramón, Llan de Rosos Ernesto, Latella Frías Donato, Martínez Paz Enrique, Mazzi Rogelio, Méndez Miguel G., Molina Luis E., Morixe Jerónimo A., Novillo, Saravia Lisardo, Orgaz Raúl A., Otero Capdevila Benjamín, Palacios Benjamín, Páez de la Torre Manuel, Petra Demetrio, Quiroga Pedro R., Reviriego Emilio, Ríos Eduardo, Rodríguez Ribas Vicente, Rodríguez Saráchaga Oscar, Romero del Prado Víctor N., Rothe Guillermo, Sierra Celestino D., Silgueira J. Honorio, Sosa Loyola Gilberto, Stanchina Camilo F., Torino Enrique, Urraza Estanislao de, Vera Cruz, Vera Vallecjo Ricardo, Viechi Adolfo Vilgré La Madrid Juan, Villegas Navarillbaso Florencio, Viñas Ibarra Umberto, Zavala Ortiz Alfredo, Zaefferer Silva Oscar.

SUMARIO

- 1.—Saludos a la Conferencia y excusaciones.
- 2.—Agasajos. Varias comunicaciones.
- 3.—Comisión Permanente de Estudios Legislativos. Designación de la Comisión Organizadora.
- 4.—Reforma al Código de Minería. Unificación de impuestos internos. Moción de preferencia.
- 5.—Viajantes de comercio. Indicación.
- 6.—Transportes marítimos y fluviales. Tramitación de proyectos.
- 7.—Orden de la consideración de los proyectos. Indicaciones.
- 8.—Instituto de compilación, clasificación y ordenación del Derecho Argentino. Consideración y aprobación del dictamen.

- 9.—Reforma al Código de Minería, Unificación de impuestos internos. Consideración y aprobación del dictamen.
- 10.—Transportes marítimos y fluviales. Consideración del dictamen.

1

Saludos y excusaciones

En Córdoba, a 29 días del mes de Octubre de 1926, reunidos en el Salón de Actos de la Universidad, los señores delegados miembros de la Conferencia arriba indicados, y siendo las 9 y 35 horas, dice el:

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Que-
da abierta la sesión.

SR. SECRETARIO (ZAVALA ORTIZ). —
La Presidencia ha recibido telegramas
excusando su asistencia de parte de

los doctores Juan Carlos Cruz, Mario A. Rivarola, Benito Nazar Anchorena, Manuel F. Castello, Bautista Contreras Ortiz, Carlos M. Mayer, Saúl Perkins, Amadeo Pons, Juvenal F. de la Puente, José A. Contte, Mario Bravo, José T. Baegialup Vertiz y varios más. Todos desean el éxito pleno de la Conferencia.

2

Agasajos

SR. SECRETARIO (ZAVALA ORTIZ). — Además, se ha recibido la siguiente nota del señor Rector de la Universidad de Córdoba (*Leyendo*):

Córdoba, Octubre 28 de 1926.

Al señor Presidente de la Segunda Conferencia Nacional de Abogados, doctor J. Honorio Silgueira.

Tengo el agrado de invitar al señor Presidente y por su intermedio, a los señores miembros de la Conferencia que tan dignamente preside, a visitar la Universidad y concurrir a la recepción que en honor de las autoridades y delegados de la misma, tendrá lugar en el salón rectoral el día de mañana 29, a las 18.30 horas.

Debiendo ausentarse de esta ciudad el suscripto, el día indicado, en viaje impostergable, serán recibidos por el señor vicerrector doctor José C. Lascano.

Saludo al señor presidente con mi consideración distinguida.

León S. Morra.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Que dan invitados los señores delegados, y la Presidencia pide la concurrencia de todos, a la recepción de la Universidad, teniendo en cuenta que hay que responder a una invitación del Rector, que tan gentilmente ha tratado a la comisión organizadora de la Conferencia y a la Federación de Colegios de Abogados, facilitando en todo lo que fuera posible, la realización de esta asamblea y poniendo a nuestra disposición el salón magno de la Universidad, esta alta tribuna donde sesionamos.

SR. CARRANZA. — A propósito de esta invitación haría indicación para que se agradeciera muy especialmente, a la Universidad, la importante cooperación que ha prestado a la Conferencia de Abogados.

—Asentimiento.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Igualmente se hace presente, que el señor gobernador de la provincia ha invitado a los señores delegados a un almuerzo hoy a las 12.30, en el Crisol Club; las invitaciones están en Secretaría. La Presidencia se empeña igualmente en que haya la mayor concurrencia posible de delegados, para responder a la gentileza del Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba. Asimismo, pongo en conocimiento de los señores delegados, el agasajo que la Federación de Colegios de Abogados o la misma Conferencia, va a hacer en obsequio de los miembros de esta asamblea y de las personas de su familia que los acompañan, el que consiste en un viaje de excursión a las sierras desde la estación de Alta Córdoba hasta Capilla del Monte. Esta excursión se realizará mañana.

3

Comisión Permanente de Estudios Legislativos. — Designación de la Comisión Organizadora.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Al aprobarse la orden del día número 1, relativa a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, se ha sancionado el artículo preliminar que dice así: «La Segunda Conferencia Nacional de Abogados, resuelve: autorizar al Presidente, para que designe una Comisión Especial compuesta por miembros de esta Conferencia, e integrada por el Presidente mismo, la que procederá a constituir la Comisión Permanente de Estudios Legislativos...» «Esta comisión organizadora será designada antes de la clausura de la Segunda Conferencia, y desaparecerá tan pronto entre a funcionar la Comisión Permanente de Estudios Legislativos.»

La Presidencia ha entendido que esta comisión especial tiene una tarea sencilla desde el momento que en el artículo 2º del proyecto se establece la forma de constitución de la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, cuando dice:

«La comisión se compondrá de las siguientes personas:

- a) Dos miembros nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional;
- b) Un representante designado de su seno por cada Colegio de Abogados, reconocido por la Federación de Colegios de Abogados;
- c) Un representante designado de su seno por la Federación de Colegios de Abogados;
- d) Dos representantes designados de su seno, por cada Facultad de Derecho y de Ciencias Económicas de Universidades Nacionales.»

En uso de la autorización acordada a la Presidencia en el artículo preliminar, he designado para formar dicha comisión, a los doctores: Manuel B. Gonnet, Carlos A. Berghmans Doneel y el que habla. Los doctores Gonnet, Berghmans Doneel y Silgueira se reúnen semanalmente en la Capital Federal, para tratar asuntos relacionados con la Federación de Colegios de Abogados; entonces les será fácil ponerse de acuerdo, de inmediato, para que en el mes próximo gestionen las medidas necesarias para formar la Comisión Permanente de Estudios Legislativos.

4

Reforma al Código de Minería. — Unificación de Impuestos Internos. — Moción de preferencia.

SR. GARCÍA ZAVALÍA. — Pido la palabra.

Aunque he escuchado que hay asuntos de carácter ordinario para ser tratados, voy a hacer moción de preferencia, siguiendo un procedimiento que se ha empleado ayer, cuando el doctor Ba-

rraquoero pidió que su proyecto sobre reformas a la Constitución se tratara antes que cualquier otro. Yo también tengo mis motivos especiales para pedir se trate con preferencia, el único asunto que han presentado las delegaciones de los Poderes Ejecutivos de provincia, a iniciativa del de Tucumán.

Entiendo que, al ser invitados los gobiernos provinciales, no se ha querido que sus delegados sean elementos puramente decorativos, sino — en nuestra medida — de utilidad, para encarar ciertos y determinados problemas que puedan afectar a los respectivos Estados, desde el momento que son cuestiones de buen gobierno, que tienen atinencia con el Derecho Federal y con el Derecho Público Provincial, y que interesan, por igual, a todo el país. También pediría esta preferencia por dos motivos más: como un homenaje a la tradición histórica de las tres provincias norteañas, cuyos delegados firman las ponencias sobre reforma al Código de Minas y sobre unificación de impuestos internos, y porque están, también, suscriptas por el delegado de la provincia de Córdoba, doctor Moyano Escalera. Córdoba nos alberga. Yo como nacido en Córdoba, me excuso de elogiarla, pero debemos responder a su gentil hospitalidad.

Desearía que se ponga a votación esa moción de preferencia.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — En discusión la moción del doctor García Zavallia.

SR. SECRETARIO (ZAVALA ORTIZ). — ¿Quiere concretarla, señor delegado?

SR. GARCÍA ZAVALÍA. — Por las breves razones que expuse, pido que el proyecto presentado a iniciativa del Poder Ejecutivo de Tucumán y al cual se han adherido los gobiernos de Salta y Jujuy, que se refiere a la unificación de impuestos internos y a la reforma del artículo 7º del Código de Minas, y que tiene ya despacho favorable, se trate con preferencia a los demás asuntos que no sean los ordinarios, en una palabra, que no sean del programa de la Conferencia.

SR. CASTIGLIONE. — Voy a apoyar la moción del doctor García Zavallia porque es muy interesante el tema que ha propuesto, por el contenido en sí y por haber recibido, también, una especie de sanción en la Conferencia de Gobernadores del Norte.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar la moción del señor delegado García Zavallia.

—Se vota y resulta afirmativa.

5

Viajantes de comercio. — Indicación

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Si la asamblea y el doctor Villegas Basavilbaso no tienen inconveniente, podemos alterar el orden, — ya que la Comisión de Transportes Marítimos y Fluviales está todavía deliberando — en el sentido de tratar el proyecto sobre viajantes de comercio, que es corto y no podrá tomar sino dos o tres minutos.

SR. VILLEGAS BASAVILBASO. — No tengo inconveniente, siempre que se trate hoy.

6

Transportes marítimos y fluviales. — Tramitación de proyectos

SR. CARLOMAGNO. — Pido la palabra.

Tengo que informar a la Conferencia de una incidencia que se ha suscitado en la Comisión de Transportes Marítimos. El doctor Crespo acaba de llegar de Buenos Aires; lo esperábamos para ponerlo al corriente de nuestro despacho. El despacho está firmado por el profesor de esta casa doctor Mazzi y el que habla. El doctor Crespo ha planteado una situación que a mi juicio debe ser resuelta por esta asamblea y que nace probablemente de un error de interpretación. Se ha repartido ayer un proyecto de los doctores Leopoldo Melo y Eduardo Crespo y un informe de la comisión de sección firmado por los mismos. El doctor Crespo piensa que esa comisión es la única que debía expedirse sobre transportes marítimos y se encuentra aquí con una comisión espe-

cial designada de acuerdo con el reglamento de la Conferencia, compuesta por los doctores Crespo, Chedufau, Mazzi y el que habla, es decir que en esta comisión no figura el doctor Leopoldo Melo. Hemos estado cambiando opiniones y no pudimos llegar a ninguna conclusión, tan es así que me encuentro solo en este momento, y creo de mi deber dar cuenta de este incidente a la Conferencia, la que debe considerar y tratar de dar una solución a este asunto.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — La Presidencia entiende que esta incidencia deriva del hecho de que no se ha incorporado a la comisión el doctor Melo.

SR. CARLOMAGNO. — No puede incorporarse tampoco, porque considera el doctor Crespo que no hay otra comisión sino la formada por los doctores Melo y Crespo y nosotros hemos sostenido que la comisión efectiva es la designada por esta asamblea. Descartaría que la Presidencia se entrevistara con el doctor Crespo.

SR. CARRANZA. — Se trata de una cuestión interna que puede resolver la Presidencia.

SR. CARLOMAGNO. — Hemos tomado los elementos de importancia que se han traído a la comisión: el proyecto de los doctores Crespo y Melo y el proyecto de la Cámara Sindical de Aseguradores Marítimos, a la que tengo el honor de representar. Tratando de armonizar con las disposiciones de nuestro proyecto, hemos formulado un despacho y ahora nos encontramos con esta situación. Creo que si el doctor Crespo concurrese a la sesión podríamos llegar a un acuerdo. Yo le pedí al doctor Crespo que firmara el despacho y que hiciese las observaciones en la parte en que no estuviese de acuerdo, pero no ha querido.

SR. CARRANZA. — Para no perder tiempo, hago indicación de que se autorice al Presidente para resolver esta cuestión interna.

SR. SERREY. — ¿Por qué no se posterga esta cuestión para la sesión de la tarde?

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — No se puede postergar, señor delegado, por-

que el asunto forma parte del programa oficial de la Conferencia.

SR. SERREY. — Pero mientras tanto, podría tratarse otro asunto.

SR. CARRANZA. — Insisto en mi indicación.

—Asentimiento general.

—Ocupa la Presidencia el señor delegado doctor Páez de la Torre.

7

Orden de consideración de los proyectos. Indicaciones

SR. REVIRIEGO. — Hay un despacho de la comisión que estudió el asunto relativo a las sociedades de responsabilidad limitada, sobre contratos de representación y viajantes de comercio.

SR. SECRETARIO (ZAVALA ORTIZ). — Hay un proyecto de los doctores Doncel, Castillo y Reviriego.

SR. REVIRIEGO. — No solamente es proyecto, sino también despacho de comisión.

SR. DONCEL.—Me parece que está en un error el señor delegado. Ocorre que después de terminada la tarea de la comisión, conversamos de otros vacíos de la legislación y resolvimos presentarlo como proyecto. No había sido contemplado por ningún delegado este vacío y entonces, como el propósito nuestro era que hubiera una comisión que presentara una reforma integral al Código de Comercio, nos permitimos introducir en esa forma este punto, pero no hay despacho de comisión.

SR. REVIRIEGO. — Lo he firmado en el concepto de que era un despacho de comisión y por razones de urgencia.

SR. QUIROGA. — La comisión de que tengo el honor de formar parte se ha abocado el estudio de este asunto en su sesión de ayer y todavía no ha producido el despacho porque necesita un breve tiempo más, para coordinarlo y redactarlo.

Haría moción, para que se pasara a otro asunto, hasta tanto la comisión pueda expedirse.

—Asentimiento.

8

Instituto de compilación clasificación y ordenación del Derecho Argentino

SR. PRESIDENTE (PÁEZ DE LA TORRE). — Se va a leer el despacho de comisión sobre creación de un instituto de compilación, clasificación y ordenación del derecho argentino.

SR. SECRETARIO (ZAVALA ORTIZ). — (*Leyendo*):

A la Segunda Conferencia Nacional de Abogados.

Vuestra comisión encargada del estudio del punto primero del programa de esta Conferencia, ha estudiado el proyecto presentado por el doctor Florencio Villegas Basavilbaso, referente a la creación de un instituto de compilación, clasificación y ordenación del Derecho Argentino, y os aconseja aprobar la siguiente

RESOLUCIÓN:

Artículo 1º — A efecto de facilitar el estudio y conocimiento de la legislación, debe crearse un instituto especialmente dedicado a la compilación, clasificación y ordenación del Derecho Argentino en todas sus ramas, comprendiendo leyes, decretos, ordenanzas, reglamentaciones, precedentes judiciales, resoluciones administrativas, la bibliografía jurídica y las concordancias de nuestro derecho con el derecho extranjero.

Art. 2º — El señor presidente de esta Conferencia procederá a designar una comisión especial compuesta de tres miembros que proyecte y gestione la creación de dicho instituto.

Manuel B. Gonnec. — Antonio Castiglione. — Florencio Villegas Basavilbaso.

SR. VILLEGAS BASAVILBASO. — Pido la palabra.

SR. PRESIDENTE (PÁEZ DE LA TORRE). — Tiene la palabra el señor delegado Villegas Basavilbaso.

SR. VILLEGAS BASAVILBASO. — Señor presidente: El proyecto presentado tiene por finalidad la creación de un *registro general y permanente* de legislación, jurisprudencia y doctrina, que facilite el estudio y la búsqueda de nuestro derecho mediante una ordena-

ción analítica y técnica de todas las disposiciones obligatorias del país (constitucionales, legales y reglamentarias), fallos judiciales, resoluciones administrativas y opiniones jurídicas.

La creación de un registro general de Derecho Argentino no sólo interesa a los abogados y a los miembros de los poderes judiciales, sino también a legisladores, funcionarios públicos, publicistas, profesores y estudiantes de Derecho, ya que ese registro debidamente organizado, tendría la siguiente utilidad:

1º — Permitiría conocer, al día, el estado de la legislación del país.

2º — Las nuevas leyes podrían proyectarse y discurrirse teniéndose a la vista la recopilación ordenada y completa de todo lo relacionado con la materia a legislar, trabajo preparado por los abogados del registro, que permitiría, al hacer la ley, determinar sus concordancias facilitando así su exacta aplicación ya que no siempre la ley más nueva deroga las disposiciones especiales de leyes anteriores y viceversa.

3º — El pensamiento del legislador, que es, sin duda, una valiosa fuente de interpretación legal, podría rectamente apreciarse conociendo con exactitud qué antecedentes se tuvieron a la vista al proyectar y discutir la ley y qué razones y opiniones precisas se emitieron en la respectiva discusión parlamentaria; razones y opiniones que minuciosamente revisadas y extraídas por los abogados del registro se incorporarían a éste como enunciaciones doctrinarias.

4º — Cada disposición obligatoria (constitucional, legal o reglamentaria), cada sentencia judicial, resolución administrativa, opinión jurídica y obra de Derecho, quedarían permanentemente *individualizadas* por el número de su registro, evitando así la confusión y las dificultades que el cambio de número de los artículos de las leyes y decretos ocasiona, tropiezos que se agravan en presencia de los fallos que suelen referirse a numeraciones dobles o que posteriormente han sido derogadas o alteradas, lo que hace casi imposible la correlación de los mismos.

Sobre este punto cabe destacar lo que ocurre con el Código Civil, varias veces modificado, actualmente en estudio para su reforma y siempre sujeto a nuevas modificaciones y agregados debido a su extensión y a la índole de las materias e instituciones que abarca.

La indicación de una disposición legal, de un fallo o enunciaci6n cualquiera registrados, podría hacerse únicamente por su número de registro, que aunque fuese un número alto, siempre sería una enunciaci6n más sintética que la referencia completa de su origen. Y hasta no habría inconveniente en hacer en cada caso las dos referencias individualizando y determinando con el número de registro la disposici6n citada. Siempre sería más fácil buscar en una sola obra, en un solo código, determinados números, que buscar distintas citas en distintos libros.

5º — La publicaci6n del registro y de la ordenaci6n de sus disposiciones sería una obra *continuada* sin necesidad de suplementos que vienen a multiplicar los índices y cuyo material debe intercalarse en lo ya existente, como ocurre con todos los repertorios de fallos y colecciones de leyes actualmente en uso.

6º — La búsqueda en el registro sería, en todos los casos, una confrontaci6n de números en que el trabajo del abogado se reduciría exclusivamente a indicar los vocablos extremos de su consulta, y esa búsqueda sería rápida, segura y completa.

7º — El registro podría ser consultado telegráficamente sin necesidad de explicaciones, pues, como digo, la búsqueda en el mismo se haría con la sola indicaci6n de vocablos extremos, palabras simples o compuestas debidamente numeradas.

8º — La facilidad de verificar en el registro las citas referidas al mismo, haría inútil acumular antecedentes para fundar y demostrar el derecho litigado. En la actualidad, los precedentes que se invocan en las tramitaciones judiciales suelen ser letra muerta, pues ni jueces, ni secretarios, pueden materialmente consultar tales citas. Con la superposici6n del material jurídico y la

ordenación adecuada del mismo, esa búsqueda podría hacerse sin pérdida de tiempo y con la seguridad de que la investigación sería completa.

9º — La existencia del registro sería sin duda un valioso auxiliar para acelerar la tramitación de los juicios que abogados y jueces demoramos cuando para estudiar una causa tenemos previamente que recorrer numerosos índices, libros, diarios, etcétera.

Numerosos fallos contradictorios en los cuales no se ha hecho un estudio completo de la ley, antecedentes y doctrina, encontrarían en futuros pronunciamientos una más exacta orientación jurídica al ser más fácil la búsqueda del Derecho práctico y doctrinario que esos casos plantean, propendiéndose con ello a la unificación de la jurisprudencia.

Con la ayuda del registro se evitarían numerosas injusticias que el trámite diario contiene y que cubre y ampara la *res judicata*; injusticias a las que abogados y jueces contribuimos por no tener a mano o en la memoria todas las disposiciones, fallos y opiniones que demostrarían en muchos casos la verdadera y única interpretación de la ley.

10. — La ordenación del registro no sólo evidenciaría la correlación de los Derechos Civil y Comercial en materia de obligaciones (2º punto del programa de esta Conferencia) sino también la correlación integral de las obligaciones en todo el Derecho Argentino, y la correlación de todas las materias registradas unidas entre sí por la referencia común de los vocablos jurídicos o de uso.

Esa correlación de las materias permitiría la enseñanza y el aprendizaje del Derecho Argentino en forma integral. Así, por ejemplo, por la palabra *farmacéutico* podríamos en pocos minutos saber qué disposiciones, fallos y obras de Derecho contemplan ante la ley la situación de una persona que tiene ese título profesional, o que quiere seguir esa profesión, qué impuestos gravan su negocio, si puede o no ser declarado en quiebra, qué penalidades tiene por faltas o delitos cometidos en el ejercicio de su profesión, qué obligaciones le in-

cumben ante el Departamento Nacional de Higiene y demás reparticiones públicas, etcétera.

11. — Por último, el registro permitiría conocer rápidamente las disposiciones derogadas, ya sea por mandato expreso de la ley o por haber la jurisprudencia declarado tal derogación interpretando otros textos, o, en fin, porque así corresponde según la opinión de autorizados autores.

Señor Presidente: Tal vez la obra fundamental de esta Conferencia ha sido la creación de la Comisión Permanente de Estudios Legislativos. Yo entiendo que si esa comisión no dispone de un instrumento rápido de investigación jurídica que le permita hacer obra fructífera, será un organismo decorativo más, cuyo trabajo no llegará a concretarse en las fundamentales iniciativas de mejoramiento de nuestras leyes e instituciones, a que aspira esta Conferencia.

Debo anticipar que tengo un proyecto completo referente a la creación, organización y funcionamiento del registro que he mencionado y que presentaré para su estudio a la comisión especial que se designe. En cuanto a la faz financiera de ese registro hago notar que también he estudiado los recursos con que podría llevarse a la práctica su creación.

Entiendo que este proyecto es de suma utilidad para todos los abogados y que su realización importaría establecer una oficina de información legal y jurídica tan necesaria para el mejoramiento de nuestra administración de justicia.

He terminado. (*Aplausos*).

Sr. GARCÍA ZAVALÍA. — Que se vote, porque creo que hay asentimiento general.

— Se vota y aprueba en general y en particular sin modificación.

Sr. REVIRREO. — Pido que conste que no se ha hecho observación alguna a esta brillante iniciativa.

Sr. PRESIDENTE (PÁEZ DE LA TORRE). — Se hará constar, señor delegado.

Queda aprobado el proyecto.

Reforma al Código de Minería. — Unificación de impuestos internos

SR. SECRETARIO (ZAVALA ORTIZ). — Corresponde ahora el dictamen de la Comisión especial de estudio de proyectos no previstos por el Programa de la Conferencia.

SR. GARCÍA ZAVALA. — Hay una modificación de preferencia aprobada.

— Ocupa la Presidencia el doctor Silgueira.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a leer el despacho de Comisión sobre Reforma al Código de Minería y unificación de impuestos internos.

SR. SECRETARIO (ZAVALA ORTIZ). — (*Leyendo*):

A la Segunda Conferencia Nacional de Abogados.

La Comisión Especial de estudio de proyectos no previstos por el programa de la Segunda Conferencia Nacional de Abogados aconseja la aprobación de la ponencia de los delegados del Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán y que va subscripta también por los delegados del gobierno y del Poder Judicial de las provincias de Salta y Jujuy, sobre los proyectos de leyes nacionales referentes a unificación de los impuestos internos y reformas al Código de Minas en su artículo 7º y, por las razones que dará el miembro informante y los fundamentos escritos de dicha ponencia, opina que debe ésta aprobarse tal como ha sido presentada, o sea en la siguiente forma:

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

DECLARA:

1º — El proyecto de ley nacional que, unificando los impuestos internos entrega a las autoridades federales su recaudación y distribución proporcional, es contrario a la Constitución porque atenta a la soberanía de las provincias e impide su desenvolvimiento económico.

2º — El proyecto del Poder Ejecutivo Nacional sobre modificación del Código de Minas, en su artículo 7º, en cuanto excluye del dominio privado de las provincias, toda o de-

terminada clase de substancias minerales, no consulta los principios económicos y jurídicos de nuestro régimen federativo de gobierno.

Julián Barraquero. — Carlos D. Couriel. — O. Rodríguez Saráchaga.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — En discusión en general.

SR. BARRAQUERO. — Pido la palabra. El autor de este proyecto, doctor Couriel, entiendo que se ha retirado, pero yo como miembro informante voy a decir algunas palabras al respecto.

Este proyecto no es sino declarativo de una aspiración que tienen todas las provincias de evitar el unitarismo económico que se está desarrollando en la Argentina, aniquilando la vida financiera de las provincias. Como dije ayer al fundar mi proyecto de reformas a la Constitución, creo que éste será uno de los puntos más fundamentales que está llamado a resolver la Convención Constituyente del país si es que quiere hacerse que el sistema federal sea una verdad y no una mistificación. La Constitución ha determinado claramente cuáles son las rentas que deben constituir el presupuesto de la Nación, y cuáles son las que deben dar base a la vida financiera y económica de las provincias. Es evidente que los impuestos internos son pura y exclusivamente fuentes de recursos de las provincias, pero en momentos aciagos del país, en momentos de política internacional un poco difícil, se creyó que era un acto de patriotismo que los representantes de las provincias aceptaran provisoriamente que estos impuestos pasaran en forma transitoria a las rentas de la Nación para hacer frente a los gastos de la defensa nacional. Hizo este llamado al patriotismo el eminente juriconsulto argentino, que era en aquella época Ministro de Hacienda, el doctor Vicente López; los representantes de las provincias más pobres dijimos que hacían un gran sacrificio desprendiéndose de esta fuente de recursos, pero se aceptó. Pasó el tiempo, la Argentina salió de su situación económica angustiosa; yo como representante de la provincia de Mendoza fui el primero en pedir la reaceción; presenté

un proyecto solicitando la supresión absoluta del impuesto a los vinos extranjeros y nacionales y se requirió el informe y la opinión del señor Ministro de Hacienda que lo era en aquel entonces el doctor Marcos Avellaneda. El doctor Avellaneda tuvo la franqueza de declarar que, efectivamente, esos impuestos los consideraba inconstitucionales y que estaba disconforme con esta delegación de facultades. En el Congreso, casi por unanimidad (sólo había una opinión en contra, la del doctor Pérez, diputado por Buenos Aires), no se estaba en contra de esta iniciativa, sino que se creía que no debía suprimirse únicamente el impuesto a los vinos sino todos los impuestos internos para no hacer excepción. Pero los impuestos se han establecido, se han multiplicado y ahora no sólo no se van a derogar sino que se pretende prohibir a las provincias la imposición de impuestos internos, prometiéndoles que aunque cobrados por la Nación, ésta les dará la mano repartiéndoles la limosna federal según sus deudas. Creo que esta declaración viene en momento oportuno para ejercer alguna presión e influencia moral en los que están pretendiendo dar esta ley, que como digo, será el aniquilamiento más absoluto del sistema federal, porque no conceibo federalismo ni autonomía provincial, si a las provincias se les priva de las rentas que constituyen estos impuestos.

Por estas consideraciones y como es concordante con la idea fundamental que me ha llevado a solicitar la reforma de la Constitución Nacional, debemos votar la proposición aunque no llegue a tener ningún efecto práctico, positivo porque si hay mayorías disciplinadas, y si, como decía ayer, nosotros no tenemos Congreso que represente los intereses del país, sino Congreso que representa puramente intereses políticos — muchas veces de una simple mayoría — no sería difícil que ese Congreso, en esas condiciones no sancionara esa ley. Pero eso no quiere decir que no sería un atropello, un avasallamiento a las autonomías provinciales, porque no hay autonomía posible sin rentas propias, y hay provincias, señor presidente, que lejos de

estar progresando están disminuyendo su población, están en una absoluta decadencia. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Porque no tiene el amparo nacional para fomentar su vida económica. Por eso creo que es oportuno y patriótica esta declaración, pero que en adelante, quizás algún día tengan en verdad el sistema federal y no una mistificación. Por eso creo que debemos votar esta proposición.

SR. GARCÍA ZAVALLA. — Aunque no se encuentra presente el doctor Courel, mi compañero de delegación por Tucumán, voy a hacer algunos agregados o aclaraciones a lo que expone el señor miembro informante, doctor Barraquero. No ha guiado desde luego, a los autores y no pudo guiarles, porque quienes representan a la provincia de Tucumán son un senador provincial de la provincia de Córdoba y un miembro de la Magistratura de Tucumán, no les ha guiado, digo, otro propósito que traer este problema de palpitante actualidad, de buen gobierno, y porque se encuentran a resolución del Congreso proyectos de ley sobre estos puntos. Voy a exponer los motivos que hemos tenido, con esta otra salvedad: ayer se llegó a decir que algunos delegados traían mandatos imperativos. Nosotros no los traemos y creo que en ese sentido no ha sido subscripto el trabajo por los delegados de las provincias de Salta y Jujuy, ni por el doctor Moyano Escalera, que se ha adherido a nuestra idea: es sencillamente una iniciativa que sobre un punto de vital importancia, estudiado serenamente, contribuiría a que se logre la armonía en el sistema rentístico de la Nación y de las provincias. Voy a referirme a los motivos principales que nos han impulsado a presentar nuestra ponencia.

En cuanto a lo que se está disutiendo, o sea lo referente a impuestos internos, hemos expresado. (*Leyendo*): La delegación de poderes hecha por las provincias en el Pacto Federal (artículo 104, Constitución Nacional) y por el que se creó la soberanía de la Nación, está gráficamente expuesto por Alberdi: «El poder reservado al gobierno

local es más extenso porque es indefinido y comprende todo lo que abarca la soberanía del pueblo. El poder general es limitado y se compone en cierto modo de excepciones. Solo es de su incumbencia lo que está escrito en la Constitución; todo lo demás es de la provincial.» (Ver *Obras Completas*, tomo V, página 124).

En materia impositiva, y en lo que se refiere a los impuestos indirectos o al consumo, solo podría invocar el gobierno federal, ante la jurisprudencia parlamentaria y judicial, desde 1891, una facultad concurrente con la de las provincias (artículo 4º, Constitución Nacional) y tanto es así, que el propio proyecto impugnado reconoce la legitimidad de las gabelas locales, cuando se limita a reservar una parte de lo recaudado en beneficio de la renta nacional, yendo el resto a ingresar a los tesoros provinciales.

Las fuentes del tesoro nacional están enumeradas en el citado artículo 4º y de él no aparece otra delegación expresa sobre impuestos, que la que se refiere a aduanas, correos y tierras de propiedad nacional.

La facultad del Congreso de dictar leyes sobre contribuciones (artículos 4º y 67, inciso 2º, Constitución Nacional) no puede ser negada, pero es menester que ella se ajuste al principio creador de la Constitución, por el cual las provincias conservan el poder no delegado.

El artículo 108 completa este principio básico y, correlativamente, determina que las provincias ni ejercen el poder delegado a la Nación; en la enumeración proliza de lo que aquéllas no pueden realizar, tampoco encontramos una prohibición capaz de alterar la tesis sustentada.

Si ante la faz constitucional se decide la cuestión, huelga el estudio en sus otros aspectos, técnico, de conveniencia política o de economía general.

De todos modos, al quitar a las provincias el libre goce de sus rentas, se corre el grave peligro de que ellas no logren su indispensable desenvolvimiento autonómico, a la vez que por absorción paulatina podría destruirse el régimen federativo de gobierno.

Estas fueron las razones que han tenido en cuenta los autores de esta ponencia. Ahora, dentro de esa jurisprudencia parlamentaria, creo que el señor delegado doctor Carranza ya se refirió a la incidencia de la ley de creación de impuestos internos — sería inútil repetirla aquí — durante la presidencia de Pellegrini y ministerio del doctor Vicente Fidel López. Después se discutió en el año 94 en el Congreso entre los doctores Mantilla, diputado, y Terry como ministro de hacienda. La Corte Suprema de la Nación ha reconocido el poder de la Nación y de las provincias para imponer estos impuestos. Pero hay algo que no quiero dejar pasar y es lo que dijo en el año 53 el convencional Gorostiaga refiriéndose al artículo 4º sin que exista otro antecedente u observaciones sobre el particular, de suerte que esto es lo único que ha quedado como fuente de interpretación inmediata y auténtica de este artículo de la Constitución. Al renovarse el año 60 el debate, no se trató este punto. El doctor Gorostiaga decía lo siguiente con respecto al artículo 4º «que siendo las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, uno de los recursos que quedaba a los provincias, era natural que no se echase mano de él, sino en circunstancias muy excepcionales.»

Ahora, como no quiero provocar debate y está suficientemente explicada la cuestión, tanto por el miembro informante, como por las razones que han expuesto los demás delegados, sólo desearía que ese informe o despacho de comisión sea votado favorablemente, porque aquí, repito, lo único que buscamos, mientras no se reforme la Constitución, es que se estudie la manera de lograr una armonía rentística que permita el desenvolvimiento autonómico de la Nación y de las provincias.

SR. CASTIGLIONE. — Pido la palabra.

Voy a ser breve, señor presidente. He apoyado efusivamente este proyecto, no por razones prácticas, sino más bien por razones teórico-líricas. Soy un convencido de que impuesto que se crea ya es inútil que se derogue; es lo que en nuestra jerga se llama cosa juzgada. Es

imposible volver hacia atrás; naturalmente como todo impuesto nuevo duele, se lo perfuma con el viso de transitoriedad, ni más ni menos que lo que se hace en todos los organismos políticos; como ha hecho Chile con el Perú, al quedarse con las provincias de Taena y Arica: le dijo que dentro de tantos años iba a devolvérselas y luego se quedó con ellas. Pero entiendo que la Conferencia Nacional de Abogados al sancionar una declaración de la Conferencia de Gobernadores, le da un vigor jurídico de que ésta carecía; conferencia tan discutida en la que ninguno, especialmente los del litoral, ha creído ver en ello veleidades políticas que no las ha tenido, pues ha sido una conferencia de carácter eminentemente económico, comprendiendo en sí varios problemas de orden jurídico y constitucional, que interesan a todo el Norte de la República. Esta Conferencia de Gobernadores al traer sus decisiones aquí, aunque sea indirectamente, como creo, viene a buscar el apoyo o la sanción moral de la Conferencia Nacional de Abogados, y con este acto nos robustece al hacernos creer que somos grandes, que vamos marchando y que seremos una fuerza considerable en el desenvolvimiento jurídico y constitucional de la República. Y eso nos halaga, nos halaga sobremanera a los que buscamos el engrandecimiento y la fortificación de este organismo que marcha. Por eso, señor presidente, y sin detenerme en la historia de estos impuestos, es que apoyo la ponencia con todo entusiasmo y pido a los demás colegas su voto.

SR. REVIRIEGO. — Pido la palabra.

El asunto traído al seno de la Conferencia de Abogados por las delegaciones de Tucumán, Salta y Jujuy sobre una de las fases de nuestro problema impositivo, lo conceptúo en cierto sentido ajeno a la índole de esta Conferencia. Podría agregarse que no ha sido traído con toda la anticipación necesaria, para que un problema arduo y difícil de nuestra economía y de nuestras instituciones, sea dilucidado con todos los antecedentes y con todos los recaudos que es menester, para que no se sancionen pronunciamientos que impliquen abso-

lutismo de concepto y errores profundos. Sobre este punto he tenido recientemente oportunidad de elaborar un trabajo que presenté a la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires, que he entregado a la imprenta y que aparecerá dentro de brevísimos días. De modo que me creo en cierto modo habilitado para dar algunas vistas sobre lo que él implica.

Posiblemente no todos los señores delegados están enterados de los antecedentes que han informado el proyecto: es el proyecto y mensaje del Poder Ejecutivo de la Nación formulando un impuesto único para toda la Nación y distribuyendo su producto entre las entidades provinciales. Pero el Ejecutivo nacional — y debo anticipar que estoy substancialmente en contra de los principios que establece el proyecto del gobierno — ha querido solucionar en alguna forma ese grave conflicto existente entre la Nación y las provincias y esa es una de las formas de conseguirlo; algunas instituciones, como la Confederación del Comercio, de las Industrias y de la Producción, propenden a que se solucione por medio de acuerdos entre el gobierno de la Nación y los de las provincias. Y entonces, dice en su mensaje el gobierno nacional, que no discute a las provincias por el momento sus facultades y que propone esa solución y si bien en el articulado llega a establecer que el impuesto interno es facultad de la Nación, la única sanción a la que recurre es a la de establecer ciertas medidas que también he criticado, que implicarían represalias económicas que no están en la índole de nuestras instituciones y no deben ser votadas por el Congreso Argentino.

Pero por lo pronto es una solución, y es un medio de resolver patrióticamente esta dificultad. Ahora, un voto de esta Conferencia de Abogados que se oponga en absoluto y sin distinguos a la solución que se proyecta, no me parece que sería adecuado, y habría que limitarlo en sus alcances para siquiera respetar propósitos y principios que están en discusión y sostenidos por autoridades, estadistas y publicistas provinciales, como el doctor Alumada y otros. De modo que yo

voy a votarlo en principio pero reduciendo sus alcances (la forma la buscaremos enseguida) en aquella parte de la iniciativa del gobierno nacional, que establece sanciones o represalias para el estado provincial que no aceptara el régimen de la ley nacional. No es posible a esta altura de la Conferencia entrar en la discusión y dilucidación de este asunto. Es muy delicado, extenso y difícil transcribir las distintas opiniones y entonces me limito a presentar estas observaciones y a llamar sobre ellas la atención de los señores delegados. Nada más.

SR. GARCÍA ZAVALÍA. — El proyecto del Poder Ejecutivo de la Nación es loable, desde el momento que ha tratado de encontrar, como decía el doctor Reviriego una solución a este problema. Lo único que nosotros sostenemos es que esa solución es anticonstitucional.

El doctor González Calderón en su obra *Derecho Constitucional Argentino*, de acuerdo a lo propiciado por el doctor José M. Alzamora y otros antecedentes, dice que de los impuestos debería entregarse el 25 % a la Nación y el 75 % a las provincias, pero que esto no podría hacerse mientras no se reforme la Constitución y que una ley simplemente, quizá no bastaría. Por otra parte, la tutela de la Nación no es concebible ante los artículos 104 y 107 de la Constitución; ¿en virtud de qué convenio, en virtud de qué arreglo puede distribuir impuestos dentro de esta tutela que no le ha otorgado la Constitución?

Voy a hacer esta última salvedad para evitar discusiones. Nuestro propósito es que se conozca esta iniciativa y que tenga la sanción moral de una conferencia de intelectuales, no la presentamos para que se resuelva un problema tan arduo, sobre el que tanto se ha discutido. Lo único que deseamos es que esto pase, por ejemplo, a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos. En suma no negamos la facultad concurrente de parte de la Nación; lo que no aceptamos es su tutela para distribuir impuestos. La ley proyectada tendrá muy buen propósito, pero está mal encañilada, está en contra de la Constitución. Queda así explicada la inicia-

tiva traída por los representantes de las provincias del Norte.

SR. ALSINA. — He escuchado con vivísima simpatía la exposición de motivos que se ha dado por el señor miembro informante y merece ni más calurosa adhesión. Pero creo que por encima de la simpatía está el espíritu de equidad y de justicia. Nosotros somos hombres de ley y debemos llegar a la justicia a cualquier costo. Creo que se ha dejado en segundo plano algunos puntos de vista que no se deben olvidar, y me voy a referir a ellos muy brevemente. En cuanto a la primera cuestión de los impuestos internos, la interpretación del texto constitucional no puede suscitar la más ligera duda; pero por encima del texto constitucional está la relación de vida; encima del texto muerto, escrito, está el texto que vive, el acto de las necesidades del medio ambiente y de la evolución social. No puede discutirse que el federalismo argentino ha evolucionado; es un hecho que vive, es una realidad que palpita. Se ha puesto aquí de relieve un aspecto de la cuestión, se ha presentado al federalismo que avanza sobre el régimen provincial, pero se olvida, señor presidente, que si la Nación ha hecho uso de impuestos que por la Constitución corresponden a las provincias, la Nación ha llevado, también, la ayuda a las provincias sobre cosas que la Constitución imperativamente les impone el deber de tutelar y garantizar en primer término, como una condición primaria del régimen federativo; me refiero, por ejemplo, al régimen municipal y a la instrucción primaria. Es cierto que la Nación se ha apoderado del impuesto, pero no es menos cierto que la Nación va con su peculio, va con su tesoro, a ayudar al régimen municipal, va a hacer obras de saneamiento, va a hacer algo que debiera hacer el régimen municipal mismo. Por otra parte, va la Nación a crear escuelas, a crear instituciones de enseñanza en el desierto; mientras la Constitución obliga a las provincias a dar instrucción primaria como una condición indispensable de la organización federativa de gobierno. De tal manera que es indispensable contemplar la cues-

tión bajo este punto de vista no solamente desde el punto de vista económico exclusivo, sino también político.

En cuanto a la segunda cuestión referente al Código de Minas, los argumentos que se han traído, a mi modo de ver, son exclusivamente de carácter económico. Pero yo entiendo que aquí no se plantea solamente una cuestión económica; es una cuestión superior, es una cuestión de carácter político y no de carácter nacional sino mundial; está aquí en tela de juicio el régimen del petróleo, que es un asunto que se debate en el mundo entero y no dentro de una provincia, ni siquiera dentro de los límites de la República. De tal manera que no puede este punto solucionarse brevemente por cuestiones de meros intereses económicos provinciales; están en juego intereses nacionales y por consiguiente es indispensable que, precisamente nosotros que nos hemos unido en un régimen federativo, defendamos esos intereses políticos nacionales, aun a costa de los intereses económicos de los estados provinciales, y conste que soy provinciano, y por consiguiente mi opinión no puede ser de ninguna manera sospechosa.

Esto me induce a pensar que es necesario un estudio sereno, meditado y prolongado de esta cuestión, porque entiendo que no se han encontrado o por lo menos no se han expresado, todas las razones conducentes a la solución que en justicia debemos darle.

SR. MOLINA. — No pensaba intervenir en este debate, señor presidente, pero las observaciones que ha hecho el miembro preopinante, me obligan a hacer necesariamente una rectificación. La inconstitucionalidad de los impuestos internos es una cuestión tan conocida, tan evidente para los que nos hemos especializado en estas disciplinas, que no puede ponerse en ninguna forma en materia de duda por cualquiera de los criterios de interpretación existentes, ya sea la interpretación literal del texto constitucional, ya sea la interpretación histórico-económica, yendo a las fuentes, yendo a los debates de la Constituyente del 53, o ya sea dentro del criterio jurídico liberal, que

es la corriente moderna de interpretación. No cabe otro criterio, no cabe otro juicio que el de sostener la inconstitucionalidad de los impuestos internos. Y es precisamente desde este punto de vista que voy a rectificar al miembro preopinante, porque yo entiendo que los verdaderos principios del federalismo, exigen en este momento que nos consagremos debidamente a evitar este avance generoso, este avance amable, este avance cariñoso que hace la Nación sobre las autonomías provinciales y que las va colocando en mengua cada vez mayor, a fin de acabar y terminar con el régimen federativo. Es precisamente el régimen impositivo nacional que ha avanzado sobre los recursos de las provincias, lo que ha obligado a las provincias a avanzar a su vez sobre el régimen de los recursos económicos municipales. Y entonces, todo el sistema, de esta manera se subvierte y el camino de la subvención no es sino la negación del federalismo, el desconocimiento de los principios de la autonomía local, el sometimiento amable y generoso al gobierno de la Nación, con mengua de toda la economía del sistema federativo. Por estas consideraciones, apoyo calurosamente el proyecto presentado.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. --- Deseo hacer presente que de acuerdo a los términos en que ha sido presentada la ponencia, la Conferencia no tiene nada que resolver; de modo que el debate casi huelga. Creo que la mínima consideración que se impone, es la de pasar este asunto a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos. La Conferencia no va a dar opinión, sino que esa comisión permanente será la que proyectará la reforma si es que conviene.

El autor de la ponencia me decía que su propósito es que el asunto pase a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos sin pronunciamiento alguno por parte de esta asamblea.

SR. PRESIDENTE (SILVEIRA). — El proyecto exige una declaración de la Conferencia.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. --- Pero no la piden los señores delegados, autores del proyecto.

SR. CERVINI. — Propongo que la Conferencia resuelva que se pase este asunto a estudio de la Comisión Permanente de Estudios Legislativos.

SR. GARCÍA ZAVALA. El doctor González Sabathic hace un momento me ha pedido que le encontrara una solución a este asunto. Yo por mi parte, como uno de los delegados de la provincia de Tucumán, le dije que no tenía inconveniente en lo que ha propuesto. Ahora cedo la palabra al doctor Rodríguez Saráchaga que es delegado de las provincias de Salta y Jujuy.

SR. RODRÍGUEZ SARÁCHAGA. — No he podido ponerme de acuerdo con el miembro de la comisión porque hoy se ha producido la incidencia en este asunto y nosotros lo hemos resuelto ayer. El dictamen ha sido hecho a base de los antecedentes que hemos podido recoger. Hemos tenido presente también que en esta cuestión hay tres gobiernos de provincia que nos han pedido, como un acto de solidaridad nacional, que adhiramos a este propósito y lo hemos hecho en la convicción de que estamos en el terreno justo y defendiendo los intereses de todo el país que deben primar sobre los intereses internacionales que se han invocado aquí si los hubiese de por medio. Primero estamos nosotros, después están los otros. Por mi parte, yo que soy hombre de la Capital Federal, adhiero a una iniciativa de esta naturaleza y creo que así lo han de hacer los más caracterizados representantes de las provincias.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a poner a votación...

SR. CASTRO. — ¿Qué se va a votar?

SR. GONZÁLEZ SABATHIC. — Se debe votar la ponencia, pasándola a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos.

SR. GARCÍA ZAVALA. Con el agregado de que esta ponencia, por tratarse de un tema de importancia indiscutible que está a consideración del Congreso, debe ser tratada con urgencia.

—Apoyado.

SR. DAY. — Ya no podría ser en la forma del artículo 1º porque según ese

artículo, es la Conferencia la que declara.

SR. CERVINI. — La moción es pasar todo sin declarar nada.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar si pasa a la Comisión Permanente con recomendación de urgencia.

—Se vota y resulta afirmativa.

SR. CASTRO. — Que conste que la Conferencia no hace ninguna declaración.

SR. REVIRIEGO. — Haría una indicación de carácter general, porque es el segundo caso que se produce, en el sentido de que no se proyecten iniciativas que pasen simplemente a la Comisión Permanente.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — No hay nada en discusión.

SR. REVIRIEGO. — Es una moción que hago y que estoy fundando; una moción de procedimiento. Propongo que no se discutan proyectos, que han de pasar meramente a la Comisión Permanente sin ninguna declaración de la Conferencia.

—Varios señores delegados hablan a la vez y en voz baja.

SR. REVIRIEGO. — No insisto, señor presidente; basta que quede constancia.

SR. CARLOMAGNO. — Pasemos a la orden del día.

—Asentimiento.

10

Transportes marítimos y fluviales

SR. SECRETARIO (ZAVALA ORTIZ). — (*Leyendo*):

A la Segunda Conferencia Nacional de Abogados.

La comisión en mayoría resuelve aceptar como base de la discusión el informe de la Comisión de Sección formada por los doctores Leopoldo Melo y Eduardo Crespo (1), con la salvedad de que ello no importa adherir a

todas sus conclusiones; y por las razones que se servirá exponer el señor miembro informante, aconseja la sanción del siguiente despacho:

La Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

Artículo 1º — Recomendar a la Comisión de Legislación de la Honorable Cámara de Senadores y a la Comisión Especial de la Honorable Cámara de Diputados encargada de proyectar una ley especial de reformas al Código de Comercio vigente, las siguientes bases para modificaciones al libro 3º:

Artículo 1º — a) «Serán nulas y de ningún valor las cláusulas insertas en las pólizas de fletamento, en los conocimientos o en cualquier otro título emitido por el transportador, cuyo objeto sea eximirlo o liberarlo en los contratos a ejecutarse en la República, de las responsabilidades impuestas por las leyes nacionales, con relación a las pérdidas o daños producidos en las cosas transportadas, derivadas de malversación, dolo, culpa u omisión personal del transportador, o de sus factores, dependientes o agentes, adoleciendo de igual nulidad las estipulaciones que atribuyan competencia a un tribunal extranjero;

b) La incorporación al Código de Comercio, en su primera edición oficial, de la ley N° 11.132, como ley única aplicable a todos los casos, dejando vigentes las disposiciones de los títulos XI y XIII del libro 3º del Código de Comercio, en lo que se refiere a la jurisdicción, organización de los tribunales y procedimiento;

c) La aprobación como ley de la República, de las disposiciones sancionadas en la Convención Internacional para la unificación de las reglas relativas a privilegios e hipotecas marítimas, sancionada en la Conferencia reunida en Bruselas del 6 al 10 de Abril del presente año, dejando en vigencia, aquellas disposiciones de los títulos XV y

XVI, relativas a jurisdicción, procedimientos y organización interna de los tribunales y registros.

Art. 2º — Dirigir una comunicación al Poder Ejecutivo Nacional, reclamando una adecuada reglamentación de la ley 10.606, de acuerdo con sus propósitos y el artículo 29 de la misma, suprimiendo las trabas que aun se mantienen.

Proyecto de la Cámara Sindical de Aseguradores Marítimos

Dictamen

La comisión ha estudiado el interesante trabajo de la Cámara Sindical de Aseguradores Marítimos, trabajo que concuerda con algunas de las conclusiones que sometemos a la consideración de la Conferencia y pasamos a dar nuestras vistas.

Está conforme con las modificaciones de los artículos 958, 1.028 y 1.091, pero no consideramos necesarios diversos articulados, bastando a nuestro juicio, con la inserción de un segundo apartado al artículo 1.091 del Código de Comercio, que es lo que aconsejamos en nuestro informe.

La comisión está de acuerdo con la aplicabilidad de las reglas de York-Amberes, revisadas y aumentadas en la 33ª Conferencia de la International Law Association, celebrada en Estocolmo en 1924, pero no ve la necesidad de derogar el título XIV del Código de Comercio como lo aconseja la Cámara Sindical, cuando esas reglas, caben dentro de las prescripciones del artículo 1.313 del Código de Comercio, y sobre todo, cuando ellas pueden ser modificadas en una nueva Conferencia, no debiendo serlo un código, cuyos principios deben tener la mayor estabilidad posible.

La comisión aconseja que se reemplacen los títulos XI y XIII del Código de Comercio del libro 3º, como lo propone la Cámara Sindical de Aseguradores Marítimos, por las convenciones de Bruselas, pero con las limitaciones que indicamos en nuestro proyecto, vale decir dejando bien establecida la vigencia de los procedimientos y de la jurisdicción argentina en materia de abordajes, asistencia y salvamento, en aguas argentinas.

En cambio, está conforme con la sanción de las conclusiones de la Convención Internacional para la unificación de ciertas reglas, relativas a privilegios e hipotecas marítimas.

(1) Véase el texto del informe a continuación del dictamen de la mayoría.

Respecto a la sanción de las Reglas de La Haya sobre conocimientos, como ésta ha dejado de ser una aspiración de la International Law Association, para convertirse en una ley internacional, pendiente de la sanción de los parlamentos de todos los países, debemos esperar que oportunamente el Congreso Argentino las sancione, razón por la cual no puede ser motivo de una discusión en esta Conferencia, como laguna a llenar en nuestra legislación.

En cuanto a la supresión del título del préstamo a la gruesa, aconsejado por la Cámara Sindical, la comisión participa de ese criterio que ha aplicado Holanda en la reforma de 1924, dado que el préstamo a la gruesa en su aspecto de contrato de crédito ha cedido su lugar a la hipoteca y al procedimiento propiciado por el inciso 5º del artículo 2º de la Convención de 1926 y como acto de distribución de riesgos está sustituido por el seguro marítimo.

Eduardo Crespo. — Edmundo C. Chedufau.

En disidencia parcial:
Roberto N. Lobos.

Informe de los doctores Leopoldo Melo y Eduardo Crespo

Buenos Aires, Septiembre de 1926.

Señores miembros de la Comisión Organizadora de la Segunda Conferencia Nacional de Abogados.

Presente.

Nos es grato entregar a la consideración de la Asamblea, algunas de las modificaciones urgentes en la legislación sobre transportes marítimos y fluviales a que se refiere el punto 3º del programa de la Conferencia.

El hecho de no tener la Argentina marina mercante, y la dependencia obligada en que por ello se encuentra su comercio, de transportar en buques de bandera extranjera los crecidos valores que representan las exportaciones e importaciones; el tiempo transcurrido desde que el libro 3º del Código de Comercio fué erigido en ley; y los resultados alcanzados con posterioridad en la obra de concordancia y armonía en las legislaciones marítimas, fundamentan las proposiciones que sometemos al debate.

Los contratos de fletamento no son en la realidad el resultado de una convención en la que los contratantes se encuentren en igualdad de posición, sino que los dueños de bodegas, por monopolio que de hecho ejercen, dominan e imponen su voluntad a los cargadores, obligándolos a adherir a formularios impresos de antemano que, con pequeñas variantes, responden al mismo tipo en todas las compañías de navegación.

La intervención del cargador está pues limitada a indicar la cantidad, peso o calidad de las mercaderías a transportar, a los efectos del cálculo del flete, siendo el fletante quien de antemano, en defensa de los intereses de la empresa, y asegurando previamente la irresponsabilidad, dicta las demás cláusulas.

En estas condiciones, es pues absurdo expresar que la convención represente la libre voluntad de las partes y deba ser considerada su ley.

Es a tal tiranía de los navieros a la que se encuentra sometido el comercio nacional, tiranía que ellos ejercitan principalmente, o por medio de cláusulas de irresponsabilidad para eludir faltas o culpas, o por cláusulas atributivas de jurisdicción de tribunales extranjeros, para asegurarse inmunidades y exenciones de pleitos ante la justicia argentina.

En el transporte terrestre donde el instrumento de transporte es nacional, existe consagrada legalmente (artículo 162 del Código de Comercio), la plena responsabilidad por las pérdidas o daños resultantes de las omisiones, culpas o malversaciones de los transportadores, factores, dependientes o agentes — *no obstante convención en contrario* — e igualmente la jurisdicción de la justicia nacional para las acciones emergentes del contrato de transporte (artículo 205 del Código de Comercio), señalando esto la urgencia de que lleguemos a igual temperamento en el transporte marítimo.

En el proyecto de reformas al Código Francés de 1917, y en el de 1919, se prohíben las cláusulas de irresponsabilidad y las atributivas de jurisdicción, y la ley de Estados Unidos de Julio de 1893, denominada Harter Act, instituyó igual prohibición para estipulaciones que no se refirieran a liberación por faltas náuticas.

Dentro de este mismo orden de ideas, las colonias o dominios británicos, impusieron a Inglaterra las llamadas Reglas de La Haya de 1921, hoy con variantes, ley inglesa de 1925 y Convención Internacional de Bruselas.

Siguiendo esa orientación y el consenso de voluntades de aseguradores y comerciantes argentinos exteriorizado al discutirse este tema en la Conferencia celebrada en Buenos Aires en 1922 por la International Law Association, proponemos la incorporación en el artículo 1.091 del Código de Comercio, que es el lugar pertinente, de un nuevo precepto como agregado y complemento.

La ley 11.132 aprobando las Convenciones Internacionales sobre Abordaje y Asistencia, ha suscitado dudas sobre el campo de aplicación y las normas: que deja en pie y aquellas que modifica.

Pensando que la aprobación de las convenciones indicadas, jamás puede afectar lo que se refiere a la organización de tribunales, procedimiento, y actos de soberanía, juzgamos conveniente dejarlo aclarado, así como unificada la legislación, aun para los casos de que los navíos sean nacionales y los actos realizados en aguas jurisdiccionales.

Siendo el comercio cada vez más internacional, la legislación marítima tiene forzosamente que ajustarse a esa pauta, y aprovechar la labor que realizan las conferencias y congresos internacionales, y con esa finalidad, aconsejamos la incorporación al código, de las disposiciones sancionadas en la Convención Internacional para la unificación de ciertas reglas relativas a privilegio e hipotecas marítimas, convención discutida y votada en las sesiones celebradas en Bruselas del 6 al 10 de Abril del presente año, y de la que participaron 27 Estados, dado que ella representa la última palabra sobre la organización del crédito marítimo.

Ningún jurista ignora los inconvenientes que surgen de la diversidad de privilegios que consagran las distintas legislaciones nacionales, y las dificultades que emergen con relación a la aplicación y difusión de la hipoteca naval, la más moderna forma de crédito, y para apartar en lo posible esos inconvenientes, aconsejamos la tercer resolución.

En cuanto al fomento y desarrollo del cabotaje, para convertirlo en medio barato y

adecuado de transporte, el problema se vincula a factores de orden económico y jurídico, cuya dilucidación no ofrece aún elementos de juicio seguros para aconsejar un remedio eficaz.

No entramos por ello a proponer un plan, pero sí podemos señalar como primer paso a realizar, el de llevar una gestión ante el Poder Ejecutivo, a fin de que se cumplan los propósitos determinantes de las dos leyes de cabotaje, y se iguale y equipare el tráfico fluvial al ferroviario, por la supresión de trabas o formalidades aduaneras en lo relativo al transporte de mercaderías o personas.

El viajero que llega de Santa Fe, Corrientes o Paraná, por la vía fluvial, es aún sometido a medidas explicables en la época en que existían aduanas provinciales, como la de pasar con sus equipajes por las oficinas de los guardas aduaneros, aunque los vapores en que viajen vengan exclusivamente de puertos argentinos, mientras que quien realiza el mismo recorrido en ferrocarril, se ve exento de esas molestias. Igual cosa ocurre con la carga y descarga de mercaderías.

Es, pues, urgente que el Poder Ejecutivo dé imperio a la ley sobre cabotaje y al precepto constitucional que le sirve de fuente, suprimiendo esas trabas en beneficio de los intereses del extenso litoral de la República.

Consideramos útil un pronunciamiento de esta Asamblea, en el sentido indicado.

Entregando, con lo expuesto, nuestro aporte a la benéfica obra de la Conferencia, nos es grato formular los mejores votos por su éxito, con el más atento saludo.

Leopoldo Mrlo. — Eduardo Crespo.

Dictamen de la minoría

La Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVA:

Recomendar a la comisión especial de la Honorable Cámara de Diputados encargada de proyectar una ley especial de reformas al Código de Comercio vigente, las siguientes modificaciones al libro 3º:

I En el título III agregar al final del artículo 958 la siguiente cláusula: «Será nula y sin ningún valor toda cláusula del conocimiento que contradiga esta disposición, especialmente, en lo que dé derecho al capitán o armadores para exigir de los consignatarios»

tarios de la carga cualquier fianza, depósito o garantía que no sea la que determine el juez del lugar de la descarga teniendo en consideración las modalidades del contrato.

II En el contrato de fletamento modificar los artículos 1.028, 1.079 y 1.091 en los términos siguientes:

Artículo 1.028. — Agregar al final lo siguiente:

Será nula, sin valor y efecto toda cláusula, convenio o acuerdo en el conocimiento o documento que lo reemplace, que directa o indirectamente tenga por objeto exonerar o limitar la responsabilidad que por derecho común resulte a cargo del transportador. Sin embargo, el armador podrá exonerarse por alguna cláusula especial, de la responsabilidad por las culpas náuticas que resulten del manejo o dirección del buque, siempre que pruebe haber efectuado todas las diligencias para poner el buque en perfectas condiciones de navegabilidad y asegurado que la tripulación, maquinaria, provisiones, bodegas y demás partes del buque sean adecuadas y estén en perfectas condiciones para el viaje. Si el armador no prueba haber cumplido con estos requisitos, ninguna cláusula de exoneración de responsabilidad tendrá valor alguno.

Artículo 1.079. — 1° Ni el fletante ni el buque serán responsables, en ningún caso por pérdida o daño causado a las mercaderías o a lo que se relacione con ellas, por una suma mayor de quinientos pesos oro, por bulto o unidad, o el equivalente de esta suma en otra moneda, a menos que la naturaleza y el valor de esas mercaderías no hayan sido declarados por el cargador antes de su carga e insertados en el conocimiento.

2° Podrá determinarse por convención entre el fletante, capitán o agente del fletante o el cargador, una suma diferente a la expresada en este artículo, siempre que esa suma convencional no sea inferior a quinientos pesos oro;

3° La declaración del fletante en cuanto a la naturaleza y al valor de la mercadería declarados, constituirá una prueba *prima facie*, pero no obligará al transportador, quien tiene derecho a probar lo contrario;

4° Ni el fletante ni el buque serán en ningún caso responsables por pérdida o daños causados a las mercaderías o a lo que se relacione con ellas, si el cargador, en el conocimiento, hizo una declaración conscientemente errónea de su naturaleza o su valor;

5° Siempre que un buque de ultramar arribe a un puerto argentino y proceda a la descarga parcial o total, el transportador, el capitán, el armador o su representante en la República, serán responsables por los daños, robos o disminuciones que sufran las mercaderías transportadas, y el consignatario u otros cualesquiera interesados tienen derecho a exigir que sean reconocidas y se haga la estimación de los daños dentro del plazo establecido para la revisión. Dicho plazo fijando días y horas, será publicado por el capitán, el armador o su representante por medio de edictos en dos de los diarios de mayor circulación en el puerto de la descarga e inmediatamente después de haber terminado éste. El plazo referido no podrá vencer hasta dos días hábiles después de la primera publicación;

6° Cuando el capitán, el armador o su representante no publicaran los edictos en la forma establecida o se recusaran a practicar la revisión, los consignatarios tendrán derecho a exigir que las mercaderías sean judicialmente reconocidas, siempre que dicho reconocimiento sea solicitado dentro de los diez días hábiles después de terminada la descarga del buque transportador y que las mercaderías no hayan sido retiradas de los depósitos fiscales o pasadas a depósitos particulares. Pasado este plazo no habrá lugar a reclamación alguna;

7° Tratándose de buques de cabotaje, y navegación fluvial, con bandera nacional o extranjera, sus capitanes, armadores o representantes, serán responsables de los daños, robos o disminuciones que afecten las mercaderías por ellos transportadas y el consignatario u otros cualesquiera interesados tienen derecho a exigir que sean reconocidas y se haga la estimación de los daños dentro de las cuarenta y ocho horas

después de terminada la descarga y siempre que los efectos no hayan sido retirados de la jurisdicción fiscal o de la Aduana. Cuando los capitanes, armadores o sus representantes se rehusaran a reconocer y responder por dichos daños los consignatarios tienen derecho a requerir el examen judicial dentro de los diez días hábiles después de la descarga y siempre que los efectos no hayan sido retirados de los depósitos fiscales o de la Aduana.

Artículo 1.091. — Las cuestiones que se produzcan en un contrato de fletamento, serán resueltas por los tribunales del punto de destino de la carga, siendo nula toda cláusula contractual que establezca lo contrario.

III En las modificaciones del título XIV del Código de Comercio, amoldar en lo posible sus disposiciones con las reglas de York-Amberes, aprobadas en la 33ª Conferencia de la Asociación Internacional de Derecho, celebrada en Estocolmo en 1924;

IV Reemplazar los títulos XI y XIII sobre abordaje, asistencia y salvamento con las convenciones de Bruselas de 1910 aprobadas por la ley N° 11.132; dejando vigentes las disposiciones que se refieran a la jurisdicción, organización de los tribunales y procedimiento;

V Reglamentar los créditos hipotecarios y limitar los privilegios, adoptando las conclusiones de la Convención Internacional para la unificación de ciertas reglas relativas a privilegios e hipotecas marítimas, firmada en Bruselas el 10 de Abril de 1926;

VI Suprimir el título VIII del Código de Comercio sobre préstamos a la gruesa.

Rogelio Mazzi. — Juan C. Carlomagno.

SR. CRESPO. — Pido la palabra.

Debo ante todo excusar ante la asamblea a los doctores Leopoldo Melo y Carlos M. Mayer que forman parte de la Comisión de Sección. No han podido asistir el uno por razones de enfermedad y el otro por inconvenientes de última hora. Y entro en materia. La comisión ha considerado que no debe someter a

la asamblea sino las cuestiones que exigen una reforma inmediata en lo que se refiere a la legislación comercial argentina y por eso ha tomado como cuestión primordial, la de la jurisdicción, pues careciendo la República Argentina de buques mercantes, estamos sometidos a la ley de los dueños de buques, vale decir, a las naciones extranjeras. Es sabido que en realidad no hay libertad de convención en los transportes marítimos. El cargador se limita a entregar las mercaderías en el punto de embarque y a aceptar como consecuencia lógica y real, las disposiciones y cláusulas que el conocimiento o la póliza de fletamento establece. No es la Argentina el único país que se ha levantado contra esta imposición de los dueños de buques mercantes; es una cuestión que viene suscitándose de años atrás. Estados Unidos lo ha establecido de una manera clara y precisa en la ley de 1893; Francia, en su proyecto de reformas, los años 17 y 19, también lo ha precisado de una manera clara y categórica y los dominios ingleses han conseguido imponerlo a la vieja Inglaterra por medio de una convención celebrada en Bruselas y por los tratados de 1895 que rigen para todo el Imperio Británico.

Entre nosotros, en el año 1922, cuando la Internacional Law Association celebraba sus sesiones en Buenos Aires, se planteó la cuestión primeramente con una ponencia sobre jurisdicción, sugerida por el doctor González Gowland, y más tarde con un proyecto firmado por los Dres. Leopoldo Melo y Edmundo C. Chedufau, como miembros de la Cámara Sindical Marítima, sosteniendo la soberanía argentina. Este proyecto pasó a comisión y en 1924 se discutió en Estocolmo, estableciéndose principios que hoy queremos consignar en nuestra legislación y que a nuestro juicio están ya precisados en el artículo 1.091 del Código de Comercio. Pero como desgraciadamente la jurisprudencia argentina o el más alto tribunal, la Corte Suprema, ha creído encontrar que esa disposición puede ser derogada por lo establecido en las pólizas de fletamento, queremos someter a consideración de la asamblea de una ma-

nera clara y precisa, que toda disposición que establezca la póliza de fletamento o los conocimientos en contra de la jurisdicción del lugar de la ejecución del contrato es una cláusula absolutamente nula. Hemos creído también conveniente establecer en un solo artículo no sólo la jurisdicción, sino también la responsabilidad, y a ese respecto hemos proyectado un agregado al artículo 1.091 del Código de Comercio. Las otras dos modificaciones que introducimos surgen de las convenciones internacionales y de leyes nacionales, que no tienen mayor importancia puesto que son de forma. El punto último se refiere al cabotaje que es para nosotros de una importancia trascendental para el comercio y la vida de las provincias del litoral. Por una anomalía inexplicable, las compañías ferroviarias tienen una mayor facilidad que las compañías de transportes marítimos — no obstante una ley tan favorable para el cabotaje nacional como la 10.606. En la práctica las trabas e inconvenientes son enormes y es con el objeto de llamar la atención del gobierno de la Nación sobre la reglamentación de esta ley, que hemos sometido a la consideración de la asamblea el último punto del trabajo. Es cuanto tengo que manifestar. (*Aplausos*).

SR. CARLOMAGNO. — Como miembro de la comisión en minoría voy a informar el despacho que hemos presentado con el doctor Mazzi. Si hablara ante un cuerpo legislativo tendría que explicar las divergencias en estos despachos y cómo nosotros, habiendo formulado ayer un despacho que resultaba único, hoy nos hemos convertido en una minoría. Trataré de dejar demostrado que en realidad no hay diferencias fundamentales y que el proyecto de esta minoría consulta los intereses del comercio marítimo en general y coincide igualmente con la opinión del ilustre profesor de la materia en Buenos Aires, doctor Leopoldo Melo, como que está en casi todo de acuerdo con el despacho de la comisión formada por los doctores Melo y Crespo, que acaba de informar. Voy a entrar directamente a tratar el proyecto.

Dice (*Leyendo*): «La Conferencia Nacional de Abogados, resuelve: a) Propiciar la ampliación del artículo 1.091 del Código de Comercio, con el siguiente agregado: «Serán nulas y de ningún valor las cláusulas insertas en las pólizas de fletamento, en los conocimientos o en cualquier otro título emitido por el transportador, etcétera.» Voy a insistir y pido a los distinguidos miembros de esta Conferencia, mediten doblemente en las razones que nosotros consideramos fundamentales para que este proyecto se vote en la forma en que está redactado, sobre todo cuando debe pasar directamente a la Comisión Especial de la Honorable Cámara de Diputados y después al Senado.

Todos los proyectos y la mayoría de las proposiciones que se han formulado en esta Conferencia van a pasar a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, pero yo pregunto ¿si estuviera funcionando la Convención Constituyente en este momento, nosotros pasaríamos el proyecto de reformas a la Constitución, a la Comisión Especial o directamente a la Convención? Seguramente lo pasaríamos a la Convención para no perder tiempo. Y entonces, si en este momento hay en la Cámara de Diputados una comisión encargada de proyectar una ley de reformas al Código de Comercio, creo que nunca se ha presentado una mejor oportunidad para que la Conferencia haga sentir su voto, haciendo una declaración sobre la reforma que hemos proyectado. Hemos tratado de seguir el procedimiento que ayer indicaba con su alta autoridad el profesor de procedimientos doctor Jofré, que en su cátedra de esta facultad enseñaba a los alumnos «los proyectos, decía, deben ser muy cortos; a los diputados no les gusta trabajar. Si les llevan un proyecto largo no lo estudian y si es corto, dicen: lo aprobamos y ya está». Nuestro proyecto se compone de seis artículos. Parece largo, pero es muy corto.

No es tampoco una improvisación, es el fruto del trabajo de todos los intereses que intervienen en el comercio de la navegación. Y así debo decirlo en nombre de la Cámara Sindical Marítima a la que tengo el honor de re-

presentar. El seguro de buque importa para el armador asegurarse contra las aventuras del mar; el seguro del cargamento cubre los riesgos de la carga. De manera que al representar a la Cámara Sindical Marítima, hablo de los intereses de todo el comercio marítimo, porque, en definitiva — y esta es una cuestión sabida — en cualquier riesgo que ocurre, por más que medie un contrato, lo primero que sucede es el traspaso del asunto a la compañía aseguradora para que ésta se encargue de todo. Nuestro proyecto representa también la opinión del ilustre profesor doctor Melo, que es una alta autoridad no sólo en el país sino en el mundo.

Por lo que hace al artículo 3º, debo hacer otra observación. No estoy de acuerdo y no podemos aceptar en forma alguna el articulado del proyecto de la mayoría que viene a ser el de los doctores Melo y Crespo, y debo creer que solamente debido a cierta premura de trabajo se ha redactado en esa forma. Dice el proyecto de la mayoría (*Leyendo*): «Propiciar la ampliación del artículo 1.091 del Código de Comercio con el siguiente agregado:

«Serán nulas y de ningún valor las cláusulas insertas en las pólizas de fletamento, en los conocimientos o en cualquier otro título emitido por el transportador, cuyo objeto sea eximirlo o liberarlo, en los contratos a ejecutarse en la República, de las responsabilidades impuestas por las leyes nacionales, con relación a las pérdidas o daños producidos en las cosas transportadas, derivadas de malversación, dolo, culpa u omisión personal del transportador, o de sus factores, dependientes o agentes. Adoleciendo de igual nulidad las estipulaciones que atribuyan competencia a un tribunal extranjero.»

Como se ve, se incluyen en un solo artículo dos disposiciones diferentes que encañan perfectamente bien dentro del Código de Comercio y que debe también llevar a nuestro juicio la redacción que hemos adoptado nosotros. Nos hemos limitado a seguir el procedimiento de la Cámara de Aseguradores aceptando la modificación de cuatro artículos del Código de Comercio que

deben conservar la misma numeración siguiendo el sistema actual de legislación, para que luego el fallo respectivo no se preste a confusión. El último código, el de Holanda, que ha modificado totalmente la legislación marítima, conserva toda su numeración antigua y hay artículos que tienen hasta 24 ó 25 incisos que son absolutamente diferentes. El artículo 958 se refiere al derecho que tiene el capitán o armadores para exigir del consignatario de la carga cualquiera fianza o garantía que no sea la que el juez del lugar del descargo determine. A este artículo se le agrega: «Será nula y sin ningún valor toda cláusula del conocimiento que contradiga esta disposición.» Este artículo está aislado, porque, como he dicho, debemos seguir la numeración oficial y podría referirse tanto al contrato de fletamento como incluirse en el seguro. En nuestro código está en el título 3º. Es una costumbre general en el comercio de la navegación, a la llegada de un buque a un puerto, si la carga ha sufrido avería, que el capitán, armadores o agentes exijan una fianza o depositen dinero efectivo para garantizar la liquidación definitiva de la avería común. Nuestra legislación ha previsto el caso en el artículo 958 que sólo da derecho a que se exija fianza o garantía que la resolverá el juez de acuerdo a las circunstancias del caso. Pero esto no sucede siempre en la realidad: los armadores, capitán, agentes, que tienen la posesión de la carga, exigen generalmente cauciones y garantías y depósitos en dinero efectivo que llegan a sumas fabulosas, que deben entregar los cargadores o compañías aseguradoras para poder recibir la carga de inmediato. Inútilmente se discute la cláusula, y ha llegado el caso de que las compañías aseguradoras del año pasado han tenido que intervenir en una avería en que se entregaron cerca de cien mil pesos de fianza, en dinero efectivo, aparte de las cauciones bancarias. Nosotros queremos, entonces, que se modifique el artículo dándole el carácter de ley de orden público, es decir, con la cláusula que se agrega, por la cual ninguno de los agentes, capitanes o armadores de buques pue

dan exigir esos depósitos de garantías, sino únicamente limitarse a la exigencia que nuestra ley establece y que es suficiente, en grado sumo, para cubrir las seguridades de la liquidación.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Debo hacer presente al señor delegado que se va a cumplir el plazo reglamentario.

SR. CHEDUFAN. — Hago moción para que se permita al orador continuar en el uso de la palabra.

SR. CARLOMAGNO. — Antes de continuar he de manifestar a esta asamblea que nosotros no vamos a insistir en la discusión en particular; primero, porque indudablemente el tiempo es muy corto, y segundo, porque en una reunión privada le manifesté a mi colega el doctor Chedufan que quizás sería molestar a la asamblea en discusiones trascendentales como éstas. No estoy de acuerdo con la opinión del doctor Leopoldo Melo de que se reemplacen estas cuestiones de fletamento con las reglas de la Haya, o más bien con la Convención de Bruselas del año 1923, porque esas convenciones no solamente resuelven cuestiones sobre la carga sino que se refieren a todo contrato de fletamento: contienen la definición del transporte hasta el último acto del contrato y serían motivo de largas discusiones en nuestros cuerpos legislativos.

Voy a pasar a la cláusula de responsabilidad que los doctores Melo y Crespo en su proyecto incluyen en el artículo 1.091 que se refiere a la expedición. El artículo 1.028 trata del conocimiento, es decir, de las condiciones que debe llenar un conocimiento; y si este artículo se refiere al conocimiento o a sus modalidades, es natural que tratándose de una cláusula del conocimiento la disposición legal debe referirse a ese artículo y no al 1.091.

El artículo 1.028 en siete incisos establece las estipulaciones que debe contener el conocimiento, y lo más lógico será que en el mismo se agreguen las cláusulas prohibitivas.

Es ésta una de las cuestiones más trascendentales del comercio y de la navegación; se refiere a las cláusulas por las que desde la segunda mitad

del siglo XIX los armadores ingleses impusieron en los conocimientos.

No voy a extender mi exposición en esta parte, porque estamos de acuerdo con el doctor Crespo, y únicamente insisto en la colocación de esta disposición, que debe ser al final del artículo 1.028 y no en el 1.091.

El artículo 1.079 se refiere también a la limitación de responsabilidades que se establece en 500 pesos oro de acuerdo a la resolución tomada en la última conferencia de Bruselas. Por lo que respecta al artículo 1.091, que habla de la jurisdicción, como preveo una observación, debo hacer presente que lo consideramos solamente aplicable a la navegación marítima, es decir, de ultramar, de los buques que vienen a la República Argentina. Las cuestiones de la avería común han sido objeto de discusiones profundas desde que las sociedades de derecho internacional celebraron su primera conferencia, luego la de Amberes, y en todas las conferencias que han ido sucediéndose hasta la conferencia 33ª de la Asociación Internacional de Derecho, que tuvo lugar en 1924 en Estocolmo y que modificó substancialmente las reglas, llegando a establecer un sistema uniforme de legislación. El doctor Melo ha observado el proyecto presentado por mí en la Cámara Sindical Marítima, y entonces, yo, con el doctor Mazzi, tratamos de uniformar ideas estableciendo que, en lugar de aceptarse esta disposición, la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados trate de ampliar nuestra legislación con dichas reglas. Respecto del artículo 4º, hemos coincidido con los doctores Crespo y Melo, y debo decir que es altamente necesario y urgente que la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados provea esta disposición, o, por lo menos, haga una ley especial. Es conocida la enorme dificultad que presenta la liquidación de crédito. Son ilusorios...

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — ¿Me permite el señor delegado? Ha vencido ya el término reglamentario.

SR. CARLOMAGNO. — Bien, señor presidente. Voy a terminar, porque no me queda más que el artículo 6º para men-

cionar. El doctor Melo ha dado las razones sobre este artículo y estamos de acuerdo con las mismas.

Nada más. (*Aplausos*).

Sr. CARRANZA. — Hemos escuchado tres interesantes informes sobre la reforma de los transportes marítimos; la Conferencia ha resuelto que no se siga debatiendo sobre artículos de proyectos y creó también una Comisión Permanente de Estudios Legislativos.

Creo que no estamos en condiciones muchos de los delegados aquí presentes para resolver sobre cada uno de los artículos proyectados, y además, como el tiempo apremia, hago indicación para que estos interesantes informes de mayoría y minoría pasen a esa Comisión Permanente, la que a su vez recomendará a la Cámara de Diputados los proyectos pertinentes.

Sr. PRESIDENTE (SILVEIRA). — A simple título de explicación me permito decir que en mi concepto creo que no habría inconveniente en aceptar el temperamento propuesto por el señor delegado en lo que se refiere a algunos artículos, porque otras conclusiones se refieren a simples declaraciones, como el pedido a los poderes legislativos de la incorporación al Código de Comercio de una ley ya sancionada, así como también el pedido de reglamentación de la ley de cabotaje.

Sr. CASTRO. — Pido la palabra.

La Conferencia no debe alarmarse ante la presentación de un despacho de comisión conteniendo modificaciones a dos o tres artículos del Código de Comercio, con la aparente dificultad de estar subscrito en mayoría y minoría, circunstancia que presenta el problema a resolver, con visos de mayor gravedad. Si los señores delegados examinan rápidamente su contenido y lo refieren a disposiciones legales que allí se citan, encontrarán una perfecta coincidencia de todos los miembros de la comisión en lo tocante a la materia tratada.

Tanto la mayoría como la minoría están de acuerdo con la inclusión de disposiciones expresas en nuestra ley, respecto a la nulidad de las cláusulas contractuales sobre exoneración de res-

pensabilidad y elección del tribunal extranjero como jurisdicción competente adonde debía recurrirse para dirimir las cuestiones que se planteen entre los mismos contratantes, cuando uno de ellos es transportador marítimo.

No he de repetir conceptos ya demasiado conocidos y debatidos, hasta en el periodismo, sobre el perjuicio que sufren los intereses nacionales frente a la obligación que el transportador le impone de aceptar esas cláusulas, so pena de quedarse sin que le acepten cargamentos por la ausencia casi total de una marina nacional.

¿Cuál es la diferencia de los dos despachos? En realidad, ninguna. La mayoría nos aconseja que legislemos dentro del artículo 1.091 del Código de Comercio lo relativo a la nulidad de toda cláusula que establezca la irresponsabilidad del transportador, como también la que atribuya competencia a un tribunal extranjero, dejando de lado el de nuestro país. Vale decir, propicia esa legislación en forma de ampliación del citado artículo 1.091, que está colocado al final del capítulo II cuyo título define los «derechos y obligaciones del fletante y fletador». De modo que si el fletante se atribuyera en el contrato esos derechos arbitrarios, la misma ley los declarararía nulos, ampliando, como he dicho, el artículo 1.091.

La minoría, en cambio, divide las dos cuestiones (exoneración de responsabilidad y tribunal competente) para colocar la primera en el artículo 1.028 y la segunda en el mismo artículo 1.091 donde aconseja la mayoría incluir ambos puntos. El 1.028 refiere los requisitos que debe contener el conocimiento, y al elegirlo, los miembros de la minoría han creído que en la misma disposición donde se enumeran esas condiciones debe intercalarse un apartado final estableciendo *qué es lo que no debe contener*, y a ese respecto declara nula toda cláusula, convenio o acuerdo en el conocimiento, o documento que lo reemplaza, que tenga por objeto exonerar o limitar la responsabilidad que por derecho común resulte a cargo del transportador.

Los señores delegados advertirán como

única diferencia en ese primer punto del despacho una simple ubicación dentro del articulado del código. Eso es todo.

Refiriéndome a la necesidad de legislar la nulidad de las cláusulas de exoneración de responsabilidad del transportador, creo que no puede ser puesto en discusión, ya que con ello se tiende a proteger el comercio argentino, hoy fuertemente perjudicado por la validez de esos convenios, arrancados contra su voluntad, en cuya situación desventajosa seguirá mientras no tenga buques nacionales con que reemplazar el extranjero, que le impone esas condiciones arbitrarias y de saqueo a su patrimonio. Como muy bien lo acaba de decir el doctor Eduardo Crespo, miembro de la comisión, se trata de legislar una protección a nuestros propios intereses, hoy librados a esas imposiciones deshonestas.

No creo que pueda haber vacilaciones por parte de los señores delegados sobre esa necesidad de amparar intereses del país. Ya en la reunión que en el año 1922 realizó en la Capital Federal la International Law Association, se sancionó una ponencia análoga, que en la doctrina denominase «Cláusula Buenos Aires», discutida ahora en los congresos internacionales. No se trata, entonces, de traer cuestiones nuevas, de sorprender a los delegados con modificaciones concretas a artículos del Código de Comercio, lo que podría dividir la opinión en esta Conferencia. No, sólo se propone auspiciar, con la autoridad que le da un congreso de abogados, una campaña en que están empeñados los juristas argentinos, agitada en el campo de la doctrina y la jurisprudencia, y que es concordante con la de los demás países sudamericanos de idéntica situación al nuestro, en cuanto dependen del extranjero en los transportes marítimos. ¡Cómo vamos a aplazar un voto de esa naturaleza, mandando a comisión ese despacho! Tal conclusión importaría una vacilación inexplicable.

Particularizando ahora con la ubicación de esas reformas dentro de nuestro código, que es motivo de los dos despachos a consideración, por mi parte declaro que estoy de acuerdo con lo acon-

sejado por la mayoría, no tan sólo en este punto, en cuanto elige la ampliación del artículo 1.091, que no es mala, sino en los tres incisos restantes señalados con las letras b), c) y d).

SR. CARLOMAGNO. — Quería preguntarle al señor delegado si recuerda lo que dispone el artículo 1.091 del Código de Comercio.

SR. CASTRO. — Se lo voy a leer.

SR. CARLOMAGNO. — Lo que dice el artículo actual del Código de Comercio.

SR. CASTRO. — Dice lo siguiente (*Leyendo*): «El contrato de fletamento de un buque extranjero que haya de tener ejecución en la República, debe ser juzgado por las reglas establecidas en este código, ya haya sido estipulado dentro o fuera de la República.»

SR. CARLOMAGNO. — Es un artículo de jurisdicción y me extraña que diga que está mal colocado.

SR. CASTRO. — Yo no digo que esté mal colocada la reforma proyectada en este artículo, sino que trato de demostrar que para la Conferencia tiene poca importancia el detalle de la ubicación.

En efecto, la mayoría propone una ampliación al artículo 1.091. Para no confundir a los señores delegados y ser breve leeré nuevamente el texto del artículo actual. Dice así: «El contrato de fletamento de un buque extranjero, que haya de tener ejecución en la República, debe ser juzgado por las reglas establecidas en este código, ya haya sido estipulado dentro o fuera de la República.» El agregado proyectado dice: «Serán nulas y de ningún valor las cláusulas insertas en las pólizas de fletamento en los conocimientos o en cualquier otro título emitido por el transportador, cuyo objeto sea eximirlo o liberarlo en los contratos a ejecutarse en la República, de las responsabilidades impuestas por las leyes nacionales, en relación a las pérdidas o daños producidos en las cosas transportadas, derivadas de malversación, dolo, culpa u omisión personal del transportador, o de sus factores dependientes, o agentes, adoleciendo de igual nulidad las estipulaciones que

atribuyen competencia a un tribunal extranjero.

Como ven los señores delegados este dictamen reúne en el mismo artículo donde se declara la aplicabilidad de la ley argentina, las disposiciones sobre el carácter irrenunciable de la jurisdicción de nuestros tribunales y nulidad de cláusulas que exoneren de la responsabilidad al transportador.

Los delegados de la minoría, doctores Carlomagno y Mazzi, al proyectar una nueva redacción del artículo 1.091, resuelven la cuestión jurisdicción en estos términos: «Artículo 1.091. — Las cuestiones que se produzcan en un contrato de fletamento, serán resueltas por los tribunales del punto de destino de la carga, siendo nula toda cláusula contractual que establezca lo contrario.»

La nulidad, repito, se incluye como apartado final del artículo 1.028, cuya redacción definitiva, según esa reforma sería así: «Artículo 1.028. — El conocimiento debe contener: 1º El nombre del capitán, el del buque, puerto de su matrícula y porte; 2º El nombre del fletador o cargador; 3º El nombre del consignatario, en caso que el conocimiento no sea extendido al portador o a la orden; 4º La calidad, cantidad, número de bultos y marca de los efectos; 5º El puerto de la carga y el de la descarga, con declaración de las escalas si las hubiere; 6º El precio del flete y la gratificación si alguna se hubiere estipulado, así como el lugar y la forma del pago; 7º La fecha y las firmas del capitán y cargador (aquí viene la ampliación). Será nula, sin valor ni efecto toda cláusula, convenio o acuerdo en el conocimiento, o documento que lo reemplaze, que directa o indirectamente tenga por objeto exonerar o limitar la responsabilidad que por derecho común resulte a cargo del transportador. Sin embargo el armador podrá exonerarse por alguna cláusula especial, de la responsabilidad por las culpas náuticas que resulten del manejo o dirección del buque, siempre que pruebe haber efectuado todas las diligencias para poner el buque en perfectas condiciones de navegabilidad y para asegurar que la tripulación, ma-

quinarias, provisiones, bodegas y demás partes del buque sean adecuadas y o estén en perfectas condiciones para el viaje. Si el armador no prueba haber cumplido con estos requisitos, ninguna cláusula de exoneración de responsabilidad tendrá valor alguno.»

Si tuviera que definir mi voto sobre un proyecto de ley definitivo destinado a modificar nuestro código en esos puntos, declaro con toda lealtad que no me atrevería a sostener ahora mismo la bondad de un dictamen sobre otro, en cuanto a la metodología a observarse para incluir estas doctrinas en la legislación positiva. Pero esta Conferencia en presencia de los dos dictámenes, no debe hacer cuestión de métodos, sino pura y simplemente dar un voto categórico en el sentido de dejar sentado que es necesario reformar y ampliar la ley nacional con esos puntos de vista. ¿Cómo debe encajarse en el código? Eso es ya una tarea que en definitiva queda a cargo de los legisladores y es a ellos a quienes les resultarán útiles estos dictámenes y discusiones, para elegir la colocación y cuidar el buen método dentro del Código de Comercio.

Si sostengo que no hay ningún inconveniente en sancionar el despacho de la mayoría que lleva las firmas de los doctores Melo, Crespo y Chedufau, lo hago en el entendimiento de que el propósito buscado está allí claramente enunciado, sin que deje de reconocer que el sistema aconsejado por la minoría llena también esa finalidad. Quizá entonces, convendría para no infundir desconfianza entre los señores delegados que todos los miembros de la comisión se pusieran de acuerdo sobre uno de esos dictámenes, ya que la Conferencia sancionará tan sólo la doctrina, sin hacer cuestión de la forma y ubicación del articulado.

Después de estas aclaraciones que se han formulado al inciso a) del despacho de la mayoría, dictamen que tomo como base de exposición, no creo que los delegados autores de la idea de destinar este asunto a la comisión permanente, insistan en su moción.

Refiriéndome ahora al segundo punto de este despacho, o sea al referente a

la ley 11.132 aprobatoria de las convenciones de Bruselas, es de una claridad y sencillez tales, que el hecho de tener sobre ello, alguna duda, implicaría dar prueba de desconocerse el asunto, más que tener una sanción precipitada e inoportuna.

Cuando nuestro país incorporó a la legislación nacional el texto de la Convención de Bruselas, que unifica universalmente la legislación de abordaje y asistencia marítima, por medio de la ley 11.132 del año 1921, se encontró con la vigencia de dos leyes de la misma naturaleza, o sea la ley internacional aplicable a todos los casos en que intervienen buques de los estados signatarios de la convención y la ley que figura como parte integrante del libro 3º del Código de Comercio sobre esa misma materia. Esa situación de dualidad no ha sido única de nuestro país sino de todos los que estuvieron representados en la Conferencia Diplomática de Bruselas de 1910, donde no quedó excluido ninguno de los vinculados al comercio marítimo; pero esos otros países han suprimido la doble legislación substituyendo el articulado pertinente de sus códigos marítimos por las reglas de esas convenciones, y así han llegado a la ventajosa legislación única.

Con la misma finalidad ha sido presentado un proyecto de ley al Senado Nacional por el senador doctor Leopoldo Melo, en el que se substituye todo el articulado sobre choques y abordajes, asistencia y salvamento de nuestro código. Con su sanción quedará definitivamente unificada nuestra ley con las convenciones internacionales, colocándose en idéntica situación a los demás países del mundo.

La Conferencia al sancionar ese segundo inciso del dictamen no hará otra cosa que manifestar su opinión en el sentido de que se apresure una sanción legislativa que está en trámite y que obedece a un compromiso internacional y al buen método de legislación marítima.

Si pasáramos a la comisión permanente este punto, habríamos dudado de la necesidad de unificar la ley marítima; conducta que estaría en contra de la

más indiscutida doctrina de derecho marítimo que trata de llegar a la unificación total, en forma gradual, sistema puesto en ejecución por primera vez en Bruselas en 1910. No hay ningún articulado en discusión, sino un método jurídico y un procedimiento. La Conferencia con esta sanción no hará más que confirmarlo, reclamando las sanciones legislativas que están demoradas.

No podríamos sancionar ninguna disposición aislada, ni proyectar enmiendas, pues aun cuando se nos ocurriera un artículo maravilloso a simple vista, y así también lo hiciera alguna otra Nación, si no coincide con las reglas de las convenciones internacionales, lejos de adelantarse en la materia, habríamos opuesto un serio obstáculo a la gran obra que se está realizando para conseguir la unificación.

El tercer punto del despacho de la mayoría al prestigiar la sanción pura y simple de las reglas sancionadas en la Conferencia de Bruselas del corriente año 1926, relativas a privilegios e hipotecas marítimas, no hace más que confirmar la observancia de este procedimiento de respetar las convenciones internacionales, para incluirlas en el código a medida que se vayan convirtiendo en ley en los países signatarios.

La misma consideración se me ocurre con respecto a la legislación de fletamento. La comisión en minoría propicia una modificación al artículo 1.079 de nuestro código y considero que no sería oportuno por ahora hablar de ninguna reforma a la legislación de fletamentos, sino simplemente prestigiar la sanción íntegra de las reglas de La Haya, una vez convertidas en ley internacional; lo que se está tramitando en todos los países que subscribieron la convención.

En materia de derecho marítimo no conviene por el momento detenerse en detalles, ni tomar en cuenta proyectos que estén al margen de las convenciones internacionales; pues si prestigiáramos modificaciones a algunos artículos del código en materia de fletamento, no es difícil que mañana al convertirse en ley esas reglas de La Haya, volvamos a modificar una reciente modificación. Cualquier artículo o disposición incon-

veniente que existiera debe mantenerse como buen método de legislación, hasta tanto no tengamos el texto definitivo de las reglas internacionales; en base a las mismas, será el momento de proyectar reformas parciales a fin de no afectar su contenido.

Por estas breves razones considero que puede aceptarse en general el despacho de la mayoría, como un voto en favor de las doctrinas y procedimientos que en él se prestigan y sin perjuicio de que el poder legislativo o una comisión de especialistas cuide el método a observarse dentro del Código de Comercio. Recogiendo las palabras de nuestro presidente doctor Silgueira, cuando dijo, en forma de explicación, que en el despacho había artículos que no ofrecían dificultad y podrían excluirse de la moción de aplazamiento, yo las amplío a todo su contenido, ya que sus cuatro incisos no ofrecen ningún inconveniente.

Nada más.

SR. MAZZI. — Pido la palabra para justificar la forma en que la comisión en minoría ha presentado la propuesta de modificación a los dos artículos del Código de Comercio. Insistimos en que el proyecto de la mayoría en el inciso a) incluye en las modificaciones del artículo 1.091, cosas completamente distintas. Una que se refiere a la responsabilidad del transportador y otra, a la cláusula de jurisdicción; son dos temas completamente distintos y entonces era justo, por razón sistemática y de lógica jurídica, que estas dos sanciones las hubiésemos puesto en sus artículos respectivos y no englobándolos en una disposición sola o sea, tanto una disposición de carácter doctrinario que se refiere a las consecuencias del incumplimiento del contrato de fletamento, como otra que se refiere a una cláusula que indica cuál es la jurisdicción competente para resolver determinados conflictos. En los demás puntos estamos de acuerdo con la mayoría y si hemos tenido la mala suerte de transformarnos en minoría, ha sido por razones no imputables a nosotros.

SR. CHEDUFAU. — La diferencia, señor presidente, que hay entre el des-

pacho de la mayoría y el de la minoría, es una diferencia aparente, es una diferencia de criterio metodológico en el trabajo. El nutrido memorial presentado por la Cámara de Aseguradores Marítimos y la colaboración prestada a su representante en esta Conferencia por el profesor de derecho marítimo doctor Mazzi, es apreciable, importantísima y si nosotros no hemos incorporado a nuestro despacho las conclusiones a que ambos han llegado, ha sido por una razón de metodología de trabajo de esta Conferencia.

Nosotros hemos traído la cuestión de jurisdicción del contrato de fletamento, y unidas aparecen en nuestro primer apartado la validez de la cláusulas limitativas de responsabilidad, no por una razón de técnica sino impuesta por el carril en que se orienta la jurisprudencia argentina. Nosotros entendemos que cuando la Suprema Corte interpreta como válidas las cláusulas que atribuyen jurisdicción extranjera a los contratos de fletamento a cumplirse en el país, y que cuando los tribunales argentinos admiten la validez de las cláusulas limitativas de la responsabilidad de los armadores extranjeros, en ese mismo momento aparece ante nosotros un enemigo común y por eso los habíamos unido en un solo artículo.

Nada más hemos proyectado respecto de esta cuestión que no es abstrusa, pero a la cual hay que imprimirle claridad, más cuando le pedimos a la Conferencia que improvise.

Los doctores Mazzi y Carlomagno tienen razón; toda la razón que puede tenerse para jerarquizar en el código tal o cual disposición; pero nosotros no tenemos el propósito de ir a la zaga de la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados; tenemos el propósito de destacar solamente cuál es la faz sufriente de nuestro comercio; por eso redactamos un solo capítulo, y por eso solicitamos a la Conferencia que trate exclusivamente éste.

El artículo 1.091 del Código de Comercio, en mi opinión — y perdónenme este juicio los profesores y delegados que han dicho lo contrario — no trata la «jurisdicción».

El artículo 1.091 establece las reglas aplicables al contrato de fletamento, la *lex loci executionis*; pero no la *lex fori*, pues no se refiere al tribunal.

SR. DE LA CAMPA. — ¡Muy bien!

SR. CHEDOUFAT. — Y la Corte ha entendido por eso que nosotros no tenemos estatuido de una manera terminante la jurisdicción; por ese motivo se ha encontrado a los armadores en libertad, y la ha concedido abusivamente, admitiendo la intromisión de un procedimiento extranjero y admitiendo un fuero extranjero, por causa de que no halla en nuestro Código de Comercio el valla-dar que defienda, en la medida de nuestro deseo, el comercio nacional.

Literalmente el artículo 1.091 dice: (*Legendo*): «El contrato de fletamento de un buque extranjero, que haya de tener ejecución en la República, debe ser juzgado por las reglas establecidas en este código, ya haya sido estipulado dentro o fuera de la República.»

Y como nosotros encontramos allí un vacío, es decir, que la jurisdicción no es tenida en cuenta, le agregamos precisamente eso, que el contrato de fletamento a cumplirse en el país debe ser juzgado por los tribunales de la República.

Y yo tengo necesidad de expresar a esta Conferencia, a raíz del recuerdo tan gentilmente evocado por el doctor Crespo, que si el doctor Melo, y el que en este momento abusa de la tolerancia de ustedes, presentamos en la Conferencia Internacional de 1922, una ponencia promoviendo la jurisdicción argentina para los contratos a cumplirse en el país; no solicitamos la jurisdicción para todas las cuestiones emergentes de los contratos de fletamento; nos limitamos exclusivamente a las cuestiones emergentes de la entrega de la carga: de los robos y del *pilferage*; de los *non delivery*, y del *short delivery*; es decir la falta absoluta de entrega; y de la entrega menoscabada.

Y cuando el debate se planteó en 1922, en circunstancias menos auspiciosas que éstas seguramente, porque teníamos a nuestro frente toda la representación europea, ayudada eficientemente por la representación norteamericana, nosotros

les dijimos: Señores: es de conveniencia mutua que ustedes concedan que la jurisdicción para tratar las cuestiones emergentes de la entrega de la carga debe ser la de los tribunales de su destino, pues sólo allí es posible que la prueba de las fallas y averías se produzca.

Con este argumento la Conferencia de Buenos Aires aceptó nuestra proposición, que en realidad era transaccional.

En seguimiento de la trayectoria internacional de esto: que para nosotros es un problema, debo rectificar una aseveración del memorial presentado a la Conferencia por el delegado del Centro de Cabotaje, en cuanto dice que: «La misma resolución sancionada por la Conferencia de Derecho Marítimo de la International Law Association reunida en Buenos Aires en 1922, no ha tenido el apoyo de las nuevas conferencias de la misma asociación celebradas ulteriormente en el extranjero, lo que confirma el respeto universal — dice el doctor Alvarez — que merecen las cláusulas atributivas de jurisdicción.»

La verdad del asunto es fundamentalmente contraria a lo afirmado en el párrafo que terminó de leer, pero no me extraña su contenido porque las resoluciones de la Conferencia de Estocolmo han tenido muy escasa publicidad en nuestro país, respecto al fletamento. La 32ª Conferencia de la International Law Association, se reunió en 1924, en Suecia, como lo ha recordado el doctor Crespo. Un año después de la reunión de Buenos Aires se anunció que la regla allí votada, propuesta por quienes representábamos a la Cámara de Aseguradores Marítimos, sería reconsiderada en Estocolmo. En confirmación de ello, la «Revista de Derecho, Historia y Letras», anticipó el texto de la ponencia de reconsideración y los fundamentos que para ello redactara el doctor Wyndham Bewes. Tal proyecto agitó el interés de los aseguradores argentinos y éstos lo hicieron conocer de la rama argentina de la International Law. El honor de llevar a Suecia la representación de los intereses argentinos, no me corres-

pondió por mérito alguno, sino porque entre los hombres que estaban en el asunto, era el que podía disponer del tiempo necesario para aquello!

El Comité sobre sentencias dictadas en el extranjero, funcionó como comisión de la Conferencia en Estocolmo, y produjo un despacho según el cual se otorgaba validez a las sentencias dictadas en consecuencia de cuasi delitos, siempre que fueran dictadas por jueces de la nacionalidad del prevenido, o por tribunales radicados en el lugar donde la infracción fuera cometida o descubierta.

Cuando luego la Comisión sobre fletamentos entró a redactar su orden de trabajo, el delegado que habla se opuso a que se deliberase sobre la enmienda Bewes, argumentando que ella importaba una reconsideración de lo sancionado precedentemente por el Comité sobre sentencias dictadas en el extranjero. Así lo entendió también el doctor Bewes, quien caballeresco y práctico al propio tiempo, solicitó que su enmienda se tuviera por no presentada.

Si los señores delegados a esta Conferencia recuerdan que la Regla sancionada en Buenos Aires, hace cuatro años, declaraba la jurisdicción de los tribunales argentinos para los robos y faltas de cualquier origen descubiertas en las cargas llevadas a los puertos argentinos, habrán establecido que la Regla de Buenos Aires, fué ampliada por la Conferencia de Estocolmo, desde que se generalizó a las sentencias de cualquier especie.

Lamentamos que los doctores Mazzi y Carlomagno hagan objeciones a nuestro despacho; pero creo que no tienen oportunidad de llamarse minoría desde que están de acuerdo con las ideas de la comisión.

Nada más. (*Aplausos*).

Sr. LONOS. — Quería decirle al doctor Castro que habló de las deficiencias que iba a tener el proyecto en lo que se refiere a la cláusula de jurisdicción que casualmente, como lo ha hecho notar el doctor Chedufau que radicaba en eso la oposición del Centro de Cabotaje Ar-

gentino al proyecto de los doctores Carlomagno y Mazzi.

Sr. CASTRO. — Después del brillante informe del doctor Chedufau, creo que en el espíritu de los señores delegados existirá acuerdo en el sentido de que la Conferencia no debe oponerse, en principio, a la sanción de estas sabias disposiciones que no son más que un sistema jurídico que supone la ausencia de libertad de consentimiento al subserbirse esos compromisos atentatorios a los intereses del comercio argentino. Conocida esta finalidad, no habrá oposición de parte de ninguno de los señores delegados.

Sr. JOFRE. — Está equivocado el doctor Castro; yo me voy a oponer a eso.

Sr. CASTRO. — Será una rara excepción la del señor delegado.

Tan sólo quería agregar a mis palabras anteriores una rectificación a ciertos conceptos expresados por el doctor Chedufau, cuando aludió a la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, tribunal que le mereció calificativos poco amables, a propósito de los fallos que comentó.

Yo declaro con toda sinceridad que ese alto tribunal ha resuelto los casos presentados sobre validez de las cláusulas de jurisdicción con buen criterio jurídico, porque ha fallado de acuerdo a la ley. Ningún juez, señores delegados, puede hacer otra cosa que aplicar la ley que tiene, ya que la doctrina no puede invocarse en contra de ella para fundar una sentencia. Si nos atenemos entonces al texto del artículo 1.197 del Código Civil que dispone ser las convenciones para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma, ninguna razón legal habría para negar validez a un acuerdo, determinando el tribunal competente, si no existe a la vez en la misma ley una excepción a tal principio, que admita la nulidad para ese caso.

De modo que la Suprema Corte no ha tenido, ni tiene más camino que fallar ateniéndose a las leyes que le dan, no a las proyectadas, que es lo que ensayamos en estos momentos. Si hubiera de invocarse una razón decisiva para esa

demonstración, no deberíamos sino recordar que estamos tratando de darle la ley para que pueda hacerlo.

Sería injusto criticar la conducta de la Corte, al atribuirle falta de protección a los intereses del comercio argentino, por el hecho de no habersele otorgado las leyes que todos reconocemos ser tan necesarias.

La comisión está unánimemente de acuerdo en llegar a esa sanción, sólo dos de sus miembros disienten respecto al método elegido y como la Conferencia, a mi juicio — y repito lo ya dicho — no se ha de pronunciar por la bondad de uno u otro sistema, sino concretarse a la doctrina, es que insisto en la votación de todo el despacho, sin perjuicio de ulteriores reformas metodológicas.

SR. DE LA CAMPA. — Pido la palabra.

Pensaba ser un espectador atento y silencioso en este debate de esta Conferencia, pero la referencia hecha por el señor delegado doctor Crespo y las manifestaciones muy inteligentes — aunque un poco vivaces — del señor delegado doctor Chedufau, relacionadas con la jurisprudencia de la Suprema Corte Nacional, que ha mencionado, resuelven mi intervención en la controversia promovida; y es tan apacible y sereno el ambiente en que ésta se desarrolla que me place cambiar ideas con los señores delegados, no obstante mi situación particular como representante de un alto tribunal de justicia de la República, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires que tengo el honor de presidir. Créame, por otra parte, obligado a defender la tesis jurídica de la Corte Nacional, hasta por razón fácilmente comprensible de solidaridad espiritual con ella y pido excusas a la asamblea porque el tema — sin tomarme propiamente de sorpresa — me impone una exposición casi incidental, sobre la base de información sumaria.

Es exacto que la Suprema Corte Nacional ha declarado que las cláusulas especiales sobre jurisdicción incorporadas a los contratos de fletamento, no suponen infracción a ley alguna de la Nación. Ha hecho esa declaración en reiterados pronunciamientos y podría citar, entre otros, el que se registra en

el tomo 28 de sus fallos, el que aparece en el tomo 126 y el que figura en el tomo 133; y los menciono al acaso para demostrar que la jurisprudencia no es aislada ni circunstancial, sino por el contrario uniforme y constante. Ha declarado la Corte que ninguna ley se opone a tales cláusulas especiales y en mi concepto tiene razón. Es muy distinto que aceptemos o no dentro de un momento esos proyectos de ley que han sido propuestos a la asamblea de que admitamos sin protesta la afirmación del señor delegado doctor Chedufau, quien ha llegado hasta calificar a la Corte Suprema de enemigo común de los altos intereses argentinos, tal vez sin tener presente en el calor de su demostración que se trata del tribunal con mayor ponderación virtual de la República...

SR. CHEDUFAU. — Enemigo de lo que para mí es el interés nacional.

SR. DE LA CAMPA. — El interés nacional es contemplado por el señor delegado desde un punto de vista y por la Corte desde otro y yo no sé si el señor delegado juzga en el asunto sin pasión y examina sin ofuscamiento todos los intereses en juego, porque su fogosidad juvenil ha quedado evidenciada estos días en la consideración de las cuestiones sometidas a la asamblea. Yo me limito a preguntar a todos los profesionales aquí reunidos cuál es la disposición legal que ha resultado violada en los fallos discutidos de la Corte Nacional...

VARIOS SEÑORES DELEGADOS. — Absolutamente ninguna.

SR. CHEDUFAU. — ¡No he dicho que la Corte haya violado la ley!

SR. DE LA CAMPA. — Ninguna. Entonces todos estamos de acuerdo en que los señores jueces de la Corte — hombres que aplican leyes, pero que no las hacen — se han limitado a aplicar las que nos ha dado hasta ahora el Congreso de la Nación, una de las cuales — el Código Civil, en el artículo 1.197 — establece categóricamente que los contratos son ley para las partes. En cuanto a jurisdicción no existe razón alguna legal que impida a los contratantes del fletamento convenir el temperamento que les convenga, sin que pueda oponer-

se a esa manifestación de voluntad la afirmación doctrinaria sobre el orden público vinculado necesariamente a las normas de procedimientos porque ya estamos un poco lejos de la época en que tal conclusión parecía de eficacia absoluta y el derecho procesal, dinámico por definición, se acerca cada vez más a los nuevos conceptos de Mortara, Chiovenda, etcétera.

Luego, pues, el Código de Procedimientos ha establecido en su artículo 4º (*leyendo*): que «en materia de acciones personales será juez competente el del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación...» etcétera. Cuando la ley ha establecido eso ha creado una presunción legal en ausencia de la voluntad de las partes; pero cuando los contratantes substituyen tal presunción y expresan su voluntad en sentido distinto, la disposición legal deja de surtir efecto en el caso particular y entra a funcionar la otra norma del artículo 1.197 del Código Civil. Entonces y para no avanzar demasiado en una demostración que, por lo demás, considero innecesaria dada la calidad de los componentes de esta Conferencia, nada puede imputarse a la Suprema Corte de la Nación por dictar pronunciamientos que importan el respeto integral de las leyes vigentes y de la voluntad de las partes, manifestada con relación a situaciones que han podido resolver sin limitación alguna que aparezca en el cuerpo general de la legislación argentina.

Y termino reiterando a la Conferencia mis excusas por esta intervención incidental en sus debates, a que me he considerado obligado en defensa de los prestigios del más alto tribunal de justicia del país, integrado por ciudadanos que honran a la democracia en que actúan con su labor ejemplar y su austeridad conducta.

He terminado. (*Aplausos*).

Sr. JOFRE. — Yo, francamente, si se va a poner a votación tal como está el proyecto, voy a abstenerme de votarlo. No me encuentro preparado para abordar esta cuestión. Recién ayer se nos ha repartido una orden del día que creo es la número 3, donde hemos tomado cono-

cimiento de este asunto. Hoy se ha reunido la comisión respectiva, muy bien formada por cierto, por los presentes y los ausentes, y no han logrado ponerse de acuerdo. Los oradores que han estado haciendo uso de la palabra en este acto, no se han puesto de acuerdo ni sobre el artículo que se trata de modificar. Por un lado oí decir: es el artículo 1.091 del Código de Comercio; por otro oigo decir que es un artículo del Código Civil, que establece que la voluntad de las partes es ley para las mismas. ¿Qué vamos a hacer, entonces! Si doy una mirada retrospectiva a mis viejas lecturas, me encuentro con que el objeto del legislador se ha transformado con el tiempo y que tal vez sufra nuevas modificaciones con el comercio actual. Antes la jurisprudencia era del rey; en su beneficio se establecía que él solamente debía conocer de determinados asuntos, pero con el avance de la democracia, se dijo: son las partes las que van a decidir: son ellas las que van a establecer en el contrato: vamos a ir a que nos juzgue tal juez, porque nos conviene más. ¿No habría quizás una exageración en el interés del comercio, comparando el interés del gremio con el interés general del país? Eso se me ocurre que puede acontecer, aunque no hago una afirmación categórica, porque carezco de elementos de juicio, puesto que no conozco el asunto.

Sr. CHEDUFAU. — Ni la mayoría ni la minoría piden ninguna modificación a la ley existente en materia de jurisdicción; lo único que hacen es prever lo necesario para que la jurisdicción en adelante no sea atribuida a los tribunales extranjeros.

Sr. JOFRE. — Ahora entiendo menos que antes. (*Risas*). Antes entendía que se trataba de modificar una regla de jurisdicción que establecería la elección de los jueces y ahora se me dice que no es así. ¿En qué quedamos?

Sr. CHEDUFAU. — Quedamos en el despacho de la comisión...

Sr. JOFRE. — Yo debo decir lo que pienso: no puedo imponerle al señor delegado mi modo de pensar; estoy expresando mi manera de sentir en este

asunto. Y le ruego no me interrumpa, porque es probable que desvíe la argumentación que estoy haciendo.

Quería referirme también a un asunto que ha tocado brillantemente el doctor de la Campa. Para mí la Suprema Corte de la Nación es un tribunal al cual le saque el sombrero; al que tengo muchísimo respeto, y al que no he visto en ningún momento de la historia argentina ir en contra de los intereses nacionales. Siempre lo he visto reconstituido del lado de la ley, de la equidad, de lo que ha creído era más justo.

Yo, entonces, pido permiso a la asamblea para no votar este asunto, primero porque no estoy conforme, y segundo, porque no entiendo qué es lo que se quiere hacer en esta cuestión de la jurisdicción que ahora resulta que no se quiere modificar. Francamente esto no lo entiendo. Ahora quiero preguntar a cualquiera de los miembros de la comisión en mayoría o en minoría si esa ley que se trata de incorporar al Código de Comercio tiene fuerza en la República Argentina.

SR. CASTRO. — Sí, tiene.

SR. JOFRÉ. — ¿Por qué y en qué fecha?

SR. CASTRO. — En 1922.

SR. JOFRÉ. — No es exacto; en 1922 se aprobó un convenio internacional.

SR. CASTRO. — Efectivamente.

SR. JOFRÉ. — ¿Y cuándo se ratificó?

SR. CHEDUEAU. — Ahí radica la discrepancia entre los tratadistas argentinos.

SR. JOFRÉ. — No, señor, porque la misma ley lo dice, que será válido cuando se ratifique el convenio...

SR. CARLOMAGNO. — Le voy a decir. La ley 11.132 dice en su artículo único (*Leyendo*): «Apruébanse las convenciones sobre abordaje y sobre asistencia y salvamento marítimos, firmadas en Bruselas el 23 de Septiembre de 1910...».

SR. JOFRÉ. — Eso es la ley ¿pero la ratificación?

SR. CARLOMAGNO. — Se trata de una ley nacional.

SR. JOFRÉ. — Pero ciertas leyes nacionales sólo entran a regir cuando se ratifican.

SR. CARLOMAGNO. — Muy bien; esta ley fué sancionada por el Congreso, entendiéndose que el tratado internacional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución de la Nación, venía a constituir una ley nacional y reemplazaba a los artículos respectivos del Código de Comercio. Por eso los tribunales de comercio han interpretado, a mi juicio erróneamente, que era una ley definitiva. Pero como una ley no puede ser derogada, sino por otras leyes y como por otra parte estas mismas disposiciones de los artículos 12 y 15 de la convención dejaban subsistentes las del Código de Comercio, ha nacido una divergencia para su interpretación. Por eso propongo que el Congreso Nacional se avoque nuevamente el estudio de la cuestión y declare que esta ley viene a reemplazar los títulos XI y XIII del Libro tercero del Código de Comercio.

SR. JOFRÉ. — Pero ¿existe o no la ratificación?

SR. CARLOMAGNO. — Sí, señor.

SR. JOFRÉ. — ¿De qué fecha?

SR. CARLOMAGNO. — De la fecha de la ley.

SR. JOFRÉ. — ¿No puede ser!... ¿Si las ratificaciones vienen después!... A veces vienen dos años después!... Ahora nos entenderemos menos todavía. (*Risas*). El artículo 31 de la Constitución Nacional que ha citado el señor delegado, dice expresamente (*Leyendo*): «Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de Noviembre de 1859».

Aquí, como se ve, el instrumento legal habla de leyes y tratados, pero son

diametralmente distintos. Las leyes ordinarias entran en vigencia cuando el Congreso las sanciona y el Poder Ejecutivo les pone el cumplimiento, o por sí solas después del plazo fijado cuando no han sido vetadas. Los tratados no. En los tratados primero viene la concertación entre los plenipotenciarios de los países que entrarán en el mismo; después viene el envío del mensaje y tratado al Congreso, éste lo aprueba, el Poder Ejecutivo le pone el cumplimiento y recién cuando se ratifica por los respectivos gobiernos signatarios es obligatorio para las naciones. Recién entonces entra en juego el artículo 31 de la Constitución; y eso es lo que los señores delegados, a quienes he preguntado, no saben bien, ni saben cuándo ni si se ha ratificado.

SR. CARLOMAGNO. — Yo he dicho que precisamente el Código no se ha modificado y que por eso debe ir al Congreso Nacional.

SR. REVIERGO. — De dónde resulta que los dos tienen razón. (*Risas*).

SR. JOFRÉ. — Yo pediría que este asunto pase a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos.

SR. CARLOMAGNO. — Es la misma moción que yo he hecho.

SR. JOFRÉ. — Yo apoyo esa moción porque no quiero complicarme en votar una cuestión de la que no tenemos pleno conocimiento.

Y ya no voy a hablar más, señor presidente.

SR. CARRANZA. — Insisto en mi moción de hace un momento. Después de la brillante exposición que hemos escuchado, se comprueba la dificultad de que la Conferencia se pronuncie ahora mismo sobre estos proyectos. Entonces es oportuna mi moción, para que pase a la Comisión Permanente y ésta a su vez eleve los antecedentes, cumpliendo así las funciones que le hemos dado, a la Cámara de Diputados y a la de Senadores de la Nación.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Tendría que votarse primero, el despacho de la comisión y después, la moción del doctor Carranza.

SR. CARLOMAGNO. — Aceptamos el despacho de la mayoría en todas las partes que comprenden nuestros anteproyectos y que creemos que conviene aprobar, pero voy a pedir que se haga un solo agregado, porque como dije al principio, nosotros queremos que no se malogre el trabajo de la Conferencia. La ley número 11.132, dice: «Apruébanse las convenciones sobre abordaje, sobre asistencia y salvamento marítimos, firmadas en Bruselas, el 23 de Septiembre de 1910. . .»

De modo, que si la Cámara de Diputados la incorpora al Código de Comercio, no nos interesa si se ha ratificado o no el tratado, puesto que será ley para la Nación. Por ello propongo lo siguiente: que se agregue únicamente antes del artículo 1º, lo que contiene nuestro despacho que dice: «Recomendar sobre modificaciones al libro 3º.»

SR. CRESPO. — Está conforme la comisión.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar el despacho de toda la comisión.

SR. CHIEUFFAU. — El despacho de la mayoría con el apoyo del resto de la comisión.

SR. CASTRO. — Antes que se vote, quiero manifestar al doctor Jofré, que la ley 11.132 que tratamos de incorporar al Código de Comercio, ya es ley nacional en todos los países del mundo que han concurrido a la Conferencia de Bruselas. Bélgica la sancionó en 1911; Inglaterra, en 1911; Alemania, en 1913; Estados Unidos e Italia, en el mismo año 1913, y otros que no recuerdo.

SR. JOFRÉ. — Porque ha sido ratificado en esos países.

—Se vota y resulta afirmativa.

SR. JOFRÉ. — ¿Mayoría de cuántos?

SR. SECRETARIO (ZAVALA ORTIZ). — No puedo precisar.

—Rectificada la votación, resulta nuevamente afirmativa.

SR. SECRETARIO (BERGHIMANS DONCEL). — La impresión de la Secretaría, es que hay mayoría; la única manera de

establecer el número, sería tomando una votación nominal.

SR. CHEDOUFAY. — Podría computarse los votos en contra.

SR. JORRÉ. — Retiro mi pedido.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — En discusión en particular.

SR. MAZZI. — Debe preceeder el encabezamiento propuesto y aceptado por la comisión.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Yo creo que está comprendido en el artículo 1º porque se trata de una enunciaci6n.

SR. SECRETARIO (ZAVALA ORTIZ). — (*Legendo*): «Serán nulas y de ningún valor las cláusulas insertas en las pólizas de fletamento, en los conocimientos o en cualquier otro título emitido por el transportador, cuyo objeto sea eximirlo o liberarlo en los contratos a ejecutarse en la República, de las responsabilidades impuestas por las leyes nacionales, con relación a las pérdidas o daños producidos en las cosas transportadas, derivadas de malversaci6n, dolo, culpa u omisi6n personal del transportador, o de sus factores, dependientes o agentes, adoleciendo de igual nulidad las estipulaciones que atribuyan competencia a un tribunal extranjero».

SR. LONOS. — Pido la palabra.

La modificaci6n que se proyecta al artículo 1.091 del Código de Comercio ampliándolo con el siguiente agregado que dice: «Serán nulas y de ningún valor las cláusulas insertas en las pólizas de fletamento, en los conocimientos o en cualquier otro título emitido por el transportador, cuyo objeto sea eximirlo o liberarlo en los contratos a ejecutarse en la República, de las responsabilidades impuestas por las leyes nacionales con relación a las pérdidas o daños producidos en las cosas transportadas, derivadas de malversaci6n, dolo, culpa u omisi6n personal del transportador o de sus factores, dependientes o agentes, adoleciendo de igual nulidad las estipulaciones que atribuyan competencia a un tribunal extranjero», adolece de un defecto fundamental. Se ha querido reunir en una sola disposici6n dos cosas completa-

mente distintas: la cuesti6n de la irresponsabilidad por pérdidas sufridas en las cosas transportadas y la nulidad de las cláusulas atributivas de jurisdicci6n.

Trataré de demostrar los inconvenientes que traería la sanción de la reforma proyectada y los perjuicios a que daría lugar su aplicaci6n.

En primer término considero que no tenemos ningún derecho para imponer a las naciones extranjeras nuestra jurisdicci6n sobre contratos de fletamiento hechos en el extranjero y con buques extranjeros.

Si bien es cierto que el comercio nacional se halla sometido en cuanto a transporte de ultramar, a realizarse por compañías extranjeras, por ausencia de marina mercante argentina, lo único que se conseguiría con la sanción de semejante disposici6n, sería ocasionar perjuicios de consideraci6n a la economía nacional por un aumento de los fletes para la Argentina.

Las compañías de navegaci6n de ultramar no se verían perjudicadas por el hecho de estar sometidas a la jurisdicci6n nacional y por el contrario se verían libres de la competencia de los vapores changadores (tramps), necesaria para el mantenimiento de los fletes razonables, que tendrían que elevar sus precios debido a los gastos que les ocasionaría el tener que litigar en diversos puertos obligándolos a tener agentes y abogados en estos lugares.

El actual sistema que deja a la libertad de las partes el establecer la jurisdicci6n que más le convenga, es el mejor. En general ningún cargador reclama que se establezca la jurisdicci6n del punto de destino porque no tiene interés en establecer tal jurisdicci6n.

Por otra parte la liquidaci6n de la avería gruesa, estableciéndose la jurisdicci6n del lugar de destino de la mercadería, en los casos en que el cargamento estuviera fletado para distintos lugares, obligaría a hacer liquidaciones en distintos puertos, cosa completamente inadmisil.

Las cláusulas que someten a la autoridad judicial del lugar en que el armador tiene su sede social, la decisi6n de las controversias a que dé motivo el

transporte son admitidas en casi todos los conocimientos referentes a mercaderías con destino a la República Argentina. Hoy día no se discute más su validez, comprobándose lo que afirma Ripert en la página 228 de su *Droit Maritime*, edición de 1914, que «la validez de esas cláusulas es hoy universalmente admitidas» y que «ellas derogan una norma de competencia, *ratione personae* que no es de orden público.»

En ningún caso, pues, puede sostenerse que ésta sea una cuestión que afecte a la soberanía nacional, puesto que no está comprometido el orden público, según la opinión de los tratadistas y de la jurisprudencia nacional.

El doctor Julio Alvarez en un artículo publicado sobre este tema en la Revista de Derecho Marítimo, tomo IV, número 9, hace una recopilación interesante de las legislaciones marítimas que restringen la libertad de contratar demostrando que ninguna de ellas limita el derecho de insertar en los conocimientos cláusulas atributivas de jurisdicción.

Ni la Harter Act de los Estados Unidos, de 1893, ni la Paramount Act de Australia, de 1904, ni la Canadian Sea-Carriage of Goods Act of Canadá de 1910 que introducen restricciones a la libertad en los contratos de fletamento, restringen en manera alguna el amplio derecho de someter tales jurisdicciones al tribunal del lugar en que están domiciliados el cargador y el fletante, en el que se embarca la carga y el que se halle comprendido dentro de la jurisdicción territorial que da pabellón al buque.

La misma resolución sancionada por la Conferencia de Derecho Marítimo de la Internacional Law Association reunida en Buenos Aires, en 1922, no ha tenido el apoyo de las nuevas conferencias de la misma asociación celebradas ulteriormente en el extranjero, lo que confirma el respeto universal — dice el doctor Alvarez — que merecen las cláusulas atributivas de jurisdicción.

La jurisprudencia nacional, como lo hemos dicho anteriormente, sostiene hoy con firmeza el reconocimiento y

legalidad de las cláusulas atributivas de jurisdicción.

En lo que se refiere a la nulidad de las cláusulas que limitan o exoneran la responsabilidad del transportador con relación a las pérdidas o daños producidos en las cosas transportadas, creo que una sanción legal en este sentido traería más inconvenientes que ventajas.

Su resultado inmediato sería un aumento en los fletes con el consiguiente perjuicio para el comercio nacional.

No hay duda que los propietarios de la mercadería pueden conseguir en cualquier momento una eliminación de las cláusulas de irresponsabilidad en sus contratos de fletamento abonando una tarifa superior a la normal.

La situación del transporte marítimo o fluvial es completamente distinta a la del transporte terrestre donde las empresas ferroviarias ejercen una especie de monopolio sobre una zona dada lo que hace necesaria la intervención del Estado en las tarifas y en la determinación de la responsabilidad del transportador. No sucede lo mismo en la navegación marítima donde los transportadores sufren entre sí una competencia que influye en el monto del flete y condiciones del transporte, lo que hace que sea abusivo el impuesto a los cargadores europeos que envían productos a la Argentina.

Creo, pues, más conveniente en este sentido una amplia libertad de contratar entre las partes en el contrato de fletamento. En todo caso no es el momento de introducir una modificación en el Código de Comercio sin hacer un estudio profundo de las culpas en las cuales no puede eliminarse la responsabilidad del transportador.

Por estos motivos, me permito disentir con la opinión de los señores miembros de la comisión y votaré en contra de la sanción de la resolución propiciada.

Sr. JORJÉ. — Pido la palabra, para hacer una moción de orden.

Hago indicación de pasar a cuarto intermedio.

—Asentimiento general.

—Así se hace, siendo las 12 y 10 horas.

SEXTA SESION ORDINARIA

PRESIDENCIA DEL DOCTOR J. HONORIO SILGUEIRA

DELEGADOS Y MIEMBROS DE LA CONFERENCIA PRESENTES: Doctores Aguiar Henoch D., Alegre Manuel V., Alsina Ramón M., Alvarez Julio, Alvo Sebastián E., Astrada Ponce Carlos, Avalos Antonio, Avalos José M., Barbosa Feliciano, Barraquero Julián, Barrera Juan F. de la, Bassi Aurelio, Baudón Héctor R., Berghmans Doneel Carlos A., Bullrich Adolfo, Cabral Angel II., Campa Juan de la, Canal Feijoó Bernardo, Cano Guillermo G., Carlomagno Juan C., Carranza Adolfo, Casañas Miguel, Castellanos Benjamín, Castiglione Antonio, Castro Jorge S., Cervini Francisco, Chedufau Edmundo C., Codoni José E., Corominas Segura Rodolfo, Correa Alejandro, Corvalán César S., Courel Carlos D., Day Alberto A., Doneel Salvador A., Echagüe Pedro A., Escobar Sáenz Julio M., Ferreira Enrique A., Frías Leopoldo, Frías Wenceslao, García Zavalia Rafael, Gil Enrique, Gonnet Manuel B., González Sabathic Juan M., Goyeneche Romualdo, Goytia Roberto D., Goytia Victor D., Guinazá Alberto, Herrera Santiago D., Labanca Gabriel, Lafaille Héctor, León y Basualdo Arturo de, Lobos Roberto N., López Domínguez Ramón, Llan de Rosos Ernesto, Latella Frías Donato, Martínez Paz Enrique, Mazzini Rogelio, Méndez Miguel G., Molino Luis E., Morixe Jerónimo A., Moyano Escalera Salvador, Novillo Saravia Lisardo, Olmos Lucas A. de, Orgaz Raúl A., Ortiz Florencio J., Otero Capdevila Benjamín, Palacios Benjamín, Páez de la Torre Manuel, Petra Demetrio, Quiroga Pedro R., Ramallo Carlos M., Reviriego Emilio, Ríos Eduardo, Rodríguez Ribas Vicente, Rodríguez Saráchaga Oscar, Romero del Prado Victor N., Sierra Celestino D., Silgueira J. Honorio, Stanchina Camilo F., Torino Enrique, Urraza Estanislao de, Vera Cruz, Vera Vallejo Ricardo, Viechi Rodolfo, Vilgré La Madrid Juan, Villegas Basavilbaso Florencio, Viñas Ibarra Umberto, Zavala Ortiz Alfredo, Zaefferer Silva Oscar.

SUMARIO

- 1.—Transportes marítimos y fluviales. Consideración del dictamen y su aprobación. (Ver versión taquigráfica de la sesión anterior).
- 2.—Arbitraje en materia comercial. Moción de reconsideración.
- 3.—Nacionalización de la justicia argentina y reforma del sistema de enjuiciamiento de magistrados. Consideración y aprobación del dictamen.
- 4.—Código de lo contencioso administrativo. Consideración y aprobación del dictamen.
- 5.—Retribución de los magistrados. Consideración y aprobación del dictamen. Regulación de honorarios de abogado. Rechazo del dictamen.
- 6.—Estadística judicial. Consideración y aprobación del dictamen.
- 7.—Bibliotecas de especialización jurídica. Cátedras de ética y cultura forense. Consideración y aprobación del dictamen.
- 8.—Provisión de cargos judiciales por las intervenciones nacionales. Consideración y aprobación del dictamen.
- 9.—Temas para la Tercera Conferencia: «La tierra agraria». Aprobación del dictamen.

- 10.—Ley de ciudadanía. Reforma. Aprobación del dictamen.
- 11.—Expropiación. Organización legal de los Colegios de Abogados. Impedimentos para contraer matrimonio. Nombroamiento de síndicos en los concursos civiles. Consideración y aprobación del dictamen.
- 12.—Trabajos para la Tercera Conferencia. Consideración y aprobación del dictamen.
- 13.—Viajantes de comercio y contrato de representación. Consideración y aprobación del dictamen.
- 14.—Arbitraje en materia comercial. Moción, aprobada, destinando el proyecto a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos.
- 15.—Voto de agradecimiento al Gobierno, a la Universidad y a la sociedad de Córdoba.
- 16.—Presentación de trabajos a las Conferencias y la distribución de los mismos.
- 17.—Comunicación de las sanciones y comisión de redacción de las resoluciones aprobadas. Mociones aprobadas.
- 18.—Sede de la Tercera Conferencia.
- 19.—Fecha de la Tercera Conferencia.
- 20.—Instituto de Compilación, Clasificación y Ordenación del Derecho Argentino. Designación de la comisión de estudio.
- 21.—Votos de aplauso a las autoridades de la Conferencia, al doctor Manuel B. Gonet, al Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y a la magistratura de Córdoba.
- 22.—Clausura de la Conferencia.

1

Transportes marítimos y fluviales

En la ciudad de Córdoba, a veintinueve días del mes de Octubre de 1926, reunidos en el Salón de Actos de la Universidad, los delegados arriba indicados, y siendo las 15 y 25 horas dice el:

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — queda abierta la sesión.

SR. CARLOMAGNO. — Pido la palabra. Desco proponer una modificación al artículo 1º del proyecto en discusión; que en lugar de decir: «propiciar la am-

pliación del artículo 1.091 del Código de Comercio con el agregado: serán nulas y de ningún valor las cláusulas insertas...»; se diga: «propiciar la ampliación de los artículos pertinentes del Código de Comercio» con el siguiente agregado: «serán nulas y de ningún valor las cláusulas insertas en las pólizas de fletamento...»

Esta proposición tiene por objeto armonizar el articulado del proyecto y no puede establecerse que sea en el artículo 1.091, desde que no hay conformidad respecto del número del artículo en que puedan intercalarse esas modificaciones.

—Apoyado.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — El despacho quedaría encabezado en la siguiente forma, (*Leyendo*): «La Conferencia Nacional de Abogados resuelve: Recomendar a la Comisión de Legislación del Honorable Senado de la Nación y a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados encargada de proyectar una ley de reformas al Código de Comercio vigente, las siguientes bases de modificación al Libro III del Código de Comercio:»

SR. SECRETARIO (CANAL FELJÓ). — O bien en la siguiente forma: «a) Propiciar la ampliación de los artículos pertinentes del Código de Comercio, con el siguiente agregado: «Serán nulas y de ningún valor las cláusulas insertas en las pólizas de fletamento, en los conocimientos o en cualquier otro título...»

SR. CERVINI. — Pido la palabra.

Para facilitar la discusión, propongo que este artículo sea dividido en dos partes, porque si bien puede aceptarse sin mayor discusión la primera, en cambio la segunda, que se refiere a la jurisdicción, por ser más delicada, dará motivo a debates de más intensidad y eso vendrá a complicar la votación del asunto. Si se aceptase la proposición que hago, quedarían sumamente facilitadas la discusión y votación.

—Asentimiento.

SR. DONCEL. — Me voy a permitir hacer una indicación referente única-

mente a la forma en que se redacta el proyecto en su encabezamiento.

Me parece que el encabezamiento leído por el señor secretario doctor Berghmans Doncel es de carácter general, y por lo tanto modifica todo el despacho, lo que implicaría la supresión del que actualmente tiene el inciso *a*).

Suprimiendo ese encabezamiento quedaría el proyecto de acuerdo con la indicación del doctor Carlomagno y redactado en una forma adecuada.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — ¿La comisión acepta la modificación propuesta?

SR. CHEDUPAU. — La comisión acepta.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar la primera parte del artículo.

—Se vota y es aprobado.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — En discusión la segunda parte del artículo.

SR. CARLOMAGNO. — Si no votamos la cláusula de jurisdicción va a resultar inútil lo que aceptamos en primer término.

SR. VILLEGAS BASAVILBASO. — Quiero llamar la atención de esta Conferencia sobre la circunstancia de que las leyes que no miren el orden público pueden ser renunciadas, de manera que debemos contemplar esta situación en el artículo que se está redactando, puesto que en el mismo instrumento, en las pólizas o en los conocimientos podría establecerse que las partes pueden renunciar a estas disposiciones, con lo que quedaría este problema sin solucionarse. Para ello, sería necesario incluir en el artículo las razones que abonan este artículo, que se acepta en beneficio del comercio de la República Argentina.

SR. CASTIGLIONE. — Pido la palabra. Formulo moción de orden en el sentido de que se cierre el debate, puesto que ya se ha hablado mucho de este tema.

—Asentimiento general.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar la segunda parte del inciso *a*).

—Se vota y es aprobada.

SR. CASTRO. — Pido que se rectifique la votación y se establezca por cuántos votos ha sido afirmativa.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar nuevamente la segunda parte del inciso *a*).

—Verificada la votación, dice el:

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Han votado 24 señores delegados por la afirmativa y 12 por la negativa.

SR. CASTRO. — Ha sido aprobada por dos tercios de votos.

—Se lee el inciso *b*).

SR. DONCEL. — Creo que debe suprimirse la palabra «aconsejar».

—Asentimiento.

SR. LOBOS. — No tengo inconveniente en propiciar la sanción del inciso *b*), puesto que se trata de una incorporación y no de una reforma al Código de Comercio.

Como debe estudiarse la manera de concordarlo con las otras disposiciones del mismo código, propondría que se redactara el inciso en la siguiente forma: «Las disposiciones de los títulos 11 y 13 del Libro III del Código de Comercio deben modificarse para concordarlas con las proposiciones adoptadas en el Congreso de Bruselas de Septiembre próximo pasado y aprobadas por la ley 11.132.»

Creo que no debe incorporarse al Código de Comercio la ley 11.132, sino que debe reformárselo de acuerdo con las disposiciones de dicha ley, con lo que resultaría una reforma más armónica. Me parece más justo y más lógico modificar la última parte, dejando a salvo la cuestión de la jurisdicción.

SR. CHEDUPAU. — La comisión no acepta.

SR. CASTIGLIONE. — Hago moción de orden en el sentido de que se cierre el debate.

SR. QUIROGA. — Pido al señor delegado que tenga la gentileza de retirar su moción, porque se trata de un asunto que merece ser discutido.

SR. CASTIGLIONE. — No voy a tener esa gentileza, señor delegado, porque el tiempo apremia. Mantengo mi moción.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar la moción del señor delegado doctor Castiglione.

—Se vota y resulta negativa.

SR. CASTRO. — La ley 11.132 aprueba tan sólo las resoluciones de las convenciones de Bruselas del año 1910 que unificó universalmente todas las disposiciones relativas a choques, abordajes y salvamento. Las convenciones no son otra cosa que una ley internacional. Los países que suscribieron esas convenciones, además de aprobarlas por ley, incorporaron a sus códigos de comercio esos mismos preceptos. Y si los señores delegados desean apreciar la importancia de la ley complementaria les ruego lean el Diario de Sesiones del Senado de la Nación del año 1921, sesión del 30 de Septiembre, en que el doctor Melo presentó su proyecto expresando sus fundamentos, donde encontrarán claramente determinada la necesidad de esa incorporación al Código de la ley internacional. Repito, señor presidente, se trata de finalizar un sistema de legislación única; no se proyectan modificaciones parciales al Código que den lugar a discusiones. La discusión doctrinaria ya se hizo en la Conferencia de Bruselas, y concluyó definitivamente con la sanción de la ley internacional.

Tenemos que aconsejar su incorporación íntegra, porque si se modifican algunos artículos habría desaparecido lo fundamental de la Conferencia de Bruselas, que es obtener la unificación del derecho marítimo.

SR. LOBOS. — Si es lo que sostengo, que debe modificarse el Código de acuerdo a la ley 11.132.

SR. CASTRO. — Que es lo que dice la comisión, señor delegado: «aconsejar la incorporación al Código de Comercio, en su primera edición oficial de la ley 11.132 como ley única aplicable a todos los casos.»

SR. CHIEUFFA. — Quisiera expresar al doctor Lobos que es imposible con-

certar su proposición con el propósito que dice tener al formularla.

La Convención de Bruselas ha suprimido una de las categorías de abordaje existentes en el Código de Comercio; me refiero al abordaje dudoso. En caso de que se adapten las disposiciones del Código a la Convención de Bruselas quedaría pendiente el abordaje dudoso como un péndulo que no sabemos cuándo se va a detener. En previsión de esta circunstancia, y como la teoría rechaza el abordaje dudoso, que, por otra parte, está resuelto en la Convención de Bruselas, nosotros creemos imposible concertar la legislación internacional con la nacional y por eso optamos por la primera y la aconsejamos a la Conferencia.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar el inciso b).

—Se vota y resulta afirmativa.

—En discusión el inciso c).

SR. CARLOMAGNO. — Queda suprimida la palabra «prestigiar».

—Se aprueba el inciso e).

—En discusión el inciso d).

SR. CARLOMAGNO. — Voy a hacer una observación de forma: que queden los tres incisos anteriores como artículo 1º, que es la comunicación que debe pasar al Senado y Cámara de Diputados de la Nación, y el d) como artículo 2º, desde que establece que se debe dirigir una comunicación al Poder Ejecutivo nacional.

SR. LOBOS. — Voy a apoyar esta última resolución de la comisión. El Centro de Cabotaje Argentino, del cual soy representante, en diversas oportunidades ha tenido ocasión de presentar al Poder Ejecutivo pedidos de modificaciones a la reglamentación de la ley 10.606. En este sentido, ha propuesto a la Conferencia Nacional de Abogados un artículo pidiendo al Poder Ejecutivo una modificación a la reglamentación en una forma quizás un poco más extensa; pero el centro no tiene inconveniente

en propiciar o aceptar la forma más breve y concisa de la comisión. Desearía dejar constancia de la necesidad urgente que hay en reformar esta ley y de la importancia enorme que tiene la reforma de la reglamentación para el cabotaje nacional.

El cabotaje nacional y en general todo el comercio de transportes fluviales y marítimos, está sometido en nuestro país a una multitud de leyes y reglamentaciones inadecuadas y a veces contradictorias y lo que es peor, sometido a jurisdicción administrativa de diversos ministerios, que dictan cada uno disposiciones sin tener en cuenta los daños que pueden surgir de su aplicación, debido a la existencia de otras reglamentaciones dictadas por diferentes reparticiones administrativas, lo que produce una serie de molestias, entorpecimientos y trabas en el comercio de transporte fluvial.

Es necesario una modificación fundamental de nuestra legislación en la materia para salvar al comercio de cabotaje de todas estas dificultades, y el punto capital de esta modificación está en señalar una sola repartición administrativa que entienda en todos los asuntos que al cabotaje se refieran, y sin cuya intervención las otras reparticiones no puedan adoptar medidas de ninguna clase.

Hoy día el comercio de cabotaje está sujeto a la jurisdicción del Ministerio de Hacienda en lo que se refiere a todo el régimen del control de transportes de carga y este régimen está inspirado en un prejuicio tradicional en nuestro país de que el cabotaje puede ser un instrumento o un medio de defraudación a la renta fiscal cuando el examen detenido de todas las causas que han pasado por el ministerio y juzgados federales demostraría hasta la evidencia que jamás el cabotaje que hace el transporte entre puertos nacionales, ha servido de medio para ninguna tentativa de defraudación fiscal. Depende el cabotaje del Ministerio de Marina para todo lo que se refiere a la reglamentación sobre tripulantes, su número, su capacidad, condiciones de trabajo, etcétera, y depende de la

Dirección de Correos en todo lo que se refiere a los privilegios de paquete que se acuerdan como compensación, imponiendo el gravamen del transporte gratuito de la correspondencia, que importa el impuesto más elevado que paga el comercio de cualquier clase en esta República. Depende del Departamento Nacional de Higiene, en todo lo que se refiere a las formalidades para controlar el estado sanitario de los pasajeros que entran y salen del país, manteniéndose vetustas y absurdas reglamentaciones. Así, por ejemplo, un buque que viene de Paraná tiene que hacer su declaración de estado sanitario y ser recibido por un médico en el puerto, cuando todos los pasajeros pueden venir por ferrocarril del mismo punto sin que se exija ninguna formalidad. Está sujeto, también, el cabotaje a una intervención impropia y arbitraria del Ministerio de Obras Públicas, que se erige autorizado a determinar tarifas y condiciones de transportes fundándose en el artículo 101 de la ley de ferrocarriles cuya inaplicabilidad ha sido archidemostrada y declarada también judicialmente por sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

Esta situación se traduce en reglamentaciones agobiadoras de toda especie, y no tienen, como hemos dicho, más solución que la elección de un ministerio que entienda exclusivamente en todo lo que se refiera al régimen de los transportes fluviales y marítimos.

Así lo había comprendido el Honorable Congreso al sancionar la ley de cabotaje de 29 de Septiembre de 1918, en cuyo artículo 28 se había dispuesto lo siguiente:

«Art. 28. — Quedan sometidas exclusivamente a la jurisdicción de agricultura todas las cuestiones de orden administrativo concernientes a la navegación mercante y de cabotaje en sus relaciones con el Poder Público, así como el régimen del comercio marítimo y fluvial y a la del Ministerio de Hacienda todas aquellas que se relacionan con los intereses fiscales que

se hallan bajo su dominio. Ambos departamentos se pondrán de acuerdo, siempre que fuere necesario modificar las reglamentaciones existentes, o crear otras nuevas.»

El Poder Ejecutivo al promulgar esta ley vetó este artículo haciendo un uso abusivo de la facultad que le acuerda el artículo 72 de la Constitución pues ésta no autoriza los vetos parciales. Sin embargo, la ley quedó sancionada en esta forma porque el Congreso no reclamó de este veto inconstitucional. Así se malogró uno de los objetos principales de la sanción de la nueva ley de cabotaje y se mantuvo el estado de anarquía reglamentaria que rige este comercio.

En diversas oportunidades el cabotaje nacional se ha dirigido a los Poderes Públicos solicitando precisamente la unificación de la dirección en todo lo que se refiere al cabotaje. Se ha dicho y repetido que es indispensable para el cabotaje que una repartición administrativa de importancia se encargue de todo lo referente a la marina nacional y se ha entendido que la solución de esta cuestión está en la creación de una subsecretaría de la marina mercante que dependa del Ministerio de Agricultura y Comercio, la que tendría a su estudio: la reglamentación de todos los transportes fluviales y marítimos; la intervención de todas las reglamentaciones de control fiscal policial, técnico y de seguridad pública; el fomento de las construcciones navales y el establecimiento de astilleros de reparación y diques de carena. Esa misma subsecretaría estudiaría la modificación de las ordenanzas aduaneras; la modificación y unificación de las ordenanzas de la Prefectura; la revisión de todas las reglamentaciones sanitarias y propendría finalmente al Congreso de la Nación la sanción de aquellas leyes orgánicas de protección y fomento de la marina mercante que contribuirían al desarrollo de este comercio, con beneficio incalculable para la economía general del país.

Me interesa dejar constancia de esto, y por otra parte la forma de llevar a cabo esta reglamentación la proyectará

el Poder Ejecutivo cuando reciba la comunicación de la Conferencia.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar de acuerdo con la proposición del doctor Carlomagno.

SR. CARLOMAGNO. — Que el inciso d) quede como artículo 2º, señor presidente.

—Asentimiento.

—Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Queda aprobado el despacho.

2

Arbitraje en materia comercial

Moción de reconsideración

SR. ZAEFFERER SILVA. — Pido la palabra.

Voy a formular una moción, y sería que mis distinguidos colegas la votasen unánimemente. Se trata de reparar un error cometido por la asamblea en la sesión de ayer, error que, por cierto, no enaltece sus prestigios. Ayer se presentó a consideración de la asamblea un proyecto elaborado por uno de los miembros de más talento y de más vigorosa y reconocida ilustración, como lo es el doctor González Sabathicé, sobre arbitraje comercial. Ha sido bien fundado con amplios antecedentes italianos, alemanes, franceses; ha sido perfectamente estudiado. Pero ante una observación hecha por el doctor Castillo — cuya ausencia lamento y es irremediable porque ha regresado a Buenos Aires — se ha sugestionado la asamblea a tal extremo de decidirse a dar un voto en contra. Como me parece que esa resolución ha sido un poco precipitada, lo que no es aceptable en una asamblea como ésta, pido a mis distinguidos colegas que voten unánimemente la moción que hago en el sentido de que se reabra la discusión sobre ese proyecto, sin perjuicio de que el asunto se trate más adelante.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar la moción de reconsideración que se ha formulado.

—Se vota y es afirmativa.

VARIOS SEÑORES DELEGADOS. — Que se rectifique la votación.

SR. SECRETARIO (CANAL FELJÓO). — Han votado 26 por la afirmativa y 10 por la negativa.

VARIOS SEÑORES DELEGADOS. — Es afirmativa.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente, doctor Paéz de la Torre.

3

Nacionalización de la justicia argentina y reforma del sistema de enjuiciamiento de magistrados

SR. PRESIDENTE (PAÉZ DE LA TORRE). — Se va a dar cuenta del despacho de comisión que ha estudiado el proyecto del doctor Ramón Morey sobre «nacionalización de la justicia argentina y reforma del sistema de enjuiciamiento de los magistrados».

SR. SECRETARIO (CANAL FELJÓO). — (*Leyendo*):

A la Segunda Conferencia Nacional de Abogados:

Habiendo estudiado la ponencia del doctor Ramón Morey sobre nacionalización de la justicia argentina y reforma del sistema de enjuiciamiento de los magistrados del Poder Judicial, la Comisión de estudio de proyectos no previstos por el programa de la Segunda Conferencia Nacional de Abogados, aconseja el siguiente dictamen para su aprobación: Encomendar a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos el estudio de la ponencia del doctor Morey y de sus fundamentos.

Julán Barraquero. — Prieto R. Quiroga. — Carlos D. Courel. — Osorio Rodríguez Saráchaga. — Guillermo G. Cano. — Wenceslao Frías. — Ramón Morey. — Ricardo Vera Vallejto.

SR. GONNET. — ¿Qué establece, en último término, el despacho de la Comisión?

SR. CHEDUFAU. — Que el proyecto debe pasar a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos.

SR. VERA VALLEJO. — Pido la palabra.

El temperamento aconsejado por la Comisión Especial que ha estudiado este asunto y la premura del tiempo, ya que debemos dar por terminada la labor de la Conferencia esta misma tarde, y quedan aún muchos asuntos para ser considerados, me obligan a ser muy breve en mi exposición, puesto que la comisión considera que no es del caso por ahora entrar al debate de la cuestión en su parte fundamental.

El proyecto presentado por el señor delegado doctor Morey, actualmente miembro del directorio del Colegio de Abogados de Mendoza, reproduce un tema que fué debatido, en lo esencial, en la primera Conferencia, y debido a la gran trascendencia del asunto y a las objeciones de alguna importancia que se le opusieron en aquella oportunidad, la Conferencia decidió destinarlo a estudio de la Comisión Permanente que se designó para elaborar los proyectos sobre unificación de las leyes de organización y procedimientos judiciales del país. Esa comisión, debido a la enorme tarea que se le encomendara, como ser la de proyectar los Códigos de Procedimiento en lo Civil, Comercial y Penal, no se ha expedido aún sobre ese tema, por lo cual el doctor Morey, según lo expresa en los fundamentos con que acompaña su proyecto, ha creído necesario renovar la discusión sobre el tema para actualizarlo, y sobre todo, con el objeto de mantener vivo en el país el interés sobre una cuestión que afecta tan profundamente a las instituciones de la República.

No obstante que en verdad, después de haberse discutido en la primera Conferencia, podía ya haberse venido a la presente con un bagaje más o menos completo de información, la comisión especial designada para estudiar los proyectos presentados sobre temas ajenos al programa oficial, ha entendido que todavía no es oportuno entrar al debate, porque ese proyecto entraña, desde luego, la reforma de la Constitución Nacional que fué propuesta por otros señores delegados y cuyo proyecto ha sido destinado a la Comisión Per-

manente de Estudios Legislativos creada por la actual Conferencia.

Una circunstancia fortuita ha hecho que fuera yo en parte, diré, inopinadamente, colaborador del trabajo del doctor Morey, que ha tenido la gentileza de incorporar a sus fundamentos algunas ideas que expresé en un artículo escrito para una revista de Mendoza. Estoy convencido de la bondad de la ponencia del doctor Morey, pero en este caso no me es dado separarme de la comisión, por haber sido ya despachado el proyecto cuando me incorporé a ella, y porque existiendo numerosos asuntos de gran interés a tratar, sería ciertamente imposible considerar ya esta cuestión. Por esta circunstancia no creo necesario entrar a exponer los fundamentos del autor del proyecto, ni los que me podría indicar mi experiencia en esta materia, dejándolo librado a la nueva comisión que lo estudie a fondo y lo despache con los demás proyectos relativos a la reforma de la Constitución.

SR. STANCHINA. -- Pido una aclaración sobre la forma en que se constituirá la Corte Suprema, porque, según el proyecto, parece que será integrada por 10 miembros.

SR. VERA VALLEJO. -- La comisión no ha estudiado el proyecto en sí, sino simplemente las bases.

SR. STANCHINA. -- Sería conveniente indicar más o menos el criterio a seguirse en este caso. De lo contrario, podría suscitarse esta duda: ¿deberán sortearse los miembros, ser designados por el Poder Ejecutivo, por la Cámara de Senadores o por la de Diputados? Creo ventajoso, pues, que la Conferencia establezca un criterio para que sirva de pauta o antecedente a la comisión que estudiará el proyecto.

SR. CHEDUFAU. -- El señor miembro informante, no tiene mandato para contestar esa aclaración que se le pide.

SR. QUIROGA. -- La comisión ha estudiado el proyecto del señor delegado doctor Morey y sin perjuicio de toda la importancia que le reconoce al asunto en sí, no se ha considerado habilitada, por la premura del tiempo, para hacer un pronunciamiento de fondo.

Entonces, buscando una mayor garantía de estudio y de eficacia en lo que se refiere a su resolución definitiva, lo ha remitido a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, que es la indicada para pronunciarse sobre este asunto.

Ni el señor miembro informante ni el que habla, que es también miembro de la comisión, se encuentran en condiciones de poder contestar a la pregunta del señor delegado doctor Stanchina, representante del Tribunal Superior de La Rioja, porque carecemos en absoluto de elementos de juicio, puesto que no hemos entrado a estudiar el fondo de la cuestión.

La comisión permanente, en su hora, dirá lo que corresponda.

SR. VERA VALLEJO. -- Quiero hacer saber al señor delegado que ha interrogado a la comisión, que el doctor Morey ha firmado de acuerdo el despacho, de tal suerte que su propio proyecto sería modificado si se aceptase la proposición hecha por el señor delegado.

El propio doctor Morey está de acuerdo en que pase el asunto a la Comisión Permanente.

SR. STANCHINA. -- En mi opinión, la Conferencia debe pronunciarse respecto de la forma en que ha de integrarse la Corte Suprema para los casos de enjuiciamiento de magistrados.

SR. QUIROGA. -- ¿Cómo se va a pronunciar la Conferencia, si la comisión no tiene antecedentes!...

SR. GARCÍA ZAVALÍA. -- Yo deseo concluir con esta discusión y tener espíritu de tolerancia, como lo he tenido hasta hoy; me parece que esto ya ha sido resuelto ayer cuando se ha tratado el proyecto del doctor Barraquero, de reformas a la Constitución; ese proyecto se entregó a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, que determinará en todos sus aspectos las bases que habrán de servir para una revisión de conjunto de la Constitución. Entonces, creo que esta cuestión ha quedado ya encomendada a la citada comisión.

SR. DONCEL. -- Quería hacer notar simplemente que tal como ha presentado su despacho la comisión, no hay pronun-

eiamiento sobre el asunto, y entonces los que disintimos en cualquier forma, como el señor delegado Stanchina, nos encontramos a salvo de ulteriores responsabilidades. La Conferencia no hace pronunciamiento alguno sobre la cuestión, de acuerdo con el despacho, y me parece entonces que no cabe disentir.

SR. CARRANZA. — Voy a apoyar el despacho de la comisión y dar como antecedente un interesante proyecto del doctor Tomás de Veyga, profesor entonces de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, sobre unificación de la justicia argentina, publicado en muchas revistas y conocido en el Congreso Nacional. Allí se estudiaban todas las cuestiones a que se refiere el doctor Stanchina y esto servirá también de antecedente a la comisión, cuando articule el proyecto.

SR. HERRERA. — He escuchado ayer al doctor Barraquero y hoy a otro señor delegado al apoyar una ponencia tratando de proteger la autonomía de las provincias, y este proyecto que se encuentra en discusión es atentatorio a ella. La nacionalización de la justicia pienso que es un avance a las autonomías provinciales. Por estas razones, voy a oponerme a la sanción del proyecto.

SR. CARRANZA. — Voy a hacer una aclaración: no creo que sea un avance sobre la autonomía provincial, y eso que formo parte de la justicia de una provincia: de la de Tucumán; creo que modificándose la Constitución en ese sentido no significaría un avance, sino una forma nueva de acuerdo con la mayor estabilidad de la justicia argentina.

SR. STANCHINA. — Yo insisto en mi moción de que se establezca por intermedio de la Conferencia en qué forma se va a hacer las designaciones, porque en la comisión permanente no va a haber representantes de los poderes judiciales de provincia. Por eso debemos tratar de que quede constancia de su pensamiento, es decir, que se dé la pauta en qué forma se va a constituir la Suprema Corte para el enjuiciamiento de magistrados.

SR. QUIROGA. — La Conferencia tendría que votar, como cuestión previa,

si se avoca el estudio de la ponencia, teniendo en cuenta que al respecto no hay dictamen de comisión. El hecho de que ésta haya aconsejado que la ponencia pase a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, significa sencillamente dejar a su resolución definitiva la suerte del asunto.

Para que esta Conferencia pueda entrar directamente al estudio del asunto, tendrá que resolver tratarlo sin despacho de comisión.

Hago moción en ese sentido.

—Vuelve a ocupar la Presidencia el doctor J. Honorio Silgueira.

SR. CASTRO. — En los fundamentos del proyecto presentado ayer por el señor delegado doctor Julián Barraquero había un amplio capítulo sustentando las reformas de la Constitución Nacional, y recuerdo su pensamiento de que la Corte debía constituirse por una terna formada y elegida por el Honorable Senado o la Asamblea Legislativa, a fin de que el Poder Ejecutivo eligiera de ella los miembros. La Conferencia no se pronunció sobre este asunto, sino que lo pasó a la Comisión Permanente, para que investigara si ésa es la mejor forma de resolverlo, o bien propusiera otra que estime más acertada. Si nosotros entráramos a detallar cómo debe constituirse la Corte, no sólo no habríamos adelantado nada en esa idea, sino que no saldríamos de la discreta norma trazada en el sentido de sancionar tan sólo bases. De manera que de acuerdo con ese sistema y el voto ya dado en el proyecto que he recordado del doctor Barraquero, no corresponde detenerse en detalles de esa índole.

SR. GARCÍA ZAVALA. — Ayer hemos presentado un proyecto sobre Corte de Casación Interprovincial o Argentina. No hicimos ninguna objeción al hecho de que pasase nuestro anhelo a la Comisión Permanente; ésta, teniendo en cuenta otros antecedentes, los acumulará y podrá expedirse con conciencia. Ya he dicho que el señor delegado doctor Barraquero entregó algunas bases, que han pasado a la comisión. Y en ese caso ¿quién va a hacer la reforma? ¿La Comisión Permanente de Estudios Legis-

lativos o la Convención Constituyente cuando venga la ley sancionada por el Congreso? Entonces no discutamos. Lo más práctico es que se cierre el debate.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar la moción de cerrar el debate.

—Se vota y es afirmativa.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Se vota y es aprobado.

4

Código de lo contencioso-administrativo

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a leer el despacho de la comisión que ha estudiado el proyecto del doctor Guillermo G. Cano sobre «Código de lo contencioso administrativo».

SR. SECRETARIO (CANAL FEIJÓO). — (*leyendo*):

A la Segunda Conferencia Nacional de Abogados.

La Comisión Especial de estudio de proyectos no previstos por el programa de la Segunda Conferencia Nacional de Abogados, aconseja la aprobación de la siguiente ponencia del doctor Guillermo G. Cano:

«La Segunda Conferencia Nacional de Abogados,

DECLARA:

Primero. — Que es necesario que la Nación y las provincias que no lo tienen, dicten su Código de lo Contencioso-Administrativo, que precise lo que debe entenderse por causas contencioso-administrativas, determine el tribunal que ha de entender en ellas y el procedimiento con arreglo al cual han de substanciarse.

Segundo. — La Comisión Permanente de Estudios Legislativos formulará un proyecto de Código que sea en lo posible adoptable por la Nación y las provincias y lo enviará a los Poderes Ejecutivos Nacional y Provinciales, recomendando su consideración por los Poderes Legislativos.

Guillermo G. Cano.—*Oscar Rodríguez Sarachaga.* — *Carlos D. Courel.* — *Wenceslao Frías.* — *Pedro R. Quiroga.*—*Julián Barraquero.* — *Ramón Morcy.* — *Aurelio Bassi.*

SR. CANO. — Pido la palabra.

Soy, señor presidente, autor de la ponencia que se ha leído y también miembro informante de la comisión que ha tenido la deferencia de despacharla favorablemente y por unanimidad.

Pienso que uno de los problemas jurídicos más interesantes y urgentes, cuya consideración debe avocarse la Conferencia Nacional de Abogados, es el de la conveniencia de dotar al país de una legislación orgánica en lo contencioso-administrativo.

Ni en las constituciones, ni en las leyes de fondo, ni en las procesales, ni en leyes especiales—a excepción del Código de la materia de la provincia de Buenos Aires — se halla definido o concretado lo que debe entenderse en general por causas contencioso-administrativas, no obstante que algunas leyes hablan de acción y otras de recurso contencioso-administrativo y que algunas constituciones, como la de Mendoza, han establecido el tribunal competente para juzgar de aquellos casos.

El Estado exterioriza sus actividades bajo dos aspectos distintos, como sujeto del derecho privado o sea como persona jurídica y como sujeto del derecho público o sea como autoridad, como poder. Cuando procede en el primer carácter está a igual de los particulares, sometido en sus controversias con éstos a la autoridad del Poder Judicial; pero cuando procede en el segundo carácter y con sus actos o decisiones lesiona derechos de sus gobernados, ¿debe haber o no un juez y cuál de esa lesión?

Sin duda que debe haberlo, porque ello es indispensable en los pueblos libres, cualquiera que sea su sistema de gobierno, y porque en un país como el nuestro, organizado bajo el régimen representativo republicano, donde la soberanía reside esencialmente en el pueblo — quien es el que gobierna por intermedio de sus representantes y autoridades creadas por la Constitución y la ley — los mandatarios son responsables y ejercen sus funciones dentro de límites más o menos precisos, y no es entonces admisible que los particulares queden en desamparo contra los errores o abusos de aquéllos.

La materia contencioso-administrativa está constituida por las controversias que se suscitan entre el Poder Ejecutivo o los diversos organismos de la administración pública, con los particulares, en el desenvolvimiento de la actividad de aquéllos como autoridad, cuando éstos consideran que sus decisiones hieren o violan derechos de ellos, que no emanan de la Constitución ni de los códigos comunes de fondo, sino del derecho administrativo, que es una derivación del derecho político que sirve para constituir el gobierno del Estado.

Cuando el poder administrador obra en ejercicio de sus facultades regladas y no en uso de su poder discrecional y el particular reclama de una lesión que una violación del derecho administrativo le haya ocasionado, suscita un caso contencioso-administrativo.

Bien se comprende que tales casos han de ser y son numerosísimos, pues mientras mayor sea el radio de acción de la actividad del Estado y menos discrecional el ejercicio de la función pública por los gobernantes, más abundantes deben ser las controversias con los particulares que sus actos originen, ya que si éstos pueden eludir tener cuestiones con otros particulares, menos fácil les resulta eludirlos con el Estado, desde que todos están sometidos a la autoridad de éste.

Sin embargo, las causas que se llevan a los tribunales son bien escasas, no por falta de materia, ni de discrepancia de los gobernados, sino por falta de una legislación orgánica en lo contencioso-administrativo, que ampare debidamente los derechos de aquéllos, por lo cual es indispensable y urgente que por leyes se defina o determine con precisión qué es lo que debe entenderse por causas contencioso-administrativas, qué tribunal ha de conocer de ellas y de acuerdo a qué reglas de procedimiento.

Sobre lo primero sólo existe el Código de la Provincia de Buenos Aires, vigente desde 1906, proyectado por el doctor Luis V. Varela, que es sin duda la única ley orgánica — de carácter local — existente en el país.

Dispone aquél en su artículo 1º que «se reputarán causas contencioso-administrativas, las que inicien los particu-

lares o alguna autoridad administrativa, reclamando contra una resolución definitiva dictada por el Poder Ejecutivo, las municipalidades o la Dirección General de Escuelas, y en la cual se vulnere un derecho de carácter administrativo, establecido en favor del reclamante por una ley, un decreto, un reglamento u otra disposición administrativa preexistente.

Considero deficiente esta definición o un poco estrecha, porque en la práctica se presentan numerosos casos en que los particulares no reclaman de la violación de ningún derecho suyo preexistente de carácter administrativo, sino de la aplicación errónea o abusiva por la autoridad de disposiciones del derecho administrativo, cuya mala aplicación les ocasiona perjuicio, porque les impone, por ejemplo, sanciones improcedentes u obligaciones hacia el Estado que los particulares no aceptan que deriven de la ley en parte alguna o en la medida en que la autoridad, fundándose aparentemente en ella, las declara a su cargo, casos éstos que la doctrina y la jurisprudencia reconocen y aceptan que son contencioso-administrativos.

Una determinación legal precisa de lo que son causas contencioso-administrativas, hará que sin verse la autoridad estorbada en su funcionamiento por reclamaciones de los particulares, los errores o injusticias deliberadas de ella no queden sin remedio para éstos y que no se vean expuestos a fracasar en acciones o recursos contencioso-administrativos, porque los jueces, dentro de una libertad de criterio hoy casi absoluta y por tanto subjetiva, variable y circunstancial, declaren que el caso sometido no es de aquella naturaleza.

Ya se sabe que en el campo de la doctrina y de la legislación existen tres sistemas sobre la jurisdicción contencioso-administrativa: el administrativo puro, que deja libradas las decisiones de la administración a revisión sólo por ella misma; el judicial puro, que atribuye los asuntos contencioso-administrativos, como todos los demás contenciosos, a los jueces ordinarios; y el sistema mixto, que da aquella ju-

riediccion a tribunales especiales, compuestos de jueces y de funcionarios administrativos.

Habrà que decidirse por uno de estos sistemas, el que esté más en concordancia con nuestra organizaci3n política e institucional y con nuestras tradiciones de libertad y de amparo contra la prepotencia de la autoridad; pero mientras por ley no se establezca qué tribunal ha de decidir en definitiva las causas contencioso-administrativas, existirá la duda de si tales asuntos deben concluir o no dentro de la esfera de la propia autoridad administrativa y la posibilidad de que se declare que contra las violaciones por aquélla del derecho administrativo, los particulares no tienen otro amparo que el que la misma autoridad quiera buenamente brindarles, corrigiendo o no sus propios errores.

El procedimiento a que estos juicios hayan de ajustarse, es también una cuestión importante, porque de una acertada reglamentación, que tendrá que ser en buena parte de carácter especial, dada la naturaleza de estos asuntos, dependerá que su sustanciación no provoque rozamientos entre los distintos poderes y que sin afectarse la independencia y separación de ellos, los particulares tengan los medios de hacer práctica la defensa de sus derechos vulnerados por las decisiones administrativas y de obtener el cumplimiento de las sentencias que se dicten en su amparo.

Siendo todo lo que atañe a la materia contencioso-administrativa, de competencia de la Nación y de las provincias, dentro de su respectiva jurisdicci3n, es claro que no podrá haber un código único para todo el país y que en cada provincia variará con arreglo a su organizaci3n administrativa y judicial, pero siendo una misma la materia y su base científica, fácil será llegar a redactar un código que en lo fundamental pueda ser adaptado a los órdenes nacional y provincial por sus respectivas legislaturas.

Es urgente que todos los derechos de los particulares estén garantidos, especialmente contra la fortaleza excesiva de los poderes ejecutivos, y el remedio

está en una buena legislaci3n contencioso-administrativa.

Resulta inconcebible que problemas institucionales y jurídicos como los que suscita esta materia, que ya fueron objeto de estudio y legislaci3n hace más de un siglo, en la Constituyente Francesa en 1791 y aun antes, no hayan sido abordados y solucionados aún en nuestro país y que esté presente en la materia la gran confusi3n y atraso que nos ofrece la ausencia casi total de legislaci3n sobre ella y la insuficiencia y defectos de la poca existente, con la salvedad de la provincia de Buenos Aires.

Será un verdadero honor para esta Conferencia de Abogados, arbitrar los medios de llevar a la práctica una buena codificaci3n de la materia contencioso-administrativa, presentando a los poderes públicos la soluci3n que más convenga a este problema orgánico, que ha de influir poderosamente en el progreso del país, de cuya marcha o atraso institucional y jurídico somos responsables principalmente los abogados, por la naturaleza y fines de nuestra cultura universitaria.

Creo que con la base del código de la provincia de Buenos Aires y con la experiencia que nos proporciona su aplicaci3n de veinte años, puede hacerse el trabajo que propongo, por la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, que ha creado esta Conferencia, sin necesidad de que ella le dicte las bases generales de él, pero si de otro modo lo entendiera la asamblea habría que diferir el estudio y sanción de aquellas a la Comisión Permanente y a la próxima Conferencia de Abogados, para recién después de aprobadas dichas bases, encomendarle la redacci3n con arreglo a ellas del proyecto definitivo.

Con estas ideas, quedan sometidos mi ponencia y el despacho de la comisi3n, a la consideraci3n, que espero benevolente de los señores delegados. (*Aplausos*).

SR. PRESIDENTE (SILGUERA). — Se va a votar el despacho de la comisi3n que se ha leído.

—Se vota y es aprobado en general y en particular.

Retribución de los magistrados. — Regulación de honorarios de abogado

SR. SECRETARIO (CANAL FEIJÓO). — (*Leyendo*):

A la Segunda Conferencia Nacional de Abogados.

La Comisión especial de estudio de proyectos no previstos por el programa de la Segunda Conferencia Nacional de Abogados, aconseja la aprobación del siguiente proyecto de resolución, presentado por el doctor Oscar Rodríguez Saráchaga:

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados, teniendo en consideración: 1º — Que la vida ha encarecido considerablemente en los últimos veinte años, por lo menos; 2º — Que si bien las retribuciones de los obreros en ese período han aumentado considerablemente, ha permanecido estacionaria por regla general la retribución de los magistrados y de los abogados, resuelve:

1º — Que la Federación de Colegios de Abogados gestione de los poderes públicos, nacionales y provinciales, el aumento de la retribución de los magistrados.

2º — Exteriorizar el anhelo de que al practicar éstos las regulaciones de honorarios, tengan en cuenta la circunstancia que fundamenta esta moción, para que esas regulaciones se hagan en forma tal que consulten no sólo la naturaleza e importancia del trabajo realizado y la reputación de que goza el abogado cuyo trabajo se estima, sino también los motivos que fundamentan este proyecto.

Oscar Rodríguez Saráchaga. — Julián Barraquero. — Pedro R. Quiroga. Carlos D. Courel. — Guillermo G. Cano. — Wenceslao Frias. — Aurelio Bassi.

—Sin observación, se aprueba en general.

SR. STANCHINA. — Pido un voto de aplauso para el doctor Rodríguez Saráchaga. (*Aplausos*).

SR. QUIROGA. — Que conste que hemos sancionado unánimemente el aplauso para el doctor Rodríguez Saráchaga.

—Se aprueba el artículo 1º.

—En discusión el artículo 2º.

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — Pediría al doctor Rodríguez Saráchaga, la supresión de las palabras «reputación de que goce el abogado», porque la reputación me parece que no debe influir en este caso, salvo en lo que atañe a la moral.

SR. RODRÍGUEZ SARÁCHAGA. — Me parece que debe tenerse en cuenta y regularse mejor al abogado que es honesto que al que no lo es, pero estoy de acuerdo con que se supriman esas palabras.

SR. STANCHINA. — Hay que tener muy presente, en mi opinión, el concepto ético que anima a ese agregado, por lo que creo que la reputación del letrado debe influir en las regulaciones que practiquen los jueces.

SR. QUIROGA. — La comisión acepta la supresión de ese término.

SR. CASTRO. — Yo con mucho sentimiento, voy a votar en contra de la segunda parte. Me parece excelente la primera idea, en cuanto establece la necesidad de la buena remuneración de los magistrados, ya que actualmente es muy exigua al extremo de ser hoy los pobres vergonzantes del país, por su escasa remuneración comparada con el conjunto de necesidades y obligaciones. No me refiero a los del interior, por ser allí más benignas las exigencias de la vida económica...

SR. STANCHINA. — Está equivocado.

SR. CASTRO. — ...sino a aquellos centros populosos de la República, en que el encarecimiento de la vida diariamente se acrecienta y la remuneración jamás se aumenta en la misma proporción, como muy bien dice el proyecto. En la Capital Federal, — y pongo un ejemplo, al acaso que será o no, aplicable al interior, porque hablo de lo que conozco —, el sueldo de los magistrados está estacionario desde el año 1906 ó 1910, y el costo de la vida desde ese entonces se ha duplicado hasta el presente. Cualquiera empleado principal del gobierno percibe más que un juez, y cualquier comerciante en las ventas de una semana gana más que un miembro de la Corte.

En cuanto a la segunda parte, me parece que no es necesaria. Los magistrados tienen medios suficientes a su alcance para juzgar cuál es la remuneración que merece un abogado, y cada profesional dispone de muchos recursos para hacer valer el derecho que tiene dentro del mismo Código de Procedimientos.

SR. VILLEGAS BASAVILBASO. — Voy a oponerme a la moción en esa parte, pues a esta Conferencia, dados los fines y propósitos que la han guiado, no le corresponde hacer una declaración tan personal para nosotros, como es la de que se nos aumenten los honorarios. Creo que no corresponde una manifestación de esa naturaleza, pues no coincide con el trabajo que hemos realizado, que es puramente doctrinario.

SR. RODRÍGUEZ SARÁCHAGA. — Quiero hacer constar lo siguiente: en esta asamblea vamos siguiendo un poco, quizá deficientemente, lo que se hace en asambleas análogas. Así, en distintos Estados de Norte América, casi todos los años celebran asamblea las asociaciones forenses de la Unión, en las que se tratan toda clase de asuntos, y uno de los que más ha preocupado a esas asambleas es éste, porque aunque parezca que la vida allí es más cara que aquí, no lo es, y si bien somos sacerdotes, somos sacerdotes que necesitamos igualmente vivir, razón por la cual a nosotros, como también, y sobre todo, a los que, más o menos pronto, nos sucederán en el ejercicio profesional, debe preocupar esta cuestión.

Lo mismo se ha hecho en Francia; además, miembros de la Federación de Colegios de Abogados han tomado parte en un congreso verificado el 25 de Mayo del año pasado, en Nantes, al que concurrieron distinguidos profesionales franceses y donde se trataron cuestiones de esta naturaleza. Es que, señor presidente, se trata de una cuestión interesante porque envuelve a la dignidad personal y pone al letrado hasta a cuabierta de su posible propia inconducta.

Por eso, el Colegio de Abogados de Buenos Aires, en su sesión del 28 de Abril de 1924, decidió, por unanimidad, dirigirse a los tribunales superiores de

la Capital Federal para solicitarles que, al ejercitar las funciones de regulación de honorarios profesionales, tomaran en cuenta los elementos indispensables — de orden económico, jurídico y científico — para la determinación del justo valor de los trabajos y servicios prestados. Decidió también, por el interés general del asunto, hacer circular en un folleto impreso, el texto de la nota redactada por el doctor Mario A. Rivarola y que se dirigió a dichos tribunales.

SR. CARRANZA. — También hay excepciones.

SR. RODRÍGUEZ SARÁCHAGA. — Naturalmente, eso sucede en todas partes; todos necesitamos vivir, el abogado también debe vivir. «Primero es vivir, después filosofar», decían los antiguos. Y no debemos olvidar que muchas veces situaciones difíciles de vida llevan a la inconducta a espíritus no bien templados.

SR. GARCÍA ZAVALÍA. — Creo que como juez estoy habilitado para apoyar la moción del doctor Rodríguez Saráchaga. En mi tarea judicial ha sido siempre una de las mayores preocupaciones no ser suficientemente equitativo en la manera de apreciar el trabajo de los profesionales. He tenido más bien un criterio subjetivo que objetivo, la naturaleza del pleito, sus resultados, la cuantía del trabajo, la misma importancia jurídica que tiene, etcétera. Por eso apoyo calurosamente el proyecto como, asimismo, porque la razón principal que acaba de indicar el doctor Rodríguez Saráchaga, en cuanto al estado económico, me parece también muy acertada. Nuestro Código de Procedimientos en lo Civil de la provincia de Tucumán contiene una serie de reglas para llegar a determinar la cuantía de los honorarios, pero siempre sin perjuicio de que puedan apreciarse dentro de la equidad y del sano criterio del juez. Creo que no debe dejarse de tener en cuenta esa situación económica de que se ha hecho mérito. Y si la asamblea ha tenido la gentileza de referirse a los sueldos de los magistrados, de los cuales no me quejo, voy a votar en el sentido de que se apruebe la indicación formulada, es-

pecialmente por las razones de ética expuestas por el doctor Rodríguez Saráchaga.

Hay una observación respecto a la reputación del abogado. A veces un abogado de mala reputación, gana una cuestión con toda la razón del mundo y con todo el apoyo de la ley, y en mi concepto, no habría por qué castigarlo en ese caso determinado.

Los jueces no somos autómatas en nuestras actuaciones; desempeñamos nuestras funciones con un criterio altamente sereno y sin pasión alguna.

Estos son los motivos que me inducen a apoyar el proyecto del doctor Rodríguez Saráchaga.

SR. CASTRO. — En principio no estoy en desacuerdo con el proyecto presentado por el doctor Rodríguez Saráchaga, pero voy a votar en contra de su aprobación por razones de oportunidad.

Es muy exacto que en Norte América da buenos resultados, pero es que allí hay ambiente propicio para una cuestión de esta naturaleza, y aquí no lo tenemos; habría que crearlo y vivirlo un tiempo para poder aceptar este proyecto, sin que se nos atribuyan intenciones encubiertas.

Si esto se llegara a obtener para cuando se celebre otra Conferencia, sería el momento de tratarlo; pero ahora es completamente inoportuno, y lo llamo así porque produciría tal vez efectos contrarios al que nos proponemos conseguir con él.

SR. QUIROGA. — Pido que se cierre el debate.

SR. CASTRO. — Descartaría hacer una simple manifestación, señor presidente.

SR. GARCÍA ZAVALÍA. — Pido la palabra, para aclarar un concepto.

SR. CASTRO. — Debo aclarar también que con mucha más razón voy a votar en contra del proyecto del doctor Rodríguez Saráchaga en cuanto se refiere a la retribución de los abogados en relación con su reputación. No lo creo un sistema apropiado, ya que ningún juez podría fundar una regulación en ese considerando.

En esta Conferencia se encuentran presentes magistrados que representan a poderes judiciales y no me explico

cómo se pretende que estos delegados salgan votando favorablemente este asunto. Además el doctor García Zavallia hace un momento nos manifestó que no necesitaba de este proyecto para regular bien los honorarios. Yo creo que con las exposiciones que se han hecho sobre este proyecto, ya hemos conseguido lo principal, por lo menos con los magistrados presentes, y esto sin necesidad de que se haga una votación sobre el punto.

Sostengo que no es ésta la oportunidad de votar este punto, y si lo hiciéramos nos expondríamos a un comentario ridículo y bastante molesto.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Si la aclaración que va a formular el doctor García Zavallia va a ser como la del doctor Castro, no puedo permitirle el uso de la palabra, puesto que el doctor Castro ha fundamentado su oposición y no ha hecho ninguna aclaración. (*Risas*).

SR. CASTRO. — Es verdad, me he aprovechado un poco.

SR. GARCÍA ZAVALÍA. — Es para una simple aclaración, señor presidente.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Entonces tiene la palabra el señor García Zavallia.

SR. GARCÍA ZAVALÍA. — Ratificando mi concepto anterior, debo decir que los jueces no podemos tener otro propósito que el de realizar el bien y hacer justicia; no puede ni siquiera pensarse que cuando un juez falla una causa de esta naturaleza, dentro de lo que queda librado a su criterio y sin perjuicio de las normas que en principio establece el procedimiento, no puede ni siquiera pensarse, decía, que un juez pueda tener una relación o vinculación especial que lo ate a abogado determinado. De manera que el proyecto del doctor Rodríguez Saráchaga no tiene otro significado que el de indicar normas de criterio que serán apreciadas en cada caso como corresponda, y no siendo esto nada más que un anhelo de la Conferencia, creo que no puede haber inconveniente alguno para apoyar el proyecto en discusión.

SR. QUIROGA. — Había hecho una moción en el sentido de que se cerrase el debate.

VARIOS SEÑORES DELEGADOS. — Que se vote.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Pido al señor delegado doctor Cano tenga la bondad de ocupar la presidencia, pues deseo hacer uso de la palabra para referirme al proyecto del doctor Rodríguez Saráchaga, y siempre que la asamblea me lo permitiese...

VARIOS SEÑORES DELEGADOS. — No hay ningún inconveniente.

— Ocupa la presidencia el doctor Cano.

SR. SILGUEIRA. — Pido la palabra.

Yo voy a pedir al autor de este proyecto, y a la asamblea, que se suprima de esta ponencia el artículo 2º.

Esta es una Conferencia que se ha organizado con el propósito de tratar asuntos de interés general para la legislación, la justicia y el foro. Su programa lo está diciendo: formación del instituto de derecho, correlación entre los derechos civil y comercial en materia de obligaciones, etcétera, es decir, un programa de asuntos únicamente de interés público, mirando al presente y al futuro del país, sin preocuparse para nada de los intereses gremiales de los abogados. La manifestación de voluntad o anhelo de la asamblea sobre el particular, vendrían a dar una nota que no armonizaría con el espectáculo que acaba de dar ella ante todo el país. Caeríamos en una minucia que no estaría de acuerdo con el alto nivel y las altas aspiraciones que han informado el propósito y desarrollo de esta Conferencia.

Esto en cuanto al punto de vista general. En lo que se refiere a la declaración en sí misma, la considero redundante puesto que los jueces de toda la República, lo consignan o no los códigos de procedimiento, tienen en cuenta las circunstancias a que se refiere la ponencia para efectuar la regulación de honorarios. Por estas breves razones pediría al doctor Rodríguez Saráchaga, a la asamblea y a la comisión que ha despachado este asunto, que suprima la segunda parte del proyecto, dejando subsistente la primera.

SR. STANCHINA. — Algunos códigos, como el de la provincia de La Rioja, dis-

ponen que el máximo de la estimación total de los trabajos judiciales que debe pagar cada litigante, será un 25 % de la cosa litigiosa y, como hay juicios en que el monto de lo reclamado no excede de 500 pesos, el honorario del abogado, a pesar del trabajo realizado, resulta irrisorio en muchos casos. Lo expuesto podría servir de fundamento para que en la ahññññ provincia, que disintirá la reforma de su código, se modifique el límite establecido, en cuya virtud, opino, que debe formularse dicha declaración, que servirá para que las distintas comisiones que tengan a su cargo la reforma de las leyes procesales, no dejen de considerar, al referirse a esta materia, el anhelo de la Conferencia.

SR. BERGHMANS DONCEL. — Ante todo observo que hay una contradicción en el criterio que objeta sólo la segunda parte de este despacho y no la primera, porque se funda en que la índole general del programa que estamos tratando no admite considerar cuestiones relativas a intereses personales; el mismo argumento podría hacerse para pedir el retiro de la primera parte que se refiere a la retribución de los servicios de los magistrados que son, si se quiere, de otra naturaleza, pero que sin duda alguna se refiere a intereses personales. Ahora el doctor Stanchina nos ofrece la oportunidad de establecer que no se trata de un asunto egoísta, sino esencialmente legal, porque nos ha dicho que hay algunos códigos de procedimientos cuyas disposiciones sobre regulación de honorarios son evidentemente injustas. Esta Conferencia Nacional de Abogados, que tiene en vista o anhela la reforma de la legislación, puede pronunciarse sin temor sobre los inconvenientes que encuentre en este orden de cosas estableciendo bases para subsanarlos. Hay que tener en cuenta que se trata de una cuestión que está considerada por la ley y se refiere a la labor de los abogados que colaboran como auxiliares de la justicia. No coincide, pues, con el pensamiento del doctor Silgueira y entiendo que la Conferencia debe pronunciarse ante todo sobre la primera parte de la cuestión y después entrar a considerar la segunda.

SR. CHEDUFAU. — Creo que la indicación del doctor Rodríguez Saráchaga va a triunfar. Y está bien que triunfe en estas condiciones, porque triunfará habiendo dejado a salvo los miembros de la Conferencia, esta cuestión de conciencia, de una manera tan elocuente como lo ha hecho el doctor Silgueira. Pero me permito observar al doctor Silgueira con todo respeto, que la enmienda que propone a la ponencia en discusión, es peor que el soneto. Queda subsistente la circunstancia reglamentada en el artículo 1º y los abogados hemos votado para los jueces una manifestación de anhelo de aumento de la retribución de sueldos. Es una situación acaso más desairada en la que ahora cedamos que si nosotros nos aviniéramos a consentir que se conociera que tenemos interés en que se aumenten los honorarios. Yo creo, señores delegados, que una ponencia en estos términos no significa otra cosa sino que el Congreso en sus manifestaciones sea consecuente con el deseo de que el trabajo profesional sea mejor remunerado progresivamente. En esta Conferencia nos hallamos presentes los delegados de los Colegios, pero no se hallan presentes los abogados de todo el país. Yo creo no tener mandado para votar en contra de una cuestión de esta naturaleza; me hubiera sentido cómodo para no opinar si la cuestión no se hubiera planteado, pero una vez planteada yo quiero ser leal y votar a favor, porque no sería leal si votara en contra.

SR. VILGRÉ LA MADRID. — Yo quería hacer notar que todos los abogados de la República están representados en la Federación de Colegios de Abogados y entre sus deberes primordiales y una de las bases o razones de su existencia, está la defensa de sus asociados, y entiendo que es ante esa Federación, que tiene también un interés gremial, donde deben plantearse esta clase de asuntos que afectan al gremio en su faz económica.

Voy a votar en contra de la moción formulada por el doctor Rodríguez Saráchaga, por creer que no es éste el lugar ni la oportunidad, y por que la Conferencia no está autorizada para

tratar estos asuntos que afectan únicamente a los abogados.

SR. LAFAILLE. — Señor presidente: Yo voy a votar a favor del despacho de la comisión y creo hacerlo con toda independencia de criterio. He escuchado muy complacido las razones caballerescas expuestas por algunos de los delegados. Se ha dicho, entre otros argumentos: nosotros mismos no debemos votar algo que favorezca a nuestros intereses pecuniarios; pero aparte de que nosotros aquí estamos representando no tan sólo nuestras personas sino a todos los abogados del país, el punto en debate no solamente afecta a un gremio, sino las conveniencias colectivas para las cuales no es indiferente que los letrados dejen de estar retribuidos con arreglo a su trabajo. Es tal vez la mejor manera de conseguir un foro honesto y que llene sus fines. Asegurar, entonces, al abogado una justa compensación, es contribuir eficazmente a la buena justicia dentro del país.

Eso por una parte; por otra, se ha dicho que ésta es una asamblea para dilucidar temas de orden científico; es cierto en principio. Pero, después de haber consagrado todo nuestro tiempo a los problemas de esta índole, no sería justo censurarnos por invertir estos últimos minutos en un asunto que no solamente tiene atinencia con el interés privado de los profesionales sino que es de beneficio general. Según se ha visto, a mí me parece también que habiendo votado como un anhelo el aumento de los sueldos de los magistrados, sería incongruente que ahora aparciésemos con escrúpulos para proceder de igual modo respecto de los abogados, cuando lo uno es tan justo y conveniente como lo otro.

Por lo demás, en la Primera Conferencia se aprobó esta misma proposición. Debemos insistir, y nadie más habilitado que este cuerpo, constituido por hombres que conocen de una manera directa cuales son los inconvenientes de la vida forense. Está en el concepto de todos, señor presidente, que la profesión está muy mal retribuida, sobre todo en forma muy desigual, que no se consulta el mérito del esfuerzo, ni se

estimula al abogado que estudia; así, hay más honorarios en los juicios ejecutivos que en los ordinarios; en las suesiones más que en los pleitos controvertidos. Llamar la atención de los poderes públicos sobre la necesidad de que se proceda con un criterio justo, es un deber estricto de esta Conferencia.

SR. RÍOS. — Pido la palabra para hacer notar simplemente que la distinción hecha por el doctor Silgueira tiene su razón de ser. Para aumentar la retribución de los jueces no hay más procedimiento que aumentar los sueldos del presupuesto; en cambio para aumentar los honorarios de los abogados hay que adoptar otro procedimiento como, por ejemplo, sería la fijación de un arancel.

SR. CASTIGLIONE. — Voy a demostrar lo improcedente de la ponencia en cuanto hay que tener en cuenta la retribución de que goza el abogado...

VARIOS SEÑORES DELEGADOS. — La ha retirado su autor.

SR. LIAN DE ROSOS. — Yo creo que hemos venido a esta Conferencia a tratar cuestiones de orden general y no asuntos que nos afecten personalmente. No creo que sea esta Conferencia la que deba ocuparse de esta clase de asuntos, sino la Federación de Colegios de Abogados que puede dirigirse a los poderes públicos en la forma que crea más conveniente. Me parece que si tratamos estas cuestiones, hasta empequeñecemos el objeto de estas reuniones.

SR. STANCHINÁ. — Creo que está de más toda discusión. Cada uno de los delegados tiene formado criterio al respecto, por lo que hago moción para que se cierre el debate.

SR. DAY. — Esta Conferencia ha sancionado un reglamento por el que se concede una vez el uso de la palabra a cada uno de los delegados, y se está apartando de ese reglamento.

SR. PRESIDENTE (CANO). — En esta parte de la discusión, el reglamento que rige es el de la Cámara de Diputados de la Nación, que hemos adoptado como supletorio.

SR. DAY. — En la Cámara de Diputados de la Nación es distinto, porque

se concede la palabra a cada miembro una vez en la discusión en general y cuantas veces se quiera en la discusión en particular.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Hay una moción de cerrar el debate.

Se va a votar.

—Se vota y es afirmativa.

VARIOS SEÑORES DELEGADOS. — Que se rectifique la votación.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Se va a votar nuevamente la moción de cerrar el debate.

—Se vota y es afirmativa.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Han votado por la afirmativa 23 señores delegados sobre un total de 40. Queda, en consecuencia, cerrado el debate.

Corresponde votar el artículo 2º del proyecto.

SR. RODRÍGUEZ SARÁCHAGA. — El doctor Silgueira me ha pedido que retire la moción que he formulado y hasta ahora no he podido contestarle nada. Descarta que se me haga el favor de concederme el uso de la palabra por un instante.

VARIOS SEÑORES DELEGADOS. — Que se reabra el debate.

SR. RODRÍGUEZ SARÁCHAGA. — Yo no quiero que se reabra el debate: ruego, sólo, se me permita contestar el pedido del doctor Silgueira.

SR. ALVO. — Yo mociono para que se reabra el debate.

—Apoyado.

SR. QUIROGA. — Pido que se vote el artículo.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Primero debe votarse la moción de reabrir el debate.

Si no se hace uso de la palabra, se votará la moción de reabrir el debate.

—Se vota y es rechazada.

SR. PRESIDENTE (CANO). — En consecuencia, queda cerrado el debate.

Se votará en particular el artículo 2º.

—Se vota y es rechazado. (*Aplausos*).

SR. CHEDUFAU. — Pido que se tomen los votos que hay por la negativa.

SR. STANCHINA. — Deseo que se explique por la presidencia qué es lo que se vota, porque entre los señores delegados parece existir contradicciones al respecto.

SR. PRESIDENTE (CANO). — La presidencia ha proclamado rechazado el artículo 2º porque hubo mayoría en contra. Ahora, si los señores delegados desean que se rectifique la votación, se procederá a tomarla nuevamente.

VARIOS SEÑORES DELEGADOS. — Que se rectifique la votación.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Se va a votar nuevamente si se acepta el artículo 2º del despacho de la comisión.

—Se vota y resulta rechazado.
(*Aplausos*).

SR. PRESIDENTE (CANO). — En consecuencia, queda rechazado el artículo 2º.

SR. GARCÍA ZAVALÍA. — Pido la palabra.

Voy a hacer moción de reconsideración en el sentido de que puedan contemplarse nuevamente en su totalidad estas situaciones que se han creado con las distintas sanciones recaídas sobre estos dos artículos del proyecto. Desde ya anuncio, como miembro de la magistratura, que no podemos aceptar bajo ningún punto de vista, el quedar como únicos favorecidos por un anhelo de esta naturaleza. En consecuencia, pido que se reconsideren estos dos artículos y sean dejados sin efecto. (*¡Muy bien!*).

De esta manera podríamos votar nuevamente el artículo 1º y salvar la situación creada.

SR. STANCHINA. — Debo hacer presente que adhiero en un todo a la moción de reconsideración formulada por el señor delegado García Zavala.

SR. PRESIDENTE (CANO). — Está en discusión la moción de reconsideración formulada por el doctor García Zavala.

SR. COMINAS SEGURA. — Pido la palabra.

Desearía que la Conferencia se haga cargo de una circunstancia que es de carácter práctico.

Los hombres que vivimos la vida pública de las provincias, que hemos desempeñado funciones judiciales en ellas, sabemos hasta qué punto llegan las dificultades para conseguir una remuneración equitativa para el Poder Judicial. Es sumamente difícil el problema que se les plantea a las legislaturas de provincia para remunerar a la justicia de acuerdo con la importancia que realmente tiene y con las necesidades que la vida hace imprescindibles.

Si la Conferencia Nacional de Abogados sancionara una declaración de carácter general tendiente a que se mejorara la remuneración de los jueces en las magistraturas de provincia, habría realizado un acto de suma importancia y habría dado fundamentos y argumentos serios a los hombres que han de propiciar esta iniciativa ante los poderes públicos de los Estados locales. Pero podría solucionarse este problema con una declaración de carácter general, que involucrara no solamente a la magistratura sino también a los trabajos de carácter jurídico, ya sean de jueces o de los abogados en el ejercicio de su profesión.

En una declaración de carácter general con una redacción distinta a la que actualmente tiene, podría expresarse, por ejemplo, que es una necesidad que la retribución de los trabajos jurídicos debe efectuarse con más equidad.

—Ocupa la presidencia el doctor Silgueira.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). —Hago presente que lo que está en debate es la moción de reconsideración. Sobre ella pueden hablar los señores delegados.

SR. DAV. — Pido la palabra.

Voy a votar en contra de esa moción de reconsideración porque entiendo que la situación de los jueces es muy diferente que la de los abogados. Los jueces en todo el país están mal remunerados. Y la mala remuneración viene porque es una tradición en todo el país la de que los jueces son, como quien dice, la conciencia de la administración pública. Se ha afirmado con alguna razón, que para designar los jueces, la elección no siempre recae sobre los abogados más

capaces, y esto lo digo con todo el respeto que me merecen los jueces que forman parte de esta asamblea. De manera que hay una razón de economía, de justicia, de conveniencia general en mantener esa sanción que en nada menoscaba los prestigios de esta Conferencia. Por estas razones voy a votar en contra de esta moción de reconsideración porque entiendo que es conveniencia pública aumentar la remuneración de los jueces, y con ello indirectamente se llegaría a aumentar la remuneración de los abogados.

SR. CASTIGLIONE. — Hago moción de orden de cerrar el debate.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar la moción de cerrar el debate.

— Se vota y es afirmativa.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar la moción de reconsideración del artículo 1°.

— Se vota y es negativa.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — queda concluido el asunto.

Se va a pasar a considerar la orden del día siguiente.

6

Estadística judicialia

SR. SECRETARIO (CANAL FEIJÓO). — (*Leyendo*):

A la Segunda Conferencia Nacional de Abogados:

La Comisión especial de estudio de proyectos no previstos por el programa de la Segunda Conferencia Nacional de Abogados, aconseja la aprobación del siguiente proyecto de la resolución presentada por el doctor Oscar Rodríguez Saráchaga:

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados, reunida en la ciudad de Córdoba en el año 1926, gestionará de los poderes públicos por medio de la Federación de Colegios de Abogados y si ésta lo considera necesario por medio de los Colegios de Abogados de Buenos Aires, de las provincias y de los territorios nacionales la confección de estadísticas sobre la base de la ficha individual, que faciliten la mejor distribución y organización de la tarea

judiciaria impidiendo el aumento de juzgados que no fueren necesarios, y permitan el traslado o supresión de algunos de los actuales que no lo sean o creación de nuevos si las exigencias forenses lo requieren.

Oscar Rodríguez Saráchaga. — Carlos D. Courel. — Pedro R. Quiroga. — Guillermo G. Cano. — Aurelio Bassi. — Wenceslao Frías.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— Se vota y es aprobado en general y particular.

7

Bibliotecas de especialización jurídica. — Cátedras de ética y cultura forense

SR. SECRETARIO (CANAL FEIJÓO). — (*Leyendo*):

A la Segunda Conferencia Nacional de Abogados:

La Comisión especial de estudio de proyectos no previstos por el programa de la Segunda Conferencia Nacional de Abogados, aconseja, por moción del doctor Oscar Rodríguez Saráchaga, la ratificación de las siguientes resoluciones aprobadas por la Primera Conferencia:

«Recomendar a los Colegios de Abogados y a las autoridades judiciales (donde no hubiere Colegio de Abogados) la creación de bibliotecas, sobre todo de especialización jurídica, para el uso de los miembros de las administraciones de justicia y de los foros».

«Propiciar, como lo ha hecho el Colegio de Abogados de Buenos Aires, la creación en todas las escuelas de derecho del país, de cursos de ética y cultura forense.»

«Donde no hubiese escuelas de derecho, los Colegios de Abogados locales darán conferencias sobre ello, pidiendo su auspicio a los magistrados y miembros del foro»

«Recomendar a los miembros, sea de la administración de justicia, sea de los foros locales, el uso de las reglas éticas y de cultura forense vigentes en la Asociación de Abogados de Estados Unidos que tiene adoptadas como suyas el Colegio de Abogados de Buenos Aires, y las que existen en las legislaciones que han servido de fuentes al derecho argentino.»

«Manifestar su anhelo y su voto por que se establezca en las Facultades de Derecho de la República, condiciones de idoneidad moral para poder ingresar a ellas y para poder recibir el título de abogado, así como el de doctor en jurisprudencia.

Oscar Rodríguez Saráchaga — Pedro R. Quiroga. — Carlos D. Courel. — Guillermo G. Cano. — Wenceslao Frías. — Aurelio Bassi.

SR. PRESIDENTE (SILVEIRA). — En discusión el proyecto que se ha leído.

SR. QUIROGA. — Pido la palabra.

Al miembro informante que habla, le sería muy difícil agregar conceptos que compendiaran mejor la idea fundamental del proyecto que acaba de leerse, y por ello se limita a dar por reproducidos los mismos términos en que está concebido el proyecto, como el mejor fundamento para aconsejar a la Conferencia que se sirva prestarle su aprobación, conforme lo aconseja la comisión especial.

SR. STANCHINA. — El proyecto que está en discusión ha sido ya materia de estudio en la Primera Conferencia.

SR. RODRÍGUEZ SARÁCHAGA. — En este caso no se hace más que reproducir cosas que ya resolvió la Primera Conferencia, pero que desgraciadamente no se han cumplido y yo entiendo que se debe machacar sobre el hierro frío para ver si se consigue algo de esta manera.

SR. CASTIGLIONE. — Hago moción de que se cierre el debate.

—Asentimiento.

—Se vota el proyecto y es aprobado.

8

Provisión de cargos judiciales por las intervenciones nacionales

SR. SECRETARIO (CANAL FELJÓO). — (*Leyendo*):

«Proyecto sobre provisión de cargos judiciales por las intervenciones nacionales».

A la Segunda Conferencia Nacional de Abogados:

Considerando el proyecto de resolución del señor delegado doctor Salvador A. Doncel sobre provisión de cargos judiciales por las

intervenciones nacionales, la Comisión especial de estudios de proyectos no previstos por el programa de la Conferencia, aconseja aprobar la siguiente resolución:

Ratificar la declaración de la Primera Conferencia Nacional de Abogados que dice así:

1º — Que vería con agrado que en los casos de intervención federal a las provincias y que afecten al Poder Judicial, no se provean los cargos declarados vacantes con abogados que no reúnan los requisitos exigidos por la Constitución y leyes de las provincias intervenidas.

2º — Expresar el anhelo de que este principio se haga efectivo en las instrucciones a los comisionados federales o en una futura ley de intervenciones.

Julián Barraquero. — Oscar Rodríguez Saráchaga. — Ramón Morey. — Carlos D. Courel. — Guillermo G. Cano.

SR. QUIROGA. — Como en el caso anterior estimaría ociosa cualquier palabra que agregara, que no fueran las que están en el proyecto, aconsejando la aprobación del mismo.

SR. RODRÍGUEZ SARÁCHAGA. — Es una ratificación de un voto anterior.

SR. DONCEL. — Efectivamente, es un asunto en el que hay unanimidad de opiniones y que ya ha tenido sanción. Pero me creo obligado a decir unas pocas palabras para explicar la razón o el por qué, los representantes del Colegio de Abogados de San Juan hemos resuelto pedir una nueva declaración a la Conferencia, y hemos venido a molestar la atención de los señores delegados con este asunto.

Aparentemente fué un éxito la declaración cuya reiteración se pide, por cuanto al impartirse las instrucciones al interventor que fuera a San Juan y que actualmente está allí, se incluyó entre ellas expresamente la que nos ocupa. El Colegio de Abogados, con gran satisfacción, fué a expresar su análogo sentir ante el señor interventor y pudo apreciar de inmediato que esas instrucciones no serían cumplidas en absoluto. La gestión se hizo con toda insistencia, pero con resultado tan contrario que no sólo se prescindió en absoluto de esas instrucciones y se organizó una administración de justicia sin las condiciones de conocimiento y sin los requisitos le-

gales para asumir los cargos, sino que se hizo con un decreto en que se agradeció al foro de San Juan, declarando que era imposible constituir tribunales independientes con abogados locales, imputación gratuita que nos indignó.

Los abogados de San Juan lamentamos tener que ocupar la atención de la Conferencia con motivo de nuestras cosas locales; lo hacemos del punto de vista de que es uno de los objetivos de la Federación y también de que defendemos un interés común, porque lo que ocurre hoy en una provincia, sucederá mañana en otra. La brevedad del término me obliga a limitarme, y quiero referir solamente, para mayor fundamento y convenimiento de los señores delegados, algunas gravísimas irregularidades cometidas en San Juan.

Daré dos muestras de cómo han procedido aquellos señores: la Corte de Justicia de la provincia, compuesta por los magistrados llevados por la intervención, entre los cuales hay secretarios de la justicia de la Capital, ha declarado que sus miembros son jueces de la Nación y por tanto sujetos a juicio político ante el Congreso por responsabilidad en el desempeño de sus cargos, y recientemente, en este año, con motivo de ataques personales fundados en haber perdido la confianza que les dispensaba el señor interventor, los tres miembros de la Corte presentaron sus renuncias ante la intervención, la que les fué rechazada «porque contaban con la confianza del señor interventor».

SR. CASTIGLIONE. — Pido la palabra para apoyar efusivamente esta declaración semejante a la que tuve el honor de hacer en la Primera Conferencia Nacional de Abogados, amargado con los sucesos de mi provincia y con la clara visión de que esta justicia volante de Santiago iría a visitar las provincias de San Juan y Mendoza. *(Risas. Aplausos)*.

SR. STANCHINA. — Creo conveniente que este proyecto pase a estudio de la Comisión de Estudios Legislativos, no sólo porque afecta, implícitamente, la inamovilidad de los funcionarios judiciales de las provincias, sino también, porque ya se ha declarado por la Con-

ferencia de urgente necesidad la reforma de la Constitución Nacional. Hago moción en tal sentido.

—Apoyado.

SR. QUIROGA. — La Comisión no tiene inconveniente en aceptar la moción del señor delegado doctor Stanchina, y la hace suya.

SR. COROMINAS SEGURA. — En realidad, señor presidente, no se trata de una reforma de la legislación vigente del país, sino del cumplimiento de las disposiciones de orden constitucional que rigen la organización política de cada uno de los estados federales, de modo que no habría que esperar un dictamen; es una necesidad en todas las provincias el cumplimiento normal de las prescripciones constitucionales en cuanto se refiere a las calidades y condiciones que deben llenar cada uno de los magistrados. Lo hemos experimentado en todas las provincias, como bien lo decían los señores delegados de Santiago y San Juan, y también como creo yo respecto de la provincia de Mendoza. Pero no hay que extrañarse porque en realidad se ha seguido una práctica viciosa aun en la organización permanente del Poder Judicial. Así ocurre en nuestras provincias que los magistrados nombrados con carácter permanente por los poderes locales también se encuentran en la misma situación de carencia de las condiciones constitucionales. Por eso la declaración sería de carácter general, «que es útil y necesario que se cumplan esas prescripciones». Repito, no habría necesidad de esperar un dictamen de la Comisión Permanente de Estudios Legislativos que sólo podría dictaminar sobre la necesidad de una reforma.

Es sólo una reiteración del pedido anterior a los poderes públicos de que cumplan con su deber en lo que se refiere a algo tan importante como es la organización de la Administración de Justicia.

Por estos motivos, pediría que el asunto no pase a la Comisión de Estudios Legislativos, sino que la Conferencia sancione de inmediato una declaración

por la que se manifieste que esto constituye una verdadera necesidad.

Nada más. (*Aplausos*).

SR. STANCHINA. — Pido la palabra.

Sin perjuicio de que se haga esa declaración, podría pasar el proyecto a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos para que formule las bases sobre las que reposaría la inamovilidad de los magistrados judiciales cuando se decreten intervenciones federales.

SR. QUIROGA. — La comisión al aceptar la proposición de que se trata, entendió, que estas dos situaciones no son excluyentes.

SR. DONCEL. — Entiendo que la moción es complementaria y no substituye la parte del artículo 2º que se refiere a la situación de los magistrados en tiempo de intervenciones; pero mi aclaración no se refiere precisamente a movilidad o inamovilidad de estos funcionarios con motivo de las intervenciones, sino a la provisión de estos cargos con arreglo a las leyes locales no con la supresión de los regímenes autónomos de las provincias.

SR. QUIROGA. — Justamente; la comisión sostiene que son cuestiones completamente distintas y complementarias a la vez.

SR. STANCHINA. — La cuestión que plantea el señor delegado por San Juan tiene dentro de la misma Constitución los resortes necesarios para ser resuelta, pues si para ser juez se exigen ciertos requisitos, como ser, entre otros, el de la edad, y el magistrado designado no los reúne, cualquier miembro del foro o litigante, por así decirlo, puede promover su destitución, a cuyo efecto le basta con formular la denuncia del caso ante el poder respectivo.

SR. CASTIGLIONE. — En la práctica no tiene remedio.

SR. STANCHINA. — Ya se presentó un caso, señor delegado.

Se encontraba desempeñando las funciones de juez, un ciudadano que no reunía los requisitos establecidos por la Constitución y se lo separó de su cargo.

SR. CASTIGLIONE. — Pero en la práctica en general no hay remedio.

VARIOS SEÑORES DELEGADOS. — No tiene remedio.

SR. DAY. — Pido la palabra, señor presidente, para referirme al proyecto.

He lamentado, señor presidente, que se haya formulado una moción tan particular con respecto a una situación de provincia, porque pudiera llegar a atribuirse a este debate otro motivo u otro carácter del que realmente tiene. Yo no tengo ningún temor, señor presidente, de infundir sospechas, dada la actuación política que he desarrollado, completamente alejada de la situación actual. Por esto, yo invitaría a los señores delegados, que hagamos la menor alusión posible a cualquier situación política de la República, porque podría afectar la imparcialidad con que debe proceder esta asamblea. (*Muy bien!*).

El proyecto debería ser más amplio, y no referirse únicamente a los requisitos que la Constitución o leyes locales establecen puesto que debemos lamentar ciertas fallas de la Constitución al no establecer ciertos requisitos, como ser, los de la competencia y residencia. Una prueba de ello, señor presidente, es la siguiente: al querer los poderes públicos constituidos de una provincia, proveer, de acuerdo con la Constitución y las leyes locales, las vacantes de la Administración de Justicia, de treinta magistrados designados, únicamente cinco fueron de esa provincia, vale decir, que todos los demás fueron importados. En consecuencia estos funcionarios no son conocidos por los ciudadanos de esa ciudad, ni por el foro de esa provincia, y probablemente no tienen versación suficiente, ni conocimientos especiales sobre la legislación provincial; no me refiero en este caso a la legislación procesal que es más o menos análoga en todas partes, sino a las que se relacionan con intereses económicos, industriales, etcétera, que son particulares de esa provincia.

Por estas razones, señor presidente, voy a proponer un agregado para que se refiera, no sólo a la intervención en los poderes públicos del Estado, sino también que se tenga en cuenta, o más bien que se exija cierta residencia en

la provincia para la que se los designa y si es posible exigir cierta versación del candidato a llenar el puesto público.

SR. STANCHINA. — Eso es materia de limitaciones a las disposiciones constitucionales.

SR. QUIROGA. — Así lo entiendo, señor delegado.

SR. STANCHINA. — Quiero significar que si se acepta la moción formulada se limitarán las facultades consignadas en las constituciones provinciales, por lo que entiendo que no estamos en condiciones de hacer declaraciones de esa índole, que son del resorte único y exclusivo de los cuerpos legislativos de cada provincia.

SR. BAUDÓN. — Señor presidente: la cuestión que se refiere a la finalidad anhelada, aspiración que es inherente a todos los principios de orden social y de orden jurídico, es que la Administración de Justicia esté representada, por los más aptos, los más competentes, los más honestos, que son los que lógica e indistutiblemente, mejor representan los intereses sociales. Por estos motivos presto calurosamente mi apoyo al proyecto.

Aunque hablo en una forma relativa, ya que el problema es muy complejo, si se le mira en todas sus perspectivas, desearía hacer una observación que en cierta manera ya ha sido aclarada por el señor delegado que acaba de hacer uso de la palabra. Al generalizar este punto no sólo se magnifican y amplifican cuestiones de hecho, como ha sucedido en determinado momento, sino que se involucra en un concepto general, a 14 provincias o estados federales, sometidos a modalidades, a condiciones legales y reglamentaciones totalmente distintas. Apoyando siempre la conveniencia del derecho o soberanía local, pero salvando este punto de vista, debo recordar que en los momentos de intervención federal a las provincias, en cierto modo, quedan suspendidas todas las leyes y las garantías...

VARIOS SEÑORES DELEGADOS. — En ningún momento.

— Murmullos entre algunos señores delegados.

SR. BAUDÓN. — ... salvo las de orden constitucional. Es éste un principio fundamental, establecido al extremo que los poderes llamados a reglamentarlas y hacerlas cumplir continúan también en sus funciones según cual sea la facultad y el alcance de la intervención decretada. Y más todavía, es una cuestión, no diré compleja, pero sí que se ha diseutido y se discute, la de si las constituciones locales mantienen o no la plenitud de su vigencia, aunque se han inclinado los tratadistas en favor de la efectividad de las disposiciones de orden supremo. Todos estos pequeños aspectos que producidos se hacen cada vez más complejos de interpretar, son los que me hacen salvar mi opinión personal, y amparar a los que han efectuado estos actos circunstanciales, de ser ciertos, ya que seguramente han estado animados de toda buena fe apasionados por las circunstancias del medio. Conviene dar a este proyecto el carácter de un anhelo de orden general por lo que no puede ser sino declarativo.

SR. DONCEL. — Pido que quede constancia que ha habido murmullos de desaprobación ante las palabras pronunciadas por el señor delegado.

SR. STANCHINA. — Que se cierre el debate.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar la moción de cerrar el debate.

— Se vota y es afirmativa.

SR. CANO. — La comisión ha aceptado el agregado propuesto por el señor delegado Day, de que se exprese el anhelo de la Conferencia, de que también en el caso de organización permanente de los poderes judiciales de las provincias, las funciones judiciales sean ejercidas por miembros del foro local.

SR. QUIROGA. — Podría establecerse, que así deberá procederse, no solamente en los casos de intervención, sino también en todos los casos ordinarios.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Que Secretaría redacte el agregado votándose por partes.

— Asentimiento general.

— Se lee el artículo.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar la primera parte del artículo.

—Se vota y es aprobada.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar la segunda parte del artículo.

—Se vota y es aprobada.

—Se vota y aprueba el artículo 2º.

9

Temas para la Tercera Conferencia. — «La tierra agraria»

SR. SECRETARIO (CANAL FEIJÓO). — (*Leyendo*):

A la Segunda Conferencia Nacional de Abogados:

Considerando el trabajo del doctor Manuel B. Gonet titulado «La tierra agraria», la Comisión Especial de estudio de proyectos no previstos por el programa de la Conferencia, aconseja aprobar la siguiente resolución:

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

Recomendar a la Junta de Gobierno de la Federación de Colegios de Abogados de la República que incluya entre los temas a tratar en la Tercera Conferencia las conclusiones del trabajo del doctor Manuel B. Gonet titulado «La tierra agraria», presentado por su autor a la Academia Nacional de Ciencias Económicas en la sesión del 15 de Octubre de 1925.

Julían Barraquero. — Oscar Rodríguez Saráchaga. — Ramón Morcy. — Carlos D. Courel. — Guillermo G. Cano.

SR. QUIROGA. — Es de todos conocida, la importancia del trabajo presentado a la Academia de Ciencias Económicas por el doctor Gonet; como esta importancia es resaltante y como la comisión no se considera habilitada para estudiarlo a fondo, por la premura de tiempo, con que ha tenido que expedirse, lo remite a la consideración de la misma comisión, para que en debate amplio e ilustrado, se le tribute a este tra-

bajo, el homenaje que merece su distinguido autor. (*Aplausos*).

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a votar el despacho de comisión.

—Se aprueba.

SR. GONNET. — Que conste que la votación ha sido por unanimidad.

SR. QUIROGA. — Y con aplausos de la Conferencia.

10

Reforma de la ley de ciudadanía

SR. SECRETARIO (CANAL FEIJÓO). — (*Leyendo*):

A la Segunda Conferencia Nacional de Abogados.

Habiendo estudiado la proposición del doctor Juan Carlos Garay sobre la modificación de la ley de ciudadanía, la Comisión Especial de proyectos sobre temas no comprendidos en el programa de esta Conferencia, aconseja la aprobación del siguiente dictamen:

Pasar la proposición del doctor Juan Carlos Garay a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos.

Pedro R. Quiroga. — Wenceslao Frías. — Aurelio Bassi. — Guillermo G. Cano. — Ricardo Vera Vállejo. — Oscar Rodríguez Saráchaga.

SR. QUIROGA. — La teoría del doctor Garay respecto de este asunto es muy conocida y hace tiempo que se debate aquí y en el extranjero. Dado su alto interés, la Comisión aconseja que se remita a la Comisión Permanente.

SR. CHEDUFAU. — Estoy de acuerdo con el despacho de la comisión en cuanto le da la importancia que para nosotros, país de inmigración, tiene la doctrina de la incorporación de extranjeros en la vida pública, después de una residencia continuada de cinco años y con tal de que hayan desempeñado durante ese término una profesión o un oficio. En lo que estoy en desacuerdo con el despacho de la comisión es en una cuestión de detalle para lo cual solicito una aclaración de la amabilidad de los señores miembros de la comisión; me re-

fiero al destino. El despacho lo destina a la Comisión Permanente; preferiría en este caso que la cuestión se recomendará para ser incluida en la orden del día de la próxima Conferencia de Abogados. Si la comisión no tuviera inconveniente en aceptar esta breve modificación...

SR. QUIROGA. — Por lo que a mí se refiere, y teniendo en cuenta el asentimiento del doctor Rodríguez Saráchaga, no tendría ningún inconveniente en aceptar la proposición del señor delegado.

Por lo tanto, la comisión retira su despacho y reproduce la moción del señor delegado.

— Asentimiento.

SR. CASTRO. — Que conste que la Conferencia no hace ninguna declaración.

11

Expropiación. — Organización legal de los Colegios de Abogados. — Impedimentos para contraer matrimonio. — Nombramiento de síndicos en los concursos civiles.

SR. SECRETARIO (CANAL FELIJO). — (*Leído*):

A la Segunda Conferencia Nacional de Abogados.

Habiendo estudiado las proposiciones presentadas por el doctor H. R. Baudón, sobre expropiación, organización legal de los Colegios de Abogados, impedimentos para contraer matrimonio y nombramiento de síndicos en los concursos de acreedores, la Comisión especial de proyectos sobre materias no comprendidas en el programa de esta Conferencia, aconseja la aprobación del siguiente dictamen:

Pasar las proposiciones del doctor Héctor R. Baudón a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos.

Guillermo G. Cano. — Pedro R. Quiroga. — Wenceslao Frías. — Aurelio Bassi. — Oscar Rodríguez Saráchaga. — Ricardo Vera Vallejo.

SR. QUIROGA. — Pido la palabra.

El señor delegado del Colegio de Abogados de La Plata doctor Baudón, ha presentado a la Conferencia y ésta pasó a consideración de la Comi-

sión Especial este conjunto de iniciativas de trascendental importancia que han sido estudiadas y meditadas, prestándose a los asuntos el interés que realmente tienen no solamente desde el punto de vista jurídico sino también por la preparación e inteligencia del autor de las mismas, y siguiendo la norma de conducta que ha marcado en las ponencias anteriores, aconseja, que la Comisión Permanente de Estudios Legislativos que ha creado esta Conferencia y que debe constituirse en definitiva, sea la que pronuncie la última palabra al respecto.

Creemos así garantizar las iniciativas del doctor Baudón en el sentido de que serán perfectamente estudiadas quizá como nosotros no podríamos hacerlo, en la improvisación perentoria por el cúmulo de despachos que tenemos que producir en el día de hoy, teniendo por otra parte la obligación de concurrir a las sesiones.

Es cuanto puedo informar a la Conferencia fundando el despacho que se ha leído.

SR. CANO. — Pido la palabra.

Hay un error material en el despacho de la comisión de que se ha dado cuenta; se trata de una confusión al redactarlo. El despacho es exacto en cuanto se refiere a las otras iniciativas del doctor Baudón, pero en cuanto a la organización legal de los Colegios de Abogados, la comisión ha entendido despacharla en el sentido de provocar ya el voto afirmativa de la Conferencia. Por lo demás, es una sanción que ya dió la Federación de Colegios de Abogados en sus sesiones de Marzo de este año. De manera que debe tomarse el despacho en ese sentido.

SR. QUIROGA. — Tiene razón el señor delegado doctor Cano; para los proyectos con exclusión del primero, la comisión aconsejó este dictamen.

No hice la salvedad, porque no había oído la lectura de la primera parte del despacho.

SR. PRESIDENTE (SILVEIRA). — A título de explicación diré dos palabras sobre la organización legal de colegios de abogados. Es un asunto de tal naturaleza que si pasara a estudio de la comisión, quedaría rezagado porque el

gobierno de Córdoba, por intermedio de su ministro de Gobierno me ha hecho la declaración de que va a ocuparse de la organización legal del Colegio de Abogados de Córdoba. (*Aplausos*).

Si no se hace observación se dará por aprobado el despacho que se ha leído, con la aclaración en cuanto a la organización de los Colegios de Abogados se refiere.

—Se aprueba.

12

Trabajos para la Tercera Conferencia

SR. SECRETARIO (CANAL, FEIJÓO). — (*Leyendo*):

A la Segunda Conferencia Nacional de Abogados.

Habiendo estudiado el proyecto presentado por el señor delegado del Colegio de Abogados de San Luis, doctor Gilberto Sosa Loyola, sobre proposición de temas para la próxima Conferencia Nacional de Abogados, la Comisión especial de estudio de proyectos sobre materias no comprendidas en el programa de la presente Conferencia, aconseja la aprobación del siguiente dictamen:

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

1º — Solicitar de cada uno de los Colegios adheridos a la Federación de Colegios de Abogados, que envíen a la próxima Conferencia un trabajo sobre alguno de los siguientes temas:

- a) La doble imposición como problema interno y externo en el país;
- b) Las deformaciones de nuestro sistema federal. Las llamadas facultades concurrentes en nuestra Constitución Nacional;
- c) El régimen de la tierra pública y de los minas en la legislación provincial;
- d) La legislación sobre asistencia y disciplina sociales; facultades nacionales y locales al respecto; su delimitación.

2º — Recomendar que dichos estudios se hagan especialmente desde el punto de vista

institucional y práctico que refleje los antecedentes y modalidades propias de cada provincia.

Guillermo G. Cano. — Pedro R. Quiroga. — Wenceslao Frías.—Aurelio Bassi. — Oscar Rodríguez Sarácha-ga. — Ricardo Vera Valtejo.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

SR. CANO. — La comisión ha entendido que los temas propuestos por el autor del proyecto, tienen la importancia suficiente para provocar su estudio y consideración. En virtud de estas razones la comisión no ha tenido inconveniente en aconsejar que se solicite de los Colegios de Abogados un estudio sobre dicho punto, a fin de que pueda ser sometido a la próxima Conferencia Nacional de Abogados.

Ese es el alcance del despacho de la comisión.

SR. GARCÍA ZAVALÍA. — Tengo entendido que esta mañana, a fin de armonizar opiniones, se resolvió pasar a estudio de la Comisión Permanente de Estudios Legislativos un proyecto análogo presentado por los delegados de las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy y al que se había adherido el gobierno de Córdoba.

Por lo que al primer proyecto se refiere, pido que se le destine a estudio de la Comisión Permanente de Estudios Legislativos con la recomendación de que sea despachado con preferencia o urgencia, atendiendo a que se encuentran pendientes de resolución del Congreso, leyes, cuyo contenido impugnamos. Los demás proyectos podrían seguir el curso que estimaran conveniente los señores delegados. Yo creo que por ahora hemos conseguido una sanción moral, que es lo que nos debe bastar.

SR. CANO. — Pido la palabra.

Me parece que no es comparable la sanción de esta mañana y la que la comisión propone sobre este punto; si bien es cierto que por aquella se le destinó a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, no lo es menos, que ahora se recomienda que cada Colegio de Abo-

gados presente, si quiere o puede, un estudio sobre los temas, lo que vendrá a ser una colaboración más para la solución del problema.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Si no se hace uso de la palabra, se votará en general.

—Se vota y es aprobado.

—Se vota y aprueba en particular sin modificación.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Queda sancionado el proyecto.

13

Viajantes de comercio y contrato de representación

SR. SECRETARIO (CANAL FELJÓO). — (*Leyendo*):

A la Segunda Conferencia Nacional de Abogados.

Habiendo estudiado el proyecto presentado por los señores delegados, doctores R. S. Castillo, S. A. Doncel, E. Reviriego y V. Rodríguez Ribas sobre incorporación al Código de Comercio de disposiciones sobre viajantes de comercio y contrato de representación, contemplando la situación de exclusividad, la Comisión Especial de estudio de proyectos sobre temas no comprendidos en el programa de esta Conferencia, aconseja la aprobación de la referida ponencia.

Pedro R. Quiroga. — Guillermo G. Cano. — Wenceslao Frias. — Oscar Rodríguez Saráchaga. — Rogelio Mazzi. — Antonio Castiglione.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — En discusión.

SR. QUIROGA. — Pido la palabra.

La Comisión especial encargada de la consideración de este proyecto, por mi intermedio, hace presente a la asamblea, que dada la importancia que realmente tiene esta ponencia, debe ser pasada, como lo dice en su despacho, a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, a fin de que ésta pueda conseguir que esta iniciativa se convierta en ley a la brevedad posible.

Dichas estas palabras no me queda más que pedir el apoyo de los señores delegados a fin de que sea aceptado el despacho de la comisión.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Si no se hace uso de la palabra, se votará en general el despacho.

—Se vota y es aprobado.

—Se vota y aprueba en particular sin modificación.

14

Arbitraje en materia comercial

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Ahora corresponde tratar el proyecto del doctor González Sabathié cuya reconsideración fué aceptada por esta Conferencia.

SR. CASTRO. — Pido la palabra.

Como este proyecto ya se ha leído, es conocido por los señores delegados, y es un poco largo, pido que se suprima su lectura.

—Asentimiento general.

SR. CASTRO. — En la sesión de ayer el señor González Sabathié informó brillantemente este proyecto que estimo como un trabajo de mucha importancia y digno de que la comisión lo tome muy en cuenta; escuché también las razones aducidas por el doctor Castillo al oponerse a él; razones que a mi manera de ver son puramente circunstanciales y de procedimiento y que en nada afectan a lo fundamental de esta cuestión.

El Código de Comercio admite el arbitraje como solución de las cuestiones comerciales, así que en nuestra legislación no está prohibido ese sistema, o mejor dicho, esa jurisdicción, para ventilar los juicios. El proyecto del doctor González Sabathié trata de legislar un nuevo procedimiento de arbitraje, como sistema especial y que debe ser aceptado previamente por las partes.

Ni en esta reunión, ni en la anterior la Conferencia se ha pronunciado en contra del arbitraje, ni ha manifestado ninguna opinión considerándolo, como dice el doctor Castillo, calamitoso. Si así ha resultado en diversos juicios ini-

ciados o cuestiones debatidas, puede ser debido a fallas de las mismas leyes aplicables a los casos producidos o a deficiencias de procedimiento, y sería ello una razón más para que se tratara de legislar un nuevo sistema que asegurara el éxito del arbitraje, como ha sucedido muchas veces en el orden civil.

La Conferencia en nada comprometería su opinión pasando ese proyecto a la Comisión Permanente, para que analice la forma en que podría legislarse esa institución, y a ese efecto recomendar el proyecto del doctor González Sabathié como una iniciativa meditada e interesante, que le sirva de base.

Esta Conferencia de Abogados ha tratado ya otras cuestiones ajenas a los temas para los cuales ha sido convocada, y ha aprobado otras ideas que se salen bastante del programa; no tiene, entonces, por qué no admitir este proyecto que está dentro del programa y ha sido bien explicado por su autor el alcance que tiene. No debe hacerse una excepción tan antipática como la que se ha hecho ayer, sino aceptarse este trabajo, el que constituirá un aporte más al estudio que actualmente está haciendo también la Cámara de Diputados, en esta materia. Y en ese sentido hago la indicación.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — En primer término agradezco las expresiones de benevolencia y de simpatía de que he sido objeto.

En la sesión de ayer, al hablar de este asunto me he referido a los fundamentos y antecedentes que tuve en cuenta para redactar el proyecto. Deseo, ahora, abundar en algunas consideraciones respecto de las objeciones operadas que me parece no fueron suficientemente claras en la exposición de ayer. La Primera Conferencia Nacional de Abogados, contemplando asuntos tan interesantes como lo son la materia judicial, y en especial la unificación procesal, sancionó diversas bases para un Código de Procedimientos que debía elaborarse por una comisión designada al efecto. La circunstancia de que en tal oportunidad no se tuviese presente el arbitraje en lo comercial, no implica la desautoriza-

ción del instituto, del mismo modo que la aprobación de mi proyecto por esta Conferencia no importaría una contradicción con aquellas resoluciones. No sólo no hay oposición entre este arbitraje comercial, eminentemente facultativo de las partes, con los principios sancionados por la Primera Conferencia en materia de procedimiento civil, sino que los contemplan expresamente. La oralidad con todos sus corolarios, identidad física de la persona del juez, continuidad de la audiencia, amplitud de facultades del juez para fijar el trámite, han sido expresamente establecidos.

El proyecto trata asimismo de resolver la deficiencia capital de que adolece el arbitraje entre nosotros y que es la facilidad con que puede obtenerse la anulación del laudo. Tiende a que la ley fije taxativamente las causas de nulidad, reducidas a las esenciales, y a la represión definitiva de los recursos, acordándose sólo una acción contra el laudo, a deducirse en término brevísimo. Asegurarse de tal modo la deseable firmeza al pronunciamiento arbitral y se descartaría el más grave de los inconvenientes que presenta entre nosotros esa clase de trámites.

También en los demás detalles el proyecto se inspira en el arbitraje de la Bolsa de Comercio de Trieste, según lo expresé en mi exposición anterior, y trata de aprovechar los resultados de una experiencia que ha puesto a prueba la excelencia de la institución.

Deseo recordar una vez más que el arbitraje en el comercio es una realidad en nuestra vida jurídica; todas las Bolsas de Comercio, especialmente en determinados asuntos, tienen establecidos tribunales arbitrales que funcionan precariamente porque no tienen más sanción que expulsar de la institución al litigante que no acata sus decisiones, las que por otra parte serían siempre anuladas si se las llevase ante la justicia ordinaria, en razón de las deficiencias de la legislación respectiva entre nosotros. Por eso he creído que es conveniente pensar en un tipo de

arbitraje que al mismo tiempo que asegure la efectividad del laudo, tienda a ampliar el número mayor de casos y de personas que puedan sometersele.

Es simplemente un tipo de institución de ensayo que realmente no puede ser más inofensiva, porque la parte que no la desee emplear no tiene por qué adoptarla.

Nada más. (*Aplausos*).

SR. STANCHINA. — Creo que en veinticuatro horas no hemos podido cambiar radicalmente de opinión, como para aceptar un proyecto que fué rechazado totalmente en la sesión de ayer. El pensamiento jurídico que anima el proyecto del doctor González Sabathicé, fundado en forma brillante en dicha sesión y de nuevo en la de hoy, no debe ser reconsiderado tan precipitadamente por la Conferencia, por lo que soy de opinión, que, tomándose su articulado como base o anhelo de la Conferencia, se envíe a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, a fin de que ella pueda estudiarlo con el detenimiento que exige la naturaleza de la cuestión que examine y presente sus conclusiones a consideración de la próxima asamblea, o en su defecto, al Congreso Nacional, donde ya se ha promovido la reforma legislativa pertinente.

SR. DONCEL. — Acaba de decirse que pudiera interpretarse el voto de ayer como algo desfavorable o agravante para el autor del proyecto. La circunstancia de haber votado yo en contra y la de conocer al doctor González Sabathicé desde antes de venir a esta Conferencia, por sus condiciones intelectuales y personales, por algunos trabajos y la simpatía que hacia él he tenido una vez que nos hemos encontrado en este recinto, me ponen en el caso de hacer presente que los motivos que me han impelido a votar en contra, como seguramente a los demás señores delegados, están muy lejos de corresponder al deseo de inferir agravio o de molestar.

Quiero agregar que el doctor Castillo impugnó el proyecto, como bases que se proponían adoptar por la Con-

ferencia, por los inconvenientes que presentaba y dió su opinión totalmente contraria al arbitraje y por el carácter facultativo de lo que se proyectaba. Por mi parte, tuve en cuenta también que es un proyecto unilateral, que no va a contemplar sino pocas situaciones y principalmente que, tratándose como se decía y como se acaba de ratificar por su autor, de la creación de un tribunal de arbitraje completamente voluntario, que no necesitaría sanción alguna para existir así, que solamente para que fuera compulsivo necesitaría una sanción legal.

Muy lejos, repito, de mi ánimo agravar a ninguno de los miembros de la Conferencia y menos al distinguido autor del proyecto.

Ahora bien; se ha expresado la conveniencia de pasar ese trabajo a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos y voy a recordar a los colegas, que se han remitido a esa comisión diversos proyectos en dos caracteres distintos, unos con bases estudiadas y sancionadas por esta Conferencia, es decir, proyectos que llevan la opinión establecida de esta Conferencia, y otros que no han sido considerados por nosotros, a cuyo respecto simplemente las comisiones, sin abrir opinión, han dicho que conviene que sean estudiados por aquella comisión; son proyectos sobre los cuales la Conferencia no se ha pronunciado. La proposición del señor delegado Stanchina importaría el primer criterio. Yo, concretamente, por las opiniones que he vertido y que han determinado el voto anterior y sin haberse aducido nada que las rectifique, estaré perfectamente de acuerdo en remitirlo a la comisión sin estudio por parte de la Conferencia, para un proyecto ulterior de reformas al Código de Comercio, pero no con una indicación como la que se ha hecho, que la Conferencia lo haga suyo y lo apruebe.

SR. CASTRO. — Yo no he propuesto que la Conferencia apruebe el trabajo, sino que lo pase a la comisión. Y no lo hice sencillamente porque ya la Conferencia adoptó un criterio uniforme para el trámite de todo proyecto que con-

tenga bases generales sobre cuestiones de derecho. La Conferencia ha hecho suyas esas bases generales, si las ha encontrado aceptables. En cambio, todo proyecto que figure articulado ha resultado no aprobarlo por ahora. El proyecto del doctor González Sabathíé, si bien el autor lo califica de «bases», se acerca más al articulado porque constituye casi un proyecto de ley. De manera que de acuerdo al criterio general ya adoptado, corresponde pasarlo a estudio de la Comisión Permanente, sin que la Conferencia haga declaraciones al respecto.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Desco hacer presente que aunque nos limitemos a recomendar la institución a la convención de las partes, es necesario, (y esto de acuerdo con las objeciones que se han hecho a nuestro actual arbitraje) legislar ese trámite en nuestro país en forma de que los laudos no sean anulados con la facilidad con que lo son actualmente. De manera que no se propone solamente una invitación a las partes, sino que se tiende a una reforma integral dentro de bases generales. Propongo, como digo, que se reforme el arbitraje que existe en nuestro país estableciéndose taxativamente en la ley las causas de nulidad de la sentencia. No hay una simple invitación a las partes, sino un positivo propósito de reformas a la legislación procesal en esa materia. La objeción principal que formuló el doctor Castillo en la sesión de ayer era la de que consideraba al arbitraje como una verdadera calamidad y que en el estado actual de nuestra legislación él no la aconsejaba nunca. Creo que precisamente esa afirmación viene en apoyo de mi iniciativa demostrando la necesidad de reformar el arbitraje actual contemplando tal deficiencia. Insisto en esto porque creo que algunos señores delegados no han alcanzado el verdadero objetivo del proyecto de cual no me cabe ni siquiera el honor de la iniciativa, la que puedo poner a la sombra del ilustrado profesor Asquini y si se quiere hasta del propio Carnelutti. Una adecuada reforma de las normas que rigen el actual arbitraje en el sentido que dejo establecido,

ha de ser necesariamente previa a la recomendación del instituto: sólo entonces habremos realizado una obra útil.

SR. STANCHINA. — Debo manifestar que la Conferencia no ha tomado ninguna resolución de carácter general, por lo que está autorizada para pronunciarse según le interese en cada caso particular. Creo, pues, que el doctor Castro está equivocado al hacer esa afirmación y, por lo tanto, la asamblea puede tomar en el caso que nos ocupa, la resolución que estime más conveniente.

SR. GOYENECHE. — Entiendo que la ponencia del doctor González Sabathíé, contiene entre sus conclusiones una que propone aconsejar a las Bolsas y Mercados donde se adopta la jurisdicción arbitral, para que escojan la nueva forma del arbitraje mixto, estudiado en el proyecto, temperamento al que me adhiero, por considerar, como su autor, de que su elección sería de suma utilidad, ya que actualmente la mayoría de los laudos arbitrales que se dictan en dichas instituciones, no aparecen otra eficacia que aquella que depende de una sanción de carácter interno, careciendo de la fuerza de la ejecutoria judicial, por no revestir las formalidades legales necesarias. En consecuencia, considero que el sistema del arbitraje mixto, vale decir, el que establece la intervención de un abogado para que se observen las formalidades legales del laudo, evitaría de que éstos se anulen ante la justicia ordinaria, como actualmente ocurre.

Creo que tal resolución sería aceptable, sin perjuicio de las demás propuestas, pues ella tendería a corregir de inmediato una de las grandes fallas de los arbitrajes.

SR. CASTRO. — He hecho una moción y pido que se vote.

SR. GARCÍA ZAVALÍA. — Pido la palabra.

Creo, señor presidente, que la exposición de motivos del doctor González Sabathíé, junto con el proyecto, debe pasar a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, porque entiendo que todo asunto sancionado debe pasar a dicha comisión para que ésta tenga en cuenta las ponencias, bases, exposiciones de motivos, etcétera, que hubiera

al respecto y pueda dictaminar, en cada caso, según las circunstancias. No se puede entender de otra manera.

Creo que estamos suficientemente enterados y podemos votar en consecuencia este proyecto.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. -- Deseo hacer presente que en la parte inicial del despacho que los señores delegados no tienen presente ahora, la comisión formula una declaración de carácter general.

SR. VILGRÉ LA MADRID. -- Pido la palabra.

No estamos conformes con lo que se propone en el proyecto.

En la sesión de ayer he votado a plena conciencia en contra y no dí las razones porque creí innecesario hacerlo, desde el momento que en la discusión de este asunto habían hecho uso de la palabra varios señores delegados y entre ellos una persona que es una autoridad en la materia, el doctor Castillo, y a cuyas palabras muy pocas o ninguna de consideración podría haber agregado yo. Hoy daría mi voto en la misma forma en que lo hice ayer, porque entiendo que concurren las mismas circunstancias.

No estoy en general en contra del proyecto de arbitraje porque, creo, contempla una necesidad real de nuestro comercio; tampoco me opongo a que este proyecto vaya a comisión, pero sí estoy en contra del proyecto porque no lo considero oportuno. Significo únicamente mi manera de pensar.

En consecuencia, hoy voy a dar mi voto -- si alguna moción hubiere en ese sentido -- para que este proyecto pase a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, porque creo que cuanto más se estudie un asunto, será más eficazmente resuelto. Pero no estoy dispuesto a votar hoy en contra de lo que ayer voté con toda conciencia.

Nada más.

SR. CASTRO. -- Pido la palabra.

Yo formulé moción en el sentido de que el proyecto presentado por el doctor González Sabathié pasase a la Comisión Permanente de Estudios Legis-

lativos a fin de que ella proyectara una solución respecto al arbitraje.

Creo que corresponde votarla ahora.

—Aprobado.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). -- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada en el sentido de que el proyecto en discusión pase a estudio de la Comisión Permanente Estudios Legislativos.

—Se vota y resulta afirmativa.

SR. QUIROGA. -- ¿Queda algún otro asunto para ser considerado, señor presidente?

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). -- No, señor delegado.

15

Voto de agradecimiento al Gobierno, a la Universidad y a la sociedad de Córdoba

SR. QUIROGA. -- Pido la palabra, señor presidente, para decir unas pocas.

Dentro de breves instantes vamos a clausurar las sesiones de esta Conferencia que se ha celebrado bajo el auspicio del Gobierno, de la Universidad y la sociedad de Córdoba, que nos ha presentado ayer, en el Crisol Club, un espectáculo inolvidable, de distinción, de cultura y de belleza.

Pido que estas palabras, que desde el fondo de mi espíritu pronuncio con sinceridad en homenaje a Córdoba, las haga suyas la Conferencia, y al mismo tiempo que consten en las actas y se publiquen, para que la sociedad de Córdoba tenga conocimiento de esta expresión de gratitud de parte de los señores delegados. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos*).

—Asentimiento.

16

Presentación de trabajos a las Conferencias y distribución de los mismos

Indicación

SR. CERVINI. -- No haré el discurso de cierre de la Conferencia, señor presidente; voy a hacer una simple moción.

En la primera Conferencia se despacharon asuntos importantísimos; dió un fruto que se recogió efectivamente en el proyecto de código que según nos anunció el señor presidente doctor Silgueira está listo para ser impreso.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Efectivamente, señor delegado. Aquí está el original.

SR. CERVINI. — Muy bien.

Ha dado también aquella Conferencia un motivo importantísimo para el intercambio de ideas entre profesionales desde un rincón a otro del país, y estableció así la vinculación personal de los abogados, miembros de la judicatura muchos de ellos y miembros de los gobiernos también. En aquella Conferencia, como en ésta sus miembros trabajaron con empeño, y se discutieron ponencias de verdadero interés. En una palabra: la labor fué satisfactoriamente fecunda. Pero cabe esta observación importante: en muchas ocasiones hemos discutido muchísimo más de lo necesario, produciéndose la confusión en los debates. Y esta circunstancia que apunto, que es precisamente un vicio o defecto de los concurrentes, ha sido en realidad un defecto de la organización, que me apresuro a declarar que tampoco puede atribuirse ni a la Federación de Colegios de Abogados que ha organizado esta Conferencia, ni a la comisión organizadora, ni a la falta de iniciativa individual de los miembros de la misma. El defecto está, a mi entender, en que el estudio de los asuntos se nos presenta a los delegados en los últimos momentos, y naturalmente hay desorientación por falta del conocimiento suficiente de los mismos. Cada uno interpreta equivocadamente, muchas veces, los estudios de las comisiones y las propuestas o ponencias de los que concurren con sus trabajos, y es claro, de ese error de interpretación por falta del tiempo material para el estudio de los asuntos, surgen los distintos criterios y dificultades para aunar opiniones. Bien, señor presidente; yo creo que sería sumamente interesante poder tener los trabajos, por lo menos aquellos del programa oficial, con el tiempo suficiente para que los delegados antes de llegar

al recinto de sesiones de la Conferencia, con una anticipación prudencial que pudiera ser de 15 días, por ejemplo, tuvieran en su poder todos los elementos necesarios para estudiar los asuntos que se van a tratar en la Conferencia. El doctor Berghmans Doneel ayer me hizo una observación que creo es la causa del procedimiento empleado en estas conferencias: que los trabajos han llegado a último momento, al extremo de que tuvieron que imprimirse en Córdoba porque no ha habido tiempo material de hacerlo en Buenos Aires. Esas dificultades hay que tomarlas en cuenta para ponerles remedio. Así, por ejemplo, se puede establecer que la Conferencia se anuncie para tal día y se fije un término para que se acompañen los trabajos que se van a someter a su estudio, y si se ve que no ha habido tiempo o, mejor dicho, que han llegado tarde esos trabajos, nada costaría suspender por un término prudencial la Conferencia, a fin de que se pueda hacer esa distribución de copias a cada uno de los delegados. La moción que formulo es que se establezca que por lo menos diez o quince días antes de realizarse la Conferencia, los trabajos sean distribuidos a cada uno de los delegados. Que la comisión organizadora busque la forma para que esto se lleve a cabo, porque si se consigue ese objetivo, habríase llenado un enorme vacío y habríamos llegado a dar un aspecto más práctico que el actual a las resoluciones que se adopten. Debemos declarar que en muchísimos casos hemos confiado en el despacho de la comisión y en la propia inteligencia de sus componentes; creo que no nos hemos equivocado, pero quizás no sean resoluciones tan completas como merecieran ser las de una Conferencia de esta naturaleza. Por eso insisto en proponer que en la próxima Conferencia se repartan los trabajos que han de ser materia de estudio oficial, diré así, los del programa, con una anticipación de diez o quince días a la fecha en que se ha de realizar la Conferencia.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — No la presidencia, sino el ex presidente de la comisión organizadora podría dar

una larga explicación de los trámites que ha tenido que realizar, junto con sus compañeros de comisión, para lograr el noble y gran propósito del delegado doctor Cervini, pero, ¿para qué entrar en mayores explicaciones? El doctor Cervini, y seguramente la mayor parte de los señores delegados, no se imaginan ni remotamente las dificultades con que ha tenido que luchar la comisión...

SR. VILGRÉ LA MADRID. — Las imaginamos y las apreciamos.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Es posible que se imaginen, porque difícilmente habrá un delegado que no haya recibido unos dos o tres telegramas o cartas de la presidencia o de la comisión organizadora, que no se ha limitado a escribir, telefonar y telegrafiar, sino a cargarse personalmente, a tomar el tren para ir a tal o tal otra ciudad tratando de facilitar la preparación de la Conferencia. Y contaré solamente un hecho entre tantos: el lunes 18 yo debía tomar el tren de la tarde para venir a Córdoba a terminar todos los preparativos previos a la Conferencia. Bien, a objeto de poder obtener el dictamen en un asunto importante, que se ha disentido aquí con verdadera suficiencia, el presidente de la comisión organizadora, a las cinco de la tarde, sin tener la maleta lista, se encontraba en los tribunales de Buenos Aires, en una audiencia de un asunto ajeno, para que el abogado de ese asunto pudiera reunirse con sus compañeros de comisión y dictaminar sobre ese punto trascendental de la Conferencia.

Por esa muestra se pueden dar cuenta los señores delegados de que los anhelos y buenos propósitos del doctor Cervini son irrealizables en la práctica; eso no depende de la comisión organizadora.

SR. CERVINI. — Yo omití una circunstancia y es esta: no establecí con suficiente claridad que no hago cargos a nadie...

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Absolutamente.

SR. CERVINI. — ... Mi propósito era también felicitar a la comisión, porque me consta toda la insistencia y el tra-

bajo enorme que se han tomado la presidencia y la comisión organizadora para llegar a su finalidad; yo mismo he recibido quizás diez telegramas insistiendo para que viniéramos a la Conferencia; el último me fué remitido por el señor presidente desde Córdoba.

Y desde luego voy a solicitar un aplauso para la comisión. Lo que quiero decir es esto: que la Conferencia deje establecido como uno de sus anhelos para que en el futuro se lleve a la práctica este propósito por todos los medios que le sea posible.

—Asentimiento general.

SR. CERVINI. — Propongo que la Conferencia dé un aplauso al señor presidente de la comisión organizadora y demás miembros de la misma. (*Aplausos*).

SR. DAY. — Pido la palabra, para referirme precisamente a la indicación hecha por el señor delegado doctor Cervini, porque entiendo que de los procedimientos a seguirse depende el éxito y prestigio de estas asambleas. Creo, señor presidente, que no hay posibilidad de que los señores delegados tengan tiempo suficiente para estudiar los proyectos que se presenten a consideración de la Conferencia. De tal manera que voy a proponer que no tenga entrada ningún proyecto para la tercera Conferencia futura, que no haya sido presentado con anticipación por lo menos de un mes. En esta forma, el presidente de la comisión organizadora tendrá tiempo suficiente de disponer el extracto de los trabajos y comunicarlos a los colegios de abogados para que se conozcan los puntos que se van a considerar. Aquí ha habido una cantidad de asuntos que se han tratado con suma precipitación.

Sabemos que el derecho es una materia ardua, que requiere la especialización en sus múltiples aspectos. Además, esta asamblea no se ha dividido, como estilan los congresos que tienen tendencias o propósitos como los de esta Conferencia, en diferentes secciones, para que estudien los asuntos según la especialización, componiendo las mismas los especialistas que se dedican a determinadas materias. De tal manera que por lo menos necesitamos los delegados,

o los que concurren a las Conferencias, el tiempo necesario para saber de lo que se va a tratar. Por estas razones, propongo, como he dicho, que no se considere en las sucesivas conferencias ningún asunto que no haya sido enviado a la comisión organizadora, por lo menos, con un mes de anticipación.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Antes de que se vote esta moción, quiero hacer una aclaración para que los señores delegados se den cuenta más exactamente de las dificultades con que se ha tropezado. Estoy de acuerdo con las observaciones hechas por el señor delegado doctor Day, pero hago presente que la comisión organizadora fijó como término máximo para presentar los trabajos el 30 de Septiembre, y el día 1º de Octubre no había recibido ni uno solo. Tuvimos que prorrogar los plazos.

Me gusta, en principio, el sistema de decir: «Señores, si antes de tal día no presentan los trabajos, no tendrán entrada», pero no olvidemos el riesgo que se corre de que si no se presentasen los relativos a los puntos del programa oficial, no tendríamos Conferencia. Así, si hubiéramos hecho efectivos los plazos fijados por la comisión organizadora, esta Conferencia no se hubiera realizado, porque no se había presentado un solo trabajo. Las manifestaciones del señor delegado se pueden tomar como un anhelo de la Conferencia. Y perdónenme los señores delegados que haga estas indicaciones desde la presidencia.

VARIOS SEÑORES DELEGADOS. — ¡Muy bien! ¡Muy bien!

SR. VILGRÉ LA MADRID. — El señor presidente es el más indicado y autorizado para hablar en esta ocasión.

17

Comunicación de las sanciones. — Comisión de redacción de las resoluciones aprobadas

SR. CANO. — Pido la palabra.

Voy a hacer dos mociones para que por su orden sean consideradas por la Conferencia.

La primera es la siguiente: que se autorice expresamente a la Mesa Di-

rectiva de la Federación de Colegios de Abogados a remitir en nombre de la Conferencia a los poderes públicos los despachos y antecedentes que hayan merecido la aprobación de esta Segunda Conferencia Nacional de Abogados.

Esta moción tiene por objeto que el trabajo de la Conferencia no quede en silencio dentro de ella misma o consignado sólo en la versión taquigráfica de sus sesiones, que no ha de estar al alcance de todos, sino que además de la publicidad que haya tenido por la prensa, sea precisa y concretamente conocido por los poderes públicos y también para que su envío oficial a éstos les ponga hasta cierto punto en el compromiso de tomar en consideración el esfuerzo realizado por la Conferencia.

Este es el alcance y fundamento de la primera moción, que podría votarse inmediatamente, para después formular la siguiente indicación.

—Apoyado.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Si no se usa de la palabra, se votará la moción formulada.

—Se vota y es afirmativa.

SR. CANO. — La segunda indicación que me permito formular es en el sentido de que se autorice a la Presidencia a designar una comisión encargada de la revisión de la forma y redacción de los despachos y trabajos sancionados por esta Conferencia a objeto de que ellos no resulten con tantos defectos como tienen, motivados por el exceso de labor y la falta de tiempo para trabajar mejor.

Así hay una cantidad de despachos de comisión — incluso de la que he formado parte — que tienen deficiencias notorias de redacción y de otros órdenes. Propongo, pues, que se encomiende a la Presidencia, o a una comisión que ella designe, la corrección de la forma o redacción de los despachos, sin alterar, desde luego, nada substancial. Tengo entendido que este es un precedente que se ha seguido en muchos casos anteriores, como en conferencias análogas, y aun hasta en asambleas de reforma a las

constituciones provinciales, según me lo ha manifestado el señor presidente.

Esa es la segunda proposición, a la que pido a la Conferencia preste su aprobación.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Si no se usa de la palabra, se votará la moción formulada.

—Se vota y es afirmativa.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Conforme a las prácticas establecidas, la Presidencia ha designado esa comisión redactora, que queda integrada en la siguiente forma: doctores Juan Carlos Róbor, Mario A. Rivarola y el que habla.

—Asentimiento general.

18

Sede de la Tercera Conferencia

SR. STANCHINA. — Pido la palabra. Siguiendo el orden establecido en la Conferencia anterior, corresponde designar la ciudad en que se verificará la siguiente Conferencia Nacional de Abogados.

SR. GONNET. — A eso deseaba referirme.

SR. STANCHINA. — Creo que, de acuerdo con el precedente ya establecido, la sede de la Tercera Conferencia, que se realizará dentro de dos años, debe ser la ciudad de Mendoza.

Votaré en tal sentido, no sólo por la situación geográfica de que goza dicha ciudad, cuyo radio de acción se extiende a una zona importante del país, sino también por su floreciente estado cultural y económico que debe merecer la atención de todos los abogados de la República y, además, por su prestigioso Colegio de Abogados, que ha sido dignamente representado en esta Conferencia por doce de sus miembros, quienes han traído a sus deliberaciones un espíritu de renovación científica y un entusiasmo tan significativo para contribuir al éxito de las mismas, que me deciden a proponer, como lo hago, a dicha ciudad para sede de la próxima Conferencia Nacional de Abogados.

SR. GONNET. — Pido la palabra.

Deseaba formular la misma proposición, aun cuando mi opinión es que la ciudad de Rosario debería ser la sede de la próxima Conferencia.

La ciudad de Mendoza es una gran ciudad, el Colegio de Abogados que allí funciona es uno de los mejores de la República...

SR. SECRETARIO (BERGHMANS DONCEL). — La ciudad de Rosario se encuentra en las mismas condiciones.

SR. GONNET. — ... Además goza de todas mis simpatías por razones que no son del caso exponer en este momento (aunque hubiera deseado no manifestarlas de una manera expresa a fin de que no quedara el convencimiento de que me guía el propósito de no permitir que la tercera Conferencia tenga lugar en la ciudad de Mendoza), pero entiendo que la primera Conferencia ya se había comprometido a realizarla en la ciudad de Rosario.

SR. GONZÁLEZ SARATINÍ. — La ciudad de Rosario ya había sido designada.

SR. GONNET. — En la primera Conferencia, cuando se aprobó que ésta se realizara en la ciudad de Córdoba, nos obligamos a insistir sobre la necesidad de que la tercera tuviera lugar en Rosario.

Si se pudiera decidir por esta Conferencia que la cuarta tuviera lugar en Mendoza, me anticiparía a votarla y pedir que por unanimidad designemos esa ciudad; pero mientras tanto insisto en que la sede de la tercera Conferencia sea la ciudad de Rosario.

SR. CASTIGLIONE. — Voy a explicar un antecedente que quizás ignoren muchos de los señores delegados presentes. En la anterior Conferencia resultó que fuera Rosario la sede de la segunda Conferencia, pero por una deferencia hacia Córdoba se designó luego a esta ciudad. Entonces existe ya un antecedente, además está el de que el Colegio de Abogados de Rosario ha tenido una actuación meritoria en todo sentido en la organización de esta Conferencia Nacional de Abogados. Indudablemente, no podemos resolver sobre la sede de la cuarta Conferencia: esto lo hará la ter-

cera. Pero creo que está en el anhelo de todos que sea la ciudad de Mendoza, y sucesivamente Tucumán o cualquier otra provincia. En cuanto a la tercera Conferencia, debe realizarse en Rosario, por las razones apuntadas, y además también por tener Universidad.

SR. VILGRÉ LA MADRID. — Quería decir, señor presidente, que aunque no asistí a la primera Conferencia de abogados de Buenos Aires, tengo entendido que hubo opinión general en el sentido de que la tercera conferencia se celebrara en Rosario. Yo por mi parte voy a votar cualquier lugar de la República con excepción de Buenos Aires. Creo que nosotros, guiados por un buen criterio nacionalista, debemos acercarnos a las provincias, ya que ellas se acercan demasiado a la Capital Federal. (*Aplausos*).

SR. BAUDÓN. — Coincidiendo con el criterio que acaba de manifestar el señor delegado doctor Vilgré La Madrid, y tal vez en cierto modo facilitando la solución propuesta por el doctor Gonet, por razones de proximidad, yo voy a proponer y votar por que la próxima conferencia se reúna en La Plata. Nos aproximariáramos así a la provincia de Buenos Aires, que ha mandado representantes de casi todos sus colegios, al mismo tiempo que produciríamos la rotación de las conferencias y las llevaríamos a un centro de alta cultura universitaria.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Yo deseo hacer presente, como único representante del Colegio de Abogados de Rosario ante esta Conferencia, que en mi opinión, y seguramente en la de cualquiera de mis compañeros del Colegio de Abogados de Rosario que me hubiese acompañado, cualquiera de las ciudades de la República que sea asiento de un colegio de abogados es perfectamente acreedora al derecho que se reúna en ella la Tercera Conferencia Nacional de Abogados. Pero deseo también que la Conferencia me permita hacer una pequeña defensa de mi ciudad, por razones de índole especial y derivadas de los antecedentes recordados de la primera Conferencia.

Aunque está mal recordarlo, la iniciativa de celebración de las conferencias

de abogados me pertenece; tuve el honor de ser yo quien la propusiera a la Federación de Colegios de Abogados en representación del Colegio de Rosario, y como era lógico que la primera Conferencia se realizara en Buenos Aires, se eligió esa ciudad; pero en reconocimiento, diré así, de esa iniciativa se propuso que la segunda Conferencia se llevara a cabo en Rosario. Inmediatamente se presentó otra moción en el sentido de que se realizara en Córdoba, teniendo en cuenta los valores tradicionales de la ciudad. Acto continuo (para evitar una disensión de ciudades, que hubiera sido sumamente desagradable porque, lo repito, y no es un pensamiento sólo mío sino de todos, que cualquier ciudad del país que sea asiento de un colegio de abogados es acreedora a ser sede de una conferencia), acto continuo, decía, sin que los señores delegados conocieran la verdadera situación del Colegio de Abogados de Rosario, con su pequeño mérito de haber provocado la realización de estas conferencias, se votó, siendo derrotada la moción de Rosario, que había sido formulada con prelación.

En ese orden de ideas, la ciudad de Rosario vino a quedar, no diré precisamente desairada, pero en una situación de inferioridad de condiciones, porque se había preferido a otra. Entonces, en atención a esa circunstancia y a la de que en esta ciudad de Córdoba no había colegio de abogados, se mocionó, creo que por el doctor Castiglione, para que en el supuesto de que por cualquier causa no pudiese celebrarse la Conferencia en Córdoba (porque no se lograra constituir un colegio de abogados), ella tuviese lugar en Rosario: expresándose así el anhelo de que la tercera Conferencia se realizara en dicha ciudad. Y no pasó de expresión de anhelos, porque no le correspondía a aquella asamblea resolver la sede de la tercera Conferencia.

Ahora, me sería profundamente penoso tener que volver a mi ciudad e informar que en una votación de esta clase ha sido nuevamente propuesta Rosario y ha resultado nuevamente pospuesta. No es, repito, cualquiera que sean los méritos de nuestro Colegio, que pretendamos tener más títulos, es sim-

plemente, diré, por una razón de prelación: Rosario ha sido ya indicada en la Conferencia anterior y sería la segunda postergación que sufriría en la elección de la sede. En consecuencia, invocando solamente esas razones circunstanciales — porque no me cansaré de decirlo, por más esfuerzos que hayamos hecho para llevar al Colegio de Abogados a la mejor de las situaciones, sosteniendo y repito que no pretendemos mejor título que nadie — que me permita apoyar la moción del doctor Gonnet.

SR. CANO. — Voy a hacer presente lo siguiente, como delegado del Colegio de Abogados de Mendoza y presidente del mismo: la delegación mendocina tenía la esperanza, simplemente la esperanza de obtener que la sede de la próxima Conferencia fuese la ciudad de Mendoza. A ese respecto hablé con algunos señores delegados y especialmente con los que han compuesto la Comisión Organizadora y se me hizo presente que si bien sería justo y conveniente bajo muchísimos aspectos que así sucediese, había una especie de compromiso moral para que se realizara en Rosario, por las razones que ha expuesto el doctor González Sabathié. Naturalmente que con estos antecedentes me siento cohibido y no puedo solicitar el voto de los señores delegados para la ciudad de Mendoza como sede de la tercera Conferencia. Si los señores delegados la votan, es decir, si se vota en primer término la moción del doctor Stanchina y tiene mayoría, quedaremos sumamente satisfechos y agradecidos. El Colegio de Abogados de Mendoza no pretende tener títulos especiales para que Mendoza sea la sede de la tercera Conferencia, y evidentemente se encuentra aquélla en condiciones análogas a muchas otras provincias, pero por motivos circunstanciales, que los señores delegados conocen y que es mejor que yo no los comente, habría sido una verdadera solución provechosa y práctica para la organización y el funcionamiento de la justicia de Mendoza que la tercera Conferencia se realizara allí. Pero, como digo, yo me encuentro con una circunstancia de orden moral que me

inhibe de solicitar para Mendoza el voto de los señores delegados. Naturalmente, que si se vota en primer término la ciudad de Mendoza, los delegados de Mendoza la votaremos. Además, quería hacer presente en favor de la idea de que la tercera Conferencia se realice en Mendoza, que si bien es cierto que no es un centro de alta cultura intelectual, que no tiene Universidad, que su foro no se dedica en general al profesorado ni a la cátedra, sino al ejercicio de su profesión, precisamente por eso necesitamos el concurso intelectual de los abogados de todo el país, para vigorizar el prestigio del foro y estimular y acrecentar la cultura de la provincia de Mendoza, y en ese sentido sería una obra de patriotismo y de nacionalismo resolver que la próxima tercera Conferencia se realice allí.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Desearía saber si el doctor Gonnet no tiene inconveniente en ampliar su proposición en el sentido de que si por cualquier causa no tiene lugar en Rosario la tercera Conferencia, quede establecido que se realice en la ciudad de Mendoza.

SR. VILGRÉ LA MADRID. — Creo que corresponde hacer una votación en forma tal que cada señor delegado vote por la ciudad de su preferencia.

—Asentimiento general.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Se va a proceder a tomar la votación referente al punto en que habrá de realizarse la Tercera Conferencia Nacional de Abogados.

—Votan por Rosario treinta señores delegados.

—Votan por Mendoza doce señores delegados.

—Votan por Tucumán dos señores delegados.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Han obtenido: 30 votos la ciudad de Rosario; 12 votos la ciudad de Mendoza y 2 votos la ciudad de Tucumán.

Queda, en consecuencia, designada la ciudad de Rosario como sede de la Ter-

cera Conferencia Nacional de Abogados. (*Aplausos*.)

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Pido a la Conferencia me acompañe a votar por unanimidad el agregado propuesto en el sentido de que en el supuesto caso de que dicha Conferencia no pueda realizarse en la ciudad de Rosario por cualquier motivo, tenga como asiento la ciudad de Mendoza. (*Aplausos*).

—Asentimiento general.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — La presidencia designa a los señores delegados Berghmans Doncel, Gonnet y Villegas Basavilbaso para formar esa comisión especial y a la que se incorporará el presidente de la Federación de Colegios de Abogados.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Debe facultársele para tener delegados en todas las provincias.

—Asentimiento general.

19

Fecha de la Tercera Conferencia

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Corresponde fijar ahora la fecha en que se realizará dicha Conferencia.

SR. CASTIGLIONE. — Pido la palabra.

Podría ser dentro de dos años; ahora, en cuanto al mes, podría dejarse libre al criterio de la Mesa Directiva del Colegio de Abogados de Rosario.

—Apoyado.

SR. CERVINI. — Pero siempre, dentro de dos años.

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — El estatuto de la Federación dice: «conferencias bianuales». De manera que debe realizarse en el año 1928 y el mes podría ser designado por la Federación.

SR. CERVINI. — Eso es. La próxima Conferencia se realizará el año 1928 en la fecha que designe la Federación.

—Asentimiento general.

20

Instituto de Compilación, Clasificación y Ordenación del Derecho Argentino

Designación de la comisión de estudio

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). — Corresponde designar una comisión especial compuesta de tres miembros encargada del estudio del proyecto sobre compilación y clasificación del derecho argentino.

SR. CASTRO. — Podría autorizarse a la presidencia para designarla.

—Asentimiento general.

21

Votos de aplauso a las autoridades de la Conferencia, al doctor Manuel B. Gonnet, al Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y a la magistratura de Córdoba.

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — A fin de que esta Conferencia no incurra en olvidos involuntarios, hago moción en el sentido de que se tribute un voto de aplauso al presidente de esta Conferencia. (*Aplausos*).

SR. STANCHINA. — Por mi parte la hago extensiva a todos los miembros que han integrado la mesa directiva. (*Aplausos*).

SR. GONZÁLEZ SABATHIÉ. — Pido la palabra.

Antes de levantar la sesión, señor presidente, voy a pedir, — ya que hemos tributado aplausos, sin duda muy merecidos —, que se tribute uno más a la persona del fundador de la Federación, doctor Gonnet. (*Aplausos*).

SR. STANCHINA. — Como no hemos tributado ningún voto de aplauso a los miembros del Consejo Directivo de esta Facultad...

SR. QUIROGA. — Estaban comprendidos en mi moción.

SR. STANCHINA. — Voy a proponer, ahora, que se tribute un voto de aplauso a los magistrados de esta provincia, por las deferencias que han tenido con los delegados a esta Conferencia, y por la amplia labor desarrollada, a pesar de encontrarse ejerciendo sus funciones, lo que revela su evidente interés por el éxito de la misma, y a la que han apor-

tado por otra parte, el caudal de su vasta ilustración y de sus reconocidas luees. (*Aplausos*).

22

Clausura de la Conferencia

SR. PRESIDENTE (SILGUEIRA). Si grata me fué la oportunidad de haceros conocer los fines, acción y proyecciones de la obra de la Federación de Colegios de Abogados y las que legítimamente, por eso mismo, cifrábamos en el programa de esta Segunda Conferencia Nacional, muy satisfactorio me es también destaeer ahora, al concluir las sesiones de esta última, la bondad de sus resultados, la calidad de sus conclusiones, los móviles que nos alientan para su realización práctica, la ecuanimidad de juicio y suficiencia de los señores delegados al intervenir en el examen o debates de los diversos puntos sometidos a nuestras deliberaciones.

La tarea futura está abierta al esfuerzo concurrente y empeñoso de la

Federación y de los diversos aportes morales y espirituales que nos han llegado y ofrecen de todos los ámbitos del país, a la sana y persistente orientación de los Colegios de Abogados, y sobre todo a la obra institucional que ha de hacer efectiva en el progreso de nuestra cultura jurídica, la Comisión Permanente de Estudios Legislativos que habéis proyectado y a la que habéis dado normas generales para su desenvolvimiento.

Estamos satisfechos y se ha reavivado nuestro estímulo para seguir adelante, guiados por el propósito firme de continuar sirviendo — como hasta ahora — los anhelos superiores legislativos, judiciales y forenses de la Nación y de las provincias.

Señores delegados: al declarar clausuradas las sesiones de esta Conferencia, os ruego llevéis a vuestros lares el saludo, aplauso y reconocimiento de la Federación de Colegios de Abogados de la República.

—Son las 18,35 horas.

PARTE III

ANEXOS



Comisión Permanente de Estudios de Legislación Común

Trabajo presentado por el doctor Alfredo Colmo (*)

Señores miembros de la Conferencia:

Someto a la consideración de los distinguidos miembros de esta Segunda Conferencia Nacional de Abogados, el adjunto proyecto sobre creación de la «Comisión Permanente de Estudios de Legislación Común». Es una simple contribución al estudio del tema número 1, del correspondiente programa. Y me felicitaré no poco de que pueda resultar de alguna utilidad en el análisis y solución de un problema que estimo de toda importancia.

Si fuera menester, esta importancia se podría hacer resaltar en más de un sentido.

Desde luego, el de su precedente en un proyecto análogo que se sometió a consideración de la Primera Conferencia, y que no tuvo sanción por motivos de cualquier orden.

Y, por sobre todo, el de su necesidad.

Bien sabido es, cómo son votadas las leyes entre nosotros. De nuestro Parlamento cabe decir, como de casi todos los Parlamentos del mundo, lo que decía del de su país el belga Picard, quien luego de puntualizar las cualidades indispensables en todo legislador, «el conocimiento de las leyes nacionales, el conocimiento de las leyes extranjeras, el conocimiento de los trabajos de la jurisprudencia y de la doctrina», estampa lo que sigue, a propósito de los legisladores: «tratar las leyes a formular al azar de las circunstancias, sin estudio, sin preparación, con la desventolura de la ignorancia, es, salvo para algunos hombres de «élite», el espectáculo que nos dan.»

No quisiera por un solo instante que se viese irreverencia alguna en la cita. El agravio sería no sólo malsonante sino hasta inoportuno. Hacer constar un hecho o una situación, no es condenarla propiamente, sino indicar una exigencia y propender a su satisfacción. Los miembros de los Parlamentos no son todos juristas. Y los que puedan serlo profesionalmente, de ordinario no son exponentes del derecho. Natural es que, aun descontando las mejores intenciones y las más decididas buenas voluntades, la obra legislativa de los Parlamentos no sea un modelo sino en casos excepcionales.

Tan general es la situación, que no sé de país civilizado en que no se la tenga. Todos los autores que se quiera consultar al respecto, hacen resaltar que los Parlamentos son más órganos de gobierno, expresiones de política, que entidades propiamente legislativas. Y en una forma u otra, todos puntualizan la necesidad de que se les substraiga en cierta medida lo concerniente a la preparación o elaboración de las leyes y códigos, o en todo caso, de que se les asesore por entendidos y técnicos, siquiera para que las leyes resulten encuadradas en el cuerpo general de que forman parte natural. La adopción de leyes que no concuerdan con las que mediante ellas se pretende modificar, porque rompen su armonía o sistema sin introducir uno nuevo y definido, o porque no se sabe si son derogatorias o no, si son modificativas y en qué límite y medida, es fenómeno prácticamente universal, aun en países

(*) Se publica en virtud de la resolución especial de la Conferencia, aprobada en la primera sesión ordinaria de la misma.

como Francia, donde la intelectualidad cultural parlamentaria tiene quilates apreciables.

Ya Roguin, y sin llegar a Rousset y aun a Bentham, había escrito un opúsculo en 1896, *Observations sur la codification des lois civiles*, en el cual auspiciaba la creación de una entidad encargada de aquellas tareas, entre otras, no dejando a los Parlamentos más función que la del voto. Michón sostuvo la necesidad, en todo un tratado, *L'initiative parlementaire*, publicado en 1898, de que el Consejo de Estado fuera la entidad a que se refería Roguin, (páginas 263 y 267 y siguientes). Alvarez siguió en esas aguas: en su obra *Nouvelle conception des études juridiques*, publicada en 1904, propiciaba la institución de una comisión permanente de codificación, compuesta de juristas y profesionales interesados. Y es fácil descubrir opiniones fundamentales concordantes con las precedentes en los que en *Le livre du Centenaire*, han estudiado lo concerniente a la reforma del Código Civil francés: Larnaudy, Planiol (que se puede ver, además, en su hermoso *Traité*, tomo I, número 119, entre otros), Gaudemet, Pilon, Géný y Morau, el último de los cuales dilucida y planea con toda especialidad y mediante observaciones agudas y atinadas lo relativo a la reforma del procedimiento legislativo en el dictado de las leyes. Lo mismo digo de otros autores: Geny, en su *Méthode*, tomo I, páginas 58 y 59; Cruet, en su vivaz *Vie du droit*, 1908, capítulo final; G. May, *Introduction a la science du droit*, 1920, página 104; Cerciello, *Il metodo nella riforma dei codici*, 1923, página 77 y siguientes. Yo mismo, en esfera más modesta, me he hecho cargo de la situación con relación a los países de nuestro continente latino y con respecto particular al nuestro, en mis dos trabajos, *La reforma de la legislación en los países latino-americanos*, 1917, y *La reforma del Código Civil*, 1918, sobre todo en el segundo de ambos, en el cual formule un esbozo de técnica legislativa externa adoptable a los indicados efectos.

En todo caso, hechos repetidos y no secundarios muestran que nuestro legislador no podría pretender posición su-

perior a los de Italia, Bélgica o Alemania, por ejemplo. La ley de matrimonio civil introdujo más de una desarmonía insalvable en el código, como la de la situación de la mujer divorciada en punto a facultades de disposición de sus bienes. La ley 9.098, sobre modificación de textos civiles relativos a las escrituras, llegó a empearar la legislación que procuró simplificar y mejorar. Las leyes llamadas de alquileres, 11.156 y 11.157, han introducido alteraciones tan originales que nadie las ha entendido, al extremo de que los mismos tribunales jamás han tenido jurisprudencia uniforme, y tanto que el precepto del nuevo artículo 1.507, que acuerda indemnización al locatario desalojado ilegalmente, ha venido a quedar prácticamente en letra muerta, pues salvo contadas excepciones jamás se lo ha querido aplicar.

Lo más fuerte, para mí, está en el caso de la ley 11.357, sobre derechos civiles de la mujer. En una ley de ocho artículos se ha querido consagrar toda la situación de la mujer en nuestras leyes, contemplada en centenares de disposiciones de los códigos de Comercio y Civil, para no citar sino a los principales con este resultado: se ignora en qué límite o medida numerosas de estas disposiciones quedan o no derogadas, modificadas o mantenidas. Así, yo no sabría decir si subsisten los bienes gananciales, si hay sociedad conyugal, si existen cargas sobre los dos patrimonios conyugales (artículo 1.275), si el derecho a los gananciales en caso de disolución de matrimonio (artículos 1.299 y 3.576 y concordantes) conservan todavía algún sentido, etcétera. No puede ser buena una ley que acuerda a la mujer todos los derechos y olvida los deberes de la esposa y madre. No puede ser buena una ley que prácticamente no establece responsabilidad de la esposa aun con relación a bienes gananciales, por obligaciones del matrimonio. No puede ser buena una ley que hace de la mujer casada una persona más capaz que el mismo hombre, como ocurre en los supuestos del artículo 7º de la misma.

Conste, a propósito, que no discuto la finalidad perseguida en ella. La eman-

cipación civil de la mujer era, más que una conquista, toda una necesidad. Lo que impugno es, entonces, no la idea sino su materialización, no el propósito u objetivo sino la ley sancionada, que pudo ser, como ley, mucho mejor, si se hubieran adoptado procedimientos de elaboración más adecuados. No se oyó a nadie. No se consultó a nadie. En una sola sesión el Senado la adoptó como verdad evidente o secundaria. La discusión en la Cámara de Diputados fué cuantitativamente superior, pero logró bien poco. Factores políticos y electorales decidieron por encima de todo: precisaban aparecer ante los electores como paladines de los modernos derechos de la mujer. Hasta se llegó a decir que las fallas serían corregidas por la jurisprudencia; como si hubiera título para enojar a los tribunales, que deben contar con leyes meridianas en lo posible, problemas y soluciones que son de resorte exclusivo de los legisladores.

Nada cuesta pedir asesoramiento a las entidades presuntivamente técnicas, como, por ejemplo, las facultades de derecho, los tribunales, los colegios de abogados, de escribanos o de procuradores según los casos, cabalmente con relación a lo técnico de la ley, que no puede ser patrimonio de los legisladores. La función electoral es una cosa. El criterio jurídico es otra cosa. Cuando en algún caso se consultó a entidades así, por ejemplo en un proyecto de ley sobre división hereditaria en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges con usufructo vitalicio en favor del cónyuge superviviente, la opinión adversa de la entidad consultada, en este caso la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, fué bien ilustrativa y decidió de la suerte del proyecto, que no fué adoptado.

No sólo no cuesta sino que hasta resulta beneficioso. Por lo demás, el Parlamento no enajena con ello ninguno de sus atributos. El voto, que es lo eminente, queda intacto. La misma discusión parlamentaria se mantendría en su plenitud. Sin embargo, convendría limitarla o reglamentarla, sin suprimirla y hasta sin vulnerársela en su esencia. A los parlamentos les basta con exteriorizar la idea o las ideas de fon-

do, digamos los principios o bases. El resto es técnica eminente: medios, formas, coordinación, organismo, expresión y lo demás, y resulta obra propia de profesionales y juristas. Es lo que se hizo, por ejemplo, con el vigente código civil español, y que ha merecido elogios de juriconsultos diversos, entre ellos los citados Alvarez y Cerciello: «con poco más de dos docenas de «bases» o principios se dió pie a la creación de más virtualidad en el derecho privado.

En tales condiciones, la controversia parlamentaria viene a resultar innecesaria. El pensamiento legislativo ha sido escuchado en el seno de la comisión preparatoria, donde los diversos intereses y aun los partidos políticos han podido contar con algún representante que habrá hecho oír sus puntos de mira. Y así no podría recaer sino sobre tópicos de fondo, de pensamiento o principio. De otra suerte, la modificación de algún texto aislado puede romper la armonía del conjunto en mucho más de un sentido, y la ley orgánica y con vitalidad puede resultar afectada.

Por lo demás, el ejemplo extranjero hace innecesaria cualquier demostración. Sin contar el de Alemania, país casi clásico en la adopción de leyes meditadas y consultadas, y donde entidades como la *Deutscher-Juristentag*, de más de medio siglo de existencia, existen bien pluralmente y hacen sentir su benéfica acción, en todo caso su influjo, en todas las oportunidades; sin contar el ejemplo de Alemania, se tiene los de varios países de toda cultura. En Bélgica el *Institut de droit comparé*, en Suiza la *Academia nacional de derecho comparado*, en los Estados Unidos el *Bureau of comparative legislation* de la *American Bar Association*, son corporaciones privadas que no tienen otra finalidad principal que la de servir para el conocimiento y difusión de la legislación nacional y extranjera, y en más de un supuesto para el examen de proyectos de ley sometidos a los respectivos parlamentos. Esto es más notorio en Francia: la *Société d'études législatives* y la *Société de législation étrangère* son frecuentemente consultadas por los ministros y las comisiones parlamentarias con motivo de la preparación de leyes de de-

recho privado, no obstante figurar organismos casi oficiales como el *Comité de législation* y el *Comité de législation étrangère*. No hay por qué mencionar los institutos de derecho comparado que, con este nombre o aquél, cuentan Inglaterra, Holanda, Francia (aquí organizado por toda una autoridad, E. Lambert), Noruega, etcétera y que entre nosotros no tiene más expresión que la rama local de la *International Law Association*. Pero debo apuntar que para Italia M. Rotondi ha proyectado la creación del *Istituto de studi legislativi* en un trabajo publicado en uno de los últimos números de la *Rivista di diritto civile*. Y no es de olvidar que en algún país, tal Inglaterra, se ha llegado a la creación oficial de una especie de «taller legislativo», como lo llama Cruet, en el *Parliamentary Council's Office*, cuya misión principal es dar forma, en redacción adecuada, a los *bills* en proyecto, que, sabido es, en principio son de iniciativa gubernamental.

Creo, pues, que no se podría discutir en serio la necesidad, ni siquiera la oportunidad, de la creación del instituto de referencia y, en otro sentido conexo, del voto o recomendación para que en la elaboración de leyes privadas en nuestro Parlamento se consulte previamente a las diversas entidades representativas y técnicas.

En consecuencia, me permito someter a la consideración de los distinguidos señores delegados los proyectos adjuntos, para que, si lo merecen, sean considerados y aprovechados en los proyectos más completos que pueda adoptarse por la Conferencia.

Alfredo Colmo.

Anteproyecto de estatutos de la Comisión Permanente de Estudios de Legislación Común.

Objetivos y medios

Artículo 1º — Con sede en la Capital Federal se constituye una Comisión Permanente de Estudios de Legislación común, con los siguientes objetivos:

- a) Estudiar y divulgar en lo posible la legislación nacional;
- b) Contribuir a su mejora, formulando al efecto proyectos que sometiera a la consideración de los poderes públicos;
- c) Realizar las encuestas que para ello estime oportunas;
- d) Evacuar las consultas que le sean requeridas por los expresados poderes;
- e) Estudiar las costumbres, usos y prácticas jurídicas del país, lo mismo que cualquier otra manifestación del derecho jurisprudencial y científico, para darles forma y coordinarlas dentro del cuerpo de leyes y en cuanto puedan representar así el derecho nacional;
- f) Coordinar la acción de los diversos órganos y expresiones del derecho, así en la investigación como en la ciencia, en la enseñanza como en la jurisprudencia;
- g) En general, hacer cuanto sea menester para el conocimiento y la progresiva formación integral del derecho nacional.

Art. 2º — Para el logro de tales objetivos la Comisión podrá y deberá en lo posible:

- a) Facilitar el conocimiento de la legislación y el derecho de países extranjeros;
- b) Realizar congresos y conferencias;
- c) Coleccionar en organismos adecuados las leyes nacionales y extranjeras;
- d) Documentar toda forma de actividad jurídica en el país;
- e) Organizar una biblioteca jurídica;
- f) Publicar periódicamente un boletín o revista en que se contengan sus actividades;
- g) Formular juicio público, aunque no le sea pedido, sobre los proyectos de leyes privadas a consideración del parlamento;
- h) Propender a que, en cuanto sea factible, las diversas leyes y códigos del país guarden armonía y relativa uniformidad de fondo y forma.
- i) Vincularse con instituciones análogas de los países del Continente y del Viejo Mundo.

Socios

Art. 3º — Lo serán por sus funciones y sin necesidad de admisión: el Ministro de Justicia

e Instrucción Pública, el Presidente de la Suprema Corte y los presidentes de los tribunales superiores de la Capital y de cada provincia, los decanos de las facultades de derecho de cada Universidad y los presidentes de las Comisiones de Legislación de las Cámaras de Senadores y de Diputados.

Art. 4.º — Serán socios efectivos todos los letrados que por su versación sean admitidos por el Consejo, en el número y condiciones que éste señale.

Art. 5.º — Serán socios corresponsales los letrados que en las provincias o en el extranjero pueda admitir el Consejo.

Art. 6.º — Todos los socios tienen los mismos derechos de uso del local, de envío de comunicaciones, de participación en los congresos y conferencias, del recibo de las publicaciones y de asistencia a las asambleas; pero en éstas no podrán votar sino los efectivos.

Dirección

Art. 7.º — La ejercerá un Consejo compuesto de nueve miembros: un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y cinco vocales.

Art. 8.º — Sus miembros serán elegidos en asamblea y durarán dos años, debiendo renovarse por mitad cada año y por sorteo en el primero.

Art. 9.º — El Consejo ejerce la dirección general. Se reunirá por lo menos con cinco miembros presentes, en lo posible una vez por mes, convocado por el Presidente o a solicitud de tres de sus miembros, quedando exceptuados los meses de Diciembre a Marzo inclusive, y tiene por funciones propias:

- a) Aceptar socios o admitir renunciias;
- b) Fijar condiciones de admisibilidad de socios;
- c) Aceptar donaciones para la institución;
- d) Designar los empleados a sueldo que estime convenientes;
- e) Organizar las comisiones que considere oportunas;
- f) Dictar los reglamentos internos que juzgue necesarios;
- g) Convocar a asamblea;
- h) Gestionar la personería jurídica de la institución;
- i) Celebrar actos jurídicos de adquisición, afectación y enajenación de bienes por mayoría absoluta de sus miembros,

especialmente convocados al efecto;

- j) Realizar cualquier acto que no sea atribución de la asamblea o de otra autoridad.

Art. 10. — El Presidente representa a la institución y preside las sesiones del Consejo, de las asambleas y de todos los actos de la institución. Cuando asista cualquiera de los socios del artículo 3.º, le presidencia le será cedida en el orden expuesto. El presidente ejerce cualquier acto propio del Consejo en caso de urgencia, con obligación de convocar a éste inmediatamente para darle cuenta. No vota sino en caso de empate y es substituido por el vicepresidente.

Art. 11. — El secretario redacta las actas, notas, órdenes del día y demás documentos que deban ser firmados por el presidente, cuyo firma deberá refrendar. Es substituido por el vocal que designe el Consejo.

Art. 12. — El tesorero tiene a su cargo las finanzas y la contabilidad de la institución; percibe los fondos, dando los recibos respectivos y los deposita en el Banco de la Nación a la orden conjunta del presidente y de él mismo; presenta los balances anuales o los que le sean requeridos por el Consejo; interviene en los pagos, cuyas órdenes llevarán la firma del presidente y de él, y lleva los libros que sean necesarios. Es substituido por el vocal que designe el Consejo.

Asambleas

Art. 13. — Las ordinarias se verificarán una vez por año, en el mes de, convocadas al efecto por el Consejo con quince días de anticipación mediante comunicación personal a cada socio o publicación en dos periódicos de la Capital durante cinco días, a efecto de discutir y aprobar en su caso la memoria del Consejo y para elegir los miembros de éste sin especificación de cargos, que serán llenados en el seno del mismo por mayoría absoluta de votos.

Art. 14. — Podrá celebrarse asamblea extraordinaria en cualquier momento por decisión del Consejo o por solicitud escrita y firmada por veinte socios efectivos, mediante convocatoria en las condiciones establecidas y para pronunciarse acerca de los asuntos expresamente sometidos.

Art. 15. — Habiendo mayoría absoluta de socios efectivos, las asambleas se verificarán

sin dilación. Pasada media hora, se efectuará con los socios asistentes.

Art. 16. — Las resoluciones de las asambleas requerirán mayoría absoluta de votantes presentes, sin contar las abstenciones. Será necesaria mayoría de dos tercios para los siguientes asuntos: juicio sobre gestiones del Consejo, reforma de estatutos, fusión con centros análogos y disolución.

Art. 17. — En toda asamblea se designará dos socios efectivos encargados de revisar y firmar el acta respectiva, y se admitirá el voto por correspondencia escrita y autenticada.

A. Colmo.

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados, etc.

Considerando: Que en el dictado de leyes privadas, sobre todo cuando son modificativas de leyes preexistentes, debe consultarse, en obsequio a su eficiencia, su organismo y coordinación, sus medios y formas y su misma expresión, todo lo cual es de resorte principalmente técnico y supone el asesoramiento de entidades jurídicas, sin perjuicio de la auscultación de las entidades representativas de los intereses económicos o sociales que en cada caso puedan resultar afectados,

RESUELVE:

1º — Formular voto en el sentido de que en los proyectos que se formulen por el Poder Ejecutivo nacional o por los señores miembros del Parlamento no se consignen sino las bases o principios del respectivo pensamiento, para en su virtud recogerse luego las opiniones de las entidades representativas de los correspondientes intereses y solicitarse el asesoramiento técnico de entidades jurídicas acerca de la forma y el articulado de los mismos.

2º — Recomendar, en sentido concordante, que en la discusión parlamentaria de proyectos así formados no se vuelva sobre tópicos de detalle ni se permita alteraciones introducidas en el momento y que puedan hacer peligrar el organismo o la central unidad del proyecto, a cuyo efecto en la correspondiente comisión parlamentaria debieran estar representados los intereses y partidos políticos cuyos voceros habrían ya hecho oír sus pareceres.

3º — Para tales efectos y para los propios del conocimiento, estudio y mejoramiento de nuestra legislación, auspiciar la creación de una comisión permanente de estudios de legislación común, bajo el patrocinio de la Federación de Colegios de Abogados, con existencia autónoma y sede en la Capital Federal y sobre la base de estatutos que la misma Comisión deberá darse.

A. Colmo.

Resoluciones aprobadas por la Segunda Conferencia Nacional de Abogados

Comisión Permanente de Estudios Legislativos

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

1º — Autorizar a su presidente para que designe, antes de la clausura de las sesiones, una comisión especial encargada de organizar la Comisión Permanente de Estudios Legislativos y de gestionar ante el Congreso Nacional y demás poderes públicos la asignación de un subsidio para el sostenimiento de esta última;

2º — La Comisión especial será formada por miembros de esta Conferencia integrada por el presidente;

3º — Cesará en sus funciones tan pronto como entre a desempeñar las suyas la Comisión Permanente de cuya organización queda en cargada.

La Comisión Permanente funcionará de acuerdo con las bases que a continuación se expresan:

Primera. — La Comisión Permanente de Estudios Legislativos tendrá por objeto:

- a) Promover las reformas necesarias para mejorar la legislación y dar mayor unidad y claridad a las leyes;
- b) Estudiar, redactar y aconsejar la sanción, modificación o rechazo de proyectos de ley que se tramiten ante los poderes legislativos de la Nación y de las Provincias;
- c) Estudiar, redactar y aconsejar la sanción, modificación o rechazo de los anteproyectos que sean sometidos a su consideración;
- d) Estudiar, redactar y aconsejar que se dicten, modifiquen o deroguen los decretos administrativos;

e) Asesorar como cuerpo técnico a los poderes públicos nacionales, provinciales o municipales y asociaciones privadas en cuestiones jurídicas de interés general o público.

Segunda. — La Comisión Permanente se compone:

- a) De dos miembros cuya designación se solicitará al Poder Ejecutivo Nacional;
- b) De dos miembros cuya designación se solicitará a cada una de las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de las Universidades Nacionales;
- c) De un miembro que designará de su seno la Federación de Colegios de Abogados;
- d) De un miembro que designará de su seno cada Colegio de Abogados reconocido por la Federación de Colegios de Abogados;
- e) Del señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, como miembro ex officio.

Tercera. — Los miembros de la Comisión Permanente tendrán iguales atribuciones y desempeñarán sus cargos ad honorem.

Cuarta. — La Comisión Permanente podrá nombrar redactores remunerados que estudien y desarrollen los temas que se les encomiende, dentro del término que se les fije.

Sus dictámenes serán sometidos a aquella a los fines expresados en la base primera.

Quinta. — Es incompatible el cargo de miembro de la Comisión Permanente con el de redactor remunerado.

No podrá encomendarse a cada redactor sino el estudio de una sola materia, y si el mismo estudio fuere encomendado a más de uno, los dictámenes serán individuales.

Sexta. — La Comisión Permanente elegirá de entre sus miembros un presidente y un vice y se dará su reglamento. Nombrará, además, un secretario, abogado, remunerado y

con funciones de carácter permanente, quien hará efectivas las medidas adoptadas por la Comisión y la representará durante el período de receso, sin perjuicio de la representación que corresponde al Presidente.

Séptima. — Los gastos que demande el sostenimiento de la Comisión Permanente serán costados con la asignación que fije el gobierno de la Nación y con los demás recursos que aquélla pudiere obtener.

Octava. — La Comisión Permanente celebrará, por lo menos, una sesión anual, en la que se dará cuenta de los asuntos entrados y de la labor de los redactores. Además podrá ser convocada por iniciativa de su presidente o a pedido de tres de sus miembros para tratar cualquier asunto que por su naturaleza no permita postergación.

Novena. — La Comisión Permanente tendrá su sede en la Capital Federal y celebrará sus sesiones en ella, salvo que resuelva efectuarlas en cualquier otro punto de la República.

El quórum para las reuniones de la Comisión Permanente será de siete miembros presentes. Los ausentes no tendrán voto pero podrán enviar por escrito sus opiniones.

Décima. — Los miembros de la Comisión Permanente conservarán sus cargos mientras dure su vinculación con el cuerpo que los haya designado.

Las vacantes que se produzcan se llenarán solicitando al cuerpo que corresponda el nombramiento de nuevos representantes.

Undécima. — La Comisión Permanente por el voto de dos tercios de todos sus miembros podrá modificar las presentes bases.

materia de obligaciones, conforme a las siguientes bases:

- a) Simplificación de los textos legislativos, eliminando del Código de Comercio todas las disposiciones que contiene análogas a las del Código Civil;
- b) En los casos de omisión, oposición o modificación de unas y otras, optar por la que consulte mejor los principios científicos y prácticos que las determinan o por la subsistencia de ambas.

La Comisión designada podrá formar parte de la de Estudios Legislativos.

Cláusula CIF.

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

Aprobar las siguientes bases, aconsejadas por la comisión respectiva:

Si el comprador no hubiere verificado las mercaderías antes de su envase o en el lugar de la expedición, tendrá derecho de hacerlo en destino, o a exigir que el vendedor demuestre la condición, calidad, cantidad, peso y medida de las mismas, con certificados que procedan de funcionarios cuyas attestaciones hagan fe al respecto. Tal derecho podrá ejercerlo el comprador aun cuando hubiere pagado el precio, siempre que las mercaderías no hubiesen salido de la aduana.

Correlación de los derechos civil y comercial en materia de obligaciones

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

Designar una Comisión compuesta por los doctores Henoch D. Aguiar, Santiago F. Díaz, Héctor Lafaille, Enrique Martínez Paz, Señor Norillo Corvalán, Carlos Serrey y José María Valdés, encargada de estudiar la correlación de los derechos civil y comercial en

Sociedades de responsabilidad limitada

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

DECLARA:

Que la institución en nuestro Código de Comercio de las sociedades de responsabilidad limitada, es una necesidad exigida premiosamente por el desenvolvimiento del comercio y de la industria media. De acuerdo con este principio, este tipo de sociedad debe ser legalizado, reconociéndole su independencia y autonomía, sin perjuicio de referirlo a las

disposiciones de carácter general contenidas en los Códigos Civil y de Comercio, que armonicen con su naturaleza jurídica y sobre las siguientes bases:

- 1º Pueden ser objeto de esta sociedad los actos civiles o comerciales, con exclusión de los que se refirieran a empresas bancarias, de seguros, de capitalización y de ahorro;
- 2º El capital no debe formarse acudiendo a subcripciones públicas, ni representarse por títulos negociables;
- 3º La cesión de la cuota debe reglamentarse en forma de asegurar al socio el derecho de transferirla, pero sin perjudicar a la sociedad con la introducción de elementos indeseables;
- 4º Debe asegurarse la estabilidad del capital social, ofreciendo a los terceros la posibilidad de informarse periódicamente sobre ello y sobre la identidad de los socios, por medios sencillos y económicos.

Registro Público de Comercio

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

DECLARA:

Que conviene reglamentar el funcionamiento del Registro Público de Comercio en forma que asegure: 1º la inscripción de los actos sociales y representaciones en general que la requieran, y 2º la centralización de la publicidad de estos actos en un Boletín Oficial de cada circunscripción.

Conviente, también, reglamentar la inscripción del nombre o enseña para asegurar la identidad del establecimiento y facilitar su transferencia, protegiendo los derechos de terceros.

Transferencia de establecimientos comerciales e industriales

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

DECLARA:

Que es necesario y urgente reglamentar la transferencia de establecimientos comerciales

e industriales, y recomienda a ese efecto las siguientes bases:

- 1º Todo acto de transmisión de comercio o industria para que surta efecto contra terceros deberá realizarse por escrito e inscribirse en el Registro Público de Comercio;
- 2º La transmisión, sea directa o en subasta, deberá ser previamente anunciada por el término de cinco días en el Boletín Oficial e inscrita en el Registro Público de Comercio, después de quince días y antes de treinta de vencida la publicación;
- 3º La publicación se hará en una sección determinada del Boletín Oficial, y deberá contener:
 - a) El nombre de los contratantes cuando la transmisión sea directa y el del vendedor, cuando sea en subasta;
 - b) El domicilio o local del establecimiento;
 - c) La especificación de su ramo principal.
- 4º El Registro Público de Comercio llevará libros especiales para la inscripción de las transmisiones y anotación de los embargos y expedirá los certificados de gravamen, que podrán solicitar los escribanos y los vendedores, mediante el pago de los emolumentos de ley;
- 5º Anunciada la transmisión, los acreedores podrán ejercer las acciones relativas a sus créditos, aunque éstos no se hallaren vencidos, salvo que el comprador se hiciere cargo de la deuda, con consentimiento de aquéllos.

No podrán usar de este derecho los acreedores cuyos créditos no hubieren tenido relación alguna con el giro del comercio o industria a transmitirse. Se presumirá que la tienen los créditos comerciales de causa indeterminada;
- 6º La subrogación del comprador en la deuda del vendedor no exime a este último de su obligación hacia el acreedor por el saldo pendiente;
- 7º Sólo podrán oponerse al comprador los embargos anotados dentro del plazo de quince días, a que se refiere la base segunda.

Crédito documentario

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

DECLARA:

De urgente necesidad legislar lo relativo al crédito documentario y recomienda especialmente a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos los proyectos presentados por el Comité de Bancos y por los doctores Teodoro Becú y Oscar Zaefferer Silva.

Arbitraje en materia comercial

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

Pasar a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos el proyecto del doctor J. M. González Sabathie sobre arbitraje en materia comercial.

Viajantes de comercio y contrato de representación

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

DECLARA:

Necesaria la incorporación al Código de Comercio de disposiciones sobre viajantes de comercio y contrato de representación en las que se contemple la situación de exclusividad.

Transporte marítimo y fluvial

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

Artículo 1º — Solicitar al Honorable Congreso de la Nación la reforma del Libro III del Código de Comercio, con arreglo a las siguientes bases:

- a) Nulidad de las cláusulas insertas en las pólizas de fletamento, en los conocimientos o en cualquier otro título emitido por el transportador, cuyo objeto sea eximirlo o liberarlo en los contratos a ejecutarse en la República, de las responsabilidades impuestas por las leyes nacionales, con relación a las pérdidas o daños producidos en las cosas transportadas, derivadas de malversación, dolo, culpa y omisión personal del transportador, o de sus factores, dependientes o agentes;
- b) Nulidad de las estipulaciones que atribuyan competencia a un tribunal extranjero;
- c) Incorporación al Código de Comercio, en su primera edición oficial, de la ley número 11.132, como única aplicable a todos los casos, dejando vigente las disposiciones de los títulos XI y XIII del Libro III del Código de Comercio, en lo que se refiere a la jurisdicción, organización de los tribunales y procedimientos;
- d) Adopción como ley de la Nación de las disposiciones sancionadas en la Convención Internacional para la unificación de las reglas relativas a privilegios e hipotecas marítimas, celebrada en la Conferencia reunida en Bruselas del 6 al 10 de Abril del presente año, dejando en vigencia aquellas disposiciones de los títulos XV y XVI relativas a jurisdicción, procedimiento y organización interna de los tribunales y registros.

Art. 2º — Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional una adecuada reglamentación de la ley número 10.606, de acuerdo con sus propósitos y lo dispuesto por el artículo 29 de la misma, suprimiendo así las trabas que aun se mantienen.

Transportes terrestres

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

Aprobar el siguiente dictamen de su Comisión de Transportes Terrestres:

«La Comisión de Transportes Terrestres después de examinar detenidamente el proyecto del ingeniero don Carlos M. Ramallo y el meditado informe que lo fundamenta, teniendo en cuenta, además, que conviene armonizar principios de la legislación común y de las leyes federales, aconseja a la Conferencia se designe una Comisión especial que estudie el mencionado proyecto y presente su dictamen en la próxima Conferencia.»

En consecuencia, se encomienda a la Federación de Colegios de Abogados, el nombramiento de la referida Comisión, la que se compondrá de profesores de las Universidades Nacionales, de tres delegados de esta Conferencia y de los representantes de las empresas particulares e instituciones afines.

PUNTOS NO PREVISTOS EN EL PROGRAMA

Reforma de la Constitución Nacional

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

Artículo 1º — Declarar de urgente necesidad la reforma de la Constitución Nacional.

Art. 2º — Encomendar a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos la determinación de los puntos que ha de comprender la reforma.

Art. 3º — Comunicar esta resolución a los poderes públicos de la Nación y de las Provincias.

Corte de Casación Interprovincial o Argentina

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

Pasar a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos el proyecto de los delegados de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Ejecutivo de la Provincia de Tucumán, sobre

«Creación de una Corte de Casación Interprovincial o Argentina».

Nacionalización de la justicia argentina y reforma del sistema de enjuiciamiento de magistrados.

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

Encomendar a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos el estudio de la ponencia del doctor Ramón Morcy sobre nacionalización de la justicia argentina y reforma del sistema de enjuiciamiento de magistrados, y los fundamentos respectivos.

Unificación de los impuestos internos y reforma al Código de Minas en su artículo 7º.

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

Pasar a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos el proyecto sobre «Unificación de los impuestos internos y reforma al Código de Minas en su artículo 7º» y el dictamen respectivo, con recomendación de pronto despacho, sin que esta sanción importe un pronunciamiento de la Conferencia sobre el fondo de la cuestión.

Provisión de cargos judiciales por las intervenciones nacionales

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

1º — Ratificar la siguiente declaración de la Primera: «Que vería con agrado que en los casos de intervención federal a las provincias,

los cargos declarados vacantes con abogados que no reúnan los requisitos exigidos por las constituciones y leyes de las provincias intervinientes y declarar que, también en el caso de organización permanente de los poderes judiciales de las provincias, las funciones judiciales deben ser ejercidas por miembros del foro local;

2º — Expresar el anhelo de que este principio se haga efectivo en las instrucciones a los comisionados federales o en una ley reglamentaria de intervenciones.

Código de lo contencioso-administrativo

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

DECLARA:

Necesario que la Nación y las Provincias que no lo tienen, dicten su Código de lo contencioso-administrativo, que precise lo que debe entenderse por causas contencioso administrativas, y determine el Tribunal competente y el procedimiento para substanciarlas.

La Comisión Permanente de Estudios Legislativos formulará un proyecto de Código para la Nación y las Provincias y solicitará su sanción a los gobiernos respectivos.

Distribución y organización de la tarea judicial

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

Gestionar de los poderes públicos por medio de la Federación de Colegios de Abogados, la confección de estadísticas sobre la base de la ficha individual, tendientes a la mejor organización de la tarea judicial y para que la creación, traslado o supresión de tribunales respondan a las exigencias forenses.

Aumento de la retribución de magistrados

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

Teniendo en cuenta el encarecimiento de la vida en los últimos años y la circunstancia de haber permanecido estacionaria por regla general la retribución de los magistrados

RESUELVE:

Recomendar a la Federación de Colegios de Abogados que gestione de los poderes públicos, nacionales y provinciales, el aumento de esa retribución.

Organización legal de los Colegios de Abogados

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

Artículo 1º — Ratificar la declaración de la Primera Conferencia sobre la organización legal de los Colegios de Abogados.

Art. 2º — Comunicar esta resolución a los gobiernos en cuya jurisdicción existen Colegios de Abogados, expresándoles el deseo de una iniciativa en tal sentido.

Creación de bibliotecas de especialización jurídica.—Reglas de ética y cultura forense

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

Ratificar las siguientes resoluciones aprobadas por la Primera:

Bibliotecas. — Recomendar a los Colegios de Abogados y a las autoridades judiciales, donde no los hubiere, la creación de bibliotecas, sobre todo de especialización jurídica.

Reglas de ética y cultura forense. — 1º — Propiciar, como lo ha hecho el Colegio de Abogados de Buenos Aires, la creación de cursos de ética y cultura forense en todas las escuelas de Derecho del país.

Donde no las hubiere, los Colegios de Abogados locales organizarán conferencias, pidiendo su auspicio a los magistrados y miembros del foro.

2º — Recomendar a éstos el uso de las reglas de ética y de cultura forense de la Asociación de Abogados de los Estados Unidos de Norte América, adoptadas por el Colegio de Abogados de Buenos Aires, y las que existen en las legislaciones que han servido de fuentes al Derecho argentino.

3º — Manifestar su anhelo para que se establezcan en las Facultades de Derecho de la República, requisitos de idoneidad moral para ingresar a ellas y recibir el título de abogado o el de doctor en jurisprudencia.

Instituto de Compilación, Clasificación y Ordenación del Derecho Argentino

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

DECLARA:

Que a efecto de facilitar el conocimiento y estudio de la legislación, debe crearse un Instituto especialmente destinado a la compilación y clasificación del Derecho argentino, en todas sus ramas, comprendiendo leyes, decretos, ordenanzas, reglamentaciones, precedentes judiciales, resoluciones administrativas, bibliografía jurídica y concordancias de nuestro derecho con el extranjero.

El Presidente de esta Conferencia designará una Comisión especial de tres miembros para proyectar y gestionar la creación de dicho Instituto.

Expropiación

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

Pasar a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos los siguientes proyectos pro-

sentados por el doctor Héctor R. Baudón sobre expropiación:

- a) De la indemnización y pago de daños y perjuicios;
- b) Casos en que afecta el funcionamiento de comercios o industrias.

Impedimentos para contraer matrimonio

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

Pasar a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos las proposiciones del doctor Héctor R. Baudón, sobre «impedimentos para contraer matrimonios».

Nombramiento de síndicos en los concursos de acreedores

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

Pasar a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, la proposición del doctor Héctor R. Baudón sobre nombramiento de síndicos en el concurso de acreedores.

Ley de ciudadanía

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

Recomendar a la Federación de Colegios de Abogados de la República que incluya entre los temas a tratarse por la Tercera la proposición del doctor Juan C. Garay sobre modificaciones a la ley de ciudadanía.

Temas para la Tercera Conferencia

LA TIERRA AGRARIA

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

Recomendar a la Federación de Colegios de Abogados de la República que incluya entre los temas a tratarse en la Tercera, las conclusiones del trabajo del doctor Manuel B. Gonnet, titulado *La tierra agraria*, presentado por su autor a la Academia Nacional de Ciencias Económicas en la sesión del 15 de Octubre de 1925.

Trabajos para la Tercera Conferencia

La Segunda Conferencia Nacional de Abogados

RESUELVE:

1º — Solicitar de cada uno de los Colegios adheridos a la Federación de Colegios de

Abogados, que envíen a la próxima Conferencia un trabajo sobre alguno de los siguientes temas:

- a) La doble imposición como problema interno y externo en el país;
- b) Las deformaciones de nuestro sistema federal. Las llamadas facultades concurrentes en nuestra Constitución Nacional;
- c) El régimen de la tierra pública y de las minas en la legislación provincial;
- d) La legislación sobre asistencia y disciplina sociales; facultades nacionales y locales al respecto; su delimitación.

2º — Recomendar que dichos estudios se hagan especialmente desde el punto de vista institucional y práctico que refleje los antecedentes y modalidades propias de cada provincia.

HOMENAJES

Con motivo de la celebración de la Segunda Conferencia Nacional de Abogados, la Federación de Colegios de Abogados rindió un homenaje a la memoria del fundador de la Universidad de Córdoba, obispo Trejo y Sanabria, y de los juriconsultos doctores Jerónimo Cortés, Rafael García y Dalmacio Vélez Sársfield.

Publicamos a continuación los discursos pronunciados en el momento de la colocación de las placas conmemorativas.

Homenaje a la memoria del obispo Trejo y Sanabria

Al ser colocada la placa en el monumento del fundador de la Universidad, el doctor Pedro R. Quiroga pronunció el siguiente discurso en nombre de la Federación.

Señor Gobernador de la Provincia;

Señor Rector;

Señores:

«Hablo en nombre de la Federación de Colegios de Abogados de la República y si no fuera que aunque muy inmerecidamente, puedo invocar tan alta representación, yo no me consideraría autorizado para hacer oír mi voz en la Universidad de Córdoba, al pie de la estatua de Trejo y Sanabria, consagrada por el testimonio irrecusable de la posteridad, como preclaro precursor de la cultura argentina.

Pero los abogados que aquí llegamos en misión patriótica, porque es hacer un peuazo de patria tomentar el mejoramiento de la legislación, propendiendo así a la consolidación de las instituciones del país, no podíamos penetrar a esta casa, rica en tradiciones inolvidables y pletórica de enseñanzas ejem-

plarizadoras, sin reverenciar a Trejo, alto el corazón e inclinada la cabeza, como lo hacían los ciudadanos de Roma con el fundador de la ciudad, a quien como sabéis, consideraban además, como el antepasado común para todas las generaciones que se sucedían.

Es que la realidad derrumba las utopías.

Como saldo favorable de esta mar agitada en que se han debatido las sociedades contemporáneas en los últimos tiempos, puede anotarse el hecho auspicioso de que la conciencia colectiva vuelve sobre sus pasos, reconociendo que no es posible vivir sin pasado, porque el pasado está impuesto por las leyes de la vida, que como las de la Naturaleza, son inexorables en sus designios.

¡Feliz la Universidad de Córdoba, que a justo título puede considerarse como antepasado común de todas las generaciones de argentinos que pasaron por los claustros universitarios del país, y feliz otra vez, porque del viejo tronco salvado de las furias del desierto y de las garras de la anarquía, ha surgido esta Universidad nueva, que hoy nos cobija bajo su protección, como si quisiera darnos un poco de su pujanza irreducible para que la obra que vamos a emprender sea digna del crisol donde va a amasarse!

La Federación de Colegios de Abogados no es creación exótica ni planta estéril, que necesite abonarse por procedimientos de artificio. Si los hombres y las instituciones se miden por sus obras, la Conferencia que acabamos de inaugurar, la celebrada hace dos años y la obra cultural que silenciosamente desarrolla en su sede de la Capital de la República, son fiel exponente de que vive y progresa en su afán incesante de tutelar los intereses y necesidades del pueblo de donde ha salido la razón

de ser de su existencia, conduciéndolo al perfeccionamiento jurídico, que es como la tierra prometida de todas las sociedades orgánicas.

Pero no basta lo que hasta aquí se ha hecho. La tarea de la Federación es y debe ser de mayor proyecciones. Así lo entienden sus hombres dirigentes. Ni la abulia nativa, podrá computarse como contrapeso ni fuerza de inercia y la obra se hará completa con el concurso de fuerzas nuevas que se le están incorporando, convencidas de que así sirven un alto interés nacional.

Toda substancia es fuerza, toda vida es acción. Tal el postulado con que la Federación cumplirá sus destinos.

Los momentos son de prueba, aunque no por ello menos propicios.

Mientras las viejas sociedades de Europa se debaten en la desorientación, las nuevas democracias de América, salvado el período inicial, se encaminan hacia la culminación de sus aspiraciones dentro del orden.

Esta misma ciudad de Córdoba, muchas veces eje de la solución de los grandes problemas nacionales y que ha poco sorprendiera a la República con la lucha democrática más intensa y viril que haya presenciado el país, nos ofrece para nuestra deliberación la calma de los días más serenos a que puede aspirarse, en medio de la vorágine de pueblos en marcha.

Aprovechemos este ambiente que invita a la meditación y al ejemplo, haciendo obra perdurable, que ojalá sea digna de computarse, en la infinita continuidad de la vida, de la ciencia y del pensamiento, despertando la emulación de tantas fuerzas vivas que con la conjunción de sus propósitos pueden llevar al país a la grandeza de sus destinos; y vos, señor Rector, al recibir esta placa, que colocada en la estatua de Trejo y Sanabria tengo el honor de entregaros como homenaje de la Federación de Colegios de Abogados de la República, con la autoridad de nuestro apostolado, como conductor experto de las legiones estudiantiles, en nombre de una generación que al hacer su ciclo, pasa por la prueba de fuego de la existencia, repetid una vez más, con carácter de advertencia salvadora, a los que

aquí se educan, que sólo es imperecedera la verdad, que nos impone la modestia y el profundo respeto para todas las opiniones y que nos hace medir nuestra propia debilidad, despertando en la conciencia un sentimiento de humildad saludable.»

Recibió la placa en nombre de la Universidad, el Rector de la misma doctor León S. Morra, quien dijo:

Excelentísimo señor Gobernador;

Señor presidente de la Segunda Conferencia Nacional de Abogados;

Señores:

«Hace pocos días la Universidad de Córdoba recibía un significativo homenaje rendido a su ilustre fundador por la joven y prestigiosa Universidad de La Plata. Consistía él, en la restauración en el tradicional salón de grados, del retrato del ilustrísimo obispo, obra de la escuela de pintura del Instituto Superior de Bellas Artes de dicha Universidad, dignísimo exponente de la cultura artística, que fomenta y cultiva con elevado y amplio concepto de su misión.

Si como representante de esta centenaria Universidad, tuve intensa satisfacción en aceptar aquel homenaje, así por el valor artístico de la obra obsequiada como por su alto significado, hoy cábeme igual satisfacción ante el nuevo tributo que se rinde al benemérito fundador de esta histórica casa de estudios.

Y si aquel recuerdo tenía además la grande importancia de su procedencia, una Universidad hermana, ésta que vosotros traéis hoy día tiene también los grandes valores y positivos prestigios de su origen, la Federación de Colegios de Abogados de la República.

Esta selecta reunión de intelectuales de todos los puntos de la Nación; este brillante grupo de representantes de las más autorizadas instituciones jurídicas del país, que ha querido celebrar sus deliberaciones bajo las

viejas bóvedas de esta casa, el primer foco que ha esparcido la luz de la ciencia y la cultura por las extendidas regiones que hoy constituyen la República Argentina, ha querido también rendir justiciero tributo de admiración y respeto al abnegado obispo, que con amplísima visión del porvenir, sentara las bases hace más de tres siglos, de la que fué Universidad Mayor de San Carlos y es hoy Universidad Nacional de Córdoba.

Este bronce, señores, levantado hace pocos lustros por la gratitud de sus hijos en memoria del benemérito fundador, ostentará de hoy en adelante una nueva expresión de respeto y reconocimiento como significa la artística placa que descubrimos y que lleva todo el valor que representa su calificada procedencia: los abogados de la República.

Señores: en nombre de la Universidad de Córdoba acepto y recibo este homenaje que tributa a su ilustre fundador la Federación de Colegios de Abogados y lo agradezco con toda la sinceridad que corresponde a tan espontánea como significativa muestra de simpatía a esta Universidad y al digno obispo que le diera vida.»

Homenaje a la memoria del doctor Jerónimo Cortés

En este acto el señor presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, doctor Henech D. Aguiar, pronunció el siguiente discurso:

Señor Gobernador de la Provincia:

Señores:

«La Federación de Colegios de Abogados de la República, al celebrar su Segunda Conferencia nacional, ha querido rendir a esta ciudad, sede de sus sesiones, un homenaje en algunos de sus varones representativos, en algunos de los que destacaron su personalidad en campo tan vasto y fecundo como el del derecho.

Homenaje modesto, al par que significativo, no pretende alcance de consagración, sino que afirma y reconoce lo que el tiempo y la conciencia colectiva han consagrado: son pocos los que viven después de la muerte. La supervivencia es el espíritu que trasciende y une el pasado con el porvenir, a través del presente.

Por eso, lo que no satisface aspiraciones y anhelos comunes por más que brille y seduzca, por más que en un momento arrastre voluntades, pasa como las estrellas errantes que deslumbra y se apagan. Para sobrevivir, es menester hacer labor estable y fecunda que aprisione el pensamiento en el verbo o en la obra, para que los que vienen, reconozcan en ella al autor, como al árbol por el fruto.

Vive en su obra Jerónimo Cortés, cuya figura no ha sufrido desgaste de los treinta y cinco años transcurridos desde su muerte. Parece, más bien, que el tiempo — si no la ha agrandado — la ha perfilado con rasgos tan firmes y netos, como aquellos que el cincel genial burila en el mármol estatuario. El fenómeno no es un fenómeno de óptica, ya que la distancia difuma los contornos y confunde las cosas, al proyectarlas en el vago fondo del horizonte.

Bien está que al doctor Jerónimo Cortés, hijo preclaro de Córdoba e hijo dilecto del *alma mater* de la docta ciudad, se le rinda homenaje en el viejo claustro universitario, como lo hace ahora la Federación de Colegios de Abogados de la República, al entregar ese bronce, que lo recuerda, a la custodia de la Facultad de Derecho.

Apasionado por la enseñanza, profesó en nuestra Facultad el derecho natural, la economía política y el derecho internacional y en la de Buenos Aires, el derecho civil, al cual marcó rumbos, enlazando la tradición civilista, romana y española, en la que se habían formado nuestros viejos juristas, con las enseñanzas de los comentadores del código Napoleón, puestos en boga con la sanción de nuestro Código Civil.

Trasladado a la Capital Federal para representar en el Senado a su provincia natal, tuvo oportunidad de intervenir, como miembro de la Comisión de Le-

gislación, en el estudio del proyecto de fe de erratas presentado por el senador doctor Benjamín Paz y poner en claro, con este motivo, el alcance del proyecto y del despacho de la comisión que no era simplemente de «supresión de errores tipográficos», pese a la impugnación de Sarmiento, sino también el de corregir imperfecciones provenientes del descuido, aclarar ciertas disposiciones, armonizar artículos contradictorios y aun salvar errores evidentes.

Ya en 1874, había publicado *La reforma constitucional*, en la que exponía con claridad y precisión admirables la que hiciera el pueblo de Córdoba en 1870, en la cual había intervenido, destacándose, como se sabe, entre la pléyade de aquella memorable asamblea, como los García, los Laspiur, los Posse, los Oliva, los del Viso, los Guzmán, los Zuviria y tantos otros más que, como éstos, fueron honra y prezo de la República.

Fiscal de las cámaras de apelaciones de la Capital Federal, expone en una serie de magistrales escritos, sus vistas en los asuntos en que interviene. De su laboriosidad, de su preparación, de su talento, dan cuenta los cinco gruesos volúmenes publicados, que contienen, si no todos, la mayor parte de ellos.

No menos conocido que estos trabajos es el que se refiere a la determinación de los límites de la provincia de Córdoba con la de San Luis.

Las más importantes cuestiones jurídicas, administrativas, políticas o de gobierno, fueron resueltas por el doctor Jerónimo Cortés, quien puso, en su dilucidación, sus vastísimos conocimientos del derecho en vigor y del que nos rigiera anteriormente, del cual era, asimismo, conocedor profundo, como pocos de los hombres de su generación.

Como constitucionalista reveló un espíritu descentralizador y democrático que fácilmente se advierte en los debates de la Constituyente, cuyas ideas, como se ha dicho, se propuso difundir entre sus conciudadanos en el libro denominado *La reforma constitucional*.

Como jurista, marcó huellas en el sistema de interpretación de la ley: no fué un mero exégeta de los textos, sino

que supo animarlos con la luz de la filosofía, de la cual había sido maestro, separándose, así, de este modo, de la escuela de los comentaristas franceses, que llegaron a afirmar que no existía nada más que el código; a tal punto, que el ilustre Demolombe solía exclamar: «Mi divisa, mi profesión de fe es también los textos antes que nada», o como más decididamente lo afirmaba Bugnet: «No conozco el derecho civil, no enseño más que el Código de Napoleón». Alumbrado por aquella luz, supo libertarse de estériles formalismos para buscar directamente la verdad y así pudo decir, arrastrado por su amor a ella: «Procuraré que la verdad no sea ofuscada por sutilezas, ni perezca la justicia oprimida por las formas.»

La serenidad del juicio domina toda la obra de Cortés, la que por su claridad y precisión, recuerda a los clásicos latinos, que le eran familiares. No deslucía aquella serenidad una cierta vehemencia que se advierte en algunas de sus «vistas fiscales», porque ella no es otra cosa que una forma de su noble pasión por la justicia, que lo lleva a levantar el tono de la exposición, a descubrir con la agudeza de su ingenio las junturas de la coraza del adversario, para golpear allí, repetida y rudamente, hasta vencerlo.

La pasión puesta al servicio de la verdad y de la justicia es más digna de alabanza que de reproche, porque el escepticismo es síntoma de decadencia moral de los individuos o de los pueblos, que sólo marchan y progresan cuando ponen al servicio de las grandes causas, como fruto de su convicción, el calor y el entusiasmo, los espíritus que, amantes del ideal, son capaces de sacrificarse por él.

El doctor Cortés, juez o fiscal, profesor o legislador, político u hombre privado, en todas partes donde actuó, cumplió como bueno, aun con sacrificio de su bienestar y de su tranquilidad, sus deberes de ciudadano y de hombre público, y con su obra — que apenas hemos esbozado — difundió con brillo entre las gentes, el nombre de la Universidad que lo armara caballero de la verdad y la justicia.»

El señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, doctor Guillermo Rothe, pronunció el siguiente discurso:

Señor Gobernador:

Señores Delegados:

Señores:

«Celebro con satisfacción profunda la circunstancia que me permite agradecer como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, el homenaje que los abogados de la República tributan a la memoria de un hombre tan eminente por su ciencia, sus servicios y sus virtudes, como humilde fuera, al decir de sus biógrafos, en sus palabras y en su corazón.

Ni la pasión sectaria, ni el interés de círculos militantes, mezclarán aquí a la noble elevación del justiciero tributo el ditirambo efímero de panegiristas interesados. Siete lustros corridos desde el día de su muerte, han dispersado ya a los que pudieran exaltar el propio mérito exhibiendo la participación en la misma tarea o cubrir la ausencia de virtudes con el reflejo de las que resplandecieran en Jerónimo Cortés con singular pureza. Ninguno de los iniciadores de este homenaje pudo conocerle en vida y muy pocos de los presentes habrán disfrutado el honor de su trato o admirado la gravedad digna y sencilla de su porte. El mérito de una labor fecunda, la fama de una austeridad sin declinaciones, los beneficios no extinguidos de una ilustración jurídica vastísima, el ejemplo de una probidad intelectual y material sin mancha aquilatada por el tiempo, inspiran a los profesionales del derecho provenientes de todos los ámbitos del país, el deseo de consagrar en una inscripción indeleble, el recuerdo imperecedero a quien encarnara en su época las más altas cualidades de juriconsulto.

Si para la consagración de un nombre como ejemplo digno de imitación es necesario el examen desapasionado y prolijo de los hechos que lo ilustran,

podría ofrecerse el de Jerónimo Cortés a la crítica más rigurosa. Varón probo, versado en el esclarecimiento del derecho, dejó como magistrado, juriconsulto y publicista sus *Vistas fiscales*, su *Informe en la cuestión de Límites interprovinciales con San Luis* y sus *Comentarios a la reforma constitucional de 1870*, pruebas de vasta cultura e insuperable penetración jurídica: como hombre público, su actuación parlamentaria en la provincia y en la Nación, y como maestro en nuestra Facultad y en la de la Universidad de Buenos Aires, la memoria de su lógica profunda en la enseñanza del derecho natural, de su versación extraordinaria en el derecho romano, el derecho canónico, la historia del derecho, la evolución histórica de la ciencia jurídica y la legislación contemporánea comparada, de su poderosa facultad de análisis, de su dialéctica formidable, en la cátedra de derecho civil. Podrían no constituir estos antecedentes motivo bastante para destacarlo entre otros muchos profesores ilustres, para señalar su obra a la gratitud de las generaciones llamando permanentemente la atención de la juventud universitaria hacia estas letras de bronce incrustadas en los claustros seculares, pero Jerónimo Cortés presenta el raro ejemplo de mantener incómmes entre las agitaciones de la vida pública y las seductoras sollicitaciones del foro, los principios que enseñara desde la cátedra, sin desviaciones ni desmayos.

Federalista en las contiendas cívicas, llevó sus convicciones a la universidad, a las asambleas legislativas, al libro y a la tumba. Católico en la intimidad de su hogar, ostentó y defendió su credo en todo momento con serenidad, conciencia y gallardía. El interés no desvió su pasión por la justicia, ni el mundo debilitó su fe cristiana, ni el ostracismo doblegó su altivez política.

Y basta, señores, para justificar el designio de los abogados de la República al dejar para siempre esta plaza frente a la diaria mirada de los jóvenes estudiantes. Ella les dirá que es fácil obtener el respeto en la vida y la consagración después de la muerte, a quien no se rinde al oportunismo sensual y egoísta y ostenta, como Jerónimo Cortés, su

convicción honrada en el magisterio, en el foro, en la magistratura y en el ágora.

Homenaje a la memoria del doctor Rafael García

En la plazoleta ubicada frente a la Universidad se rindió el homenaje a la memoria del doctor Rafael García, haciendo uso de la palabra el doctor Carlos E. Deheza, quien pronunció el siguiente discurso:

«La Federación de Colegios de Abogados, inspirada en un enérgico espíritu de justicia, ha decidido ofrecer estos sencillos a la vez que significativos homenajes a los ilustres hijos de Córdoba que se destacaron por sus preclaros talentos y sus sabias enseñanzas en la ciencia del derecho.

Tal propósito nos ha reunido, en esta hora propicia, en torno de la figura fundida en bronce del doctor Rafael García: de esta estatua que el extravío de un momento hiciera tambalear un día y que hoy, más que nunca, diérase, quedará consolidada en su pedestal, por esta pequeña placa que a pesar de su exigüidad material representa la consagración de la conciencia serena, elevada e insospechable del foro de casi toda la República.

Aquí, en medio de tan ilustrada y escogida concurrencia, no es necesario puntualizar los méritos de aquel a quien va dirigido el homenaje. Insignes panegiristas, que fueron sus discípulos y que pudieron sentir de cerca las emociones de su cerebro y las palpitaciones de su corazón, han perfilado magistral y acertadamente la personalidad del doctor García, poniendo de manifiesto sus insuperables cualidades intelectuales y morales. Con todo, va que las circunstancias son favorables, quiero recordar aunque no sea más que a grandes rasgos, su paso luminoso por la Universidad y por la magistratura.

Vice-rector de nuestra gran casa de estudios allá por el año 1958, el doctor García fué nombrado, definitivamente, profesor de derecho civil en 1952, cátedra que dictara durante veinticu-

tro años consecutivos y que constituyó la materia de su especial predilección en el aula.

Maestro admirable por el caudal enorme de sus conocimientos, por la precisión de sus doctrinas y por la claridad y sencillez de su método, impregnaba su exposición con esa elocuencia comunicativa, natural y espontánea que en él era característica y que infundía vida y penetración a su palabra.

Fué un juriconsulto en el sentido más amplio del vocablo: un juriconsulto que derramaba patriarcalmente, en el aula, su sabiduría, porque así como imponía respeto por su ciencia, sabía engendrar el afecto en el corazón de sus discípulos, que recibían con avidez, el torrente de sus enseñanzas. Su acción docente era no sólo instructiva y educativa sino también ejemplarizadora, porque emanaba de un hombre que a la par de sus indiscutibles prestigios intelectuales ostentaba una talla moral irreprochable.

Como maestro fué un astro de primera magnitud que recorrió la órbita de su existencia resplandeciendo siempre con luz propia. Fuerzas emergentes de contrarios campos filosóficos, trataron de eclipsar el brillo de su carrera, derribándolo del elevado sitio en que sus méritos lo habían colocado: pero aquella luz, cegada un momento solamente, ha vuelto a surgir esplendorosa en la posteridad a la sola evocación de su nombre y de sus obras, y una pléyade brillante de discípulos se ha encargado de prolongar y enaltecer la personalidad del maestro.

En 1870, el doctor Rafael García fué designado juez federal en Córdoba. Esta nueva actividad le proporcionó ancho campo de acción para aplicar sus vastos conocimientos jurídicos. Tenía todas las condiciones para ser un juez eximio: inteligencia, ilustración, carácter, independencia y honorabilidad. Su espíritu amplio lo llevó a poner, en muchos casos, las frías y abstractas concepciones de la ley en contacto con las corrientes cálidas de la vida. Sus fallos, como dice uno de sus biógrafos más autorizados, «más que las decisiones de las controversias sometidas a su juzgamiento, son luminosas monografías de

derecho, en que el ilustre juez dilucida y agota la materia con la profundidad de un sabio. Y para apreciar de un solo golpe de vista la capacidad y el acierto del magistrado, bastaría hacer notar que durante los diez años que ejerció la magistratura, tres sentencias, solamente, le fueron revocadas, en dos de las cuales hubo disidencia entre los miembros del Tribunal de Apelación. Fué tal su rectitud que su juzgado llegó, en ocasiones, a constituir una barrera infranqueable a los avances de los poderes políticos que en aquellas épocas azarosas pretendieron, más de una vez, arrollar toda otra autoridad que obstaculizara la consecución de determinados propósitos.

Como ciudadano no mantuvo otros ideales que los del mejoramiento de las instituciones y la felicidad y el engrandecimiento de la patria. Desde su banca de diputado de la Convención Constituyente Provincial de 1858 y a la de 1870 prestó su valioso concurso a la reorganización institucional de Córdoba y del país, destacándose como un constitucionalista de nota. Y al lado de estas grandes aspiraciones, un acendrado espíritu religioso animaba su alma y era su fé tan arraigada y tan sincera que ella informó todos los actos de su vida. Austero y sobrio en sus costumbres, sencillo en sus maneras, noble y caballeresco en sus acciones, incansable en el trabajo, llevó a la práctica en su vida privada, fiel reflejo de sus convicciones espirituales, las ideas que sustentaba y de las cuales no claudicó jamás.

Señores:

Es admirable el espectáculo de estas vidas consagradas por entero a la ciencia, a la enseñanza y al bien, orientadas constantemente, por ideales superiores, resplandecientes en el ambiente público y puras e intachables en la intimidad. En estos tiempos en que las corrientes de ideas cosmopolitas decoloran los tintes de la nacionalidad; en que los gozos pasajeros substraen a las inteligencias de la meditación y del estudio, en que factores múltiples han destemplado el carácter; en estos tiempos, instintivamente volvemos nuestra mirada para confortar el espíritu con la visión de estos hombres, tallados en bronce imperecedero porque anduvieron su camino

recto, guiados por la antorcha de sus convicciones, saturados de bondad y de altruismo, plétóricos de sabiduría y de fé; de estos hombres, patriotas eminentes, poderosas columnas de nuestra nacionalidad pacientemente elaborada por las generaciones fuertes que la organizaron.

El pueblo de Córdoba, celoso de sus tradiciones, de las cuales el doctor García fué un magnífico exponente, sabrá apreciar, sin duda, en todo su valor esta adhesión espontánea y justiciera de la opinión pensante del país. Ella significa también un homenaje a esta sociedad que sin dejar de asimilar las sanas ideas que le ha brindado el progreso, ha sabido conservar su fisonomía tradicional».

Homenaje a la memoria del doctor Dalmacio Vélez Sársfield

El doctor Juan M. González Sabathí pronunció el siguiente discurso:

Señores:

La Federación de Colegios de Abogados de la República Argentina ha resuelto rendir este homenaje al doctor Dalmacio Vélez Sársfield, en oportunidad de celebrarse en esta ciudad la Segunda Conferencia Nacional de Abogados. La institución, que agrupa a los letrados de todo el país, trae así hasta el pedestal de la estatua del codificador, en el bronce de esta placa sencilla, una nueva manifestación de la inextinguible gratitud nacional, emanada por primera vez del grupo de argentinos que están más obligados a tan excelso sentimiento.

La figura de Vélez se acrecienta paulatinamente y va cobrando perfiles de prócer a medida que el transcurso del tiempo pone serenidad en el juicio otrora apasionado de los hombres y permite apreciarla en la perspectiva adecuada a sus proporciones. Todos los que actuaron en la época cruenta y difícil de la organización nacional

fueron víctimas de la censura acerba y hasta de la injuria de sus contemporáneos: en los años de renovación total de valores y de profundo fervor cívico que siguió a la caída de Rosas, la violencia de las pasiones puso un ritmo acelerado en todas las manifestaciones de la vida pública y negó a los hombres del bando adversario hasta sus cualidades más evidentes. Pero apenas pasado el rigor de ese período agitado y febril que asentó en forma inmovible las bases de nuestra organización política, se han destacado por propia gravitación los grandes actores del laborioso proceso, señalándose por su patriotismo a la gratitud de sus conciudadanos. Entre ellos, Vélez Sársfield revela tan honda preocupación por la cosa pública y tan altos propósitos de estadista, que ha asegurado hasta para sus errores el respeto y la consideración de la posteridad.

Juriscónsulto, orador, publicista, hombre de gobierno y hasta traductor de autores latinos, Vélez ha sabido poner en esas diversas actividades de con-tradictoria apariencia la ponderación de un bello espíritu, la versación de una gran cultura, el sedimento de una larga experiencia: y ha podido dejar nos, en el Código Civil, la obra por excelencia, fundamental e imperecedera; en sus discursos, las expresiones de una oratoria que colmó la admiración de Nicolás Avelaneda y que mereció el más alto calificativo de otro gran orador: Aristóbulo del Valle; en sus traducciones clásicas, la versión en que se complacía Domingo Faustino Sarmiento, su eminente biógrafo; y en fin, en todo momento, a cada paso, en toda actitud de su vida pública, el hermoso ejemplo de su consagración por los intereses generales, de su probidad de conducta, y especialmente, de la magnífica energía con la que supo elevar su espíritu por encima de las pasiones de facción y los localismos del momento, hacia las más altas regiones del puro y amplio patriotismo.

Elaborando el Código Civil, Vélez ha empujado el cinzel con que debía modelar su propio monumento. Raro

conjunto de acierto, señores, en la cristalización legal de las normas consuetudinarias de la época, en la incorporación de preceptos de derecho extranjero, en el seleccionamiento de las más adecuadas entre las diversas y múltiples leyes españolas que nos regían, y en la eficiente labor de coordinación general de toda la obra. Pese a sus defectos: de detalle y a las reformas en su mayor parte mal concebidas y peor ejecutadas que ha sufrido, el código es un verdadero cuerpo jurídico fundamental, honroso exponente de nuestra cultura y base firmísima de nuestras instituciones de derecho privado.

Pero se equivocaría, señores, quien viese en estas expresiones de fundada admiración el desconocimiento de la oportunidad de una reforma integral de ese cuerpo de normas, así como erraría igualmente quien no advirtiese en este acto sencillo otro propósito que la merecida justicia del homenaje. No estaría sin duda a la altura de la honrosa misión que recibí, si al tomar la palabra en representación de la mayor parte de los abogados argentinos, al pie de la estatua del gran juriscónsulto, no agregase a las expresiones de elogio por la obra y respeto por el hombre, la afirmación de nuestro propósito de continuar la una sin mengua de los méritos del otro, colaborando a su perfeccionamiento en la medida de nuestras aptitudes.

En los once lustros que el Código Civil lleva ya de vigencia, la humanidad ha vivido de prisa y han ocurrido sucesos trascendentales. Un hondo y prolongado sacudimiento colectivo ha cubierto a Europa de sangre y de luto, y ha abocado a la humanidad entera a la tarea de revisar valores e instituciones. Lo que ayer no más parecía definitivamente establecido, y hasta piedra angular de nuestra civilización, hoy ha desaparecido o se tambalea a impulsos de la violencia de los acontecimientos. La protesta de los desheredados que apetecen ardientemente su parte en la felicidad posible, ha tomado formas de imprecación y arrasando en muchas partes con los viejos regímenes, nos ha obligado

a modificar nuestro concepto de la solidaridad social y ha planteado interrogantes que las ideas anteriores dejan sin respuesta. Se han creado de golpe pavorosos problemas económicos y los que existían desde antiguo se han agudizado en modo inesperado. Nuevas formas de la distribución de la riqueza pretenden asegurar una mayor justicia entre los hombres, y nuevas normas de derecho privado han reformado las viejas organizaciones. ¡Oh! señores qué gran espectáculo y qué terrible experiencia! ¿Quién podría substraerse en esta hora única, al deseo de aplicar su oído al corazón del mundo, de palpar al unísono con sus grandes ritmos? ¿Quién no se esfuerza por apreciar el sentido de esas mutaciones, por responder al requerimiento de las aspiraciones colectivas? ¿Quién no comparte con la inquietud angustiosa del momento, la firme esperanza de un porvenir mejor? Vivimos sin duda una hora histórica, decisiva, una hora de definiciones, que será el punto de partida del retroceso y del enquistamiento de los pueblos que no sepan ponerse a tono con las exigencias de los tiempos actuales, que se aparten de los nuevos derroteros abiertos con sudor, con dolor y con sangre al curso indefinido de la civilización universal.

Frente a situación tan extraordinaria, es oportuno recordar que todas las grandes revoluciones humanas han concretado sus efectos en el campo del derecho civil. Pasado el período inicial de agitaciones cruentas y completo desorden, los motivos que inspiraron esos grandes movimientos, se fijan, como principal sedimento de ellos, en las normas de la legislación de derecho privado. Las convulsiones que hoy sufre el mundo son de una magnitud nunca superada, y como todas las precedentes en el curso

de la historia, han de reflejarse en definitiva en las leyes que rigen relaciones civiles de los hombres. ¿En qué sentido, en qué medida, en qué instituciones? He aquí, señores, el grave problema, cuyo estudio debemos iniciar, y cuya solución estamos en el deber de ofrecer al país los que por nuestro honor vestimos toga y hablamos cubiertos, ejerciendo el alto ministerio que ennoblecía Cicerón.

Señores:

Nada ha de ser tan grato a los manes de este prócer civil, del que pudo decir Avellaneda: «nulla dies sine linea», que la circunstancia de todos conocida ya, de la próxima reforma integral de su propia obra: una comisión de abogados eminentes designada por iniciativa del Gobierno Nacional ha comenzado ya la tarea de revisión del código, y en esta docta ciudad de Córdoba ha de reunirse en el curso del año venidero un congreso de especialistas de la materia, con análogo objeto. Ha sido así iniciada la tarea de poner la gran obra de Vélez en consonancia con los nuevos tiempos, contemplando los graves problemas de la hora presente.

Solicitemos entonces en esta ocasión propicia el patrocinio de la sombra venerable del primero de nuestros juristas, cuyos consultos cuya memoria nos congrega aquí, para que asegure el acierto de la reforma emprendida infundiendo en sus autores su preciso concepto de las cosas, su alta inspiración jurídica y su gran preocupación por el interés público; y en expresión del mejor augurio que podamos formular, hagamos votos por que el código que nos preparen responda a la presente época en la misma medida en que respondió a la suya el de Vélez Sársfield, relación expresiva de la mayor perfección posible.

He dicho.

ÍNDICE

PARTE I

	Págs.
Programa y reglamento de la Conferencia	5
Nómina de miembros de la Comisión de Honor, de la Junta de Gobierno de la Federación de Colegios de Abogados, de la Comisión Organizadora y de las Comisiones de sección	6
Nómina de delegados y miembros de la Conferencia	7
Nómina de Directorios de los Colegios de Abogados incorporados a la Federación	10

PARTE II

ANTECEDENTES DE LA CONFERENCIA

Sede de la Segunda Conferencia (Extracto de la versión taquigráfica de la Primera Conferencia)	15
Fecha de la Segunda Conferencia	16
Temas para la Segunda Conferencia	16
Organización de la Segunda Conferencia (Extracto de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno de la Federación)	18
Comisión Organizadora (Actas)	21

VERSION TAQUIGRAFICA

Sesión preparatoria

Designación de autoridades provisionales	31
Verificación y aprobación de poderes	32
Designación de autoridades definitivas	32, 3
Reglamento de sesiones	33
Agasajos	36, 3
Designación de comisiones	36
Voto de aplauso a la Comisión Organizadora	37

Sesión inaugural

Discurso de S. E. el señor Ministro de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Dr. Hipólito Montagné	39
Discurso del señor Presidente de la Conferencia, Dr. J. Honorio Silgueira	41
Antecedentes de la Conferencia. — Exposición del señor Secretario General, Dr. Carlos A. Berghmans Doneel	43
Comunicaciones recibidas	43

Sesiones ordinarias

Puntos no previstos por el Programa de la Conferencia:

Arbitraje en materia comercial	107, 188, 210
Comisión Permanente de Estudios Legislativos	46, 148
Contrato CIF	87.
Correlación de los derechos civil y comercial en materia de obligaciones	112
Crédito documentario	126
Registro Público de Comercio	80
Sociedades de responsabilidad limitada	77
Transferencia de establecimientos comerciales e industriales	100
Transportes marítimos y fluviales	150, 160, 184
Transportes terrestres	74
Vinjantes de comercio y contrato de representación	150, 210

Puntos previstos por el Programa de la Conferencia:

Bibliotecas de especialización jurídica, Cátedras de ética y cultura forense	202
Cargos judiciales. — Su provisión por las intervenciones nacionales	203
Ciudadanía. — Reforma de la ley	207
Código de lo contencioso-administrativo	192
Código de Minería	149
Constitución Nacional. — Reforma	125, 129
Corte de Casación interprovincial o argentina	137
Estadística judicial	202
Expropiación	208
Honorarios de abogado. Su regulación	193
Impedimentos para contraer matrimonio	208
Impuestos internos. Su unificación	149
Instituto de Compilación, Clasificación y Ordenación del Derecho Argentino	99, 151, 154, 221
Nacionalización de la justicia argentina y reforma del sistema de enjuiciamiento de magistrados	189
Organización legal de los Colegios de Abogados	208
Retribución de los magistrados	195
Síndicos en los concursos civiles. Su nombramiento	208
Actas. — Moción relativa a su aprobación	46
Agasajos	98, 121, 148
Clausura de la Conferencia	222
Fecha de la Tercera Conferencia	221
Orden de consideración de los proyectos	151
Resoluciones aprobadas por la Conferencia	81, 121, 217
Saludos a la Conferencia y excusaciones	147
Sanciones de la Conferencia. — Su comunicación	217
Secretarios. — Manifestación de la Presidencia respecto a su designación	45
Sede de la Tercera Conferencia	218
Temas para la Tercera Conferencia: «La tierra agraria»	207
Trabajos para la Tercera Conferencia	208, 214

	Págs.
Voto de agradecimiento al Gobierno, a la Universidad y a la sociedad de Córdoba	214
Voto de aplauso a las autoridades de la Conferencia, al Dr. Manuel B. Gounet, al Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y a la magistratura de Córdoba	221

PARTE III

ANEXOS

I.—Comisión Permanente de Estudios de Legislación Común. Trabajo presentado por el Dr. Alfredo Colmo	225
II.—Resoluciones aprobadas por la Conferencia. Texto definitivo	231
III.—Homenajes tributados por la Federación de Colegios de Abogados:	
A la memoria del fundador de la Universidad de Córdoba, Obispo Trejo y Sanabria. — Discursos de los Dres. Pedro R. Quiroga y León S. Morra	239
A la memoria del Dr. Jerónimo Cortés. — Discursos de los Dres. Henoch D. Aguiar y Guillermo Rothe	241
A la memoria del Dr. Rafael García. — Discurso del Dr. Carlos E. Deheza	244
A la memoria del Dr. Dalmacio Vélez Sársfield. — Discurso del Dr. Juan M. González Sabathie	246